

Historia breve

CHIHUAHUA

Luis Aboites Aguilar

972.16
A1541ch
2010

LUIS ABOITES AGUILAR. Antropólogo y profesor-investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Es autor de *La irrigación revolucionaria. Historia del Sistema Nacional de Riego del Río Conchos, Chihuahua 1927-1938*, *Norte precario. Poblamiento y colonización en México 1760-1940*, *El agua de la nación. Historia política de México 1888-1946*, *Excepciones y privilegios. Modernización tributaria y centralización en México 1922-1972* y, en coautoría con Adriana Sandoval, *Historias de México*.

SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA

Fideicomiso Historia de las Américas

Serie

HISTORIAS BREVES

Dirección académica editorial: ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Coordinación editorial: YOVANA CELAYA NÁNDEZ

CHIHUAHUA

LUIS ABOITES AGUILAR

Chihuahua

HISTORIA BREVE



MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
EL COLEGIO DE MÉXICO
FIDEICOMISO HISTORIA DE LAS AMÉRICAS
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Primera edición, 1994
Segunda edición, 2006
Tercera edición, 2010

Aboites Aguilar, Luis

Chihuahua. Historia breve / Luis Aboites Aguilar ; present. de Alonso Lujambio ; preámbulo de Alicia Hernández Chávez. — 3ª ed. — México : FCE, SEP, COLMEX, FHA, 2010.

231 p., 48 p. en color : ilus. ; 23 x 17 cm — (Colec. Fideicomiso Historia de las Américas. Ser. Historias Breves)

ISBN: 978-607-462-198-3 (Chihuahua)

ISBN: 978-607-462-189-1 (Obra completa)

1. Historia — Chihuahua (México) I. Lujambio, Alonso, present. II. Hernández Chávez, Alicia, preámbulo III. Ser. IV. t.

LC F1261

Dewey 972.721 6 A537ch

Distribución mundial

Esta publicación forma parte de las actividades que el Gobierno Federal organiza en conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.

Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar

D. R. ©2010, Secretaría de Educación Pública
Argentina, 28, Centro; 06020 México, D. F.

D. R. © 2010, Fideicomiso Historia de las Américas
D. R. © 2010, El Colegio de México
Camino al Ajusco, 20; 10740 México, D. F.

D. R. © 2010, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001: 2008

Comentarios: editorial@fondodeculturaeconomica.com
www.fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55)5227-4672, fax (55)5227-4694

ISBN: 978-607-462-198-3 (Chihuahua)

ISBN: 978-607-462-189-1 (Obra completa)

Impreso en México • *Printed in Mexico*

PRESENTACIÓN

EN ESTE 2010 CONMEMORAMOS dos significativos acontecimientos: el Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana.

La edición de las 31 historias de las entidades federativas de nuestro país nos proporciona una visión de largo alcance acerca de sus primeros pobladores y su territorio, del mundo mesoamericano al colonial, y de México como nación soberana de 1821 a 2010.

Las historias reflejan un México plural donde conviven múltiples culturas, formas de religiosidad, lenguas, etnias; también nos enseñan los cambios vividos y ya superados, algunos profundos, otros dramáticos. Estamos convencidos de que la mayor comprensión de nuestra historia nos permitirá pensarnos como un conjunto plural de mexicanos al mismo tiempo unidos por su historia y su cultura.

México es uno de los países más grandes del mundo. Hoy en día, de 192 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, México ocupa el decimocuarto lugar en términos territoriales. Estas historias nos hablan de cómo hemos sido capaces de mantener la unidad política y social en buena medida gracias a nuestra forma de organización política federal. La visión de largo alcance nos enseña que hemos padecido problemas graves, ya superados, y nos abre una perspectiva esperanzadora del porvenir.

Las historias de los estados de nuestra República nos revelan, a su vez, una de las más ricas y complejas historias del mundo, que ha sabido crecer manteniendo unida a la nación. También nos revelan que convivir no es una empresa fácil y que los momentos de tensión han sido recurrentes pero de duración limitada. De allí que cada una de las 31 historias nos ayude a comprender que la

resolución de los conflictos pasa por la búsqueda de nuevos y claros mecanismos de convivencia y que éstos encuentren su fundamento en la riqueza de nuestro pasado.

ALONSO LUJAMBIO
Secretario de Educación Pública

PREÁMBULO

LAS HISTORIAS BREVES de la República Mexicana representan un esfuerzo colectivo de colegas y amigos. Hace dos años nos propusimos exponer, por orden temático y cronológico, los grandes momentos de la historia de cada entidad; explicar su geografía y su historia: el mundo prehispánico, el colonial, los siglos xix y xx y aun el primer decenio del siglo xxi. Se realizó una investigación iconográfica amplia —que acompaña cada libro— y se hizo hincapié en destacar los rasgos que identifican a los distintos territorios que componen la actual República. Pero ¿cómo explicar el hecho de que a través del tiempo se mantuviera unido lo que fue Mesoamérica, el reino de la Nueva España y el actual México como república soberana?

El elemento esencial que caracteriza a las 31 entidades federativas es el cimiento mesoamericano, una trama en la que destacan ciertos elementos, por ejemplo, una particular capacidad para ordenar los territorios y las sociedades, o el papel de las ciudades como goznes del mundo mesoamericano. Teotihuacan fue sin duda el centro gravitacional, sin que esto signifique que restemos importancia al papel y a la autonomía de ciudades tan extremas como Paquimé, al norte; Tikal y Calakmul, al sureste; Cacaxtla y El Tajín, en el oriente, y el reino purépecha michoacano en el occidente: ciudades extremas que se interconectan con otras intermedias igualmente importantes. Ciencia, religión, conocimientos, bienes de intercambio fluyeron a lo largo y ancho de Mesoamérica mediante redes de ciudades.

Cuando los conquistadores españoles llegaron, la trama social y política india era vigorosa; sólo así se explica el establecimiento de alianzas entre algunos señores indios y los invasores. Estas alianzas y los derechos que esos señoríos indios obtuvieron de la Corona española dieron vida a una de las experiencias históricas

más complejas: un Nuevo Mundo, ni español ni indio, sino propiamente mexicano. El matrimonio entre indios, españoles, criollos y africanos generó un México con modulaciones interétnicas regionales, que perduran hasta hoy y que se fortalecen y expanden de México a Estados Unidos y aun hasta Alaska.

Usos y costumbres indios se entreveran con tres siglos de Colonia, diferenciados según los territorios; todo ello le da características específicas a cada región mexicana. Hasta el día de hoy pervive una cultura mestiza compuesta por ritos, cultura, alimentos, santoral, música, instrumentos, vestimenta, habitación, concepciones y modos de ser que son el resultado de la mezcla de dos culturas totalmente diferentes. Las modalidades de lo mexicano, sus variantes, ocurren en buena medida por las distancias y formas sociales que se adecuan y adaptan a las condiciones y necesidades de cada región.

Las ciudades, tanto en el periodo prehispánico y colonial como en el presente mexicano, son los nodos organizadores de la vida social, y entre ellas destaca de manera primordial, por haber desempeñado siempre una centralidad particular nunca cedida, la primigenia Tenochtitlan, la noble y soberana Ciudad de México, cabeza de ciudades. Esta centralidad explica en gran parte el que fuera reconocida por todas las cabeceras regionales como la capital del nascente Estado soberano en 1821. Conocer cómo se des-entuvieron las provincias es fundamental para comprender cómo se superaron retos y desafíos y convergieron 31 entidades para conformar el Estado federal de 1824.

El éxito de mantener unidas las antiguas provincias de la Nueva España fue un logro mayor, y se obtuvo gracias a que la representación política de cada territorio aceptó y respetó la diversidad regional al unirse bajo una forma nueva de organización: la federal, que exigió ajustes y reformas hasta su triunfo durante la República Restaurada, en 1867.

La segunda mitad del siglo XIX marca la nueva relación entre la federación y los estados, que se afirma mediante la Constitución de 1857 y políticas manifiestas en una gran obra pública y social, con una especial atención a la educación y a la extensión de la

justicia federal a lo largo del territorio nacional. Durante los siglos XIX y XX se da una gran interacción entre los estados y la federación; se interiorizan las experiencias vividas, la idea de nación mexicana, de defensa de su soberanía, de la universalidad de los derechos políticos y, con la Constitución de 1917, la extensión de los derechos sociales a todos los habitantes de la República.

En el curso de estos dos últimos siglos nos hemos sentido *mexicanos*, y hemos preservado igualmente nuestra identidad estatal; ésta nos ha permitido defendernos y moderar las arbitrariedades del excesivo poder que eventualmente pudiera ejercer el gobierno federal.

Mi agradecimiento al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, al doctor Rodolfo Tuirán; a Joaquín Díez-Canedo, Consuelo Sáizar, Miguel de la Madrid y a todo el equipo de esa gran editorial que es el Fondo de Cultura Económica. Quiero agradecer y reconocer también la valiosa ayuda en materia iconográfica de Rosa Casanova y, en particular, el incesante y entusiasta apoyo de Yovana Celaya, Laura Villanueva, Miriam Teodoro González y Alejandra García. Mi institución, El Colegio de México, y su presidente, Javier Garciadiego, han sido soportes fundamentales.

Sólo falta la aceptación del público lector, en quien espero infundir una mayor comprensión del México que hoy vivimos, para que pueda apreciar los logros alcanzados en más de cinco siglos de historia.

ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Presidenta y fundadora del

Fideicomiso Historia de las Américas



INTRODUCCIÓN

ESTE LIBRO TIENE COMO OBJETIVO ofrecer una visión de conjunto de la historia del estado de Chihuahua. Puede servir de introducción general o bien de guía para detectar temas que merecen estudiarse con mayor profundidad. Para la presente edición, el texto ha sido revisado, corregido y actualizado. Además de la corrección de errores que se encontraron en el texto original, se incorporaron varios aspectos que se habían omitido (como la presencia de la población mulata) o que se trataron insuficientemente (como la ocupación agrícola que precedió al auge minero de Santa Eulalia). La parte que sufrió más modificaciones fue precisamente la referente a los siglos xvii y xviii, en especial en lo que respecta al papel del comercio y de las poblaciones mestiza y blanca en las correrías de apaches y tarahumaras. Asimismo, se agregó un apartado que cubre desde el final de la versión anterior (el ascenso del gobernador Francisco Barrio) hasta el año 2008. Por último, la “Bibliografía comentada” se modificó tanto para modificar la ficha de algunas obras que en 1994 apenas eran ponencias y ahora ya son libros, como para incorporar un conjunto de textos que han aparecido en los últimos cinco años. El propósito es que el lector tenga una versión no solamente actualizada sino más completa y rica.

El hilo conductor es el poblamiento; es decir, las diversas modalidades y etapas de la ocupación social del espacio que ahora corresponde a Chihuahua. Este énfasis lleva a destacar, sobre todo en los capítulos referentes al periodo colonial, la formación de asentamientos y las expansiones sucesivas de los pobladores españoles, así como las respuestas de los variados grupos indígenas que habitaban esa porción territorial. Centrar la atención en este proceso social es útil para intentar alejarse de una historia convencional, marcadamente política. Sin embargo, es muy posible

que ese objetivo no se haya alcanzado plenamente. El estado actual de la historiografía, y la ya lejana pero perdurable formación del autor en la antropología política, llevan a insistir en la política y en los políticos, como es evidente en los capítulos referentes a los siglos xix y xx.

El lector se dará cuenta de que el libro está dividido en dos grandes partes, que en términos generales corresponden al carácter predominante de las disputas y conflictos entre grupos y facciones sociales. En un primer momento, esas disputas tienen un carácter fundamentalmente territorial. Los españoles buscaban ocupar nuevos territorios para obtener riquezas e incorporar a los habitantes de los territorios americanos a la civilización europea. En el caso del septentrión novohispano, ese dominio económico y cultural se impuso en un medio geográfico peculiar que era habitado por un sinnúmero de grupos que durante siglos se resistieron de manera violenta al avance europeo. Esta resistencia indígena buscaba preservar las formas de organización social y la cultura de los diversos grupos que ocupaban y explotaban el territorio. Más tarde, a partir del siglo xviii, este enfrentamiento adquirió otro cariz con la disputa entre la población sedentaria y la población nómada (la apachería), que se prolongó hasta fines del siglo xix. Al mismo tiempo, en el siglo xix tuvo lugar una nueva guerra por el territorio, en este caso entre países. Estados Unidos no ocultó su intención de expandirse a costa del septentrión novohispano y más tarde del norte de México. Entre 1836 y 1853 esa nueva guerra tuvo su desenlace, desfavorable a nuestro país. Fue semejante a la vieja guerra por el territorio, es decir, a la guerra sostenida entre indígenas y españoles.

En un segundo momento las disputas adquieren otro carácter, referido a pugnas clasistas; es decir, a conflictos derivados de la división social del trabajo, como los que surgen entre peones y terratenientes y entre obreros e industriales. En este segundo momento, los despojos agrarios, por ejemplo, ya no pueden explicarse en términos del avance de la ocupación española o mexicana a costa del territorio indígena, sino justamente como resultado de las pugnas entre distintos grupos de la sociedad mexicana.

El parteaguas entre esos dos momentos puede ubicarse en la década de 1880, cuando concluye la vieja guerra contra los apaches. Sin embargo, las pugnas clasistas están presentes desde el mismo siglo *xvi*, aunque su lógica se hace más evidente cuando cesan las grandes disputas territoriales. El tratamiento de las pugnas territoriales ocupa los primeros cinco capítulos y concluye en el primer apartado del capítulo *vi*. De aquí en adelante la narración se organiza sobre la base de los conflictos entre clases y facciones sociales.

Escribir la historia de una entidad federativa tiene muchos riesgos; por ejemplo, inventar que esa historia empieza y termina en los linderos de la división política que nació en 1824. Para enfrentar esos riesgos se subrayan los vínculos demográficos y económicos con el septentrión novohispano y más tarde con el norte de México, en particular con Nuevo México, Durango y Sonora. Sólo resta agradecer los comentarios críticos de América Molina y Juan Manuel Pérez Zevallos.

Para esta nueva edición se hizo una revisión minuciosa de todo el texto, se mejoró la redacción, se eliminaron repeticiones y varios errores. Se agregaron los dos primeros apartados, referentes a la geografía y a la época prehispánica, y se extendió el último apartado para llegar al año 2008. Se actualizó la cronología y se amplió el ensayo bibliográfico. Aunque las correcciones y agregaciones son numerosas, hay que destacar dos: la cuestión ambiental, tanto en la época colonial como en el siglo *xx*, y la población negra, dos temas que deberían interesarnos mucho más. Agradezco la lectura atenta de Chantal Cramaussel a los dos nuevos apartados, las recomendaciones de Bernd Hausberger y la ayuda de Claudia Grijalva. Por último, quiero dedicar este trabajo a Augusto Urteaga, antropólogo peruano, brillante y generoso, fallecido en diciembre pasado en la ciudad de Chihuahua.

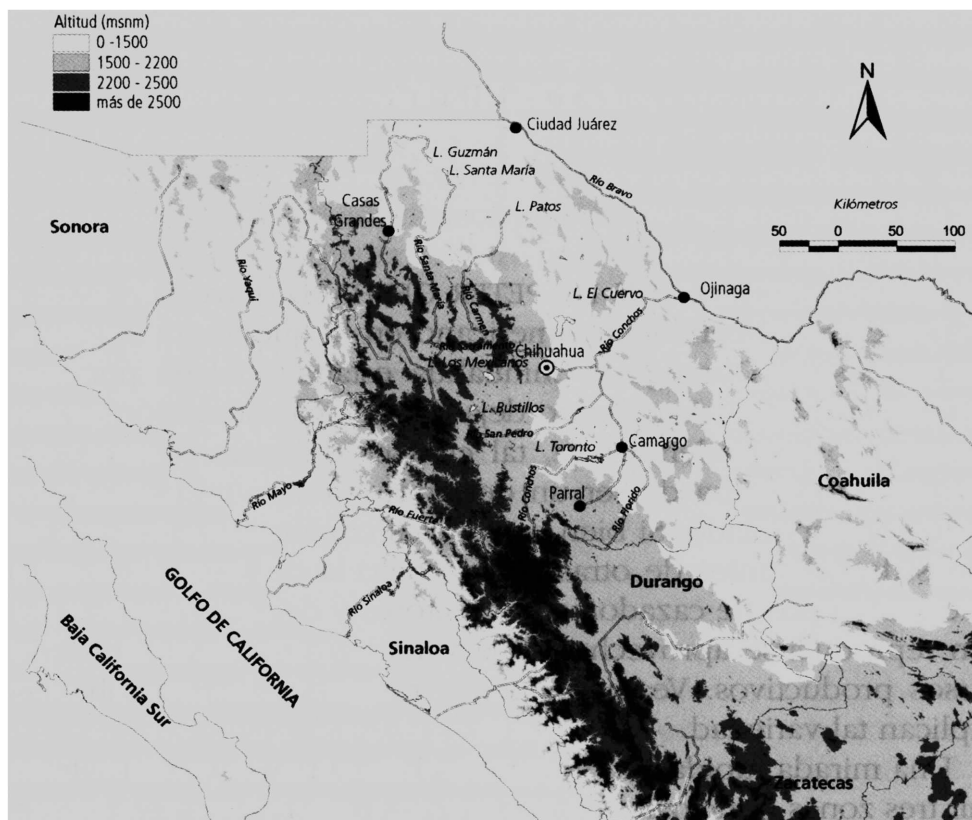
L. A. A.
2009

I. GEOGRAFÍA

TRES ZONAS

SEGÚN LA ESTIMACIÓN DE PETER GERHARD, hace 500 años la porción del continente americano en la que ahora se ubican los estados de Durango y Chihuahua estaba poblada por unos 350 000 habitantes. Aunque no deja de ser una estimación gruesa, que algunos consideran baja, tal cifra es útil para destacar que este espacio distaba de ser un desierto, si como tal entendemos un lugar despoblado. Si bien esos miles contrastaban con los millones de habitantes de otras áreas, como la del imperio mexica, diversos grupos de cazadores-recolectores y de agricultores lograban reproducirse aprovechando la variada y rica dotación de recursos productivos. Veamos algunos rasgos de la geografía que explican tal variedad.

Una mirada rápida a la geografía chihuahuense permite distinguir tres zonas principales: la primera es la montañosa y de barrancas correspondiente a la Sierra Madre Occidental, que se extiende desde Arizona a lo largo de unos 560 km al oeste del estado y que luego continúa hacia el sur; la segunda es la de los valles, que sigue el borde oriental de la Sierra Madre, y la tercera es la planicie árida, situada al oriente de la entidad. De manera general, esas tres zonas se aprecian en el mapa 1.1. La sierra corresponde a las superficies de bosque de pino y de bosque subtropical caducifolio, los valles a la zona de pastizales y sabanas, y la planicie oriental a la llamada vegetación del desierto. Esta planicie parte del Altiplano Central de la República y es la zona más extensa, pues ocupa casi tres cuartas partes de los 247 000 km² del actual territorio chihuahuense. Chihuahua es la entidad federativa más grande del país. Uno de sus municipios (Ahumada), con poco más de 19 000 km², es tres veces y media más grande que el estado de Aguascalientes

MAPA I.1. *Tres zonas de la geografía chihuahuense*

FUENTE: Reconstrucción de imagen satelital.

y casi del tamaño de la república de El Salvador (21 000 km²). En extensión le sigue el municipio de Camargo, con 17 135 km². El tamaño de esas jurisdicciones se explica en gran medida porque los dos municipios incluyen grandes extensiones de la planicie oriental, una zona muy poco poblada.

La zona serrana tiene una altitud promedio de 2 270 msnm, con un pico de 3 250 msnm; la altitud descende suavemente hacia el oriente, a 2 100 msnm en Ciudad Cuauhtémoc y a poco menos de 1 500 en la capital del estado. En Ojinaga, en la confluencia de los ríos Conchos y Bravo, es de tan sólo 800 msnm. Tanto en los valles como en la planicie oriental existen varias serranías independien-

tes que interrumpen el suave declive oeste-este y que bordean mesetas y bolsones.

En el suroeste de la sierra destacan las barrancas, cuya profundidad llega a rebasar los mil metros. Es el caso de las Barrancas del Cobre, una de las principales atracciones turísticas de la entidad, que se aprecian desde la estación ferroviaria Divisadero. La diferencia de altitud explica la diferencia climática, pues en lo profundo prevalece un clima casi tropical, con precipitaciones abundantes (en Chínipas, a 515 m, se presentó una precipitación de 3 400 mm en el verano de 1959) y temperaturas más cálidas, hasta de 45°C en Urique, situado a una altitud de 549 m. Los indios de la sierra (tarahumaras, tepehuanes, guarijíos, chínipas, tubares, entre otros) aprendieron a combinar los recursos existentes en las partes alta y baja para su provecho; al menos el fondo de las barrancas era refugio para sortear mejor el frío invernal.

Diversos rasgos climáticos confirman los contrastes entre las tres zonas consideradas. En la sierra la temperatura media es de 12-14°C, de 16-18°C en los valles y de 19-20°C en la planicie oriental. Estos promedios ocultan vaivenes importantes. En la misma sierra se hallan contrastes extremos: mientras que en una localidad de barranca como Batopilas la media es de 24°C, en Rumurachi es de 8°C. Así como puede haber máximas de 45°C en el fondo de las barrancas en verano, en la parte alta se registran las temperaturas más bajas del país, con 15°C bajo cero en Temósachic en invierno. El clima extremoso también se manifiesta en los valles y en la planicie oriental, con temperaturas de más de 40°C en verano y de hasta 10°C o menos en invierno.

La precipitación pluvial también indica las diferencias entre las tres zonas. La precipitación media del estado es de 400 mm anuales, pero también muestra variaciones notables, con menos de 300 mm en la planicie oriental, y entre 500 y 1 200 (y hasta 1 400 en San Juanito) en la sierra. En ésta es más notable el efecto de la humedad proveniente del Océano Pacífico. Los aguaceros se concentran en el verano, particularmente en los meses de julio y agosto; las lluvias invernales son de mucho menor cuantía, aunque en ocasiones y en ciertos lugares permiten los sembradíos de in-

vierno. De lo anterior queda claro que la agricultura temporalera tiene mayor viabilidad conforme la altitud y la precipitación son mayores, es decir, junto a la sierra, y a la inversa, ese tipo de agricultura es más riesgosa conforme se descende y aumenta la distancia con respecto a la sierra. Sin embargo, en las vegas de los ríos los suelos aluviales permitieron desde tiempos remotos la práctica agrícola, con el aprovechamiento de las inundaciones. En algunos lugares, como en la Junta de los Ríos (Ojinaga) y en el actual Valle de Juárez, se abrieron tierras al cultivo que formaron verdaderos oasis. Así lo muestran las investigaciones del arqueólogo J. Charles Kelley en la confluencia del Conchos y el Bravo y las numerosas descripciones del Valle del Paso. Una de ellas, del inglés George Ruxton, de fines de 1846, es la siguiente: “entramos en la pequeña villa de El Paso, rodeada de huertos y viñas bien cultivados y jardines que descansan sobre el banco derecho del río”.

De cualquier modo, destaca el hecho de que la precipitación pluvial está presente incluso en las áreas más áridas del estado. Lo anterior significa que el desierto de Chihuahua no es tan “desértico”, si como tal entendemos una zona de escasísima precipitación, como sí lo son otras áreas del país (la península de Baja California, por ejemplo) y del mundo. Aunque una gran extensión del oriente del estado forma parte de lo que los geógrafos llaman desierto de Chihuahua, que se extiende desde San Luis Potosí hasta Arizona, Nuevo México y Texas, conviene tener muy en cuenta la cantidad de lluvia para evitar exageraciones y simplificaciones en relación con el “desierto” en Chihuahua.

En la sierra predominan los bosques de distintos tipos de coníferas y de encinos, robles, zacates y táscates. En cambio, en los valles predominan los zacatales y es común hallar álamos y fresnos junto a los cuerpos y corrientes de agua; en la planicie oriental abundan la gobernadora, la acacia espinosa, el ocotillo, el mezquite, las cactáceas y otras plantas xerófitas. También debe mencionarse la lechuguilla y por supuesto el sotol, que hacen posible la producción de las bebidas del mismo nombre. Obviamente, la vegetación ha sido muy sensible a las actividades humanas y ha

cambiado de manera notable en los últimos siglos. Por ejemplo, los bosques desaparecieron de los alrededores de ciudades como Chihuahua y Ciudad Juárez y de minerales como Parral y Cusihui-riachic. Y en algunas zonas de la planicie oriental el sobrepastoreo ha alterado de manera notable la vegetación. En las páginas que siguen veremos el contexto en el que ocurrieron esos cambios.

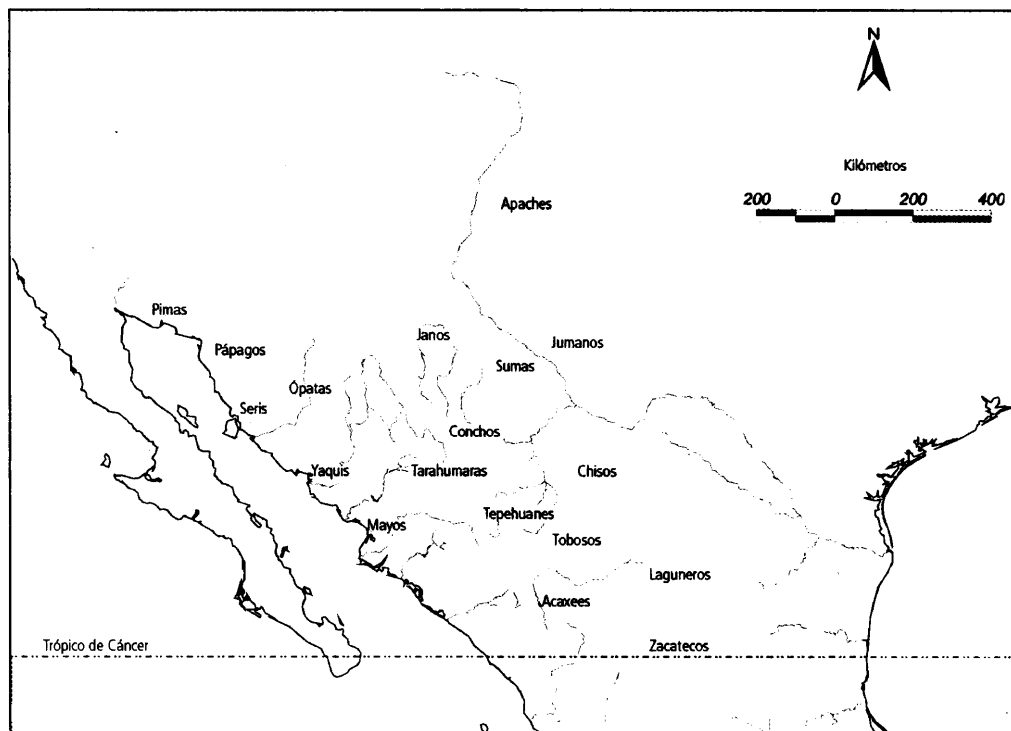
La sierra es fuente fundamental de agua. Por principio de cuentas, los principales ríos nacen en esa zona, que divide las corrientes en dos cuencas: la del Océano Pacífico y la del Golfo de México. Las corrientes de la cuenca del Pacífico, las más abundantes, serpentean abriéndose paso por la accidentada topografía y fluyen de manera rápida hacia el oeste, hacia los valles costeros de Sonora y Sinaloa. Como apunta Robert H. Schmidt, se trata de ríos muy jóvenes en términos de la historia geológica. Los ríos Yaqui, Mayo, Fuerte y Sinaloa son los principales beneficiarios de esas corrientes originadas en la sierra. Así, 75% del agua del Río Sinaloa, 60% del Mayo y 40% del Yaqui provienen de la porción chihuahuense de la sierra. Por cierto, la corriente de la hermosa cascada de Basaseachic, de unos 300 m de altura, forma parte de la cuenca del Río Mayo. Las otras corrientes, las que corresponden a la cuenca del Golfo de México, descienden con suavidad desde la sierra hacia la planicie del oriente, es decir, hacia la zona más baja, cálida y árida. Todas confluyen en el Río Conchos, cuya cuenca de 77 000 km² lo hace por mucho el río más importante de la entidad; tiene una longitud de casi 600 km y desciende unos 1500 m desde su nacimiento, en la confluencia de dos arroyos ubicados en el municipio de Bocoyna, hasta su desembocadura en el Río Bravo. En ese trayecto, donde se encuentra la enorme presa La Boquilla (1915), recibe las aguas de numerosos afluentes, entre ellos los ríos Humariza, del Parral, Florido, San Pedro, Chuvíscar y Sacramento. Hace años se calculó su escurrimiento en 900 millones de metros cúbicos anuales, lo que contrasta con el escurrimiento de ríos como el Fuerte (5900 millones) o el Papaloapan (37000 millones). Últimamente la cuenca del Conchos ha recibido gran atención de organizaciones e instituciones estadounidenses interesadas en propiciar un mejor manejo del agua. Siempre hay que

tener presente que el Conchos es el principal afluente mexicano del Río Bravo, que compartimos con Estados Unidos según los términos del Tratado de Aguas de 1944.

Pero además de esas dos cuencas, el agua chihuahuense contiene otros componentes fundamentales. Varios ríos nacen y mueren en los límites del estado. Corresponden a las diversas cuencas endorreicas, cuyo nombre se refiere al hecho de que no tienen salida al mar. Las principales cuencas son las que se hallan en la vertiente oriental de la Sierra Madre, y son las siguientes: la del Río Casas Grandes, que desemboca en la Laguna de Guzmán; la del Río Santa María, que culmina en la laguna del mismo nombre, y la del Río del Carmen, que lo hace en la Laguna de Patos, todas situadas al noroeste del estado. Otras de menor tamaño son las de los lagos de Bustillos y Mexicanos, cerca de Cusiuhiriachic, así como otras más pequeñas en la planicie oriental. Estas corrientes y cuerpos de agua, que en nuestros días muestran un deterioro notable, eran lugares atractivos para los pobladores más antiguos. No parece casual que Paquimé se ubicara en una de estas cuencas cerradas o continentales. Otro componente fundamental de la hidrografía es el agua subterránea, cuya explotación intensiva se inició en la segunda mitad del siglo xx. Bien sabemos que ahora se extraen grandes volúmenes en distintos puntos del estado, sobre todo con fines agrícolas y de provisión de agua para las localidades urbanas. Desde hace unos 40 años se han investigado con más cuidado sus características, tales como el volumen disponible, sus recargas y en general su comportamiento. Es un recurso en extremo frágil que por desgracia se explota de manera desordenada. La caída de los niveles freáticos, que encarece su extracción, es el principal indicador de que estamos haciendo mal las cosas en este sentido.

EL POBLAMIENTO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

En los valles, ubicados entre el oeste de la sierra y la planicie al oriente, es posible distinguir dos zonas atendiendo la altitud (y por tanto la temperatura, la vegetación y la precipitación) y la

MAPA 1.2. *Distribución de los grupos indígenas en el siglo XVI*

FUENTE: William Bedford Griffin, *Indian Assimilation in the Franciscan Area of Nueva Vizcaya*, Tucson, University of Arizona Press, 1979.

forma como se desarrolló el poblamiento del actual estado de Chihuahua. De manera arbitraria podemos proponer que la isoyeta de los 1 500 msnm constituye el lindero o división entre una y otra zonas, con dirección sureste-noroeste (véase el mapa 1.2). La primera zona de los valles, la más alta, de hecho es el pie de monte de la Sierra Madre y en ella se encuentran las mesetas del Valle de Bustillos, del Papigochic y de Casas Grandes. Destacan las cuencas ya mencionadas de los ríos Casas Grandes, Santa María y del Carmen y sus respectivas lagunas. Para orientar al lector, podríamos decir que se trata de una especie de corredor que va junto al borde oriental de la sierra desde Parral hasta Paquimé. Allí se ubican precisamente esas dos localidades que tanto influyeron en la historia local. La segunda zona de estos valles

es la ubicada por debajo de la isoyeta de los 1 500 msnm, donde se encuentran las dos principales localidades de nuestros días (Ciudad Juárez y la capital) y varias más, como Delicias, Camargo y Jiménez. Al oriente de estas localidades está la planicie árida y de baja densidad de población, dedicada ahora a la ganadería extensiva.

De acuerdo con esta perspectiva geográfica que distingue las partes alta y baja de los valles, puede decirse que durante los primeros 150 años de historia colonial (1560-1710) el poblamiento español, con base en Santa Bárbara, Parral y el Valle de San Bartolomé, se concentró en la parte alta, en el pie de monte de la Sierra Madre. Es lo que podría denominarse el “norte o noroeste de Parral”. Y aquí hay que preguntarse si a finales de la época prehispánica la porción más poblada era la misma (pensando en la jerarquía de Paquimé y en general de la cultura Casas Grandes), lo que significaría un alto grado de continuidad entre el poblamiento prehispánico más tardío y el poblamiento de los primeros 150 años de la época colonial. Durante esos primeros años, la sucesión de asentamientos españoles, desde Parral hasta Casas Grandes, pasando por Cusihiuriachic y el Valle del Papigochic, daba vida a esta porción de la Nueva Vizcaya. Pero desde el surgimiento de la villa de Chihuahua, en 1709, la historia “mueve” al grueso de la población, en términos de altitud, unos 500 m hacia abajo. Los acontecimientos históricos siguientes, en particular la urbanización del siglo xx, no hicieron más que consolidar la preponderancia contemporánea de la zona más baja y seca de los valles. Si se miran las cosas con cuidado, el trazo de las modernas vías de comunicación (los ferrocarriles a fines del siglo xix y las carreteras pavimentadas a mediados del xx) contribuyó con fuerza a modelar ese movimiento descendente de la mayoría de la población hacia la parte más baja de los valles. A la parte alta sólo le correspondieron ramales secundarios. En cierto modo ese fenómeno se repitió en Sonora, donde a la vuelta del siglo xx el poblamiento serrano fue debilitándose conforme la población se movió hacia los valles costeros. Allí florecieron las que ahora son las principales localidades: Guaymas, Hermosillo y Ciudad Obregón. Ese movimiento

sonorense tuvo una expresión política que está ausente en Chihuahua: la disputa entre Arizpe, Ures y Hermosillo por lograr la sede del gobierno estatal. En Chihuahua no se cuestionó la primacía de la villa formada en 1709 en la parte baja de los valles.

Hay que decir que el movimiento desde la sierra hacia los valles tuvo lugar al mismo tiempo que ocurría otro flujo de población, en este caso del sur hacia el norte, el sentido fundamental del poblamiento español y, siglos después, de las corrientes migratorias de mexicanos (no sólo chihuahuenses) hacia Estados Unidos. Si se quiere, en sus trazos más gruesos, la historia de Chihuahua está formada por esos dos movimientos de población que ocurrieron a lo largo de varios siglos, en especial desde 1709. La migración de los tarahumaras hacia el oeste, hacia la sierra, que también tuvo lugar en el tránsito de los siglos xvii al xviii, no alcanzó a contrarrestar la fuerza de los movimientos principales, es decir, aquellos con dirección oeste-este y sur-norte. Este último movimiento obliga a hacer una última reflexión sobre la geografía.

NOTA SOBRE LA CONEXIÓN CON EL SUR Y EL OESTE
Y LA FALTA DE CONEXIÓN CON EL ESTE

La historia de Chihuahua, como la de todo el norte mexicano, no puede explicarse del todo sin la conexión con el centro y el sur del país, en especial con la Ciudad de México. El movimiento de población sur-norte que acabamos de mencionar es clave para entender la pertenencia de esta zona a la nación mexicana. En su libro *Las regiones de México*, Bernardo García Martínez insiste en la larga continuidad de la organización del espacio norteño con base en la Ciudad de México, que funge como centro de un patrón radial, aspecto que se nota aún en nuestros días mirando cualquier mapa de carreteras, ferrocarriles y rutas aéreas. Esa manera tan perdurable de ocupar el espacio tiene su origen en el primer siglo de la época colonial. Uno de los componentes de esa organización espacial es justamente la debilidad de los vínculos o conexiones entre las localidades norteñas en un sentido este-oeste

(como lo fue el poblamiento del suroeste estadounidense del siglo XIX) o con dirección oeste-este.

Veamos con más detalle este rasgo de la geografía histórica en el estado de Chihuahua. Al sureste de la planicie oriental se encuentra el Bolsón de Mapimí, una zona que desde la época colonial ha dificultado las comunicaciones directas entre Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En realidad, las carreteras y las vías férreas de nuestros días (que siguen muy de cerca el viejo camino Tierra Adentro, del que hablaremos más adelante) rodean el bolsón al comunicar primero a Chihuahua con la Comarca Lagunera y después a ésta con Saltillo y Monterrey. En la época colonial los españoles temían al bolsón por considerarlo zona de refugio de los "salvajes"; pocos se atrevían a cruzarlo. Lo mismo ocurría en el siglo XIX. Por eso impresionó tanto que Pancho Villa lo atravesara en muy pocos días en el verano de 1920. Hasta donde es posible saber, la única comunicación directa entre Chihuahua y Coahuila es, o era, un ferroaducto que conectaba las minas de La Perla con las instalaciones industriales de Monclova.

Sin embargo, esta dificultad para la comunicación con el este, con Coahuila y Nuevo León, contrasta con la intensidad de las comunicaciones de los chihuahuenses con el oeste, es decir, con los pueblos serranos y con los valles costeros de los actuales estados de Sonora y Sinaloa, así como con localidades serranas del actual estado de Durango. Varios estudiosos, entre ellos Juan Luis Sariego, han insistido en que la sierra es un muy antiguo y complejo mundo social conformado por relaciones comerciales y familiares. Quizá nos hemos tomado muy en serio la división política entre entidades federativas (Sonora se separó de la Nueva Vizcaya en 1733), y ello nos ha llevado, erróneamente, a separar lo que está unido. Quizá también han influido las grandes dificultades que ha enfrentado la construcción de modernas vías de comunicación en la sierra, es decir, el ferrocarril y las carreteras. Ejemplo claro es que el ferrocarril Chihuahua al Pacífico se inauguró 77 años después de que se concluyera, en 1884, la línea férrea que unió a la Ciudad de México con Ciudad Juárez (Paso del Norte en esa época). Y la primera carretera que comunicó a Chihuahua con So-

nora, la de Janos-Agua Prieta, es de principios de la década de 1980. Y apenas en los últimos años se terminó la carretera que une a las capitales de los dos estados a través de Basaseachic y Yécora.

Pero las dificultades de las comunicaciones modernas son un problema actual que nada tiene que ver con la muy antigua ocupación del espacio serrano, en la que destacan las relaciones de intercambio de chihuahuenses, indios y no indios por igual, con sinaloenses y sonorenses. Para su suerte, los arqueólogos no tienen que lidiar con linderos jurisdiccionales. Seguramente por eso pueden afirmar, como hace Arturo Márquez en su contribución a la *Historia general de Chihuahua*, que “la Sierra Madre Occidental es un corredor geográfico que ha estado funcionando desde la Prehistoria hasta nuestros días”. Ocurre que la intensa comunicación chihuahuense con el oeste no alcanzó nunca la jerarquía política y económica de la conexión sur-norte. Incluso, si se quiere, el movimiento oeste-este, desde la parte alta hacia la parte baja y árida de los valles, es un ajuste menor que en nada contradice la vigencia de la organización general del poblamiento del norte mexicano con base en la Ciudad de México, es decir, de sur a norte.

II. ÉPOCA PREHISPÁNICA

LOS PRIMEROS TIEMPOS

LOS POBLADORES QUE HABITABAN ESTA ZONA a principios del siglo xvi, al momento del contacto con los españoles, tenían una larga pero por desgracia muy desconocida historia tras de sí. Como dice el arqueólogo Márquez, no todo lo prehispánico chihuahuense es Paquimé. De hecho, el florecimiento de esta gran ciudad se sitúa casi al final de ese periodo. El problema es que aún sabemos muy poco de los siglos anteriores a Paquimé e incluso de Paquimé mismo. Y ese desconocimiento obedece al hecho de que la investigación arqueológica en Chihuahua, y en general en el norte mexicano, ha sido muy descuidada, si no es que maltratada, por las autoridades gubernamentales. Éste es un problema serio que aquí sólo se menciona de paso: la época prehispánica norteña no parece ser importante para la arqueología mexicana, dada la clara predilección de ésta por el estudio de olmecas, mayas, totonacos, teotihuacanos, toltecas, mixteco-zapotecas, mexicas, entre otros. La riqueza del legado de todos estos grupos —se justifican los arqueólogos— basta y sobra para conformar una muy rica y diversa época prehispánica que es componente esencial de la identidad nacional mexicana. De la misma manera, para los estadounidenses, el suroeste, que remite a la “conquista del Oeste”, es importante en cuanto a su identidad nacional. De allí su atención por la arqueología del suroeste, una zona que además aquel país ganó por la fuerza de las armas. Hay que reconocer, sin embargo, que la atención estadounidense por el suroeste a menudo rebasa la frontera y nos beneficia. Así lo muestra la larga lista de estudiosos de aquel país que han realizado investigaciones arqueológicas en Chihuahua y en otros lugares del norte mexicano. Y habría que agregar que no sólo de arqueología

logía se trata, sino también de otras disciplinas, como geología, biología, geografía, historia y antropología.

Los primeros grupos humanos se establecieron durante las migraciones de población asiática al continente americano, iniciada según algunos hace 40 000 años. En esta zona del continente los indicios más firmes ubican la presencia humana hacia 10 000 a.C. En esas fechas comenzó el periodo geológico actual (Holoceno), que se define entre otras características por un gradual calentamiento o elevación de la temperatura. Como apuntan Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, los humanos de aquella época vivían en un ambiente mucho más húmedo y frío. Llovía en lugares que ahora son áridos, y los ríos y lagos eran más numerosos, grandes y profundos. Abundaban los pastizales, y ello favorecía la existencia de manadas de caballos, mamuts, camélidos y bisontes. La paulatina elevación de la temperatura, sin embargo, acabó con todas esas especies. También comenzaron a perfilarse las zonas áridas que ahora conocemos.

En esa época no había grandes diferencias entre los grupos de pobladores, puesto que todos se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección, y lo hacían con base en un repertorio tecnológico muy simple, consistente en puntas de flechas burdamente talladas, aunque también se utilizaban fibras duras, piel, hueso y madera. Esos grupos formados por individuos emparentados recorrían el terreno buscando lugares de recolección y caza; movían sus campamentos según la estación del año (veranos cerca de la sierra, inviernos en la planicie baja) y de acuerdo con la disponibilidad de fuentes de agua. A menudo utilizaban cuevas. Molían frutos y semillas y horneaban harinas y carne de animales grandes como el berrendo o pequeños como la liebre; se vestían con pieles y más adelante con telas hechas con hilo y cuerdas de agave y lechuguilla. En realidad, muy poco se sabe de ellos. Por eso es tan encomiable el esfuerzo del profesor Richard S. MacNeish, quien estudia su historia más antigua y remota. Algunos estudios arqueológicos se refieren a una gran variedad de plantas y frutos que consumían estos grupos: piñón, bellotas, tejocotes, nueces, verdolagas, quelites, palma, nopal, tunas, tomate o tomatillo, mezquite,

entre otras. Sobre este último, vale la pena reproducir un testimonio de 1846 del viajero George Ruxton, ya citado, que señala que las “semillas [del mezquite], cubiertas por una pequeña vaina, son usadas por los apaches para hacer una especie de pan o pastel que es dulce y de agradable sabor”.

La arqueóloga Leticia González considera que en las sociedades cazadoras-recolectoras, como las que habitaban en esta porción de Norteamérica, existía una clara división del trabajo entre hombres y mujeres. Mientras que los primeros se hacían cargo de la caza, la guerra y la fabricación de instrumentos de piedra, las mujeres llevaban sobre sus espaldas el pesado trabajo de recolección de plantas y frutos y su procesamiento, y de la obtención y traslado del agua. También se encargaban de la crianza de los hijos. En este sentido, no eran sociedades igualitarias.

LA AGRICULTURA Y LAS RUTAS DE INTERCAMBIO

La información es un poco más sólida conforme aparecen las primeras noticias de la presencia de plantas domesticadas. Parece haber consenso entre los estudiosos en que esas plantas, el maíz en primerísimo lugar, pero también el frijol y la calabaza, llegaron provenientes del sur a través de las rutas de intercambio. Durante siglos las plantas domesticadas eran uno más de los alimentos que permitían la subsistencia de los grupos de cazadores-recolectores. Hay evidencias de un aumento de la población y de una tendencia a la sedentarización aun antes del desarrollo de la agricultura propiamente dicha. Las puntas, las sandalias, los hornos y morteros y los objetos ceremoniales cada vez más sofisticados prueban ese cambio cultural. Alrededor de 200 d.C. empezaron a surgir pequeñas aldeas formadas por varias casas-foso; de hecho, Paquimé fue construida sobre las ruinas de una de esas aldeas antiguas. Por su parte, en la planicie oriental, según MacNeish, tuvo lugar una transición de campamentos estacionales a un patrón radial y centrado de campamentos mucho más estables y de mayor población. Tiempo después, esta nueva modalidad de campamentos dio

paso a pequeños asentamientos que contaban con casas semisubterráneas. En esos asentamientos la práctica agrícola era permanente y cada vez más significativa.

La discusión en torno a la agricultura es crucial porque, como bien sabemos, de ella se derivó en gran medida el rumbo siguiente de la sociedad humana. Al respecto, siguiendo a López Austin y López Luján en su libro *El pasado indígena*, deben aclararse algunos aspectos. Por un lado, que el sedentarismo no depende de la agricultura (hay grupos sedentarios no agrícolas, como los pescadores de moluscos), y por otro, siguiendo a Márquez, que la elevación de la temperatura que dio paso a la aridez creciente muy probablemente tendió a concentrar a la población en lugares con fuentes de agua más seguras, cuando todavía no practicaban la agricultura. Debe quedar muy claro, además, que una cosa es la domesticación de algunas plantas y otra muy distinta es la agricultura propiamente dicha. Se habla de agricultura cuando cambia el patrón de subsistencia y, por ende, la organización social en su conjunto. Si la entendemos así, la agricultura corresponde, según Márquez, al periodo 200-700 años de nuestra era, contra los 2500 o 2000 a.C. como las fechas más aceptadas para el inicio de la práctica agrícola en el centro de la actual República. Eso no significa, vale insistir, que no se hayan encontrado en Chihuahua, y en general en el norte mexicano y en el suroeste estadounidense, rastros de plantas domesticadas de mucho mayor antigüedad. Entre las plantas domesticadas más antiguas destaca el llamado *maíz de ocho*, una variedad local muy resistente a la aridez. Más tarde llegaron el algodón, el amaranto y el frijol.

Además de que es reconocida como un poderoso mecanismo civilizatorio que dio lugar a sociedades más complejas (mayor población, cerámica, diferenciación social, formación de ciudades y del Estado, escritura, sofisticación religiosa, conocimiento científico), la agricultura contribuyó a diferenciar los modos de subsistencia y de organización social de los diversos grupos de cazadores-recolectores, hasta entonces bastante homogéneos. También propició la estratificación social, lo que se aprecia, por ejemplo, en los restos mortuorios. Quizá entonces surgieron las diferencias

entre los grupos más sedentarios y agrícolas de los valles altos y los grupos trashumantes, aunque también agrícolas, de la planicie oriental. Así es posible entender la diversidad de los grupos existentes en esta zona de Aridoamérica, como la denominan algunos estudiosos, rasgo que es evidente, sea por caso, en las numerosas lenguas y variantes dialectales que se hablaban al momento del contacto con los españoles. El lingüista Leopoldo Valiñas explica que de una misma lengua pueden surgir variantes por la separación geográfica entre los grupos, lo que da lugar al surgimiento de dialectos dentro de una misma lengua. Con el paso del tiempo, las diferencias se acentúan para dar forma a lenguas distintas. La afirmación anterior se relaciona con el debate entre lingüistas sobre la existencia de una división norte y sur de la familia yutoazteca; en la del sur se ubican lenguas tales como tarahumara, cahíta, tubar y corachol. Algunos grupos insistieron en la vida nómada, otros combinaron la caza y la recolección con la agricultura (como parece ser el caso de los conchos), y otros, como lo muestran las llamadas sociedades de la cultura Casas Grandes, hicieron de la agricultura una práctica social mucho más importante. Así parecen confirmarlo las investigaciones sobre el arte rupestre en distintos puntos del estado de Chihuahua, a cargo de Francisco Mendiola. En las partes bajas, cerca de los médanos de Samalayuca o al oriente de Aldama, Mendiola encontró escenas de cacería de borrego cimarrón y de berrendos, peyote y puntas de flecha; en contraste, por el rumbo de Casas Grandes o Paquimé entre los motivos de las pinturas están el maíz, la lluvia, las nubes, la tierra y el pájaro-serpiente.

Pero quizá no sea tan clara la dicotomía valle-desierto. También hay que considerar la posibilidad de que algunos grupos emigraran o cambiaran su modo de subsistencia a causa de sequías, guerras y enfermedades. La historia prehispánica contiene abundantes ejemplos de decadencias y abandonos de grandes culturas y localidades agrícolas. Los arqueólogos han registrado la desaparición de la cultura Loma de San Gabriel-Chalchihuites hacia el año 1350, cuya porción nortea quizá dio cobijo a los tephuanes, es decir, al grupo que encontraron los españoles. Otro

arqueólogo, Charles Kelley, registra el abandono de asentamientos de agricultores del Bajo Conchos entre los años 1450 y 1550 de nuestra era, y la ocupación de la zona por cazadores-recolectores de organización social más simple, que fue la que encontraron los españoles. En el mismo sentido, algunos historiadores afirman que el muy violento arribo de los españoles obligó a grupos como los tobosos y otros del Bolsón de Mapimí a retornar a su vida nómada. Era una manera de oponerse, de resistir. Como se puede apreciar, las combinaciones y las variaciones dificultan una apreciación sólida y única.

Un aspecto fundamental de la vida de algunos de estos grupos era su participación en redes de intercambio, de comercio, pero también de ideas, creencias, diseños arquitectónicos, entre otros, con grupos ubicados tanto al norte como al oeste, al sur y, en menor medida, al este. Ya se comentó que el que contaran con plantas domesticadas se explica precisamente por la comunicación con pueblos del centro de la actual República, posiblemente a través de rutas originadas en Jalisco y que se extendían a lo largo de la costa y la Sierra Madre, donde había lugares fértiles y lluvia bastante para permitir su cultivo. Pero esta ruta es ante todo una hipótesis, porque estudiosas como Marie-Areti Hers sostienen que en realidad debe hablarse de una “misteriosa ruta del maíz” que hizo posible, a lo largo de 2000 km, la llegada de la tríada maíz-calabaza-frijol a las áreas ocupadas por los pueblos de las culturas mogollón, hohokam y anasazi, en el actual Nuevo México. Si se considera que hay registros de cultivos desde 1500 a.C., e incluso 2500 a.C., en lugares situados en los actuales estados de Arizona, Nuevo México y Utah, es evidente la antigüedad de esas redes de intercambio.

Ciertamente, los indicios de intercambio son más sólidos en lo que se refiere a sitios más cercanos a lo que ahora es Chihuahua (por ejemplo, la costa de la actual Sonora en el comercio de conchas, y con grupos asentados al norte, de donde provenía la muy apreciada turquesa, en particular de las minas de Cerrillos, cercanas a Santa Fe). Pero también son importantes los registros de comercio con lugares más distantes como Tula, antes de su abando-

no hacia 1150 d.C., y con zonas tropicales del sur, de donde se obtenían guacamayas, o bien los artefactos de cobre, originarios del actual Michoacán. Beatriz Braniff sostiene que las antiguas rutas de intercambio de turquesa se ampliaron de manera notable entre 900 y 1200 d.C. De ese modo quedaron conectados los pueblos del Cañón del Chaco, en Nuevo México, con Guasave, Ixtlán, Zacualco, Tula, la Mixteca e incluso Chichén Itzá. Más tarde, entre 1200 y 1400 de nuestra era, ya en tiempos del auge de Paquimé, la turquesa llegó a Tzintzunzan y Tenochtitlán.

PAQUIMÉ

Aunque puede rastrearse su origen como un modesto conjunto de chozas hacia el año 750 de nuestra era, el esplendor de Paquimé se ubica entre 1200 y 1450. Es un sitio por demás singular. Sin duda, fue la ciudad más grande y compleja del actual norte mexicano y del suroeste estadounidense. Asombró a los primeros españoles que vieron sus ruinas en el siglo *xvi* (Baltasar de Obregón), a los viajeros extranjeros que la visitaron en el siglo *xix* (John Bartlett, Carl Lumholtz), a los arqueólogos del siglo *xx* que realizaron detalladas excavaciones (Charles di Peso), y nos sigue asombrando a nosotros. Destaca por su tamaño y por la arquitectura, por los materiales (barro, madera y piedra) y diseños de construcción de los muros, por los 2000 cuartos, cinco pisos y ruinas de 10 metros de altura; con lugares públicos, como el juego de pelota en las afueras y no en el centro del asentamiento. Beatriz Braniff estima que pudieron habitarla 3000 personas. Llama la atención su sofisticado sistema de aprovisionamiento de agua proveniente de un manantial, lo que habla de un aparato tecnológico de gran versatilidad, que también fue utilizado en la construcción del sistema de drenaje de la ciudad y de terrazas y canales de riego para los terrenos de cultivo. Centro ceremonial, religioso y administrativo, participaba activamente en las rutas de intercambio de turquesa, conchas, sonajas de cobre y plumas de guacamaya. Se han encontrado indicios firmes de la presencia de abulón,

almejas y caracoles de diversas clases, llevados de las costas del Pacífico. También se ha encontrado cerámica de Paquimé en algunos lugares de Sonora. La interpretación de Di Peso de que la singularidad de Paquimé se explica por el arribo de poderosos comerciantes originarios del sur es materia de debate entre los expertos. Arqueólogos como Michael S. Foster son más cuidadosos y desestiman el papel comercial de Paquimé en circuitos de larga distancia, y lo limitan a Nuevo México y Sonora. Estos debates surgen de la carencia de datos firmes y abundantes.

Braniff ofrece varias hipótesis sobre el final de esta ciudad, ocurrido a fines del siglo xv: una sequía, un terremoto o meteorito, o el ataque e incendio de enemigos venidos del otro lado de la sierra, probablemente ópatas. Sus murallas no resistieron más. Quizá el debilitamiento de las redes de intercambio facilitó el trabajo de sus enemigos. Cuando llegaron los españoles ya estaba deshabitada, lo que no es sino un ejemplo más de los procesos de ocupación, decadencia y abandono característicos de la historia más antigua del norte mexicano.

Por último, un breve comentario sobre las percepciones que se tienen del prehispánico norteño. El gran historiador chihuahuense, el profesor don Francisco R. Almada, en su *Geografía del estado de Chihuahua*, no tiene la menor duda en afirmar que “las civilizaciones indígenas de los actuales estados fronterizos de la República, son raquíticas y pobres si las comparamos con las que corresponden a los pueblos autóctonos que habitan el centro y sur del país desde antes de la conquista [o bien que] las condiciones de nuestras tribus septentrionales siempre fueron inferiores a las que habitaban y habitan en el sur”. En otros términos, parece que la medida del norte prehispánico (pobre) es el sur (rico), una ecuación que en el último siglo parece haberse invertido. En cierto modo, Di Peso se hace partícipe de esa noción al explicar el origen de Paquimé como un *implante mesoamericano*. Pero también con los hallazgos de Di Peso y otros parece prudente insistir en que los grupos locales formaban parte de un mundo interconectado tanto al norte como al sur y el oeste. Si bien no hicieron grandes pirámides, los grupos locales mostraron habilidad y sabi-

duría para aprovechar un medio natural muy distinto al del centro y sur de la actual República (por lo pronto, con mucho menos lluvia) y ocupar este espacio durante miles de años. Las conexiones entre norte y sur, que como se dijo siguen siendo materia de amplio debate entre los arqueólogos, vivieron épocas de prosperidad y auge, seguidas de tiempos de debilitamiento y contracción. En este punto aparece un problema de fondo, referido al modo en que el norte, la Gran Chichimeca, Aridoamérica o como se desee nombrarlo, se percibe. ¿Qué pasará cuando los estudiosos tomemos al norte como punto de partida, como centro, y no como zona marginal y pobre del centro y sur del país durante las épocas prehispánica, colonial y a lo largo del siglo XIX, o bien de Estados Unidos en la época contemporánea?

Sin embargo, poco se puede avanzar en estas discusiones si continúa el prolongado desaire a la arqueología del norte mexicano. Sin nuevas excavaciones y estudios minuciosos de largo plazo, se mantendrán vigentes los misterios de los que habla Marie-Areti Hers sobre la historia antigua; entre ellos, el origen de la agricultura local, la naturaleza de los vínculos entre nómadas y sedentarios en esta zona, y entre grupos sedentarios locales con otros grupos situados a grandes distancias (con los pueblos de las culturas de Nuevo México, y con los grupos del centro, occidente y sur de México), o bien el origen de la singularísima ciudad de Paquimé. Del mismo modo, quedará pendiente la tarea de reconstruir los cambios pero también las continuidades entre la época prehispánica y el periodo colonial, una dimensión que apenas se insinúa en los todavía escasos diálogos entre arqueólogos e historiadores especialistas en la Colonia.

III. LOS PRIMEROS SETENTA AÑOS DE OCUPACIÓN ESPAÑOLA SON DE SANTA BÁRBARA (1560-1630)

ZACATECAS, IBARRA Y LA FUNDACIÓN DE SANTA BÁRBARA

LA GUERRA DEL MIXTÓN (1540) fue la última gran batalla de los españoles en su esfuerzo por dominar a los grupos indígenas sedentarios ubicados en la porción más norteña de los límites del virreinato en esa época. Los enemigos eran, entre otros, los caxcanes, cuyo territorio se extendía desde el norte del Río Santiago hasta la zona de los cañones, en el actual estado de Zacatecas. El triunfo español consolidó la ocupación de la Nueva Galicia, lo mismo que su capital, Guadalajara. Pocos años después, hacia 1546, un grupo de ex combatientes de la guerra del Mixtón y de mineros de Guadalajara comenzó a explotar los yacimientos de plata que dieron vida a Zacatecas. Este nuevo asentamiento, por la importancia de su población y la riqueza de sus vetas, tuvo gran influencia en la expansión española hacia el norte del virreinato.

El movimiento social que dio origen a Zacatecas contrastaba con la fantasiosa creencia, muy extendida entre los conquistadores españoles, en torno a la existencia de varias ciudades con grandes riquezas, como Cíbola. Varias expediciones organizadas en pos de esas ciudades, como la de Francisco Vázquez de Coronado en 1540, habían terminado en fracaso. En cambio, la expansión española que tomaba forma con Zacatecas mostraría, sin tantos aspavientos, que esas ciudades no existían y que la tarea de ocupar el septentrión del virreinato sería ardua, compleja, violenta.

De las minas de Zacatecas obtuvo su fortuna Diego de Ibarra, cuyo sobrino Francisco, un joven de apenas 15 años en 1554, aprovechó las excelentes relaciones familiares de su tío con el virrey Luis de Velasco para organizar varias expediciones al norte

de Zacatecas. Patrocinadas con dinero de don Diego, esas expediciones se iniciaron en 1554 y culminaron en julio de 1562, cuando el virrey nombró a Francisco gobernador y capitán general de las tierras y gentes que pusiera bajo el dominio de España. Así surgía el reino de la Nueva Vizcaya, con territorio que reclamaba para sí la provincia de Nueva Galicia. Guadalajara, empero, seguiría siendo importante para la Nueva Vizcaya, puesto que la Audiencia de esa ciudad tendría jurisdicción sobre la nueva provincia en asuntos judiciales.

Francisco de Ibarra impulsó la ocupación de lugares como Mazapil, Avino y el Valle de Guadiana, donde de su propio peculio fundó en 1563 la ciudad de Durango, que desde el momento de su fundación fue concebida como capital de los nuevos territorios abiertos al dominio español. Uno de los integrantes de la expedición de Ibarra, Rodrigo de Río de Loza, recibió órdenes para poblar la porción norteña de la provincia de Nueva Vizcaya. En la frontera entre tepehuanes y tobosos, De Río de Loza fundó el mineral de Indé; más tarde, en 1567, siguiendo las instrucciones de Ibarra, procedió a poblar el área que era conocida desde entonces como de los "conchos". Cerca de allí fundó la villa de Santa Bárbara, que por décadas sería el asentamiento más septentrional del dominio español. Ese poblado tuvo su razón de ser en la plata que los españoles hallaron en las sierras de los alrededores.

Las órdenes de Ibarra a De Río de Loza ocurrieron una vez que había fracasado en su búsqueda de las ciudades legendarias. En 1564 y 1565 Ibarra había recorrido Sinaloa y Sonora, e incluso había llegado hasta Paquimé, que para esos años ya estaba des poblada. Baltasar de Obregón, uno de los primeros cronistas españoles de la ocupación del septentrión novohispano, relata la tremenda decepción sufrida por Ibarra y los suyos ante el hallazgo de esa gran ciudad abandonada. Puede pensarse, entonces, que Ibarra prefirió consolidar posesiones más modestas, pero también más ciertas, y dejar de lado el sueño de las ciudades grandiosas.

Con el surgimiento de Santa Bárbara culminaba la fase de exploraciones y conquistas encabezadas por Francisco de Ibarra. Esta empresa, realmente privada si consideramos que la Corona

española sólo se limitó a autorizarla y luego a formalizar el surgimiento de la nueva provincia, tuvo varias repercusiones. Una de ellas fue la apertura de la ruta que aún en nuestros días es decisiva para la historia de Chihuahua, pues lo une con el sur, con Durango, Zacatecas y la Ciudad de México.

ENTRE CONCHOS, TOBOSOS Y TARAHUMARAS

El espacio dominado por las expediciones de Ibarra distaba de ser un desierto. Una numerosa población se acomodaba en sus montañas boscosas, valles, lomeríos, barrancas y planicies de escasa vegetación. Como se dijo, las estimaciones indican que hacia el momento del contacto había unos 350 000 habitantes en la porción que desde 1562 se denominaba Nueva Vizcaya. Esta cifra, que debe tomarse con reservas, es importante sin embargo para comprender la compleja relación de estos grupos con los pobladores europeos recién llegados.

Santa Bárbara se hallaba ubicada en parte del territorio de los tepehuanes. Éstos practicaban la agricultura: maíz, frijol, chile, calabaza y algodón. A pesar de que carecían de una estructura política centralizada, no era raro que algunos jefes o caciques tuvieran mando sobre más de una ranchería. Los viejos gobernaban en tiempos de paz, mientras que los guerreros lo hacían durante la guerra. Los tepehuanes eran quizá el grupo más agresivo de esta área: eran constantes sus conflictos con los tarahumaras y dominaban a los acaxeos, a quienes cobraban tributos de maíz y frijol. Con una compleja vida ritual y ceremonial, los tepehuanes practicaban la poligamia y al parecer el canibalismo. Los sacerdotes o chamanes se sentirían desplazados muy pronto por la religión y por los misioneros de distintas órdenes.

Al parecer, los tepehuanes huyeron muy pronto del área de Santa Bárbara una vez que esta localidad fue fundada. Hacia el norte de este asentamiento español se hallaban los conchos, o la "conchería", término con el que los españoles llamaron a los pobladores que habitaban cerca de los ríos que más tarde serían

nombrados como Conchos, San Pedro y Florido. En su libro *Indian Assimilation in the Franciscan Area of Nueva Vizcaya*, William B. Griffen afirma que al utilizar el término “conchería” los españoles incluían, en realidad, a dos grandes grupos lingüísticos: los sumas-jumanos del norte y los conchos del sur. Estos grupos (entre ellos los chinarras, chisos, tapacolmes) vivían en pequeños asentamientos y se dedicaban sobre todo a la recolección, a la caza, la pesca y la agricultura; de esta última obtenían sandías, melones, frijol, calabazas y maíz. Usaban arco y flecha, así como otras armas. No eran muy numerosos, y a pesar de ello su territorio se extendía hasta la confluencia de los ríos que con el tiempo se llamarían Bravo y Conchos, y hasta un punto no muy lejano de las ya desde entonces ruinas de Paquimé, en los ríos que los españoles llamarían más tarde Santa María y El Carmen.

Hacia el sur de Santa Bárbara, por el camino a Durango, era territorio de frontera entre los tepehuanes y los diversos grupos que ocupaban lo que más adelante comenzaría a llamarse Bolsón de Mapimí, entre ellos los tobosos y los salineros. Estos grupos se mantenían de la caza de conejos, ratas, venados y hasta búfalos, y de la recolección de nopal, maguey y mezquite; también vivían dispersos en pequeñas bandas de entre 50 y 60 integrantes. Cada banda tenía su jefe o capitancillo, cargo que recaía en el mejor guerrero pero que a veces se heredaba por vía paterna. Sus casas eran simples jacales y enramadas cubiertas con pieles de venado o bien de zacate. La escasísima información sobre su agricultura es contradictoria: algunas fuentes mencionan la práctica de la agricultura maicera y otras los reducen a cazadores-recolectores. De cualquier modo, estos grupos contrastaban con tepehuanes y tarahumaras, cuya agricultura estaba más consolidada como práctica cultural básica de subsistencia. Después de todo, éstos vivían en áreas más altas y húmedas.

Al noroeste de Santa Bárbara, hacia el macizo montañoso que más tarde se conocería como Sierra Madre Occidental, se hallaba el territorio de los tarahumaras, más sedentarios que los conchos y los tobosos. Los tarahumaras practicaban la agricultura y también cazaban y recolectaban. Vivían acomodados en rancherías

dispersas a lo largo de las corrientes superficiales (las cuencas altas del Mayo y del Conchos), aunque cambiaban de residencia conforme transcurría el año para aprovechar los recursos de los dos medios naturales principales: las serranías y las barrancas.

En general, esta población vivía dispersa a lo largo del territorio; carecía de una estructura política centralizada, pues cada ranchería reconocía a su propio jefe, aunque en tiempos de guerra se formaban agrupaciones más amplias. Antes del arribo de los españoles las guerras entre estos grupos eran frecuentes: los tarahumaras sostenían repetidos enfrentamientos con sus vecinos tepehuanes y con otros grupos, como los tubares, témoris, chínipas y guazapares. En el bolsón, un área poblada de matorrales, mezquite, gobernadora, ocotillo y algunas cactáceas, la lucha por una fuente o cuerpo de agua generaba fuertes enfrentamientos, sobre todo en la temporada de secas. Las venganzas eran frecuentes, lo mismo las alianzas, que a veces se reforzaban con vínculos matrimoniales entre grupos distintos. No obstante, esas alianzas se caracterizaban por su gran fragilidad.

En cierto modo, los grupos se hallaban en áreas más o menos definidas según sus características físicas. Los tarahumaras y tepehuanes vivían más cerca de la Sierra Madre, en áreas de mayor altitud de sabanas y bosques de pino, cubiertas de zacatales, robles y táscates, con un régimen de lluvias superior a los 400 mm anuales y con severas heladas invernales que acaso se veían compensadas por un verano más agradable. En cambio, los conchos y los tobosos habitaban zonas comprendidas en la planicie baja, más calurosa y con menos lluvia (menos de 300 mm). Los ríos nacían en el territorio de tarahumaras y tepehuanes, en buena medida cubierto de coníferas, y descendían hacia el desierto del oriente y el Río Grande atravesando los terrenos más áridos de los conchos, salineros y tobosos. Chantal Cramaussel sugiere tener cautela con estas distinciones entre grupos, que muchas veces respondían más a la mirada española que a las características propias de los grupos indígenas. Así, por ejemplo, sostiene que los salineros eran en realidad tepehuanes del desierto y que los tobosos eran simplemente "conchos de guerra".

Por lo visto, los españoles repararon en las virtudes que ofrecía el área: corrientes de agua permanente, tierras aptas para el cultivo y sobre todo una abundante población. Sin embargo, los primeros años de vida de Santa Bárbara mostraron que mantener un asentamiento permanente no era tarea fácil. Uno de los problemas principales, como se verá, fue el carácter poco sumiso de los indios de los alrededores.

ECONOMÍA ESPAÑOLA Y TRABAJO INDÍGENA

Como sostiene Cramaussel, en los primeros años los habitantes de Santa Bárbara enfrentaron grandes dificultades para emprender los trabajos mineros y agrícolas, así como para mantener la comunicación con el sur de la Nueva Vizcaya y con el resto del virreinato. El reducido número de españoles hacía muy difícil la tarea de conseguir trabajadores entre los indios, que se mostraban reacios a trabajar para los europeos. Por esa razón estos primeros pobladores españoles recurrieron a métodos violentos para conseguir la preciada mano de obra. La resistencia de los indios a someterse al mandato español fue el pretexto para organizar capturas masivas de indios para remitirlos luego a las minas y estancias, donde vivían incluso atados en colleras. Como se comprenderá, esa violencia española comenzó a generar inquietud y animadversión entre los indios.

Para sostener un punto de avanzada en una porción tan alejada de la Ciudad de México, del Bajío, de Zacatecas —es decir, del corazón del virreinato de la Nueva España—, los españoles se vieron obligados a dedicarse ellos mismos a las siembras. Los intercambios iniciales con tepehuanes y tarahumaras no eran una fuente de alimentos de magnitud considerable. Los primeros pobladores, muchos de ellos antiguos soldados, recibían diversos privilegios de la Corona para asegurar su permanencia. Entre esos privilegios estaba que después de cinco años de residencia se convertían en propietarios definitivos de la tierra que habían recibido; del mismo modo, los primeros pobladores no podían ser despoja-

dos del agua otorgada, y como “vecinos” tenían derecho a elegir a las autoridades locales y a recibir trabajadores indios antes que los demás.

Años más tarde, en 1574, la ocupación española de Santa Bárbara ganó fuerza con la creación de un convento franciscano en un punto que más tarde se conocería como Valle de San Bartolomé (el actual Valle de Allende). Este asentamiento se encontraba en una zona fértil, regada por un río que más tarde llevaría el nombre del pueblo. Allí mismo algunos vecinos de Santa Bárbara habían obtenido mercedes de tierra y agua para sembrar trigo y frutales.

La minería de Santa Bárbara —y más tarde la de los cercanos minerales de San Juan y de Todos Santos (1591)— no tenía la riqueza que los españoles esperaban, pues de hecho se limitaba a la explotación de depósitos superficiales de oro y plata. A pesar de eso, los indios de México y Michoacán, que habían formado parte de la expedición de Ibarra, así como los esclavos negros, no bastaban para satisfacer la demanda de trabajadores que requerían las minas y estancias. Los vecinos de Santa Bárbara enviaban repetidas quejas acerca de la escasez de trabajadores en su comarca.

La ocupación europea descansaba en el trabajo de los indios; para garantizar esa fuerza de trabajo los españoles recurrían a varios métodos. Ya se ha mencionado el más simple: la captura de indios. Pero había otros dos más complejos: la encomienda y el repartimiento. El primero fue un sistema de asignación del tributo que los indios debían a la Corona, a los conquistadores y a los descendientes de éstos a cambio de su evangelización. El repartimiento, por su parte, era un sistema de asignación de trabajadores temporales que era regulado de común acuerdo entre las autoridades españolas y las autoridades de los pueblos o localidades indias. Estos métodos, sin embargo, no lograron afianzarse en Santa Bárbara en el siglo xvi; por ello el método más exitoso continuó siendo el más brutal: la caza de indios considerados infieles y, por tanto, sujetos de esclavitud.

Las fundaciones de Santa Bárbara y del Valle de San Bartolomé marcaron el principio de las relaciones de trabajo entre los espa-

ñoles y los indios en esta zona. Eran relaciones en gran medida coercitivas, marcadas por la tensión y la violencia. Vale decir, sin embargo, que también hubo casos de indios que decidieron acomodarse por su cuenta y riesgo en los establecimientos españoles.

Las encomiendas otorgadas por la Corona en estos años en Santa Bárbara encubrían una realidad definida por la violencia inherente a la captura de indios. Estas encomiendas no incluían el pago de tributos. Éste sería un rasgo distintivo del septentrión novohispano: a diferencia de los indios del centro del virreinato, los del norte no pagarían tributos, en gran medida por el estado de guerra. Algunos indios prefirieron huir a la sierra o a otros lugares antes que verse sometidos a la explotación de los españoles. Es muy probable también que con esta violencia se iniciaran movimientos de población india que dificultan ahora el estudio de su situación al momento del contacto: no es difícil que los seminómadas se hicieran nómadas y que los nómadas confirmaran su nomadismo moviéndose a lugares nuevos y que se mezclaran con otros grupos.

Otro problema fueron las enfermedades transmitidas por los españoles, las cuales provocaron grandes epidemias, incluso desde antes de que llegaran los españoles a estas tierras. Por lo menos en 1577 y 1590 hubo dos que afectaron severamente a la población nativa. Las epidemias de viruela y sarampión se sucedían en el siglo xvii en ciclos de cinco a ocho años, e iban acompañadas de una gran mortandad entre los indios. A las epidemias se sumaron sequías, hambrunas y las extenuantes jornadas de trabajo, y en conjunto esos factores originaron una dramática disminución de la población india.

Algunos de estos grupos indígenas decidieron enfrentar con la fuerza la violencia española. Los ataques se sucedieron y llegaron a tal extremo que en 1586 la villa de Santa Bárbara tuvo que ser evacuada. Así, este asentamiento se sumaba a su vecino Indé en la historia de despoblamientos y repoblamientos. Sólo hasta dos años después Santa Bárbara fue repoblada. En 1591 se formó el pequeño mineral de Todos Santos, que en 1604 tenía apenas 18 vecinos, es decir, cabezas de familia con derechos a tierras y solar

dentro de la localidad, y a nombrar y ser nombrados en cargos del gobierno local.

Hacia fines del siglo, en 1598, gracias al interés de Juan de Oñate los españoles emprendieron un importante avance en su expansión hacia el norte. Muchos de ellos soñaban con encontrar las famosas ciudades de enormes riquezas, pero también, como sostiene Salvador Álvarez, un camino a Asia. Oñate obtuvo concesión de la Corona para conquistar nuevos territorios a cambio de recibir prebendas y nombramientos. Se trataba, entonces, de una expedición de particulares autorizada por el gobierno español; es decir, era semejante a la de Ibarra.

Para su expedición, Oñate viajó a Santa Bárbara, lo que era obligado al ser éste el último poblado español de la frontera septentrional. Allí permaneció cerca de dos años preparando el viaje. Antes de Oñate, varias expediciones habían pasado por Santa Bárbara, como las de Chamuscado en 1581, Antonio Espejo al año siguiente y Zaldívar en 1588. Las repetidas intentonas de conquistar el Nuevo México significaban una sangría para la endeble villa de Santa Bárbara. Ello era así porque atraían a la aventura a algunos de los escasos habitantes del mineral. Además, la villa tenía que alimentar a los expedicionarios, y en ocasiones los hombres y animales ocasionaban daños en los cultivos; los robos y desmanes eran otras quejas de los habitantes. Así, a fines de 1597 un grupo de alrededor de 130 soldados y colonos, con 83 carros y 7000 cabezas de ganado, inició el viaje hacia el norte. Meses después cruzaba el Río Grande (o Bravo) y continuó su avance hacia su destino. El 30 de abril de 1598 Oñate creaba la provincia de Nuevo México.

La expedición de Oñate no sólo fue importante por la fundación de Nuevo México, sino porque abrió un camino que sería muy utilizado en los siglos siguientes en el tráfico hacia Santa Fe. De ese modo, los españoles, en los inicios del siglo XVII, habían extendido el camino de Tierra Adentro, como se le llamaría más adelante, desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, un tramo de casi 2500 km, unas 500 leguas (una legua medía 5.5 km). Aunque entonces nadie lo sabía, esa ruta sería fundamental para

la conformación del espacio que más tarde se conocería como Chihuahua.

Sin embargo, durante años el tramo entre Santa Bárbara y Santa Fe permaneció sin asentamientos españoles debido a que la ocupación de Nuevo México fue muy azarosa y frágil en sus primeros tiempos. De hecho, algunos de los miembros de la expedición de Oñate se decepcionaron tanto que prefirieron regresar; algunos de ellos contribuyeron a aumentar la población de la zona de Santa Bárbara. Para los españoles era una ruta difícil porque atravesaba un largo tramo muy seco que era habitado por diversos grupos indios. La conformación histórica de Chihuahua puede verse en gran medida mediante la gradual ocupación de ese espacio con asentamientos y explotaciones españolas.

Para 1604 la villa de Santa Bárbara estaba nuevamente abandonada, y así permanecería por lo menos tres décadas. Lo que no se despobló fue el conjunto de estancias y ranchos agrícolas y ganaderos de los españoles de la llamada provincia de Santa Bárbara. A pesar de las dificultades, estos asentamientos lograron sostenerse como la punta de avanzada de la expansión española en el septentrión, que pronto se vio reforzada con nuevos asentamientos: las misiones.

LAS MISIONES

Junto con los mineros, soldados, indios, esclavos negros, artesanos y agricultores llegaron otros españoles, los misioneros franciscanos. Éstos habían acompañado a Ibarra desde sus primeras expediciones en 1554. En 1574, como se dijo, habían fundado el convento del Valle de San Bartolomé. Desde allí comenzaron su labor de evangelización entre la población indígena de los alrededores. Más tarde, al despuntar el siglo xvii arribaron los primeros misioneros jesuitas.

En 1604 los franciscanos fundaron la misión de San Francisco de Conchos, a la orilla de dicho río. Fray Alonso de Oliva, el fundador, había empezado a trabajar con los conchos por lo menos desde 1595 y con ellos viviría casi 25 años, en los que intentó

congregarlos “bajo campana”, es decir, en el asentamiento fijo de la misión. En 1609 se aseguraba que Oliva había logrado reunir a 4000 indios en el asentamiento, aunque para 1622 la cifra se había reducido a la mitad. Oliva abrió tierras de cultivo y enseñó métodos para la crianza del ganado que los españoles habían llevado consigo: caballos, burros, mulas, ovejas, cabras y vacas, además de gallinas. Otra misión nacida en esos años fue la del Valle de San Bartolomé, que en 1601 ya incluía como pueblo de visita a Atotonilco, donde había indios conchos y tobosos. En 1607 nació la misión del Tizonazo, no muy lejos de Indé.

Por su parte, en 1611 los jesuitas fundaron su primera misión en esta zona en San Pablo (el actual Balleza), gracias a los esfuerzos del padre Joan Font, quien había llegado a Santa Bárbara en 1604. Uno de los problemas que encontró este misionero fue la honda animadversión entre tarahumaras y tepehuanes. Entre 1623 y 1630 los jesuitas fundaron otras cuatro misiones: una cerca de Indé (Santa Cruz del Nazas), y las de Cerro Gordo, San Felipe y San Miguel de Bocas, estas dos últimas sobre el Río Florido. En ellas se reunieron por igual tepehuanes y tarahumaras que chizos y tobosos; es decir, población nómada y sedentaria. Sin embargo, el trabajo de franciscanos y jesuitas estaba bien diferenciado: a los primeros les correspondían los conchos y los grupos de las tierras bajas de la porción del este; los jesuitas, por su parte, se hicieron cargo de los tarahumaras y tepehuanes y de algunos grupos nómadas del suroriente. Como apunta Cramaussel, no era una división geográfica sino una división basada en un criterio cultural.

En las misiones los indígenas recibían la doctrina, se les enseñaba el español y se les entrenaba en el manejo del ganado y en el cultivo de las nuevas plantas como el trigo. También eran utilizados para construir las iglesias y demás instalaciones de la misión; por ejemplo, las acequias para el riego.

Pero las misiones adquirieron pronto una gran importancia, no sólo como centros de evangelización sino también como lugares de reclutamiento de mano de obra para los exigentes estancieros y mineros españoles. De las misiones comenzaron a salir regularmente los peones indios para efectuar trabajos temporales con los

españoles. Vista en una perspectiva amplia, ésta era su función clave. Para algunos sectores del gobierno, las misiones además tenían la ventaja de que disminuían las cacerías de indios, lo que redundaba en una convivencia menos violenta entre indios y europeos.

Los misioneros de ambas órdenes (sobre todo los jesuitas) no tardaron en enfrentarse a los intereses de los mineros y rancheros por causa de los indios, o mejor dicho, por causa de la fuerza de trabajo de los indios. Los colonos requerían mano de obra para sus explotaciones, mientras que los misioneros requerían sujetos para su labor evangelizadora y para las actividades productivas de las propias misiones. El problema surgiría porque los misioneros pronto entendieron que era preferible mantener aislados a los indios de las perniciosas influencias de los propios españoles. Pero lo cierto es que las misiones contribuyeron en gran medida a resolver el problema de escasez de trabajadores.

Algunos indios pronto descubrieron que, a pesar de tener que renunciar a algunas de sus costumbres y creencias (obviamente, a su religión y su nomadismo), la misión ofrecía ventajas; por ejemplo, una cierta seguridad alimentaria y el aprovechamiento de algunos productos españoles, sobre todo textiles. Además, según Susan Deeds, las misiones parecían contrarrestar, de manera contradictoria, la incertidumbre provocada por la llegada de los españoles. El dios español podía complementar a sus antiguas deidades y brindar así una protección adicional contra las enfermedades y epidemias y contra los grupos enemigos. Por estas razones, las misiones se han visto como uno de los principales métodos de conquista y expansión española en el septentrión; sin duda, conformaron un espacio de una densa complejidad social que desembocó en la aculturación de los indios y su integración a los modos de los europeos.

LA REBELIÓN DE 1616

El contacto entre los españoles recién llegados y los indios locales no fue pacífico. Las cacerías de indios, los abusos en las jornadas

y condiciones de trabajo, la virtual esclavitud de muchos de ellos, las epidemias y la guerra configuraron un escenario en el que la violencia era quizá su principal rasgo. Como se vio, los indios no permanecieron cruzados de brazos ante la violenta irrupción de los europeos. Respondieron con ataques, robos y asesinatos. Indé y la misma Santa Bárbara tuvieron que ser abandonados por causa de esos hechos. A lo largo de la primera década del siglo xvii se sucedieron varios pequeños levantamientos de xiximes y acaxeos que pudieron ser sofocados sin grandes problemas. Ninguno de esos incidentes tuvo las proporciones de la gran rebelión tepehuana iniciada en noviembre de 1616.

Esta insurrección fue de tal magnitud que amenazó seriamente la ocupación española de buena parte de la Nueva Vizcaya. Aunque no llegó a afectar directamente a la zona de Santa Bárbara, el levantamiento en 1616 ilustró con gran claridad el carácter de la expansión española en este territorio. En noviembre de 1616 un grupo de tepehuanes de Santa Catalina atacó una recua de mulas y mató al padre Hernando de Tovar. Dos días después los rebeldes atacaron Santiago Papasquiari, donde mataron a 100 personas más, entre ellas a dos misioneros jesuitas. Para el 27 de noviembre la propia capital de la Nueva Vizcaya, Durango, se hallaba en peligro inminente; poco después el mineral de Indé era arrasado; la misma suerte corría una estancia cercana al Valle de San Bartolomé que fue atacada por indios conchos, así como una hacienda de beneficio de metales en el vecino mineral de San Juan. El historiador Guillermo Porras Muñoz destaca la labor del fraile Oliva, quien desde su misión de San Francisco de Conchos contribuyó en gran medida a evitar que los conchos se unieran a los tepehuanes; además, aportó una buena cantidad de harina e incluso reclutó indios para guerrear contra los rebeldes.

Entre noviembre de 1616 y diciembre de 1618 los españoles y tepehuanes trabaron una sorda lucha, que significó más de 1000 muertos para los rebeldes, unos 300 españoles (entre ellos ocho misioneros jesuitas) y una erogación estimada en 800000 pesos de fondos de la Corona. Pero antes los tepehuanes obligaron a los españoles a abandonar minas, ranchos, misiones y haciendas de

una amplia porción situada entre Durango y Santa Bárbara. Algunos hallaron refugio en las cercanías de Santa Bárbara; otros, en la capital de Nueva Vizcaya. Estos abandonos provocados por los levantamientos y las rebeliones indígenas serían cosa común en los siglos subsiguientes y conformarían un patrón de asentamiento altamente inestable.

Los españoles enfrentaron la rebelión de diversas maneras: la represión, las ofertas de paz y el divisionismo. A la vez que torturaron y ahorcaron a los sospechosos de rebeldía y a los prisioneros, ofrecieron regalos y promesas de liberación del dominio tepehuán a los acaxeos. Al término de la guerra, los españoles redujeron a la esclavitud a algunos prisioneros; a otros los distribuyeron en estancias y minas de la zona; otra modalidad fue la de repoblar algunos sitios abandonados durante las hostilidades; y otra más, la de acrecentar la población de las misiones ya existentes, como la del Valle de San Bartolomé. Los tepehuanes, que en buen número se refugiaron en la sierra ante la ferocidad de la respuesta española, no se volverían a rebelar. Pero otros grupos sí lo harían, como se verá más adelante.

La guerra tepehuana de 1616 dejó una honda huella en la memoria colectiva de los españoles y siempre la recordarían con amargura, aunque no hicieron mucho por evitar un nuevo estallido de violencia. Más de un siglo después, en 1737, el cronista franciscano José Arlegui escribía en su *Crónica de la provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas*:

El mayor alzamiento o sublevación que se ha padecido de los indios bárbaros de esta provincia fue el que hizo una dilatadísima nación, nombrada Tepeguana [...] dio muchísimo cuidado y costó mucha suma de la real hacienda el apagar tan desmedido fuego y tan horrosas hostilidades. El principio de esta sublevación fue el año de 1616, y sin duda fue originada por el demonio.

IV. EL SIGLO XVII ES DE PARRAL (1630-1710)

NUEVO MINERAL, NUEVA POBLACIÓN

LA BÚSQUEDA DE NUEVAS VETAS era uno de los motores primordiales de la ocupación española de las tierras americanas. Y al decir “ocupación española” se entiende tanto el interés de la Corona, el interés gubernamental o público, como el interés de los particulares, el interés privado.

No hay duda de que así como las minas de Zacatecas habían contribuido con gran fuerza a hacer posible la expansión española hacia Durango y Sinaloa, y así como Santa Bárbara posibilitó la ocupación de Nuevo México, de la misma manera las riquísimas minas de Parral favorecieron en gran medida la configuración del espacio de lo que más tarde sería Chihuahua. Veamos este aspecto con más detenimiento.

En el verano de 1631 comenzó la primera bonanza de la minería de lo que poco después se llamaría San José del Parral, localidad situada a unos 1 600 msnm, 300 menos que Santa Bárbara. Se trataba de depósitos superficiales de plata excepcionalmente ricos, así como de vetas más profundas de sulfuros de plata. Destacaba la veta originaria denominada La Negrita, más tarde conocida como La Prieta. Estos depósitos mostraron rápidamente su riqueza y pronto la noticia corrió como pólvora. Llegaron vagos, indios, comerciantes, operarios y mineros de Durango, Zacatecas, Guadalajara y Michoacán, y más tarde de Sonora (yaquis y ópatas). Además, indios de los alrededores —tepehuanes, tarahumaras, conchos e incluso tobosos— comenzaron a trabajar en las minas y haciendas de beneficio. Como había ocurrido en otros lugares, esos habitantes se acomodaron de manera descuidada en las faldas de los cerros y paulatinamente fundaron un nuevo núcleo de población, en este caso, un nuevo real de minas. Para 1632 el

nuevo mineral, llamado San José del Parral, florecía con sus casi 300 vecinos, muchos más que los habitantes de Santa Bárbara y El Valle juntos. Muy pronto se formó una nueva jurisdicción al mando de un alcalde mayor, autoridad real con facultades administrativas y de justicia. En 1635 ya tenía 5 000 habitantes; en 1637 había 37 comerciantes establecidos en el lugar, y en 1642 sumaban 47. A Parral llegaba azúcar de Cuernavaca y Cuautla, y sobre todo de Sinaloa, de donde se enviaban también limones y naranjas. El arroz llegaba de Michoacán y Jalisco. El aceite de oliva y una parte de los vinos provenían de España; la otra llegaría más tarde de Parras y de El Paso. Las mantas de algodón eran traídas del sur y del norte: de Oaxaca, Michoacán y Puebla, y de Nuevo México. Los 600 000 pesos anuales de mercancías que en 1673 compró Parral a la Ciudad de México mostraron la fortaleza de la minería local, pero también la importancia de los vínculos del nuevo mineral con los comerciantes de la capital del virreinato. Ese comercio aprovechaba y consolidaba la ruta abierta por las expediciones de Ibarra entre 1550 y 1560 del centro del virreinato a los incipientes asentamientos de la porción norteña de la Nueva Vizcaya. Tales vínculos se acrecentaron y diversificaron con los años. Cada año, en tiempo de secas (octubre-mayo), una decena de caravanas provenientes de la Ciudad de México llegaban a Parral después de un viaje de tres o cuatro meses.

El crecimiento demográfico de Parral era impresionante, lo que indicaba las grandes posibilidades económicas que ofrecían sus vetas. En 1645 su población se estimaba en 10 000 habitantes; el tamaño de esta localidad se aprecia mejor si se considera que por esos años la Ciudad de México contaba con 40 000. El mismo gobernador de la Nueva Vizcaya, Gonzalo Gómez de Cervantes, decidió mudarse al nuevo mineral en 1632, sin que le importara mucho abandonar la sede de su gobierno. Este cambio virtual de la capital de la Nueva Vizcaya se mantuvo por más de 100 años, hasta 1739. La decisión del gobernador Gómez de Cervantes era indicio del poderoso movimiento de población que vaciaba núcleos antiguos y que concentraba a sus habitantes en el nuevo centro de explotación minera. Por ello no es exagerado afirmar

que el auge de Parral hizo tambalear a Durango, cuyas autoridades se quejaban de la actitud de los gobernadores, que vivían en Parral a pesar de las repetidas órdenes en contrario, y advertían sobre el riesgo de que Durango desapareciera ante la notable migración hacia el nuevo mineral. Advertían también que el obispado de Durango, creado apenas en 1620, podía ver amenazada su existencia.

La minería de Parral era preponderantemente extensiva, ya que aprovechaba yacimientos superficiales. Sin embargo, para 1650 en Minas Nuevas había tiros con una profundidad de más de 200 pies. La extracción de mineral se hacía con energía de sangre; es decir, con base en trabajo humano y de bestias. Conforme las minas se hicieron más profundas comenzaron a sufrir inundaciones. En 1671 nueve de las 22 minas parralenses enfrentaban ese problema. Los malacates eran desconocidos en Parral en esos años, por lo que el desagüe se hacía con cubos de madera transportados en las espaldas de los trabajadores. El beneficio de los minerales, la obtención de la plata pura, se hacía con base en los dos sistemas más usuales de la época: la fundición y la amalgamación. El uso de uno o de otro dependía de las características del mineral. El primero se usaba en minerales conocidos como galenas; es decir, en minerales de alta ley; el segundo, en cambio, era idóneo para beneficiar grandes cantidades de mineral de bajo contenido de plata. El primero usaba hornos y fuelles y requería de plomo. El segundo necesitaba mercurio, sal y cobre, que se mezclaban con el mineral previamente triturado; esta masa era colocada en un patio donde se dejaba durante meses, en los que ocurría el proceso de amalgamación que separaba la plata del resto del mineral. De allí su nombre de "sistema de patio". Este método requería de una gran cantidad de agua, y por esa razón las haciendas de beneficio se instalaron a las orillas del Río Parral. La importancia del mercurio en el proceso de amalgamación era decisiva. Uno de los principales problemas de los mineros parralenses fue precisamente la escasez de este insumo, dificultad que de hecho aquejaba a los mineros de toda la América hispana, y cuya producción y distribución controlaba celosamente la Corona. Los vapores que desprendía el mer-

curio envenenaban y mataban en un plazo de cuatro a 24 meses a aquellos desgraciados cuyo trabajo consistía en pisar el mineral para hacer la mezcla con el mercurio. Semejante mortandad obligaba a conseguir remplazos de manera constante.

Las minas, las haciendas de beneficio, los comercios, los transportes, la alimentación de una numerosa población, exigieron más y más trabajadores. La muy alta mortalidad de la población india, provocada por las frecuentes epidemias, las hambrunas y los abusos en las jornadas laborales, alimentaba la demanda de brazos. Una parte de estos trabajadores llegó por su cuenta y riesgo; eran mexicanos, tarascos, yaquis, ópatas, sinaloas, y algunos tepehuanes y tarahumaras. Otros, como se mencionó líneas arriba, llegaron por la fuerza: tanto por haber sido capturados en los alrededores (sobre todo los tobosos) o en lugares tan alejados como Nuevo México, como por el repartimiento de tarahumaras y conchos. En algunos casos se les pagaba con ropa y dinero; en otros se les endeudaba mediante pagos adelantados que los trabajadores nunca podían saldar. En el siglo xvii a los indios que radicaban de manera permanente en las haciendas se les nombró “naboríos”. Un siglo después este nombre entró en desuso y se adoptó el de “sirvientes”, antecedentes de los peones endeudados del siglo xix. Un fenómeno característico de los reales de minas del septentrión novohispano fue el asentamiento de barrios según el lugar y la etnia de origen. Así, en Parral se formaron barrios de yaquis, de tarascos, de tarahumaras. Esto mismo ocurriría décadas después en la villa de Chihuahua.

De esta manera, en sus primeros 10 años de vida Parral se constituyó en la principal localidad de españoles al norte de Zacatecas. Sus habitantes, ricos y pobres, españoles e indios y algunos negros, junto con mestizos y mulatos, se acomodaron en torno al río (llamado entonces San Gregorio) y junto al cerro de Las Minas. Los diversos barrios se formaron en ambas márgenes del río y pronto habría varios puentes para unir las dos partes de la ciudad. En 1642 se estableció una alhóndiga, en donde se almacenaban granos y demás alimentos para el consumo local, lo que permitía regular el abasto de granos en épocas de escasez. Más tarde, en

1673, comenzó la construcción de la iglesia parroquial, que se concluyó 14 años después. Al mediar el siglo xvii, cuando Parral contaba con una población estimada entre 2000 y 5000 habitantes, el número de esclavos negros ascendía a 1100 individuos. La mayoría eran bozales, como se denominaba a los negros criollos, es decir, nacidos en Nueva España; el resto eran originarios de Angola, Mozambique, Congo, Biafra, Calabar y Guinea, traídos a la Nueva España por negreros portugueses y vendidos por comerciantes de la Ciudad de México con la intermediación del colegio jesuita de Durango. Según Cramaussel, en 1636 un esclavo negro varón menor de 45 años costaba la altísima suma de 900 pesos. Sólo considérese que el salario anual de un capitán encomendero, como Valerio Cortés del Rey, era de 1000 pesos anuales.

EXPANSIÓN ESPAÑOLA DESDE PARRAL

El auge minero de Parral se vio reforzado por el descubrimiento de vetas que dieron lugar a nuevos asentamientos, como Minas Nuevas (el actual Villa Escobedo) en 1634 y San Francisco del Oro en la década de 1650. Estos yacimientos propiciaron el surgimiento de nuevos núcleos de población que hicieron aún más vigorosa la experiencia de Parral en términos de poblamiento. Parral era un centro minero, comercial y político de primer orden; por ejemplo, allí se beneficiaban los minerales extraídos en los fundos mineros de las cercanías. Puede decirse, entonces, que estos nuevos minerales formaron parte de un espacio dominado por Parral, lo que ha llevado a un distinguido historiador norteamericano, Robert C. West, a definir el “distrito minero de Parral” como un espacio económico que incluía tanto las minas y estancias o ranchos de españoles del Valle de San Bartolomé, como las misiones franciscanas y jesuitas, que aportaban productos agrícolas e indios de repartimiento.

Sin duda alguna, el surgimiento de Parral consolidó la ocupación europea en esta porción de la Nueva Vizcaya, iniciada desde 1567 con la fundación de Santa Bárbara y sobre todo con la ex-

pansión de la agricultura en el fértil Valle de San Bartolomé. Sin esta producción agrícola y sin la ganadería de los primeros pobladores, la minería en Chihuahua, incluida la de Parral, no hubiera sido posible. Tal es el argumento de Salvador Álvarez, que cuestiona así el lugar central de la minería en el poblamiento español del septentrión novohispano.

Pero Parral hizo posible algo más: propició una intensificación del comercio con los ranchos y las estancias de los alrededores, en especial con el Valle de San Bartolomé, zona agrícola fundada casi al mismo tiempo que Santa Bárbara. Al parecer, la potencia minera de Parral, más que formar nuevas explotaciones, favoreció la concentración de la propiedad de la tierra y del agua en las cercanías. Este fenómeno se vio acompañado de un aumento sustancial de la producción agrícola: la producción de maíz de la zona pasó de 3000 cargas a principios del siglo a casi 40000 en 1640. Pero más adelante los españoles comenzaron a apropiarse de nuevas tierras y aguas para organizar explotaciones destinadas a satisfacer a la creciente población parralense. Valerio Cortés fue uno de los que se enriquecieron en Parral. Gracias a su cargo como ensayador de metales, por medio de préstamos y embargos subsecuentes y compras fue formando una enorme fortuna que en unos años incluía grandes extensiones de tierra. Su principal posesión era la hacienda de Nuestra Señora del Pilar del Conchos, además de otras propiedades en donde pastaban miles de animales. Fue una de las primeras grandes propiedades agrarias en esta parte de Nueva Vizcaya. Hombres como Valerio Cortés, Francisco Montaña y Baltasar de Ontiveros eran poderosos no sólo por su riqueza, sino también porque en caso de necesidad podían levantar fuerzas militares con sirvientes e indios, y ellos mismos fungían como jefes militares. En ese plano nadie podía oponérseles, pero sí en otras materias, como en la distribución del mercurio y en el reparto de mano de obra. Los conflictos de los poderosos locales entre sí o con los gobernadores eran cosa común, y en esos conflictos se hacían evidentes los estrechos lazos que unían a la provincia con el centro de la Nueva España. Los conflictos involucraban a

gobernadores, oidores de la Audiencia de Guadalajara y al mismísimo obispo de Durango.

Hacia 1640 ya era palpable la integración entre la minería parralense y las áreas agrícolas y ganaderas de los alrededores. De la misma manera era notable la red de intercambio tanto con el centro del virreinato, a través de Durango y Zacatecas, como con Nuevo México. Si en otros lugares del virreinato estos años se caracterizaban por una depresión económica, producida en gran medida por la baja en los rendimientos de los principales centros mineros (Guanajuato, Pachuca y Taxco) y por la grave baja demográfica provocada por las epidemias, en la Nueva Vizcaya en cambio el siglo xvii era época de expansión.

La ocupación española de esta amplia zona provocó cambios significativos en el medio ambiente. Quizá el más espectacular fue la destrucción de los bosques en los alrededores de Parral, debido a la alta demanda de leña para el proceso de fundición mediante hornos. Cramaussel estima que en menos de medio siglo, después de 1630, el bosque “retrocedió más de cincuenta kilómetros”, fenómeno que se repetiría en las cercanías de otras localidades mineras. La pérdida de bosques trajo como consecuencia lo que ahora llamamos “desertificación”, que se vio agravada por el crecimiento explosivo de los hatos de ganado menor y mayor. En algunos lugares había más animales que humanos. El ganado, bien lo sabemos, exige grandes cantidades de pastizales y agua. La alimentación de éste, por ejemplo los 60 000 bovinos y ovinos de Valerio Cortés del Rey en 1689, diezmó la vegetación y ello provocó el retiro o reducción de la fauna existente antes de la llegada de los españoles. El control del agua para el riego —una práctica que se generalizó en algunas zonas de la Nueva Vizcaya, como el Valle de San Bartolomé— alteró el curso de los escurrimientos superficiales y la disponibilidad del líquido, lo que contribuyó a modificar el paisaje.

La expansión española también incluyó la ampliación de las actividades de los misioneros jesuitas entre los tarahumaras. Con base en Parral, los jesuitas fundaron nuevas misiones que pronto se convirtieron en centros de población. Entre 1632 y 1640 se funda-

ron las misiones de San Felipe, Huejotitán, San Francisco de Borja y Satevó, y más tarde San Lorenzo (el actual Belisario Domínguez). En 1639 los jesuitas ya habían formalizado una jurisdicción independiente en lo que denominaban la “Alta Tarahumara”.

Con estas fundaciones la ocupación española avanzó hacia el norte, dejando atrás a Santa Bárbara. Algunos jesuitas hicieron largos recorridos hasta tocar puntos tan lejanos como Casas Grandes, la Junta de los Ríos y Sonora. Hacia el oriente, sin embargo, la última localidad española importante seguía siendo el Valle de San Bartolomé, pues más allá comenzaban los dominios territoriales de los insumisos tobosos.

LA RESPUESTA INDÍGENA: 1644-1653

La expansión española derivada del surgimiento y auge de Parral se tradujo en una creciente presión sobre la población indígena. La fuerza de trabajo era el asunto más delicado en este tiempo. Ya se habló del repartimiento como uno de los mecanismos empleados por los españoles para hacerse de mano de obra. Los líderes o jefes de los agrupamientos indígenas se encargaban de reclutar a los hombres para organizar los periodos de trabajo en las explotaciones españolas. En el caso de las misiones, los religiosos —con no poca resistencia— cumplieron ese papel. A diferencia de Sonora, donde el conflicto entre los propietarios españoles y los misioneros fue mucho más grave, en esta porción de Nueva Vizcaya la tensión entre los estancieros y mineros españoles y los religiosos en torno al control del trabajo indígena no llegó a tanto, tal vez porque en esta área los españoles tenían fuentes diversas de mano de obra, mientras que en Sonora la población indígena era controlada en mayor medida por los jesuitas.

A pesar de que indígenas de diversos grupos se establecieron voluntariamente en asentamientos españoles, el avance español constituía una amenaza contra las variadas formas de vida indígena. Los españoles, propietarios y misioneros por igual, soñaban con incorporarlos a la civilización cristiana y europea. La presión

creciente derivada del auge de Parral y un periodo de malas temporadas de lluvia provocaron la primera gran reacción de conchos y tarahumaras, que consumió casi una década. Esta rebeldía se sumó a la tradicional belicosidad de tobosos y salineros, grupos que se habían mantenido en constante hostilidad contra los españoles. En 1644, empero, esta hostilidad había tomado grandes proporciones. Para este año, además, hay noticias de que los tobosos ya habían incorporado el caballo, lo que mejoraba su capacidad de ataque. Al parecer, varios años de sequía habían agudizado las de por sí tensas relaciones entre los españoles y los diversos grupos indígenas.

El 25 de marzo de 1645, después de varios años de viruela, sequías y hambruna, los indios de la misión de San Francisco de Conchos se rebelaron, atacaron la iglesia, a flechazos mataron a dos misioneros franciscanos y al gobernador de los propios conchos (don José); también prendieron fuego al convento. Los alzados se dirigieron luego a San Pedro de Conchos, donde reclutaron a más rebeldes e incendiaron la misión. Los conchos del Valle de San Bartolomé e incluso de Parral se unieron a la rebelión, asaltaron haciendas, mataron a varios trabajadores y robaron ganado. Más tarde siguieron hacia las misiones jesuitas de Satevó y San Lorenzo, que fueron destruidas. Los misioneros jesuitas, ya advertidos, habían abandonado esos lugares. En agosto de ese mismo año, el levantamiento fue sofocado y las energías de los españoles se dirigieron a contrarrestar a los grupos del Bolsón de Mapimí, a los nómadas tobosos, salineros y demás grupos aliados. A pesar del rápido desenlace, este levantamiento de los conchos fue una sorpresa para los españoles, pues hasta entonces los consideraban leales y pacíficos; incluso, varias partidas de conchos habían colaborado en la represión de tobosos y salineros.

En aquel levantamiento estaba presente una profunda animadversión contra los españoles, tal y como había ocurrido durante la rebelión tepehuana. Según los testimonios disponibles, los líderes de los conchos alzados, Bautista y Tomás, mostraban un odio feroz contra la ocupación española, incluida por supuesto la religión católica. A pesar de su rápida represión, el conflicto seguía

latente. Los conchos, sin embargo, no se volverían a levantar sino hasta varias décadas más tarde.

Pero los tarahumaras sí se rebelaron. En 1648 atacaron las misiones, jesuitas en este caso. Una vez más Parral fungió como centro de organización de la defensa española. Desde allí salió primero el capitán Juan Fernández de Carrión, con una fuerza compuesta por cerca de 100 españoles e indios auxiliares. Pero esta expedición no tuvo éxito, y fue necesario que el mismísimo gobernador de la Nueva Vizcaya, Diego Guajardo y Fajardo, acudiera a principios de 1649 a reprimir el levantamiento. Éste emprendió una feroz campaña de exterminio que incluyó la destrucción de 4000 fanegas de maíz y el incendio de más de 300 casas. La quema de cosechas era una táctica que obligaba a los rebeldes, que generalmente se fugaban a terrenos inaccesibles, a rendirse. Los tarahumaras pidieron la paz; Guajardo aceptó a cambio de la cabeza de los cuatro líderes rebeldes; los tarahumaras sólo entregaron a dos, Bartolomé y Tepox. En abril de 1649 Diego Guajardo regresó a Parral dejando tras de sí una estela de odio y destrucción. Tal vez por esa razón, y temiendo nuevos estallidos de violencia, el gobernador consideró conveniente fundar un asentamiento fortificado en plena zona rebelde que fungiría como centro de control de esa área tarahumara situada en el valle del Río Papigochic. La villa de Aguilar se fundó en julio de 1649. A pesar de la oposición de propios y extraños, entre ellos el obispo de Durango, Guajardo se mantuvo firme en su proyecto de fundar esa villa militar.

La villa de Aguilar era una verdadera provocación para los tarahumaras. En junio de 1650 un nuevo levantamiento de este grupo comenzó por destruir la misión jesuita del Papigochic, donde fue ahorcado el misionero jesuita. Una vez más el gobernador Guajardo avanzó desde Parral para reprimir el levantamiento. Los tarahumaras huyeron hacia Tomóchic, donde el río crecido impidió a los españoles atacar a los rebeldes. Para fines de año, sin embargo, el levantamiento había sido sofocado y el gobernador retornaba a Parral. Los tarahumaras poco a poco aceptaron las paces ofrecidas por los españoles.

Pero una vez más, en febrero de 1652, después de una epidemia al parecer de viruela, los tarahumaras se rebelaron, en esta ocasión encabezados por don Gabriel Teporame. Éste no ocultaba su intención de expulsar a los españoles del territorio tarahumara. El 3 de marzo los rebeldes tomaron y destruyeron la fortificación de la villa de Aguilar. Ahorcaron al jesuita Antonio Basilio y al capitán De la Vega y mataron a la gente refugiada en el lugar. La rebelión se extendió por una amplia porción del territorio tarahumara; sólo los indios de Huejotitán y San Felipe se mantuvieron leales a los españoles. Los rebeldes también destruyeron siete misiones franciscanas, es decir, en territorio de los conchos; por ello, algunos conchos se sumaron a los españoles para combatir a los tarahumaras alzados. En esta ocasión la respuesta fue más tardía, porque Guajardo se hallaba en campaña contra los tobosos y demás grupos hostiles del Bolsón de Mapimí. El gobernador no llegó a la zona de guerra tarahumara sino hasta septiembre; su campaña se prolongó hasta febrero de 1653, cuando el líder Teporame fue capturado. Se le hizo juicio y el gobernador Guajardo no dudó en condenarlo a la horca, sentencia que fue cumplida el 4 de marzo de 1653, casi un año después de la destrucción de la villa de Aguilar. Esta localidad jamás volvería a surgir como tal.

Durante la rebelión, los misioneros jesuitas, españoles e indios pacíficos habían huido dejando abandonados sus asentamientos, mientras que los rebeldes se esmeraban en destruir iglesias, imágenes, crucifijos y demás símbolos de la religión española. El abandono incluyó ranchos, pequeñas explotaciones mineras, ganados; varias misiones, como las de Papigochic, San Francisco de Borja y Satevó, permanecieron sin gente durante años. Todo ello significó un verdadero retroceso de la ocupación española en el territorio situado al norte de Parral. La resistencia indígena, en este caso de conchos y sobre todo de tarahumaras, imponía límites a la expansión española.

Hay que comprender las razones tarahumaras. A la violencia española, sobre todo en términos de explotación del trabajo y de imposición de formas de vida y creencias, oponían una violencia que buscaba establecer una distancia defensiva respecto al avance

europeo en su territorio. Los jesuitas combatían ceremonias fundamentales del entramado social tarahumara; por ejemplo, las tesgüinadas, que eran grandes fiestas organizadas por diversos motivos y que incluían el consumo generalizado de tesgüino (bebida hecha de maíz fermentado), o la poligamia. Los tarahumaras parecían dispuestos a establecer relaciones pacíficas con los españoles, siempre y cuando éstos no se asentaran en sus terrenos. Como se comprenderá, esta exigencia india iba en contra de las ideas de los españoles y por ello era inaceptable. Por todo esto, las razones más profundas de la violencia permanecieron latentes aunque pasaran décadas sin noticias de nuevas rebeliones.

RECONSTRUCCIÓN HISPANA Y NUEVA EXPANSIÓN

A partir del ahorcamiento de Teporame comenzó un periodo de paz en la zona situada al norte de Parral, territorio de tarahumaras y conchos, lo que permitió que los españoles empeñaran sus mejores esfuerzos bélicos en la lucha contra los tobosos, al oriente del Valle de San Bartolomé. En esas condiciones, repoblaron lentamente los asentamientos que habían abandonado desde el inicio de las hostilidades en 1645. Al mismo tiempo, se fundaron nuevos asentamientos y misiones, nuevas minas atrajeron pobladores y el ganado ocupó terrenos nuevos. Las misiones franciscanas del Valle de San Bartolomé habían sido reconstruidas desde 1649, mientras que San Francisco de Conchos no se repobló sino hasta 1667. Las misiones jesuitas en territorio tarahumara fueron ocupadas nuevamente 20 años después, en la década de 1670.

En 1659 los franciscanos fundaron la misión de Nuestra Señora de Guadalupe (más tarde Paso del Norte) y en 1660 la de Casas Grandes, la primera situada a 1 138 msnm y la segunda a 1 445. Con el tiempo, estas dos misiones ganaron fama por la cantidad y calidad de sus producciones agrícolas. De igual forma, entre 1660 y 1668 nacieron las misiones de Bachíniva, Namiquipa, Babonoyava y Santa Isabel. Aunado a este avance misional, algunos pobladores civiles se arriesgaron a internarse en aquellas tierras en cierto

modo reconquistadas, llevaron sus ganados, y establecieron pequeñas explotaciones agrícolas y mineras. Fue en este tiempo cuando los mineros hicieron descubrimientos de vetas prometedoras en zonas aledañas a los asentamientos tarahumaras conocidos como San Bernabé.

La expansión franciscana contrastaba con una cierta resignación de los jesuitas, quienes parecían contentarse con su trabajo en la Baja Tarahumara, es decir, en las misiones de Huejotitán y Balleza. En 1673, sin embargo, surgió un conflicto de intereses entre jesuitas y franciscanos, sobre todo por una disputa en torno al dominio del fértil Valle del Papigochic. Los franciscanos habían comenzado a trabajar con tarahumaras en esa zona, cosa que los jesuitas reclamaron como una invasión jurisdiccional. Alegaban que ellos habían empezado el trabajo misional en esa zona pero que se habían visto obligados a abandonarlo por causa de los levantamientos de los años anteriores. En una junta celebrada en Parral en 1673, jesuitas y franciscanos resolvieron sus querellas y se ratificaron los linderos jurisdiccionales entre ambas órdenes: los conchos y las tierras bajas para los franciscanos, y los tarahumaras y las tierras altas para los jesuitas.

A partir de entonces los jesuitas comenzaron una febril tarea misional, que incluyó la refundación de misiones y la apertura de otras nuevas. Entre 1674 y 1676 fundaron las misiones de San Bernabé, Carichic, Nonoava, Coyáchic y Cerro Prieto. También repoblaron la misión del Papigochic. En estos años se abrió la zona conocida como la Bavícora a la explotación económica de los europeos; su fertilidad sería aprovechada por las misiones jesuitas.

Estos años de expansión fueron notables. El adinerado Valerio Cortés del Rey presumía de contar con 42000 vacas en las riberas del Conchos. En 1679, cuando logró que la Corona autorizara la fundación de su mayorazgo, contaba con una fortuna que se calculaba en casi 300000 pesos. La producción agrícola de estos asentamientos circulaba de manera preponderante hacia Parral, el núcleo de población española más importante de la zona. Asimismo, las misiones de Casas Grandes y de Nuestra Señora de Guadalupe enviaban sus excedentes al mercado parralense. El comercio con

Santa Fe ya estaba plenamente establecido, sobre todo en lo referente a borregos y lana. Del mismo modo, el comercio con Sonora a través de la Sierra Madre era práctica cotidiana. Se intercambiaban semillas, piloncillo y trabajadores. Los yaquis continuaban llegando en buen número a Parral y al Valle de San Bartolomé. Jesuitas y franciscanos veían aumentar el número de indios evangelizados, los bautizos sumaban miles y las misiones lentamente comenzaban a adquirir un peso económico considerable. Además de lograr la autosuficiencia, las misiones tenían facultades para vender sus excedentes. Ésta fue una práctica común en las misiones de la zona. Por otro lado, varios denuncios de tierra mostraban la paulatina expansión de los españoles hacia el oriente.

Sin embargo, las semillas de la violencia no habían sido borradas de este suelo. La expansión española civil y religiosa que se ha reseñado líneas arriba tuvo lugar a costa de territorio indígena y traía consigo la intensificación de la explotación de los recursos tarahumaras y conchos: más trabajo, más tierra, más agua, más bosque de los indígenas quedaban bajo control español. Los indígenas parecían esperar una ocasión propicia.

LA NUEVA RESPUESTA INDÍGENA: 1680-1700

En agosto de 1680 dio inicio la que tal vez fue la rebelión indígena más imponente del septentrión en la época colonial. Comenzó en los asentamientos de Santa Fe, en Nuevo México. Los historiadores han discutido si hubo algún acuerdo entre los diversos grupos indígenas, pues además de los indios pueblo se levantaron los conchos, los tarahumaras y los tobosos, que renovaron sus ataques intermitentes. Fue un gigantesco movimiento de violencia contra la presencia de los españoles, contra su economía y su religión.

Unos 2000 habitantes de Nuevo México huyeron hacia el sur luego de perder a 21 misioneros franciscanos y a 380 vecinos, y el Nuevo México quedaría abandonado (de españoles) durante más de una década. Paradójicamente, este movimiento de población, con dirección norte-sur, es decir, en sentido inverso a la dirección

primordial de la ocupación española del septentrión, tuvo fuertes repercusiones en la zona tarahumara y de los conchos, pues esos colonos se establecieron tanto en la misión de Guadalupe, donde fundaron Paso del Norte, como en Namiquipa y hasta en el Papi-gochic, incrementando la presencia española en una tierra donde no eran nada apreciados. Pero también esos emigrantes trajeron noticias de que los indios pueblo habían logrado expulsarlos, noticia que llegó a oídos de algunos tarahumaras.

Cabe destacar que en 1684, tiempo de epidemias, los conchos organizaron su último levantamiento como grupo étnico plenamente definido. Como de costumbre, derribaron las misiones, atacaron ranchos, destruyeron símbolos cristianos y asesinaron a diestra y siniestra. La misión de San Francisco de Conchos fue destruida, junto con la de Nombre de Dios. La respuesta española fue igualmente feroz, también como de costumbre.

Por otro lado, las noticias del levantamiento de 1680 llegaron hasta Madrid, donde se tomó la decisión de fundar varios establecimientos militares en las tierras septentrionales. Al norte de Parral se construyeron dos presidios: el de El Paso en 1683 y el de San Francisco de Conchos en 1685. En éste se nombró capitán vitalicio a Juan Fernández de Retana, de quien se hablará más adelante. Al año siguiente se autorizó la creación del presidio de Casas Grandes y en 1691 se fundó el de Janos. Estos presidios incluían por lo menos a dos decenas de soldados bien armados, con sus respectivas cabalgaduras y dotación de tierras y solares, y la construcción de fortines. La Corona española no tuvo más remedio que gastar fuertes sumas en la defensa de sus posesiones en la Nueva Vizcaya y en general en el septentrión novohispano. Ese dinero fue bien aprovechado por capitanes y otros militares para su propio beneficio. Con el tiempo se convertiría en importante estímulo de la economía local.

En 1690, en medio de una epidemia y sequía, comenzó un nuevo ciclo de levantamientos que no concluiría sino hasta 1698. Al parecer, indios conchos asaltaron en abril la misión jesuita de Yepómera y mataron a un misionero con fama de abusivo, el padre Foronda, y a dos españoles más. Los indios de la misión se

sumaron a los rebeldes y juntos robaron el ganado y se encaminaron a saquear la misión jesuita más alejada de Parral, Tutuaca. También destruyeron las misiones de Cajurichic, Tomóchic, Matachic y Cocomórichic. El gobernador de Nueva Vizcaya ordenó desde Parral que el general Juan Fernández de Retana encabezara la fuerza española destinada a aplastar a los rebeldes, con ayuda de auxiliares conchos y tarahumaras provenientes de las misiones de Huejotitán. El 19 de abril de 1690 los rebeldes atacaron a las fuerzas españolas situadas en Papigochic. El ataque fue feroz, pues los indios habían sido aleccionados por los cabecillas en el sentido de que los arcabuces europeos no dispararían y que en caso de muerte a causa de espada o lanza los rebeldes resucitarían tres días después. Este mismo argumento había sido utilizado por los chamanes tepehuanes en el levantamiento de 1616. El desenlace de la batalla favoreció a los españoles, quienes luego se empeñaron en perseguir a las bandas dispersas de rebeldes. Algunos prisioneros declararon que desde cuatro años antes se venía preparando el levantamiento y que el objetivo era exterminar a los misioneros y a todos los españoles. Los rebeldes también dieron a conocer que 11 naciones indígenas estaban de acuerdo con la rebelión, entre ellos los tarahumaras, conchos, apaches, tobosos, jovas y chizos. Durante años las tropas españolas, al mando de Retana, mantuvieron una constante cacería de cabecillas, chamanes y rebeldes.

Esta violencia tarahumara parecía explicarse también por un nuevo descubrimiento minero: el real de minas de Santa Rosa de Cusihiuriachic en 1687. Según la leyenda, una pareja de enamorados huyó y acampó en una serranía; encendió una hoguera para pasar la noche, y cuál no sería su sorpresa cuando al amanecer descubrieron plata fundida. El novio enfrentó la furia de su suegro con el mejor argumento: un prometedor descubrimiento de plata. El padre perdonó, los novios se casaron y fueron felices, y los españoles vieron incrementada la riqueza minera de esta porción de la Nueva Vizcaya. Ante la noticia, cientos de personas acudieron presurosas. Un año después, en 1688, el gobernador de Nueva Vizcaya autorizaba la creación de una nueva jurisdicción, una al-

caldía mayor que tendría a su cargo los asuntos de toda la Alta Tarahumara. Como en el caso de Parral, aunque ciertamente a menor escala, el nuevo mineral se convirtió en un importante punto de avanzada de la ocupación española en pleno territorio tarahumara. Los rancheros llegaron, despojaron de tierras a rancherías tarahumaras y, ante el pesar de los jesuitas, se incrementaron las ofensas de los pobladores civiles contra los indígenas. Los jesuitas no dejaban de lamentar este contacto entre españoles y tarahumaras. Estos religiosos tenían muy claro que el arribo de nuevos vecinos españoles no hacía más que exacerbar los ánimos. Por ser el asentamiento español más importante al norte de Parral y por estar ubicado en territorio tarahumara, Cusihuiiachic desempeñó un papel importante en la organización de la ofensiva contra los sucesivos levantamientos de este grupo indígena.

Entre 1695 y 1696 varios acontecimientos presagiaron nuevas dificultades: una epidemia que mató sólo a niños y a mujeres, un cometa, el desbordamiento del Río Papigochic, la supuesta aparición de un gigante y un terremoto en abril de 1696. En este año los misioneros comenzaron a notar que un gran número de indios abandonaba las misiones y se dirigía a las partes altas de la sierra cargando grandes cantidades de alimentos. Retana, el capitán del presidio de San Francisco de Conchos, llegó nuevamente al Papi-gochic en enero de 1697. Desde allí emprendió una campaña contra los rebeldes, logrando capturar a unos 90 flecheros, de los que ejecutó a más de 40 en marzo. Las cabezas de los rebeldes fueron cortadas y colocadas en palos para que sirvieran de escarmiento. Pero esta represión sólo encendió los ánimos, y en mayo los rebeldes destruyeron e incendiaron la misión de Tomóchic y más tarde la de Ariseáchic. Los jesuitas se vieron obligados a abandonar sus misiones y a refugiarse en Papigochic, bajo el amparo de las tropas presidiales al mando de Retana. Por ese abandono cayeron las misiones de Yepómera y Cocomórachic y más tarde las misiones franciscanas de Namiquipa y Bachíniva. También la de Sisoguichic fue destruida. El 24 de junio Retana logró derrotar a los rebeldes, de quienes mató a más de 60. De nuevo se repitió el escarmiento de cortar cabezas y fijarlas en palos, así como la des-

trucción de sembradíos. Debido a sus prácticas represivas, que incluían la tortura a los prisioneros, y sus continuas sentencias a muerte, Retana era temido por los tarahumaras. Las buenas relaciones de los jesuitas con Retana propiciaron que esos religiosos, autores de gran número de documentos sobre estas rebeliones, expresaran su beneplácito con la actuación del militar.

La campaña contra los tarahumaras se extendió el resto del año de 1697 y durante 1698, pero se vio complicada por los constantes ataques de los tobosos en el sur y por los levantamientos de pimas y guazapares, que obligaban a los españoles a dispersar sus fuerzas. A fines de 1698, la gran escasez de alimentos, producida en buena medida por la destrucción de los cultivos, debilitó finalmente la resistencia de los rebeldes. Al terminar el siglo xvii la paz parecía florecer en el territorio tarahumara, pero también era evidente que el esfuerzo de reconstrucción y recuperación de los españoles durante el periodo subsiguiente a la muerte de Teporame había sido borrado.

MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN INDÍGENA

El violento y conflictivo siglo xvii llegaba a su fin con grandes cambios sociales que conviene mencionar. Tres eran los más importantes: el primero era la extinción de los conchos; el segundo, el movimiento de los tarahumaras hacia las partes altas de la Sierra Madre, y el tercero, la llegada de los apaches, que comenzaron a ocupar el espacio dejado por conchos y tarahumaras. Esos cambios expresaban, a final de cuentas, la victoria europea sobre los diversos grupos indígenas que habitaban esta tierra desde siglos atrás.

La extinción de los conchos se sumaba a la de otros grupos que fueron exterminados o asimilados por la creciente presencia española, por medio de guerras, jornadas laborales extenuantes, epidemias y una lenta incorporación a la vida de haciendas, minas y poblados de españoles. Algunos se mezclaron, olvidaron su lengua y costumbres y tal vez sus hijos o nietos vivieron ignorando

su origen indígena. De la lengua de los conchos no sabemos prácticamente nada. La vida nómada de la mayoría de esos grupos dificultó en extremo su incorporación gradual y la conservación de sus rasgos étnicos. Más bien impuso la violencia como patrón primordial de relación. En eso se distinguían de los indígenas del centro del país, cuya vida sedentaria, agrícola, más organizada, permitió que establecieran formas de convivencia más pacífica con los europeos.

Por su parte, los tarahumaras, reconociendo la imposibilidad de vencer y expulsar a los españoles de su territorio, decidieron huir hacia el oeste, a las zonas más inaccesibles y escabrosas de la Sierra Madre, donde todavía viven. Esta decisión, sin embargo, expresaba la convicción de conservar una identidad propia frente a la civilización extranjera que veían expandirse. En esto se distinguieron de los tepehuanes, más propensos a la convivencia e integración con los españoles. A partir de 1700, una vez concluidas las rebeliones, los jesuitas, como se lee en el libro *Misiones jesuitas en la Tarahumara. Siglo XVIII*, de Ricardo León, dejaron de lado su obsesión por congregar a los tarahumaras en las misiones, dando con ello un giro notable a su política evangelizadora. El cambio jesuita rindió buenos resultados: sus misiones conocerían a partir de 1700 su periodo de máximo auge económico. Sin embargo, una parte considerable de los tarahumaras quedó al margen de la actividad evangelizadora de la Compañía de Jesús. Otra parte de ellos accedió a incorporarse a las misiones, a trabajar en sus tierras dirigidos por los jesuitas. Incluso, algunos tarahumaras optaron por ocupar algunas de las localidades abandonadas por los conchos. Dicho de otra manera, así como no es posible hablar de los españoles como un grupo homogéneo, tampoco se puede hablar de los tarahumaras como un grupo que reaccionó de la misma manera. Algunos fueron más dóciles, y otros mostraron rebeldía y renuencia a la integración con la sociedad que, lenta pero sostenidamente, edificaban los españoles junto con mestizos y mulatos.

Como se verá, algunos tarahumaras mantuvieron una actitud beligerante, y se juntaron y confundieron con grupos apaches y

hasta con bandidos no indios, lo que llenaría de espanto a los militares españoles.

Los apaches comenzaron a irrumpir en este espacio en gran medida por el avance de los hatos y cultivos hacia al norte y por el vacío que dejaban tanto conchos como tarahumaras. Originarios de las planicies del norte de Nuevo México, los apaches se dedicaban sobre todo a la caza y la recolección. Su práctica agrícola era escasa, aunque al parecer el contacto con los españoles de Nuevo México había propiciado una creciente vocación agrícola. Por ese contacto conocieron el caballo, un animal que muy pronto se convirtió en elemento tecnológico de primera importancia en su organización social y militar. El caballo potenció su capacidad de movimiento. No habría quien negara la habilidad apache para el manejo del caballo. Este grupo, compuesto por diversas tribus dirigidas por otros tantos cabecillas, encontró en las explotaciones españolas una de sus fuentes primordiales de subsistencia. ¿Para qué buscar bisontes por aquí y por allá si los españoles criaban vacas y caballos? De esta convivencia, marcada por el enfrentamiento de dos formas de organizar la vida social y la riqueza económica, surgió un conflicto que no culminaría sino hasta fines del siglo xix.

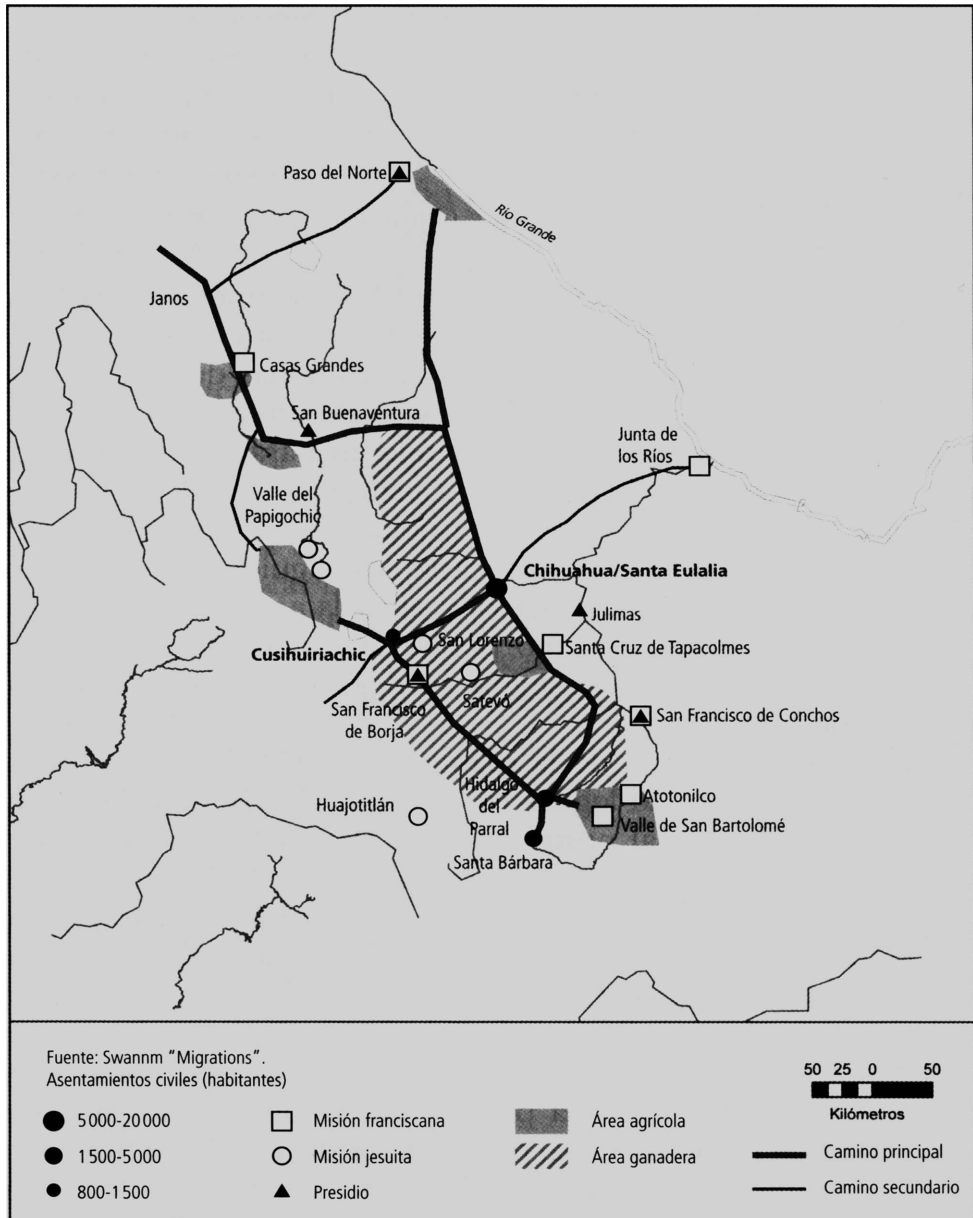
V. EL SIGLO XVIII, DE CHIHUAHUA A SANTA EULALIA (1710-1790)

DE CÓMO NACE CHIHUAHUA

EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVIII comenzó una febril historia de poblamiento en la porción norteña de la Nueva Vizcaya, a causa del descubrimiento de las minas de Santa Eulalia y la formación casi simultánea de la villa de Chihuahua. Ésta sería la última gran experiencia de poblamiento basada en la minería, tal y como sucedió en Parral y en Cusihuiachic en el siglo xvii. En adelante, los movimientos de población obedecerían a otras razones, como veremos en los capítulos siguientes. Del mismo modo, con la fundación de esta villa, situada a una altitud de 1 412 msnm, se inicia el movimiento poblacional hacia la porción más baja y árida de los valles, según se dejó anotado en el primer apartado de este trabajo.

Desde 1646 se sabía de la existencia de vetas de plata en un lugar situado a unas 20 leguas (o 100 km) al noreste de Cusihuiachic y a 30 leguas al norte de Santa Bárbara. Incluso, algunos españoles habían visitado y denunciado esos depósitos. Por lo menos hubo dos intentos de poblar con españoles esa zona, pero ambos fracasaron a causa de la hostilidad de los indios. Sin embargo, a fines del siglo xvii ya se habían establecido varias labores y estancias, entre ellas las de Tabalaopa, Dolores, Sacramento, El Sauz y Encinillas. A juicio de Salvador Álvarez, como ya se dijo, esta ocupación agrícola previa, que resolvía también la disponibilidad de mano de obra, fue el factor decisivo que hizo posible el auge minero de Santa Eulalia, y no al revés; es decir, que primero se descubrieron las minas y luego se desarrollaron la agricultura y la ganadería. Lejos de eso, como lo muestra bien el hecho de que primero se formó y expandió el Valle de San Barto-

MAPA V.1. *Configuración regional de Chihuahua/Santa Eulalia (1740)*

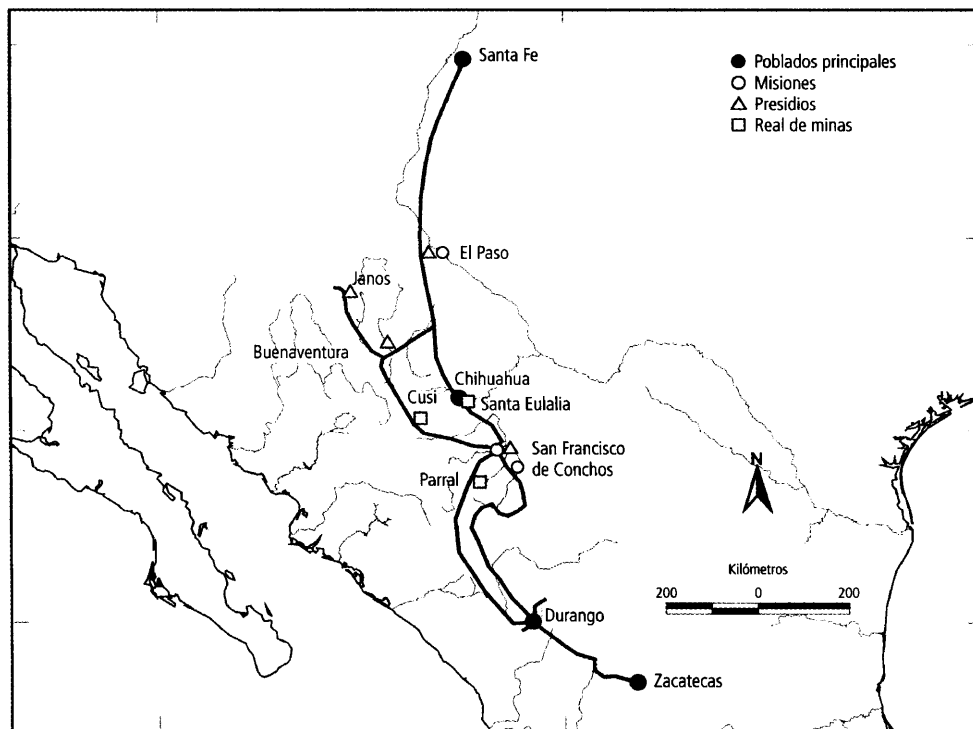


FUENTE: Chantal Chamaussel, *Poblar la frontera: la provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los siglos XVI y XVII*, El Colegio de Michoacán, 2006.

lomé y más tarde el mineral de Parral, sin alimentos y mano de obra la minería simplemente no era posible.

Algunos habían empezado a trabajar minas cercanas desde 1704, pero todavía en febrero de 1707 esta zona no tenía gran fama minera. En ese mes y año tuvo lugar el denuncia de la primera mina de Santa Eulalia, que de inmediato comenzó a explotarse. Durante el resto de 1707 y los primeros meses de 1708 hubo más denuncias que atrajeron a más pobladores. Mineros poderosos y no tan poderosos de Parral y Cusihiuriachic no tardaron en aparecerse por Santa Eulalia, donde levantaron sus instalaciones mineras y sus casuchas; por supuesto que también llegaron trabajadores, operarios y vagos que se acomodaron en las laderas del angosto cañón. El gobernador de Nueva Vizcaya consideró oportuno nombrar una autoridad en el nuevo mineral. El elegido fue el capitán del presidio de San Francisco de Conchos, Juan Fernández de Retana, quien fungiría como primer alcalde mayor de Santa Eulalia.

Pero casi de inmediato surgió un conflicto. Algunos de los pobladores del nuevo mineral consideraban necesario fundar la cabecera en otro lugar que contara con mejores condiciones, principalmente con mayor cantidad de agua tanto para los usos domésticos como para el beneficio de metales. Retana accedió a que el asentamiento se estableciera en la junta de los ríos Sacramento y Chuvíscar, un lugar situado a unas cuatro leguas al oeste de las minas recién descubiertas. Sin embargo, la muerte de este militar, ocurrida en febrero de 1708, complicó el trámite. El mismísimo gobernador de Nueva Vizcaya, Antonio Deza y Ulloa, se apersonó durante 1709 en el nuevo mineral y se dio cuenta de la evidente división de opiniones que existía entre los vecinos sobre dónde ubicar la cabecera y el nuevo poblado. Unos preferían el mismo mineral, otros la junta de los ríos. Deza y Ulloa convocó a los mineros, militares y vecinos principales para resolver la disputa. De la reunión resultó un empate, por lo que el gobernador decidió inspeccionar ambos lugares. Luego de esa inspección, el 12 de octubre de 1709 expidió un decreto en el que, por un lado, situaba la cabecera de la alcaldía mayor en la Junta de los Ríos y, por otro,

MAPA V.2. *Rutas principales de la Nueva Vizcaya (1740)*

FUENTE: Michel M. Swann, *Tierra Adentro: Settlement and Society in Colonial Durango*, Boulder, Westview Press, 1982, mapa 2.6.

prohibía a los mineros de Santa Eulalia erigir construcciones sólidas en ese lugar, salvo una iglesia “cómoda”. De esa manera nació lo que en principio se llamó San Francisco de Cuéllar y más tarde San Felipe el Real de Chihuahua. Para tomar esta decisión, el gobernador tuvo muy presentes las reales ordenanzas de 1573, que indicaban que las fundaciones de nuevos asentamientos debían hacerse junto a los ríos.

Según Guillermo Porras Muñoz, en las discusiones en torno al lugar donde debía establecerse la cabecera administrativa se tomó muy en cuenta también el hecho de que un asentamiento ubicado en la junta de los ríos tenía mejores posibilidades para enfrentar los ataques de los indios enemigos. Si bien en ese tiempo los indios estaban en paz, no se olvidaban las terribles experiencias del conflictivo siglo XVII.

Sobre el surgimiento de la villa de Chihuahua deben hacerse por lo menos tres consideraciones. La primera es que con la decisión de separar los asentamientos, por un lado la cabecera y por otro el mineral, en realidad surgieron dos asentamientos. Pero Santa Eulalia siempre sería un núcleo dependiente de Chihuahua, a pesar de hallarse junto a riquísimas vetas. Por esa razón hay que hablar siempre de Chihuahua-Santa Eulalia, por lo menos durante el siglo XVIII. La segunda es que estos dos nuevos núcleos de población surgieron lejos de la columna principal de la expansión española, es decir, el corredor constituido por el distrito minero de Parral al sur y la misión de Casas Grandes y el presidio de Janos al norte. Como ya se dijo, la historia subsiguiente puede resumirse en cómo el eje espacial de este territorio se “movió” hacia abajo, hacia las tierras más bajas y cálidas del oriente, es decir, hacia la villa de Chihuahua. La tercera consideración tiene que ver precisamente con el término “Chihuahua”. Con la fundación de estas dos localidades comenzó en sentido estricto la historia de Chihuahua, porque de no haber existido Chihuahua, o de haber sido Santa Eulalia un mineral pequeño y precario como tantos otros, la historia de esta tierra muy bien pudo seguir siendo la historia de Parral, el asentamiento español de mayor importancia hasta entonces. En unas cuantas décadas, el asentamiento formado en torno a Chihuahua-Santa Eulalia ganaría peso e influencia como ninguna otra localidad, y por ello en el siglo XIX nadie le disputaría el derecho de fungir como capital de una jurisdicción que, de paso, también llevaría su nombre.

El fenómeno demográfico típico de los descubrimientos mineros se reprodujo en la villa de Chihuahua, si bien no con la velocidad asombrosa de Parral. En 1709 había apenas 40 vecinos en los dos asentamientos; en 1716 los vecinos ya eran 289, con unos 1450 habitantes. En 1725 se contaban 214 vecinos en Santa Eulalia y casi 300 en Chihuahua, es decir, unos 2500 habitantes en cada sitio. De Parral, Cusihuiachi, el Valle de San Bartolomé y Durango llegaron ricos y pobres, mineros y trabajadores, religiosos, vagos y artesanos. Poco a poco se fue formando el nuevo asentamiento. En 1715, Juan Antonio Trasviña y Retes, uno de los que se

enriquecieron con las minas de Santa Eulalia, donó 18000 pesos para construir la primera iglesia en Chihuahua, dedicada a Nuestra Señora de Regla y a San Francisco. En 1717 se nombró santo patrón de Chihuahua a San Francisco, con lo cual la fecha de su celebración, el 4 de octubre, tendría una importancia duradera; todavía en nuestros días el gobernador del estado toma posesión en ese día. Hacia 1720, tanto jesuitas como franciscanos, gracias a valiosas donaciones y apoyos de particulares, comenzaron a edificar sus instalaciones en la villa de Chihuahua. Los jesuitas construyeron el Colegio de Nuestra Señora de Loreto, justamente donde ahora está el palacio de gobierno. Allí se dieron las primeras clases formales. Las casas, casuchas, haciendas de beneficio de metales y algunas labores empezaron a configurar el nuevo escenario en las márgenes del Río Chuvíscar.

El rápido crecimiento de la nueva localidad exigió la creación de nuevas jurisdicciones. Así, por medio de un decreto, el virrey autorizó en 1718 la elevación de San Francisco de Cuéllar a la categoría de villa y la creación de un corregimiento, una unidad administrativa encabezada por un corregidor designado por el virrey. Este mandato desató un conflicto entre el virrey y el gobernador de Nueva Vizcaya, quien alegaba que el decreto vulneraba su autoridad. Finalmente, en 1723 un decreto del gobernador de Nueva Vizcaya ratificó la creación del corregimiento, aunque subordinado a su autoridad. Por si hiciera falta, una columna de soldados dio a conocer en la villa de Chihuahua la decisión del gobernador.

Estos ajustes jurisdiccionales implicaban, además de un nuevo nombre a la localidad (San Felipe Real de Chihuahua), contar con una autoridad de mayor rango y, algo muy importante, con ayuntamiento. Chihuahua tuvo desde entonces un corregidor que gobernaba junto con el cabildo, cuyos miembros eran vecinos importantes, mineros y comerciantes. Por su parte, Santa Eulalia contaría con un teniente subordinado a las autoridades de Chihuahua. Eso significaba que Santa Eulalia viviría sin ayuntamiento. La villa de Chihuahua se convirtió en el lugar de recreo de los trabajadores mineros de Santa Eulalia, a donde acudían los fines de

semana, y en especial en la primera semana de octubre, cuando se celebraba con bombo y platillo, con corridas de toros y peleas de gallos, la festividad de San Francisco.

Asimismo, en 1718 se autorizó la creación de la parroquia de Chihuahua, con un territorio que antes pertenecía a la parroquia de Cusihuiachic. Sin duda alguna, estas modificaciones en las jurisdicciones civiles y religiosas expresaban con claridad el poderío de la dinámica social desatada en torno a la explotación de las vetas de plata de Santa Eulalia. Una mayor densidad de población exigía nuevas autoridades con mando en circunscripciones territoriales más precisas.

Cabe destacar que tanto la alcaldía mayor y el corregimiento como la parroquia de Chihuahua se hicieron a costa de atribuciones jurisdiccionales de Cusihuiachic, que de ese modo comenzaba su larga historia de decadencia. De la misma manera, esa decadencia entrañaba el fortalecimiento paulatino de Chihuahua como cabecera del vasto espacio ubicado en la porción norteña de la Nueva Vizcaya.

La nueva localidad comenzó a ser paso obligado de las caravanas y arrieros provenientes de Durango, Santa Fe y Paso del Norte. Con el tiempo los comerciantes españoles asentados allí, en su mayoría de origen vasco, establecieron un fuerte control sobre ese tráfico, apoyados en la enorme riqueza extraída de las vetas de Santa Eulalia. El número de comerciantes aumentó al ritmo de la población: en 1709 siete vecinos se declararon comerciantes, mientras que en 1716 eran ya 16 y en 1719 la cifra llegaba a 44 tenderos en Santa Eulalia y en Chihuahua. En 1724 se reconocía que estos comerciantes no sólo compraban mercancías para la población local, sino que se habían convertido en grandes intermediarios que revendían productos en varias localidades cercanas y también en El Paso y Santa Fe. Desde entonces, y durante un siglo, ellos controlaron el comercio con Nuevo México. La categoría de centro comercial de la villa de Chihuahua era reconocida en la década de 1740, como se aprecia en el siguiente párrafo del *Theatro Americano*, escrito por José Antonio Villaseñor:

Es población grande, y bien dispuesta en la simetría de sus edificios, y su principal comercio es el de las platas por la opulencia de sus minas, haciéndola populosa los muchos traficantes que entran en ella, así al rescate de las platas como al expendio de géneros de mercadería de este Reyno y de la Europa.

Este desarrollo comercial obedecía también al hecho de que la creciente población —estimada en unas 17 000 almas en 1742— exigía productos que tenían que llevarse desde lugares más o menos lejanos, porque Chihuahua creció sin una zona agrícola cercana, como lo fue el Valle de San Bartolomé para Santa Bárbara y Parral. Por ello los comerciantes se vieron obligados desde el principio a crear redes de intercambio con diversas zonas productoras, entre ellas las misiones tarahumaras del Papigochic, las misiones franciscanas del rumbo de Casas Grandes y de Santa Isabel, la zona agrícola de Julimes y San Francisco de Conchos y la ya para entonces antigua zona agrícola del Valle de San Bartolomé. Se conocen detalles de un conflicto entre Parral y Chihuahua en 1724 en torno a la venta de granos de este valle. Las cosechas de ese año no habían sido del todo buenas, razón por la que el gobernador de Nueva Vizcaya, que seguía viviendo en Parral, prohibió el envío de granos a Chihuahua y Cusihuiiachic. Los comerciantes de Chihuahua alegaron alzas exorbitantes en los precios y escasez de alimentos y pidieron al cabildo que intercediera ante el gobernador. Como medida excepcional, el gobernador autorizó en enero de 1725 el envío de 2 500 quintales de harina y 360 fanegas de maíz a la hambrienta villa de Chihuahua. Esta crisis del abasto local llevó a las autoridades de la villa a crear la alhóndiga en 1732, previa autorización del gobernador de la Nueva Vizcaya y de la Audiencia de Guadalajara. Dicha alhóndiga tenía el objetivo de asegurar y controlar el abasto de alimentos a la población. Todos los productos destinados al consumo de la villa debían pasar primero por la alhóndiga, donde se registraban y se cobraba el impuesto correspondiente.

Pero vale destacar que por medio del intercambio comercial la villa de Chihuahua comenzó a integrar diversas áreas que ha-

bían sido ocupadas por los españoles en distintos momentos. Y qué duda cabe de que esa integración comercial fue el eje de la integración de espacios que más tarde conformarían al estado de Chihuahua.

La ocupación española de estas vastas llanuras semiáridas conoció una nueva expansión con el descubrimiento de las vetas de Santa Eulalia y la fundación de la villa de Chihuahua. Una vez más, el surgimiento de un asentamiento estable de proporciones considerables facilitó las exploraciones y ocupaciones españolas en áreas hasta entonces no reconocidas efectivamente como dominio español. El auge minero propició la ampliación de la frontera agrícola en lugares como las riberas del Río San Pedro, donde pronto se fundaron haciendas y ranchos cuyas tierras de cultivo se sumaron a las áreas sembradas desde antes por los indios de las misiones franciscanas. Así ocurrió en las cercanías de Santa Cruz de Tapacolmes y aguas abajo, donde surgió San Pablo (el actual Meoqui). En 1715 los franciscanos crearon la misión de la Junta de los Ríos (ahora Ojinaga), así como pequeños asentamientos a lo largo de la ruta entre la villa de Chihuahua y esa misión. El sargento Trasviña y Retes ofreció a los jesuitas heredar una parte de su fortuna (30 000 pesos) para apoyar el colegio de esos misioneros. Luego de un largo litigio entre los jesuitas y los herederos de Trasviña, la Compañía de Jesús pudo hacer efectiva esa donación, que sirvió para formar la enorme hacienda de San Marcos, que comprendía una superficie de unos 58 sitios de ganado mayor (poco más de 100 000 ha), ubicados entre el Río San Pedro y la margen derecha del Conchos. Al norte de Chihuahua no tardó en consolidarse el latifundio de Encinillas y El Sauz, formado con dinero proveniente de las actividades mineras de Manuel San Juan y Santa Cruz en Santa Eulalia. En sus momentos de esplendor, Encinillas llegó a contar con 70 000 cabezas de ganado mayor. Sin duda alguna, el siglo XVIII contiene la historia de los primeros pasos de la consolidación de la gran propiedad agraria.

Aunque el movimiento demográfico y económico surgido en torno a Chihuahua y Santa Eulalia favoreció la apertura de nuevas áreas de cultivo tanto en el camino a Casas Grandes (Buenaventu-

ra) como en el que llevaba a la Junta de los Ríos, también creó dificultades en otras localidades. En 1737 el padre Arlegui sostenía que Parral estaba muy decaído por el auge de Chihuahua, ya que mucha población había emigrado al nuevo real de minas. Años antes el gobernador de Nueva Vizcaya había ordenado la repoblación de varios pequeños centros mineros. Por esa migración el rendimiento de las minas de Parral conoció un declive desde 1720 hasta 1760.

Sin embargo, los dueños de minas tenían grandes dificultades para conseguir trabajadores. En marzo de 1730 estalló un paro de labores en varias minas de Santa Eulalia; unos 300 trabajadores protestaban por la cancelación de la “pepena” o “partido”, que era aquella parte de mineral que los trabajadores podían conservar para sí después de concluir su cuota de trabajo. Esta especie de prestación, por lo visto muy gravosa para los dueños, fue quedando atrás y en su lugar se impuso el endeudamiento. Si un propietario deseaba obtener trabajadores, se veía obligado a adelantarles dinero o artículos de consumo cuyo monto podía llegar a superar hasta 14 veces el salario mensual del trabajador (unos nueve pesos). El problema era que los trabajadores huían sin pagar la deuda, como lo muestran los inventarios de los propietarios mineros.

A mediados del siglo xviii varios asentamientos destacaban por el tamaño de su población: Chihuahua y Santa Eulalia con unos 20 000 habitantes, San José del Parral con cerca de 5 000 (la mitad de los que tenía 100 años atrás), Santa Fe con 2 000, Santa Bárbara con 1 500 y Cusihuiriachic con 800. Estos centros de población estaban unidos por caminos muy transitados por hombres y mujeres, jinetes, carretas jaladas por bueyes y más tarde por recuas de mulas que llevaban mercancías de distinta especie. Las recuas, formadas por varias decenas de mulas, podían avanzar entre 20 y 24 km al día. El camino de Tierra Adentro, la ruta abierta por Oñate en 1598, se consolidó gracias a los intercambios comerciales con Parral, Durango y Zacatecas hacia el sur y con Paso del Norte y Santa Fe hacia el norte. Además, dos rutas hacia el oeste comunicaban a la villa de Chihuahua con las misiones

jesuitas del fértil Valle del Papigochic y el resto de la Tarahumara, así como con Sonora a través de Buenaventura, Casas Grandes, Janos y el Paso del Pulpito. Esos caminos tocaban diversas labores agrícolas, estancias de ganado, misiones franciscanas y jesuitas, puestos de descanso, presidios, reales de minas y pequeños centros mineros. Este escenario era producto de un poblamiento gradual en el que convivían españoles, criollos, mestizos, mulattos, negros e indios de diverso origen. Difícilmente podía hablarse de una distinción entre lo urbano y lo rural, pues, por ejemplo, en las mismas localidades podían hallarse explotaciones agrícolas y hasta ganaderas. Sin embargo, la separación entre uno y otro ámbito de la vida social comenzaba a manifestarse. Los vecinos ricos de Chihuahua mostraban un vivo interés por imponer a su villa como el asentamiento de mayor jerarquía e importancia en la comarca. No en balde desde 1727 habían decidido construir un enorme edificio para la parroquia, un edificio sin igual a lo largo y ancho de la provincia. Los mineros de Santa Eulalia accedieron a donar un real por cada marco de plata. Con ese impuesto pudo construirse, a lo largo del siglo XVIII, el edificio parroquial que en 1891 se convertiría en catedral. Por este tipo de construcciones, que sólo podían hacerse con base en la riqueza local, la ciudad de Chihuahua pronto ganó gran preponderancia sobre la porción norteña de la Nueva Vizcaya.

NUEVOS INDIOS, NUEVAS DIFICULTADES (1750-1790)

El siglo XVII fue la etapa de las sublevaciones de los diversos grupos indígenas que desde antes de la llegada de los españoles habitaban ese espacio. En cambio, el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, fue el tiempo de los ataques e incursiones de unos recién llegados, los grupos nómadas, los apaches.

Conforme avanzó el siglo XVIII, las autoridades españolas mostraron un creciente interés por la situación de las provincias septentrionales del virreinato de la Nueva España. Era evidente que la ocupación de esas provincias era una empresa sumamente com-

plicada, especialmente por las grandes distancias que había entre ellas y el centro del virreinato y por la belicosidad tan manifiesta de los pobladores indígenas.

A raíz del enorme levantamiento de 1680, como se vio, la Corona comenzó a establecer varios presidios a lo largo de esas provincias, desde Sonora hasta Texas. En 1730 en el norte de la Nueva Vizcaya funcionaban cinco presidios: Paso del Norte, Casas Grandes, San Francisco de Conchos, Valle de San Bartolomé y Janos. En la porción sureña estaban los de Cerro Gordo, Gallo, Pasaje, Santa Catalina Tepehuanes, Cuencamé y Mapimí. El costo de esos presidios, sufragado con fondos de las cajas reales de Zacatecas, Guadalajara, Sombrerete y Guanajuato, era enorme y crecía año con año. Si en 1701 la Corona erogaba cerca de 226 000 al año para sostener los presidios a lo largo del septentrión, en 1725 el costo se había elevado a casi 445 000. La presencia de expedicionarios franceses en Texas, confirmada en 1689, había alarmado aún más a la Corona española. Las sublevaciones de tarahumaras y conchos habían quedado atrás, pero apaches y europeos extranjeros comenzaban a amenazar las provincias septentrionales, cuya riqueza minera no era desconocida para franceses e ingleses.

Al igual que las misiones, los presidios se convirtieron en un eslabón importante de la ocupación española. Ello fue así no sólo por su función de resguardar caminos y de perseguir a bandas de indios rebeldes. Los presidios eran verdaderos centros de poblamiento, pues además de las familias de los soldados algunos vecinos optaron por vivir en las inmediaciones en razón de la seguridad que ofrecía el contingente militar. En algunos casos los núcleos de habitantes civiles cobraron tal solidez y estabilidad, que la desaparición del presidio —decidida en las altas esferas gubernamentales de España o de la Ciudad de México— no significaba la desaparición de dichos asentamientos civiles. Así ocurrió, por ejemplo, con el presidio de San Francisco de Conchos, suprimido en 1751.

En 1724 el rey autorizó el viaje del brigadier Pedro de Rivera para que inspeccionara el estado de los presidios y en general la

situación de esas provincias. El objetivo era buscar modos de disminuir gastos y a la vez mejorar la capacidad militar de esos establecimientos.

Los presidios contaban en estos años con un capitán y un destacamento que variaba entre 25 y 100 soldados. Cada soldado, que ganaba un sueldo de 450 pesos al año, tenía diez caballos, lo que obligaba a contar con un hato de tamaño considerable que exigía pastura, corrales y agua, así como un dispositivo permanente de vigilancia. Rivera confirmó que los capitanes de los presidios cometían grandes abusos. En ocasiones fungían como intermediarios comerciales que revendían las mercancías a altos precios a sus soldados; también era muy común que utilizaran a sus subordinados como peones de campo o pastores.

Rivera también criticó el descuido y mal estado de las fuerzas presidiales. Difícilmente podía esperarse una reacción rápida y expedita de estos efectivos militares. Por otra parte, Rivera expresó su desacuerdo con el número y la localización de los presidios; por ello propuso suprimir algunos y cambiar de sitio otros. De igual modo, recomendó la separación de Sonora de la Nueva Vizcaya y que fuera una provincia independiente, cosa que se decretó en 1733.

La visita del brigadier Rivera tuvo lugar en una época de relativa paz en las provincias septentrionales. Había noticias de ataques esporádicos y de ocasionales levantamientos graves, como el de los seris en Sonora en 1725. Pero en la Nueva Vizcaya los años que van de 1700 a 1750 fueron en general de tranquilidad y de convivencia más o menos pacífica con los indios. En este periodo los españoles lograron sofocar las últimas partidas de tobosos y conchos, que prácticamente dejaron de existir. El Bolsón de Mapimí, ese "desierto" tan temido por los españoles en el siglo anterior, ya no entrañaba peligro. Por esa situación de paz las recomendaciones de Rivera fueron adoptadas en el reglamento de presidios de 1729, emitido por el virrey, el marqués de Casafuerte. En este reglamento se obligaba a las fuerzas presidiales a escoltar a los viajeros y recuas y a realizar recorridos de inspección por diversas zonas. A la tropa de San Francisco de Conchos, por ejemplo, se le

encomendó la tarea de realizar una inspección anual por la Sierra Tarahumara. En el mismo sentido, el gobernador de Nueva Vizcaya vio reducido su fondo de guerra en dos terceras partes: de 6000 a 2000 pesos anuales. Los tiempos de paz parecen explicar el carácter de estas medidas.

Después de 1748 el panorama se transformó de manera radical, en particular en la Nueva Vizcaya. Expulsados de las praderas de Nuevo México por los comanches, los diversos grupos apaches comenzaron a emigrar hacia el sur, en un movimiento que algunos sitúan a principios del siglo XVIII. Es importante hacer notar que los apaches llevaban varios siglos de relación más o menos pacífica con grupos sedentarios, como los indios pueblo, y luego con los mismos españoles, con quienes realizaban distintos intercambios. Pero al emigrar hacia el sur parecen haber recuperado su antigua tradición y organización nómada. Pero más que eso, al verse despojados de las zonas de caza de bisontes, encontraron en el ganado de los españoles un sustituto estratégico para su reproducción social. En 1748, el informe del capitán del presidio de San Francisco de Conchos, José de Berroterán, ya mencionaba la existencia de nuevos pobladores en el Bolsón de Mapimí: unos 400 apaches.

Berroterán no dejaba de criticar las medidas restrictivas derivadas de la visita de Rivera. Sara Ortelli sostiene que el propósito del informe de 1748 no era tanto combatir a los apaches sino a aquellas autoridades que pretendían reducir los gastos de guerra. Sólo así puede entenderse que a la vez que alarmaba a la Corona sobre las amenazas que se cernían sobre la Nueva Vizcaya, Berroterán mantuviera una cercana relación comercial, militar y hasta de compadrazgo con don Pascual, uno de los jefes de los 400 apaches del bolsón. A este capitán, que tanto había lucrado con los subsidios destinados a los presidios, le convenía insistir en el estado de guerra. Otros lo acompañarían en esa postura.

En 1751 se acrecentaron las noticias sobre los ataques de los apaches a la red de asentamientos y rutas de españoles del norte de la Nueva Vizcaya. Estos ataques coincidían con cambios en los presidios: se suprimían los de San Francisco de Conchos, Casas

Grandes, Valle de San Bartolomé, y se fundaban los de la Junta de los Ríos y Guajoquilla (hoy Jiménez); permanecían los de Janos y Paso del Norte. En 1758 se formó el presidio del Carrizal, después de que un pequeño grupo de pobladores originarios de Nuevo México se había asentado en ese lugar. Gilas, sumas, natajes, cholomes, venados y otros grupos apaches cometieron grandes robos de ganado en las haciendas cercanas a la villa de Chihuahua entre 1751 y 1753; tan graves fueron estos ataques, que el obispado de Durango vio reducido a la mitad el producto de los diezmos, o sea, la parte que recibía de la producción agrícola-ganadera.

Al tiempo que nacía esta nueva ola de violencia, tuvieron lugar varios descubrimientos mineros importantes en la zona serrana, es decir, lejos de la guerra. Esos minerales, como había ocurrido antes, se convirtieron en focos de atracción para algunos pobladores y con el tiempo se transformaron en asentamientos permanentes. Entre esos descubrimientos cabe destacar los de San Juan Nepomuceno (1745), de Maguarichic (1749) y de Topago (1750), en Chínipas. Por otra parte, el crecimiento de la villa de Chihuahua, que por lo visto no se detenía a pesar de las crecientes noticias bélicas, exigía nuevas obras; así, en 1751 empezó la construcción del acueducto que abastecería de agua a la localidad hasta bien entrado el siglo xix. En ocasión de la jura del patronato de la Virgen de Guadalupe en diciembre de 1758, las autoridades de la villa organizaron una festividad de tres días de duración. La procesión del día 11 contó con la participación de los gremios de carpinteros, albañiles, canteros, herreros, zapateros, silleros, cerrajeros, zacateros, obrajeros, burreros, aguadores y veleros. Esta diversidad de oficios muestra la complejidad social que había alcanzado este núcleo de población, sin duda alguna el más importante del norte de la Nueva Vizcaya.

Pero años después, en 1761, el obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral, escribía a Madrid para dar alarmantes noticias sobre la situación de su jurisdicción. Tan graves eran los ataques y robos de los apaches, que solicitaba la creación de dos presidios más y el envío de tres o cuatro mil hombres. También pedía una expedición con fuerzas de Nueva Vizcaya, Sonora y Sinaloa, apun-

talada con fuerzas organizadas por los hacendados, para batir a los nómadas. Esta última solicitud no era extraña. Desde la década anterior las autoridades habían ordenado a los propietarios que prepararan a sus peones para el combate contra los apaches, so pena de multarlos con 200 pesos. De la misma manera, los habitantes de los pueblos y villas de españoles debían organizar milicias para ese efecto. Como se verá, estas medidas, que buscaban involucrar a los pobladores en la guerra contra los indios, serían una constante en la historia local en las décadas siguientes.

El obispo Tamarón sabía lo que decía. Desde 1759 había iniciado una larga visita por su obispado que lo llevó a recorrer más de 11 000 km. De esa visita obtuvo la información con la que elaboró su obra titulada *Demostración del vastísimo obispado de la Nueva Vizcaya*, que ahora es una fuente de información para conocer el estado de la provincia en esos años. Tamarón relata el abandono de haciendas y ranchos, la reducción de los hatos, la muerte de vecinos y arrieros, la inseguridad de los caminos y la notable incapacidad de las fuerzas presidiales para enfrentar la amenaza de los apaches. Por esa razón solicitaba a las autoridades un fuerte aumento en el número de efectivos, cosa que por lo demás había ocurrido desde 1727, a pesar de las recomendaciones del brigadier Rivera. Tamarón describía la difícil situación creada por la débil defensa española en Guajoquilla, así como por los ataques de los enemigos en el camino entre San Francisco de Conchos y Chihuahua. Otra zona que era atacada por los apaches era la cercana a Cusihuiachic, donde la hacienda La Laguna había sido “desamparada” por su propietario. Igual ocurría en la hacienda El Carmen, junto a San Buenaventura, donde vivían 26 familias de sirvientes; en 1763 esta hacienda estaba a punto de ser abandonada a causa de que los “enemigos entran y salen cuando quieren, se llevan lo que encuentran y también matan gente”. San Buenaventura sólo resistía a los apaches por los 15 soldados que vivían allí, pertenecientes al presidio de Guajoquilla. El presidio de Janos se hallaba en plena zona de guerra; en su relación, el obispo Tamarón decía que “toda aquella tierra está inundada de indios enemigos, se han despoblado haciendas y pueblos porque éstos los

arruinaron, a cada paso se encuentran señales de muertes que hicieron”.

También eran muchos los estragos en las cercanías de la villa de Chihuahua. Al comentar las dificultades para llevar leña —que costaba cuatro reales la carga— para las fundiciones de metal, el obispo comentaba que los leñadores se arriesgaban mucho, dada la abundancia de enemigos y el largo trayecto que tenían que recorrer para obtener la leña, lo que de paso nos da idea de la sobreexplotación de los bosques cercanos a raíz de la explotación minera de Santa Eulalia. Tamarón concluía: “Y arruinada que sea la villa de Chihuahua, toda la Vizcaya corre gran riesgo, el Nuevo México no hallará recursos, pues allí es el único que tienen y caerán de todo, o la gente de razón tendrá que abandonarlo”. Sin embargo, este dramático diagnóstico, que era reproducido por diversos personajes de la provincia, nunca se hizo realidad. Parecía que su función era preservar un estado de guerra, una “guerra conveniente” para aquellos interesados en que la Corona continuara gastando en la defensa, como sugiere Ortelli.

Los ataques se intensificaron en las décadas de 1760 y 1770. En 1771 se decía que desde 1748 habían muerto 4000 personas y que los daños ocasionados por los apaches ascendían a 12 millones de pesos. En 1777 se informaba que en la parte norte de Nueva Vizcaya habían perecido 991 personas en estos ataques, 154 fueron capturados, 74 era la cifra de haciendas abandonadas y 33000 la de reses robadas.

Nicolás Lafora, un asistente del comandante Hugo O'Connor, y el cura José Agustín de Morfi, asistente a su vez del caballero Teodoro de Croix, repitieron en gran medida las descripciones del obispo Tamarón. La provincia podía desaparecer si no se controlaba y reprimía la amenaza apache. En 1778 el padre Morfi narraba cómo los apaches robaban ganado incluso en las goteras de la villa de Chihuahua; generalmente las persecuciones eran inútiles. El 13 de mayo de 1778 Morfi escribió en su diario que 60 hombres no pudieron dar alcance a tres indios que habían robado seis caballos en El Sauz. A diferencia de las anotaciones del brigadier Rivera en 1727, Lafora y Morfi se expresaban de los apaches en tér-

minos severos, como un enemigo irreconciliable, como “salvajes” que debían ser exterminados para asegurar la posesión española.

Esta versión catastrofista sobre la inminente desaparición de Chihuahua y de la Nueva Vizcaya entera se repetiría una y otra vez sin que tan fatal desenlace llegara a ocurrir. En Madrid y en la Ciudad de México no sabían a quién hacerle caso. Así como recibían noticias tan alarmantes como las del obispo Tamarón o de los comerciantes y mineros de Chihuahua, igualmente recibían informes que las tachaban de exageraciones interesadas que sólo buscaban mantener el estado de guerra para justificar el crecido gasto militar.

Lo cierto es que en 1772 y 1773 esos ataques empezaron a ser vistos de distinta manera. Por el peso de las evidencias, las autoridades locales tuvieron que aceptar que los causantes de los daños no sólo eran apaches sino también tarahumaras, tepehuanes, mestizos, mulatos y hasta españoles. Como dijo el gobernador de la Nueva Vizcaya en 1773, de nada serviría acabar con los apaches “quedándonos el ladrón dentro de casa”. Como muestra Ortelli, esos infidentes a veces se disfrazaban de apaches, golpeaban y desaparecían confundidos entre la población común y corriente. Era de tal magnitud el problema que en noviembre de 1784 había 900 presos en la cárcel de Chihuahua, incluyendo mujeres y niños. Pueblos enteros participaban en estas actividades ilícitas, lo mismo que prominentes personajes de la mismísima villa de Chihuahua. A la luz de estos hallazgos, nuestra vieja idea de que la guerra se reducía al enfrentamiento entre apaches y españoles, entre nómadas y sedentarios, tiene que revisarse con todo rigor.

AMENAZA EXTERNA Y LA RESPUESTA DE LOS BORBONES

Además de la amenaza de los nómadas y de la población sedentaria dedicada a actividades ilícitas, los novohispanos tuvieron que enfrentar en la segunda mitad del siglo XVIII una amenaza exterior: la expansión europea desde el norte. Franceses, rusos e ingleses avanzaban sostenidamente desde sus posesiones en Norteamérica sin ocultar su interés por vincularse con las ricas explotaciones

mineras del septentrión novohispano. En ello había un cambio de gran importancia: el septentrión dejaba de ser exclusivamente una frontera con territorios desconocidos, habitados por nómadas belicosos, y comenzaba a ser una frontera con el movimiento expansivo de otras potencias europeas. Por si hiciera falta, una guerra europea, la de Siete Años (1757-1763), hizo explícita esa nueva condición del septentrión. En esa guerra Francia perdió sus principales colonias americanas, Canadá y la Luisiana. Inglaterra, la gran vencedora, conservó a la primera, y España, aliada de Francia, recibió la segunda.

Los habitantes del septentrión novohispano sabían de las andanzas de los franceses en Texas desde 1689. Más tarde, a mediados del siglo XVIII, las autoridades españolas veían con gran preocupación el avance de los rusos, que ya para 1760 tenían un puesto de avanzada a unos 80 km de la bahía que más adelante se llamaría de San Francisco, en la Alta California.

Este cambio de la frontera hizo más evidente la debilidad, sobre todo demográfica, de las posesiones españolas en el septentrión, y más aún por la prolongada guerra con los nómadas, pero también por las epidemias y hambrunas. Esos ataques obstaculizaban el comercio y hacían difícil la ocupación de nuevas tierras, pues incluso, como se vio, algunos puntos tenían que abandonarse, y por ello inhibían el avance español; además, la Corona tenía que gastar sumas cada vez mayores para sostener los presidios.

El régimen Borbón, en cuyas manos estaba la Corona española desde principios del siglo XVIII, emprendió un enorme esfuerzo político a partir de 1760. El objetivo era reforzar el dominio sobre sus posesiones americanas, aumentar la extracción de recursos y consolidar la hegemonía política del poder público por encima de cualquier otra fuerza política o sector social. Este proyecto dio paso a las reformas borbónicas, que incluyeron una amplia gama de medidas en materia fiscal, militar, económica, política y religiosa. En Nueva España, el visitador José de Gálvez (quien estuvo de 1765 a 1771) tuvo a su cargo la implantación de las primeras medidas, entre ellas la expulsión de los jesuitas decretada por el rey

Carlos III en febrero de 1767. En Nueva Vizcaya la orden de expulsión se cumplió a partir de junio de ese año y significó el desmantelamiento de las misiones y propiedades jesuitas.

Las misiones que estaban a cargo de los jesuitas eran las siguientes: en la Alta Tarahumara, Temósachic, Matachic, Santo Tomás, Tutuaca, Papigochic, Sisoguichic, Carichic, Narachic, No-noava, Coyáchic, Chinarras, Temeichic, San Francisco de Borja, Temochic, Tonachic, Norogachic y Guaguachiqui; en la Baja Tarahumara: Chínipas, Técora, Moris, Batopilillas, Babaroco, Santa Ana, Guazapares, Cerocahui, Tubares, Satevó, Nabugami y Baburigame. Además, los jesuitas contaban con los colegios de Parral y de Chihuahua y un gran número de propiedades urbanas y haciendas, tales como Tabalaopa, San Diego, Mápula, Ciénega de los Padres, Dolores y San Marcos. A partir de entonces comenzó el saqueo de los bienes de las misiones, cosa que afectó profundamente a los núcleos indígenas congregados en ellas.

A causa de esos saqueos se rompió una relación económica que las misiones habían logrado establecer entre sí, y sobre todo con los pueblos y centros mineros más importantes, como Cusi-huiriachic y la misma villa de Chihuahua. Algunos españoles o sus descendientes y mestizos se habían ido asentando junto a las misiones, y cuando ocurrió la expulsión de los jesuitas, aprovecharon el río revuelto para apropiarse de grandes extensiones de tierras y de tomas de agua, generalmente las de mejor calidad. El ejemplo más vívido tal vez sea el de la antigua misión de Temósachic, que perdió 36 sitios de ganado mayor en la zona conocida como la Bavícora. Sin duda alguna, como se indica en un estudio, los tarahumaras perdieron desde entonces la posibilidad de una relación económica más equitativa con el resto de la sociedad local. Los beneficiarios fueron los no indios, que más adelante formarían los pueblos del Valle del Papigochic.

Las misiones fueron entregadas a los franciscanos y más adelante se secularizaron, es decir, se entregaron a la jurisdicción del obispado de Durango. Los bienes de los jesuitas pasaron a un organismo creado ex profeso denominado Temporalidades. El régimen de misiones obligaba a la Corona a pagar un sínodo a los

misioneros, una especie de sueldo; de allí que desde siempre estuviera interesada en acabar con las misiones

Otra medida de los Borbones fue de índole militar. Por primera vez en la Nueva España se organizó un ejército propiamente dicho, es decir, profesional y de carácter permanente. Como parte de este proyecto militar, se envió al comandante y marqués de Rubí a recorrer los presidios del septentrión con fines muy semejantes a los del brigadier Rivera 50 años atrás: buscar a la vez una reducción en los costos de los presidios y mejorar su función militar. Rubí realizó un largo recorrido por los presidios y acabó concluyendo que éstos debían colocarse en una línea que seguía muy de cerca el paralelo 30, hasta donde llegaban efectivamente los dominios de la Corona (con la sola excepción de Santa Fe y San Antonio de Béjar). El criterio de Rubí fue más bien de carácter militar: los presidios debían ubicarse de tal modo que impidieran la entrada de los nómadas o bien que facilitaran su persecución y castigo. Asimismo, propuso y se aceptó crear una inspección de presidios con sede en la villa de Chihuahua. El primer inspector fue un sobrino del visitador Gálvez, Bernardo de Gálvez, quien más tarde escaló en la burocracia colonial hasta llegar a virrey de la Nueva España. Una vez que la propuesta de Rubí fue aprobada, en 1772, varios presidios se trasladaron hacia el norte. En Chihuahua el nuevo sistema significó el traslado de los presidios a las márgenes del Río Bravo; así surgieron el de San Elizario, a unos kilómetros al sur de Paso del Norte, y el de San Carlos (el actual Manuel Benavides); se mantuvieron los de Carrizal y Junta de los Ríos, y se suprimieron los de Guajoquilla y Cerro Gordo. También se crearon cuatro compañías volantes que en distintos momentos tuvieron su sede en Pilares, Guajoquilla, San Pablo, San Francisco de Conchos y Namiquipa. Gálvez dejó pronto el cargo y lo sustituyó el coronel Hugo O'Connor, quien emprendió intensas campañas contra los apaches desde su base de operaciones, el presidio del Carrizal.

Para el septentrión novohispano en su conjunto, los Borbones planearon un gigantesco esfuerzo de expansión española que debía llevar los dominios efectivos del rey quizá hasta el paralelo

37, es decir, a la altura del actual San Francisco, California. Para ello era menester, sin embargo, controlar la guerra contra los nómadas y promover a la vez el desarrollo económico, particularmente el de la minería. Para diseñar tan ambicioso proyecto, el visitador Gálvez permaneció tres años en Sonora, donde palpó la complejidad de los problemas que presentaba esta área para el proyecto gubernamental. Pero Gálvez, con ayuda del virrey, propuso la creación de una instancia gubernamental con amplias facultades militares y fiscales, así como administrativas y religiosas. En 1776 nació, por orden del rey Carlos III, la Comandancia General de las Provincias Internas, como se denominaba a las provincias septentrionales (Nueva Vizcaya, Nuevo México, Coahuila, Texas, las Californias, Sonora y Sinaloa), que tendría su sede en Arizpe, Coahuila. El primer comandante fue Teodoro de Croix, quien en medio de un gran conflicto con el virrey Antonio María de Bucareli —opuesto a perder mando sobre el territorio septentrional— llegó a Chihuahua en marzo de 1778. Allí vivió hasta fines de septiembre de 1779; vale la pena repasar algunas de sus medidas más importantes.

En primer lugar, Croix no compartía la idea del comandante Rubí de privilegiar la función militar de los presidios. Más bien, los veía como un mecanismo para fortalecer la ocupación de la provincia, lo que significaba dar a los presidios una función de poblamiento, incluida la vigilancia de rutas y caminos. Por tal razón debían estar cerca de los núcleos de población para protegerlos y además para facilitar su propio abastecimiento. En Chihuahua este cambio de estrategia significó establecer una triple línea defensiva: la primera constituida por los presidios de Janos, San Buenaventura, Carrizal y San Elizario, así como los de Príncipe, Norte, San Carlos y San Sabá, contando un total de 600 hombres de tropas presidiales, tropa ligera y auxiliares; la segunda consistía en los 520 hombres de las compañías volantes en Guajoquilla, Conchos y Chihuahua; la tercera estaba compuesta por las compañías milicianas ubicadas en Ancón de Carros, Julimes, Chorreras, Agua Nueva, Santa Clara y Namiquipa. En segundo término, y con el propósito de involucrar a los grupos sociales en la

estrategia gubernamental, Croix decidió repoblar áreas ubicadas al noroeste de la villa de Chihuahua, con el fin de asegurar la ruta a Sonora —elemento crucial en la estrategia global para fortalecer el dominio español sobre el septentrión entero— y para mejorar la defensa contra los nómadas. Así se explican las dotaciones de tierras a Casas Grandes, Namiquipa, Las Cruces y San Buenaventura que se hicieron a finales de 1778. Los colonos debían cumplir funciones militares y por ello recibían privilegios y derechos, como la portación de armas y la exención de impuestos. Los terrenos se repartieron en lotes y solares individuales entre los fundadores, pero al mismo tiempo una porción considerable se destinó a usos comunes. Con el tiempo los pueblos fueron perdiendo parte de sus terrenos, que sólo durante la reforma agraria, posterior a la Revolución de 1910, lograron recuperar.

La presión militar de los novohispanos obligó a algunas partidas apaches a solicitar la paz, cosa que ocurrió en el otoño de 1779 con los mescaleros liderados por el jefe Patule. Pero estos pactos eran vistos con desconfianza por los españoles, pues ya se habían dado casos en que los apaches sólo accedían a la firma de acuerdos de paz para dedicarse a combatir a los comanches, sus acérrimos enemigos. También era frecuente que hicieran las paces en un lugar para atacar en otro.

En el tiempo en que Croix estuvo en Chihuahua aprobó la fundación de un obraje, o fábrica de textiles, que utilizaba a los presos, concesionada a los señores Martín de Mariñelarena y Manuel de Urquidi. Otro obraje fue abierto en la hacienda Encinillas. Con estos establecimientos se inició la manufactura de productos textiles en mayor escala.

En 1786 se promulgó la Ordenanza de Intendentes en la Nueva España. Se trataba de una profunda reorganización administrativa, ideada por los reformadores borbónicos para mejorar la administración y reforzar el control territorial. Surgieron entonces 12 intendencias (una de ellas la de Nueva Vizcaya) y tres territorios, entre ellos Nuevo México. Con esa reforma desaparecieron los alcaldes mayores y los gobernadores de provincias, es decir, los funcionarios que habían gobernado desde el principio del perio-

do colonial. La capital de la intendencia de Nueva Vizcaya se mantuvo en Durango. Pero se nombraron 12 subdelegados en la porción norte de la intendencia: Chihuahua, San Gerónimo, Parral, Santa Bárbara, Valle de Allende, Guajoquilla, Cusihuiachic, Batopilas, San Buenaventura y Valle de Olivos, y después en Topago y El Refugio. Esta reorganización de la Nueva España se considera la base de la estructuración política que se realizó en el país una vez que alcanzó su independencia.

VI. LA PRIMERA TRANSICIÓN (1790-1830)

HACIA LA PROSPERIDAD DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA

LUEGO DE DOS SIGLOS Y MEDIO de dominación española, la población de la Nueva Vizcaya mostraba una fuerte disminución. Las estimaciones disponibles indican que la población se redujo sostenidamente desde el arribo de los españoles hasta llegar a 1800 con apenas la mitad de habitantes que había en el momento del contacto. Para ponerle números a esta afirmación, puede decirse que hacia 1800 en la Nueva Vizcaya había unas 170 000 personas menos que en 1519 (cuadro VI.1). Lo anterior significa que el conjunto de acontecimientos relatados en los capítulos anteriores tiene que verse en el marco de esta terrible pérdida demográfica. Tal comportamiento de la población se explica por el violento proceso de dominación española, que incluyó, además de la explotación del trabajo y el efecto de epidemias y hambrunas, la extinción, asimilación o mestizaje de algunos grupos (conchos y

CUADRO VI.1. *Población de la Nueva Vizcaya (1519-1821)*

<i>Años</i>	<i>Indios</i>	<i>No indios</i>	<i>Total</i>
1519	350 000	—	350 000
1600	267 500	3 700	271 200
1650	158 800	6 800	165 600
1700	84 600	14 900	99 500
1750	57 900	66 500	124 400
1800	50 400	126 800	177 200
1821	62 000	170 000	232 000

FUENTE: Peter Gerhard, *La frontera norte de Nueva España*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1982, p. 24.

tobosos) y el debilitamiento de otros, como tarahumaras y tepihuanes. Pero lo que debe destacarse es que el poblamiento español trajo consigo el despoblamiento indio.

En efecto, las grandes víctimas de esta disminución demográfica —y de hecho de esta historia— fueron los indios. La disminución de éstos redujo la población total de esta provincia, muy a pesar de que desde 1750 se aprecia un crecimiento notable de la población no india. Sin embargo, los no indios (españoles, criollos, mestizos, negros, mulatos) no llegaron en cantidades suficientes para contrarrestar la pérdida de población provocada por la extinción o la asimilación de indios, que los llevó a perder atributos culturales tan valiosos como el idioma materno. Cabe preguntarse cuántas lenguas y variantes dialectales se perdieron en estos tres siglos. A fines del siglo XVIII la población india ya era minoritaria. Incluso, en los principales centros urbanos, como Chihuahua y Parral, la población mulata era más numerosa que la india: 20% de mulatos contra 5% de indios en Parral, y 13% de mulatos y 6% de indios en Chihuahua. En Santa Cruz de Tapacolmes, en cambio, la población india superaba por muy poco a la mulata: 14.5 contra 13%. En 1785 se contaron 21 esclavos negros en la villa de Chihuahua. El peso de la población negra se fue diluyendo con el mestizaje, puesto que ya no arribaron más negros. Pero como escribió hace años Fernando Jordán, todavía es posible apreciar rasgos negroides en algunos chihuahuenses contemporáneos. En contraste, la historia criolla, por ejemplo la de José Fuentes Mares y otros, tiende a omitir no sólo la llegada masiva de sureños y el mestizaje, sino también el peso de los negros en la historia del septentrión novohispano y del norte de México.

Este panorama de la demografía colonial debe complementarse, sin embargo, con la evidencia de que desde la segunda mitad del siglo XVIII y hasta 1830 la población del norte de la Nueva Vizcaya creció de manera acelerada. Las estimaciones disponibles —siempre inexactas en virtud de los métodos censales de la época— muestran que la población casi se duplicó entre 1790 y 1823: pasó de 63 000 a 112 000 habitantes; ese aumento tuvo lugar de manera preponderante en la porción situada al norte de la villa

CUADRO VI.2. *Población del norte de la Nueva Vizcaya (1788)*

<i>Jurisdicciones</i>	<i>Habitantes</i>
Chihuahua	18 288
<i>Sur</i>	
Parral	5 193
Santa Bárbara	1 186
Cusihuiriachic	10 752
San Bartolomé	7 504
Valle de Olivos	10 094
Guajoquilla	1 829
San Francisco de Conchos	1 038
Primera compañía volante	152
Segunda compañía volante	151
Tercera compañía volante	150
TOTAL SUR	38 049
<i>Norte</i>	
San Buenaventura	718
Presidio Janos	142
Presidio San Elizario	73
Presidio San Juan Nepomuceno	141
Presidio de Carrizal	73
Presidio Junta de Ríos	106
Presidio Covame	144
Cuarta compañía volante	154
Paso del Norte	5 233
Clérigos	121
TOTAL NORTE	6 905
SUMA TOTAL	63 242

FUENTE: Almada, *Resumen de historia del estado de Chihuahua*, Gobierno del Estado, Chihuahua, 1986, pp. 130-131.

de Chihuahua, como se aprecia al contrastar las cifras expuestas en los cuadros VI.2 y VI.3. Estas cifras parecen comprobar la aseveración de un historiador estadounidense, quien afirma que estos años fueron de una gran emigración desde el sur de la Nueva Vizcaya hacia su porción norteña.

De la misma manera, las ciudades (sobre todo Chihuahua y Parral) conocieron avances en las condiciones de vida gracias a la introducción de vacunas y al mejoramiento de los servicios públicos. En Chihuahua se continuaron las obras del acueducto para llevar agua a la villa; también se abrió un hospital militar y a partir de 1802 comenzaron a aplicarse las vacunas contra la viruela negra. En 1786 abrió sus puertas una escuela de primeros estudios de carácter público a cargo del profesor José Barbosa. Otras mejoras importantes de la villa de Chihuahua, desde el punto de vista urbanístico, fue la instalación del primer reloj público en 1803, colocado en el frontispicio de la iglesia parroquial; en 1805 se iniciaron las obras para construir el Parque de la Alameda de Santa Rita (el actual Parque Lerdo). Desde 1797 comenzaron a hacerse esfuerzos para abrir escuelas públicas de primeras letras en los principales pueblos. En 1808 funcionaban escuelas de este tipo en Nombre de Dios, San Gerónimo, Guajoquilla, San Pablo y Parral. También en 1808 se abría la primera escuela para niñas en la villa de Chihuahua.

En parte, el auge demográfico se debió a la bonanza minera de Batopilas (1798-1803), Parral (1795-1804), Maguarichic (1809) y Cusihuiriachic (1807-1811). En contraste, en Santa Eulalia podía apreciarse desde 1791 una disminución en los rendimientos de las minas. A estas bonanzas de los minerales antiguos se sumaron nuevos descubrimientos, como el de Santa Rita del Cobre, cerca de Janos, en 1801.

Por otro lado, la agricultura y la ganadería también mostraron signos de expansión que redundaron en el crecimiento de las cosechas y en el aumento de los hatos. Hay noticias aisladas acerca del crecimiento de la población y de la producción agrícola en el valle del Papigochic, en Galeana y en el valle del Conchos-San Pedro. De esto último habla la orden de 1793 de crear la subdelegación real con cabecera en Santa Cruz de Tapacolmes, que dominaría esta comarca incluyendo Julimes. Del mismo modo, la refundación en 1797 de Santa Rosalía (el actual Camargo), con 28 familias provenientes de San Francisco de Conchos, prosperó de tal modo que en 1823 este asentamiento rebasaba los 1 500 habitantes; en 1820 ya se había creado el ayuntamiento. De la misma

fecha es la fundación de La Cruz, también junto al Río Conchos. La apertura de tierras de regadío en estos lugares, mediante la construcción de acequias (entre ellas la del Patrocinio), se ha documentado en parte. Maíz, frijol, sandías y melones comenzaron a producirse en las orillas del Conchos, y se enviaban para su venta en Parral y Chihuahua. García Conde comentaba que durante estos años de paz la ganadería local creció a tal punto que para 1832 el estado estaba “inundado de caballada y ganado”. Los intercambios ganaderos, por lo menos con Sonora, aumentaron considerablemente en estos años. Cuando las autoridades españolas decidieron abrir el comercio a otros países, las embarcaciones inglesas comenzaron a llegar a Guaymas, que así recibió el impulso necesario para crecer. Era tal la conveniencia de adquirir mercancías inglesas, que varios comerciantes chihuahuenses no dudaron en participar en ese nuevo negocio trayendo mercancías europeas (no españolas) a la villa de Chihuahua.

En 1793 comenzaron a funcionar en esta villa, durante dos días al mes, dos tianguis donde se podían comprar y vender artículos de diversa clase sin pago de la alcabala, un impuesto fijado para la circulación de mercancías. En estos lugares podían participar los vecinos de la villa, los habitantes de los ranchos y haciendas cercanas e incluso los indios. Con el tiempo estos tianguis formaron la zona comercial de la villa, donde ahora se encuentran los mercados de La Reforma y Juárez. En ese mismo sentido cabe destacar la creación de la feria anual en el Valle de San Bartolomé, autorizada en la Ciudad de México en diciembre de 1805. Los participantes en esta feria, que se celebraría entre los días 18 y 23 de diciembre de cada año, podían introducir mercancías sin pago de alcabala, aunque si esas mercancías se transportaban más al norte debían pagar el impuesto correspondiente.

HACIA LA PAZ POR LOS ARREGLOS CON LOS NÓMADAS

Los esfuerzos borbónicos fracasaron en su intento de lograr la expansión española sobre las porciones territoriales situadas al norte

del paralelo 30, o bien al norte del cinturón de presidios establecidos por el reglamento de 1772 propuesto por el comandante Rubí. Sin embargo, tuvieron mucho más éxito en cuanto a la pacificación de la frontera con los nómadas.

Los ataques de estos grupos indígenas comenzaron a disminuir después de 1790, lo que marcó un contraste con las décadas anteriores. ¿Cómo fue posible esta pacificación? Hay varias razones. Una de ellas es el aumento notable de soldados en la frontera, lo que posiblemente mejoró la capacidad de respuesta española. Sin embargo, este aumento militar no es suficiente para explicar el fenómeno, toda vez que los efectivos españoles aumentaron sostenidamente desde 1700 y, como se vio, la guerra se agudizó sobre todo en la segunda mitad de ese siglo. Por ello hay que buscar otras razones. Una de ellas es, sin duda, el despliegue de una política heterodoxa, propuesta por el virrey Bernardo de Gálvez en 1786, consistente en una mezcla de represión y negociaciones. Gálvez, aquel comandante inspector de los presidios que vivió en Chihuahua en 1771 y pariente del visitador José de Gálvez, era el primer virrey de la Nueva España que conocía de cerca la lucha contra los nómadas del septentrión. Creía firmemente que la sola guerra no era suficiente para controlar a los grupos nómadas. Ello significaba ofrecer y pactar la paz con distintos grupos, promover la división entre ellos (por ejemplo, alimentar las diferencias entre apaches y comanches), buscar alianzas con algunos grupos, fomentar el consumo de alcohol y de otras mercancías que favorecieran la dependencia de los nómadas respecto de la economía española y ofrecer subsidios y dietas a los grupos pacificados. Algunos de estos grupos fueron asentados junto a los presidios de Janos, San Buenaventura, Carrizal, Norte, Namiquipa y San Elizario, donde se intentó, con escaso éxito, fomentar su vocación agrícola. Incluso, en alguna ocasión el comandante militar, el brigadier Nemesio Salcedo, suspendió la entrega de raciones a los apaches pacificados para obligarlos a trabajar. Fue tal la agitación que provocó la medida, que el militar tuvo que dar marcha atrás. La entrega de raciones a los apaches pacificados, financiadas con dinero gu-

bernamental, continuó de manera ininterrumpida hasta principios de la década de 1830.

Este conjunto de medidas, que se puso en práctica en diversas regiones de la frontera con los nómadas, fue instrumentado por la comandancia general, a pesar de los constantes cambios y divisiones que sufrió esa instancia gubernamental después de la salida de Teodoro de Croix. La comandancia se fraccionó en varias ocasiones en dos y hasta en tres partes, por ejemplo en las provincias de oriente y en las de occidente. Esa desorganización revelaba el fracaso del proyecto original del visitador Gálvez respecto de la expansión española en el septentrión. Además, era resultado de la subordinación desde septiembre de 1885 de la comandancia general al virrey novohispano.

El fracaso del proyecto de José de Gálvez, tan bien ilustrado por el triunfo de la figura del virrey sobre la del comandante general, era resultado, en el fondo, de la incapacidad del septentrión para generar los recursos pecuniarios suficientes para sostener el movimiento expansivo español. Esto significaba que los gastos originados por la comandancia, y en general para sostener el aparato militar y administrativo del septentrión, continuaron proviniendo del centro del país. En esa medida era difícil que cualquier virrey accediera de buena gana a patrocinar un proyecto que le significaba la pérdida de una porción territorial de la magnitud de las llamadas Provincias Internas.

En una de tantas reorganizaciones de la comandancia general, en la que incluso se le unificó y se le devolvió su autonomía respecto al virrey, el comandante Pedro de Nava se estableció en la villa de Chihuahua. Con esa medida, las actividades de este aparato burocrático contribuyeron a dar más dinamismo a la economía local. Esto ocurrió en 1791 y se prolongó hasta bien entrada la década de la guerra de Independencia. El arribo del comandante propició una madeja burocrática muy complicada, porque en la villa de Chihuahua funcionaban varias instancias de gobierno: el ayuntamiento, el corregidor, el subdelegado real y el comandante general. Tal vez por esa razón en 1793 se decidió desaparecer el corregimiento de Chihuahua, creado, como se dijo, en 1718.

Desde esta localidad se instrumentaba la política de pacificación de la frontera. A pesar de las dificultades en el envío de recursos, por ejemplo en 1805 y 1806, la comandancia general pudo sostener el aparato militar y los demás gastos que acarreaban los arreglos con los nómadas. Ello permitió años de relativa paz en la provincia, hecho que influyó en el comportamiento demográfico y económico descrito antes.

Los ataques de los nómadas no impedían el funcionamiento de la economía septentrional, pero sí la dificultaban y la inhibían. Al suspenderse esas correrías, la población sedentaria pudo ocupar otra vez antiguas minas y ranchos, e incluso abrir nuevas áreas al cultivo y nuevos minerales, como Santa Rita del Cobre. Asimismo, los caminos se volvieron más seguros, lo que facilitó el intercambio de mercancías y la circulación de personas.

HACIA LA INDEPENDENCIA

La crisis política y económica de la monarquía española se agudizó en los primeros años del siglo xix. Para enfrentar el déficit y continuar la guerra contra la Gran Bretaña, la Corona española adoptó medidas financieras que provocaron gran descontento en la Nueva España. Después de una aparatosa derrota naval contra la flota británica, España recurrió a una alianza con Francia, que a la postre resultó contraproducente. Con el pretexto de invadir Portugal, Napoleón introdujo sus tropas a la península a fines de 1807 y consiguió apoderarse del trono español, que, en esas críticas circunstancias, se disputaban Carlos IV y su hijo Fernando VII.

Las noticias de estos hechos tuvieron repercusiones inmediatas en América. De la consternación se pasó a la búsqueda de acciones políticas para responder a la invasión y demostrar la lealtad a Fernando VII, el rey cautivo que había sido jurado unos meses antes en todas las ciudades y villas de los dominios americanos.

La crisis se concentró en la Ciudad de México, donde el ayuntamiento propuso establecer una junta que tutelara la soberanía

del rey cautivo. El virrey José de Iturrigaray dio signos de apoyar la medida; pero en septiembre de 1808 fue derrocado por un grupo de comerciantes peninsulares, respaldado por algunos oidores y eclesiásticos importantes, que consideraron que la propuesta del ayuntamiento podía conducir a la independencia. El golpe contra el virrey produjo un gran malestar político que, en gran medida, fue responsable de la insurrección de 1810.

No obstante, la situación política generó también un fuerte sentimiento de lealtad al monarca preso y un ánimo de solidaridad con los combatientes españoles que, desde el sur de la península, se resistían a la dominación francesa. Muy pronto, las autoridades americanas reconocieron y juraron obediencia al gobierno provisional (primero una Junta Central y después una Regencia) que se estableció en Sevilla, y que terminó por trasladarse al puerto de Cádiz ante la presión del ejército francés.

Mientras los insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo combatían a las tropas de un nuevo virrey (nombrado por las autoridades españolas que resistían a Francia), en España la Regencia convocó a Cortes y solicitó el nombramiento de representantes de las provincias de la monarquía. La Nueva España tendría derecho a 17 diputados a ese congreso, que se establecería en la isla de León, frente a Cádiz, y tendría a su cargo la elaboración de la primera constitución de la monarquía española. En ésta se estableció la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y se reglamentó la manera de elegir diputaciones provinciales. En bloque, los diputados americanos exigieron igualdad en la representación (lo que implicaba más diputados americanos que peninsulares), libertad para cultivar y producir lo que quisieran, abolición de los monopolios, libertad para explotar minas de mercurio, comercio libre entre América y Filipinas, e igualdad de derechos entre españoles y americanos, entre otras medidas. El coahuilense Miguel Ramos Arizpe destacó en los trabajos de las Cortes de Cádiz. Uno de los aspectos más importantes de la Constitución de Cádiz de 1812 fue la sección sobre ayuntamientos. Todas las localidades y sus comarcas con más de "mil almas" tendrían derecho a ser gobernadas por un ayuntamiento, el cual sería elegido por los

propios vecinos. Un cambio notable, pues recuérdese que antes sólo las grandes ciudades contaban con ese órgano de gobierno.

Las provincias del septentrión novohispano no mostraron gran simpatía por la lucha del cura Miguel Hidalgo iniciada en septiembre de 1810 en el Bajío. En Chihuahua hubo pequeños brotes de apoyo al movimiento insurgente, pero fueron más evidentes y elocuentes las muestras de respaldo a la Corona española. Los vecinos principales aportaron sumas considerables para ayudar a reprimir a los rebeldes. Los mineros y comerciantes accedieron a cooperar con el gobierno español: entre todos reunieron 430 000 pesos. Don Ángel Bustamante, rico vecino de Batopilas, donó 100 000 pesos de plata en barras y además prestó, sin cobrar intereses, otros 150 000. Además, hay evidencias de que diversos sectores populares también apoyaron los esfuerzos contrainsurgentes, pues se organizaron varios batallones de voluntarios. Entre estas fuerzas destaca la de 300 flecheros tarahumaras, reclutados por el padre José Francisco Álvarez en el Valle del Rosario. Esta tropa, junto con soldados provenientes de las compañías volantes y voluntarios de Cusihuiachi, Parral y Valle de Olivos, quedó al mando del teniente coronel José Manuel de Ochoa y fue enviada a combatir en Durango, Zacatecas y Guadalajara. Los "Patriotas de Fernando VII", fuerzas integradas por voluntarios para cuidar el orden en sus respectivos lugares, se formaron en Paso del Norte, San Francisco de Conchos, San Gerónimo, San Pablo y Carrizal.

Por todo lo anterior, no sorprende que los militares españoles hayan decidido llevar a Hidalgo y a los demás jefes a Chihuahua para juzgarlos y ejecutarlos en el verano de 1811. Sabían que allí la lucha insurgente no contaba con el apoyo popular que era patente en algunas zonas del centro del virreinato. Éste es, sin duda, un problema historiográfico que hay que aclarar.

Cabe mencionar, sin embargo, que algunos intentaron secundar el movimiento insurgente. El regidor del ayuntamiento de Chihuahua, Salvador Porras, fue acusado de apoyar a los rebeldes, y aunque la acusación no se le comprobó del todo, fue degradado y multado con 300 pesos. En 1812 hubo otro brote insurgente, en esta ocasión en Basúchil, en el Papigochic, encabezado por Rafael

Mingura, quien fue aprehendido junto con otros cuatro involucrados. Fueron sentenciados a varios años de reclusión en la Casa del Obraje. El intento más importante fue, sin embargo, la conspiración de José Félix Trespalcios, Pablo Caballero y Gaspar de Ochoa, en noviembre de 1814. En este caso el objetivo era apoyar la lucha de José María Morelos y Pavón, así como lograr el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, expedida en marzo de 1812, que fue derogada en 1814 y restablecida en 1820. Trespalcios, militar y síndico del ayuntamiento de Chihuahua en 1812, fue aprehendido gracias a una denuncia. El mariscal Bernardo Bonavía, comandante de las Provincias Internas, agradeció la colaboración del ayuntamiento y de los vecinos de Chihuahua. Trespalcios fue sentenciado a 10 años de presidio ultramarino y destierro perpetuo de las Provincias Internas.

Salvo en Texas y Coahuila, en donde sí se trabaron fuertes combates de los que resultaron graves daños a algunos poblados y haciendas, en el septentrión novohispano la guerra de Independencia se padeció más bien por la suspensión del comercio con el centro del país. La minería resintió el estado de guerra y la consecuente interrupción de las comunicaciones. Santa Eulalia, Cusihuiachi y Parral redujeron sus actividades conforme la pólvora y otros bienes escasearon. Algunas minas se abandonaron y en consecuencia se inundaron, tal como lo dio a conocer José Agustín de Escudero en sus *Noticias estadísticas*. En 1811 tres mineros españoles de Cusihuiachi viajaron al puerto de Veracruz para adquirir directamente los artículos que requerían sus minas. El vómito los sorprendió allá y los mató, lo que trajo consigo la pérdida de fortunas y la suspensión de labores en ese mineral.

Las dificultades del transporte y del comercio trajeron algunas ventajas. Como resultado del aislamiento virtual en que quedó la provincia, varios productos comenzaron a fabricarse en Chihuahua. Ante el alza de precios en los productos de algodón, los telares del obraje de la villa de Chihuahua se incrementaron; comenzaron a fabricarse diversos artefactos de cobre con materia prima proveniente de las minas de Santa Rita del Cobre; se instaló también un taller de reparación de armas de fuego y se comenzaron a

fabricar lanzas y adargas; se abrieron establecimientos para fabricar cigarros, sombreros de castor y vaciado de fierro. Junto con las de Sombrerete y Durango, en 1811 comenzó a funcionar la Casa de Moneda de Chihuahua, que acuñaría unos cuatro millones de pesos en monedas de plata y tlacos de cobre entre el año de su fundación y 1814.

HACIA EL NUEVO PAÍS Y EL ESTADO DE CHIHUAHUA

La alianza entre los militares criollos encabezados por Agustín de Iturbide y las fuerzas insurgentes de Vicente Guerrero, pactada en el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, abrió paso a la consumación de la Independencia. A pesar de que gran número de militares se sumaron al acuerdo, la comandancia general de las provincias septentrionales se opuso firmemente a esa resolución. Mostrando una gran lealtad al dominio español, el comandante Alejo García Conde ordenó la movilización de las tropas situadas en Chihuahua para combatir a los partidarios de la Independencia. Coherentes con su postura a lo largo de la década de guerra, los vecinos principales de la villa de Chihuahua financiaron la salida de las tropas locales hacia el sur. En agosto de ese mismo año de 1821, las tropas del general Pedro Negrete, uno de los simpatizantes de Iturbide, sitiaron la capital de la intendencia de Nueva Vizcaya, Durango, cuyas autoridades se oponían a la Independencia. Desde Chihuahua se enviaron 400 hombres para reforzar a la capital provincial; pero ya no llegaron. El 21 de agosto, en San Bartolomé, los oficiales de esa fuerza decidieron cambiar de bando y secundar al Plan de Iguala, con lo que lograron el apoyo de la población local. Ante esas circunstancias, García Conde decidió deponer las armas y sumarse a la Independencia el 27 de agosto, día en que concluyó el dominio español en esta tierra. Un mes después, las tropas de Guerrero e Iturbide, el llamado Ejército Trigarante, entraron en la Ciudad de México. Así comenzaba la vida independiente.

La organización del nuevo país fue muy complicada. Casi

desde el primer momento se creó una honda división entre quienes sostenían la necesidad de mantener un poder central fuerte, a la usanza del sistema colonial, y aquellos que, imbuidos por la experiencia del federalismo estadounidense y en parte por el constituyente de Cádiz, pugnaban por una fórmula republicana consistente en la unión de estados libres y soberanos con un poder local claramente definido. La caída del imperio de Iturbide en mayo de 1823 abrió el camino para la organización del país como república federal. No es de extrañar que el 31 de enero de 1824 el Congreso general decretara la organización política bajo ese sistema, lo que dio paso al surgimiento de los estados.

En el acta constitucional de enero de 1824, emitida por el Congreso general, la antigua Nueva Vizcaya sobrevivió como una totalidad, con el agregado de Nuevo México; a la entidad federativa se le denominó Estado Interno del Norte. Sin embargo, los políticos duranguenses se opusieron con firmeza a que Durango formara parte de esa enorme entidad federativa; la oposición era más viva aún por el esfuerzo chihuahuense encaminado a lograr que la ciudad de Chihuahua quedara como la capital estatal. Los duranguenses deseaban un estado pequeño, con su capital en la ciudad de Durango. En cambio, los chihuahuenses, evidenciando su gran desamparo, insistían en la unión con Durango y Nuevo México y, por supuesto, sostenían que la ciudad de Chihuahua debía ser la sede del gobierno estatal. Esta disputa, que no mostraba más que la vieja rivalidad entre los principales centros urbanos de la extinta Nueva Vizcaya, concluyó en el verano de 1824 cuando el Congreso general concedió en gran medida razón a los diputados duranguenses y resolvió formar dos estados autónomos (Durango y Chihuahua) y un territorio federal (Nuevo México). Los linderos de Chihuahua se trazaron con los elementos disponibles: al norte el poblado de Paso del Norte y al sur la hacienda de Río Florido. Al oriente y al poniente, es decir, el desierto y la serranía, no se logró precisar claramente los linderos. Quizá esa precisión no era tan necesaria en esos puntos cardinales, aunque luego se presentarían conflictos de límites tanto con Sonora como con Coahuila.

Hasta donde es posible saber, nadie disputó el derecho de la

ciudad de Chihuahua, elevada a ese rango en 1823, a fungir como capital de la nueva jurisdicción. En ello influía sin duda la trayectoria económica, demográfica y política de la antigua villa de San Felipe Real de Chihuahua. Ninguna otra localidad había sido cabecera de la Comandancia General de las Provincias Internas y tampoco ningún otro asentamiento contaba con una iglesia parroquial de las dimensiones de la de Chihuahua. Éstos eran atributos de peso.

El 8 de septiembre de 1824 se instaló el primer Congreso Constituyente del estado, que nombró al primer gobernador provisional, el coronel José de Urquidi, quien de inmediato se dio a

CUADRO VI.3. *Población de los partidos en 1823*

<i>Partido</i>	<i>Habitantes</i>
Chihuahua	10 190
<i>Sur</i>	
Parral	11 585
Guajoquilla	8 383
San Bartolomé	12 753
Cusihuiriachic	9 583
Ciénega de Olivos	11 401
Batopilas	8 260
Norogachi	3 064
TOTAL SUR	65 029
<i>Norte</i>	
Papigochic	11 578
San Gerónimo	9 725
San Buenaventura	7 628
Paso del Norte	8 543
TOTAL NORTE	37 474
SUMA TOTAL	112 693

FUENTE: Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (comps.), *Cbihuabua. Textos de su historia 1821-1921*, Gobierno del Estado de Chihuahua/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, México, 1988, t. I, p. 235.

la tarea de organizar el aparato gubernamental. Los antiguos funcionarios civiles, religiosos y militares de la administración española y los vecinos principales, convertidos lentamente en grupo político, comenzaron a construir una dimensión novedosa de la vida local: las disputas y la competencia política por el presupuesto y la creciente burocracia. Al igual que en el resto de las entidades, en Chihuahua se formaron grupos políticos que tendrían que resolver y negociar sus diferencias en el propio estado, cosa desconocida hasta entonces en virtud del centralismo existente en la estructura política colonial. El florecimiento de la política local en los estados trajo consigo la decadencia del poder central y, en esa misma medida, de la Ciudad de México. Ya veremos en el próximo capítulo las implicaciones de este importante cambio político.

El 9 de diciembre de 1825 el Congreso Constituyente, empezando con la frase “En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de las Sociedades”, expidió la primera Constitución Política del estado. El Poder Ejecutivo quedaba a cargo de un gobernador que sería elegido cada cuatro años; el Poder Legislativo estaría en manos de 11 diputados que durarían en su cargo dos años, y que tenían entre sus funciones elegir al gobernador y al vicegobernador. Por su parte, el Poder Judicial quedaba integrado por un Supremo Tribunal de Justicia, cuyos integrantes (los magistrados) eran elegidos por el Congreso local. El gobierno general mantuvo a un comandante militar en cada entidad federativa, dependiente del Ministerio de Guerra. Sin embargo, estos comandantes militares no tendrían gran fuerza, lo que expresaba puntualmente la debilidad del gobierno de la República.

Una ley de enero de 1826 dividió al estado en once partidos, con cabecera en las siguientes localidades: Chihuahua, San Gerónimo, Cusihiuriachic, Parral, Paso del Norte, Papigochic, Tapacolmes, San Buenaventura, Janos, Batopilas y San Pablo Tepehuanes. Cada partido estaría bajo el mando de un jefe político, quien fungiría también como presidente del ayuntamiento de la cabecera. Los pueblos con más de 2000 habitantes contarían con sus res-

pectivos ayuntamientos, encabezados por un alcalde que tendría funciones judiciales. En las localidades con una población entre 800 y 2 000 habitantes se designaba una junta municipal. Con estas disposiciones, que afianzaban la tendencia política surgida de la Constitución de Cádiz de 1812, los ayuntamientos se constituyeron en espacios decisivos en la organización política local. En unos cuantos años estas nuevas instancias del poder político se habían extendido a lo largo y ancho del territorio. En 1790 sólo había seis ayuntamientos en el estado: Chihuahua, Parral, Cusihuiriachic, San Gerónimo, San Pablo y Guajoquilla. Esos nuevos organismos, al basar su existencia legal en el número de habitantes, reconocían la importancia ganada por esos núcleos de población tanto en términos demográficos como económicos y políticos.

Si continuamos con el modo de estimar la distribución de la población de la entidad, al norte y sur de la capital del estado (y se deja de considerar el número de habitantes de la capital), tenemos que 37 474 habitantes (33%) se hallaban en la parte norteña y el resto en la parte sureña. Pero esta distribución contrasta con la situación de 1788, expuesta en el cuadro VI.2, en la que apenas 11% de la población vivía al norte de la villa de Chihuahua. Sin duda, la pacificación apache fue un elemento importante en este comportamiento de la población local. Los años de auge económico y demográfico redistribuyeron de mejor manera la población. Ello se muestra también en el hecho de que la capital del estado no era ni con mucho la jurisdicción más importante en términos demográficos. Dos áreas agrícolas, el Valle de San Bartolomé y el del Papigochic, y un distrito minero, Parral, superaban a la ciudad de Chihuahua en número de habitantes.

Los nuevos gobernantes se dieron a la tarea de poner en funcionamiento el aparato de gobierno. Eran años de relativa bonanza; por ejemplo, los ingresos gubernamentales eran mayores que los gastos. Se temía que el gobierno general insistiera en controlar el monopolio del tabaco, que era una de las principales fuentes de ingresos del gobierno de Chihuahua; así lo informaba el vicegobernador José María Arce en su mensaje del 1 de julio de 1826. Varios descubrimientos mineros, realizados en las postrimerías del

dominio colonial, habían contribuido a esa prosperidad del nuevo estado. En particular destaca el de las vetas de Jesús María (el actual Ocampo), ocurrido en enero de 1821, que pronto atrajo a gran número de empresarios mineros, trabajadores y comerciantes. En poco tiempo, este conglomerado mereció la formación de un nuevo ayuntamiento.

En esos primeros años los estados contaban con grandes facultades; por ejemplo, sobre terrenos baldíos y colonización. El gobierno local expidió una ley sobre esta materia en mayo de 1825 para fomentar el poblamiento en varios puntos del estado, como las márgenes de los ríos Conchos y Bravo; disponía que el producto de las ventas de esos terrenos pasaran al gobierno local y también ordenaba que las tierras de los pueblos indios debían reducirse a propiedad privada. En materia educativa, el gobierno local dispuso de una importante partida para fomentar la educación pública, de tal suerte que para 1827 ya existían 67 escuelas primarias en las cabeceras municipales y en sus principales secciones; los niños inscritos ascendían a 2532. En diciembre de 1827 abrió sus puertas la institución que más tarde se convertiría en el Instituto Científico y Literario, a cargo del padre Antonio Cipriano Irigoyen. El predominio cultural, literario, educativo y político de la ciudad de Chihuahua era evidente. En octubre de 1825 comenzó a funcionar la primera imprenta en la capital del estado; hasta 1856 se abrió la segunda en Parral, y en 1864 y 1865 se establecieron en Guerrero y Paso del Norte. Esa diferencia de años mostraba la diferencia en la jerarquía alcanzada por la ciudad capital.

HACIA EL COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS

La terca postura de España de negarse a reconocer la independencia mexicana y su intención explícita de reconquistar sus antiguos dominios obligaron al gobierno federal a decretar la expulsión de los españoles del país, primero en diciembre de 1827 y más tarde en 1829, justamente como respuesta a la invasión del brigadier Isidro Barradas en Tampico en septiembre de 1828. El

entrañable historiador Francisco Almada califica de “estúpida” esta medida, pues considera que la expulsión trajo graves consecuencias a la economía local, ya que casi todos los expulsados (alrededor de un centenar) eran individuos pudientes y bien establecidos. Sus negocios cerraron o bien pasaron a manos no muy hábiles, con el consecuente deterioro económico del estado.

En contraste, las nuevas autoridades mexicanas buscaron con gran empeño el fortalecimiento y la diversificación de lazos económicos con Estados Unidos y con algunos países europeos como Inglaterra. Los estadounidenses reconocieron la independencia de México en 1822 y en 1825 enviaron al primer embajador, el famoso J. R. Poinsett. Entre las tareas de este diplomático estaba firmar un tratado comercial que diera preferencia a Estados Unidos; Poinsett también recibió órdenes para sondear la posibilidad de que México accediera a vender algunas porciones de sus territorios septentrionales.

La relación con ingleses y estadounidenses no era cosa nueva. Los españoles se opusieron firmemente a abrir sus colonias al comercio con otros países. Ello cambió, sin embargo, en las últimas décadas del periodo colonial, cuando se autorizaron nuevos consulados en Veracruz y Guadalajara, que comenzaron a competir con el poderosísimo Consulado de la Ciudad de México, y cuando se permitió también el comercio con barcos ingleses en la costa del Pacífico.

Esa apertura comercial se hacía en medio de grandes temores por la suerte de las provincias septentrionales. Algunos funcionarios de la Corona creían firmemente que esas provincias, por su lejanía y escasa población, corrían un serio riesgo de perderse. Por eso en 1804 y en 1813, cuando algunos estadounidenses se internaron en ellas con afanes comerciales, el gobierno español no dudó en capturarlos y encarcelarlos durante varios meses. En Chihuahua permanecieron en prisión cinco de ellos en 1804.

Los nuevos gobernantes mexicanos también compartían el temor por las provincias septentrionales, pero era más poderoso su interés por reforzar su participación en el comercio internacional. Tal interés se tradujo en el arribo de varias compañías mine-

ras europeas y estadounidenses, así como en la obtención de préstamos de capital inglés. De la misma manera debe explicarse el inicio, en 1821, de la colonización de Texas con población estadounidense. Se creía con optimismo que esa apertura traería grandes beneficios a un país con grandes recursos naturales y que por ello México no tardaría en convertirse en una potencia mundial de primer orden. En Chihuahua se compartía esa perspectiva: desde 1825 se hicieron esfuerzos por atraer a los ingleses para que invirtieran en las minas de Jesús María y Batopilas. A Jesús María habían llegado algunos ingleses a buscar posibilidades de hacer negocios. Uno de ellos, Stephen Staples, comenzó a elaborar el primer mapa del estado, que concluyó años después el ilustre Pedro García Conde.

En Chihuahua y Nuevo México esa actitud de apertura se ilustró bien con el comienzo del flujo comercial regular entre San Luis (Missouri), Santa Fe y Chihuahua, casi en coincidencia con la proclamación de la independencia. En 1821 las primeras caravanas llegaron a Santa Fe, que traían telas, armas, whisky y herramientas agrícolas. A cambio los estadounidenses se llevaban plata, oro y ganado. Este comercio creció en los años siguientes hasta convertirse en un flujo de gran importancia para la economía local. En 1822 el intercambio con Chihuahua apenas alcanzó un monto de 9000 dólares, pero en 1831 alcanzó los 80 000, 100 000 en 1839 y 300 000 en 1843. A finales de 1846 el viajero inglés George Ruxton estimó el valor del comercio “entre Estados Unidos y Chihuahua” en más de un millón de dólares. Las caravanas eran esperadas con gran impaciencia.

Esta nueva red comercial significó un gran cambio para Chihuahua y en general para el norte del país. Por primera vez el estado tenía intercambios y circulación de personas con puntos situados más al norte de Santa Fe, lo que significaba la consolidación del nuevo carácter de la frontera: del norte ya no sólo llegaban nómadas belicosos, sino también mercancías e influencias ideológicas de un país vecino que empezaba a mostrar una gran fortaleza económica y demográfica. Esta nueva frontera acarrearía, como es bien sabido, grandes problemas y pérdidas a los mexica-

nos en general y a los chihuahuenses en particular. Por lo pronto, apaches y comanches, así como bandoleros y abigeos, se involucraron con gran vigor en este nuevo comercio, del que obtuvieron armas y nuevas posibilidades de intercambio y negocios.

VII. LA ERA DE LAS GUERRAS VIEJAS Y NUEVAS (1830-1880)

APACHES DE NUEVA CUENTA

LA PACIFICACIÓN DE LA FRONTERA, uno de los principales logros de la Comandancia General, comenzó a desmoronarse desde los inicios de la guerra de Independencia. El traslado de soldados presidiales hacia el centro del país a partir de 1810 y la falta de pago puntual de sueldos a esas tropas habían minado la defensa contra los indígenas. En Coahuila los ataques apaches volvieron en 1816 y 1817. En Sonora la situación se deterioró aún más porque dos grupos de indios sedentarios organizaron varios levantamientos: los ópatas, un grupo que había prestado grandes servicios a los españoles contra los nómadas, se sublevaron en 1819 y luego en 1824, en protesta por los abusos de funcionarios y vecinos; más tarde, en 1825, los yaquis se sumaron a la rebeldía. En ambos casos, las autoridades de Chihuahua prestaron auxilio a las de Sonora para sofocar las rebeliones. De igual modo, el gobierno general, debilitado por la repartición de impuestos de 1824, que favoreció a las entidades federativas, dejó de pagar los sínodos a los misioneros franciscanos de la Tarahumara, por lo que el gobierno chihuahuense tuvo que cubrir esas erogaciones.

En Chihuahua la guerra retornó a mediados de 1831, cuando una partida de comanches mató a dos capitanes cerca del Río Bravo. Los comanches fueron reprimidos, pero respondieron con una insurrección general a la que se sumaron poco después diversas partidas de apaches (gileños, mimbrenos y mescaleros). Este brote de violencia tuvo su origen en la decisión del comandante militar, el coronel José Joaquín Calvo, de suspender las raciones y subsidios a los indios pacificados.

El desgaste acarreado por el movimiento insurgente, la misma independencia del dominio español y el surgimiento del nuevo país organizado en estados soberanos, con gran margen de independencia entre sí y respecto al centro, propiciaron un debilitamiento del sistema militar así como de los arreglos de paz con los nómadas. También contaba el avance estadounidense y el desplazamiento de los comanches hacia el sur, así como los intercambios comerciales entre nómadas y comerciantes “angloamericanos”, como se les llamaba entonces. El resultado fue el regreso de los años de violencia intermitente, de asaltos a haciendas y ranchos, de secuestros de personas y de ataques a caravanas y viajeros.

En octubre de 1831 el comandante Calvo declaró formalmente el estado de guerra contra los nómadas. En enero del año siguiente, entre 300 y 400 apaches se habían alzado y se dedicaban a atacar y robar en el perímetro comprendido entre Carretas, Concepción, Carrizal y San Buenaventura o Galeana. El gobernador José Madero obtuvo facultades extraordinarias para hacer frente a la amenaza apache y se tomaron medidas para organizar y armar a los vecinos de los pueblos. En el otoño de 1834, luego de que la epidemia de cólera alcanzó a los habitantes de Chihuahua, los nómadas se acercaban a Durango, después de atacar varios puntos del sur chihuahuense, como lo informaba un periódico de la Ciudad de México.

La reanudación de las hostilidades de los nómadas tuvo lugar en un escenario político muy distinto del de la época colonial. Un incidente ilustra con claridad esas nuevas condiciones. Cuando se presentaron los primeros ataques comanches y apaches, el comandante Calvo organizó, en agosto de 1832, una expedición hacia el norte del estado. Al llegar a la hacienda de Encinillas tuvo noticias de que José Urrea, comandante militar de Durango, se había sumado a la rebelión encabezada por Antonio López de Santa Anna contra el presidente Anastasio Bustamante. Calvo y el gobernador Madero expresaron su lealtad a Bustamante, por lo que Urrea decidió invadir el estado de Chihuahua. Calvo se vio obligado a dividir sus tropas y marchar con una fuerza hacia el sur para hacer frente a la inminente incursión de

Urrea. Por fortuna, las negociaciones detuvieron el enfrentamiento: el 24 de octubre de 1832 se firmaba un tratado (de la Noria) que cesaba las hostilidades. Este tipo de conflictos era inimaginable en la época colonial.

En efecto, la entonces breve vida nacional había mostrado las grandes diferencias entre las élites y grupos políticos en torno a cómo organizar al país recién independizado, y también mostraba que, contra lo que ocurría en la época colonial, las inconformidades y diferencias se resolvían en buena medida por la vía de las armas. En las elecciones de 1829 para suceder a Guadalupe Victoria aconteció la primera gran escisión de las muchas que viviría el país a lo largo del siglo xix. En diciembre de 1829, el presidente en funciones, el general Vicente Guerrero, fue depuesto por los seguidores del Plan de Jalapa, quienes designaron presidente de la República a Anastasio Bustamante. En Chihuahua, el comandante militar y el gobernador Arce apoyaron a Bustamante y reprimieron a los enemigos del Plan de Jalapa. Como resultado, un buen número de chihuahuenses tuvo que abandonar el estado, entre ellos el vicegobernador, abogado José María Ramírez, y ocho de los 11 diputados.

Por otro lado, el retorno de los ataques apaches mostró que el poder político se hallaba sumido en una profunda crisis y que carecía de recursos para enfrentarla. Las solicitudes de cooperación pecuniaria a los particulares comenzaron a ser cosa común después de 1834, ya que el gobierno local carecía de fondos para las campañas militares. Ya había quedado atrás el superávit fiscal de la década anterior. Además, las divisiones nacionales impedían al gobierno general apoyar a los gobiernos estatales en su lucha contra los “bárbaros”, la denominación más utilizada para referirse a los nómadas. Ello condujo a un resentimiento creciente de la población del estado contra el gobierno federal. En diciembre de 1834 un periódico chihuahuense, *El Fanal*, pedía de plano la anexión a Estados Unidos para obtener protección; según ese periódico, no tenía sentido seguir vinculado a una Federación que era incapaz de aliviar el sufrimiento local.

El estado de guerra impuso un creciente militarismo en el estado. En septiembre de ese mismo año de 1834, el Congreso local nombró gobernador del estado al comandante militar, el coronel José Joaquín Calvo. De ese modo se unificaban los mandos civil y militar en una sola persona. Calvo tomó diversas medidas contra los nómadas; por ejemplo, la prohibición del comercio con apaches y comanches bajo pena de muerte, la devolución a sus propietarios del ganado recuperado de manos de los indios, el cobro de derecho de peaje como contribución de guerra, entre otras; también fomentó la dotación de armamento a los vecinos de haciendas y ranchos y organizó las milicias urbanas y rurales.

Aunque la guerra contra los “bárbaros” consumía buena parte del esfuerzo chihuahuense, la economía, la sociedad e incluso la cultura mostraban signos de vitalidad. A fines de 1835 se descubrían unas riquísimas vetas de oro en el extremo suroeste del estado. La noticia, como en la época colonial, atrajo a gran número de pobladores que pronto darían vida a un nuevo mineral: Guadalupe y Calvo. Lo de Guadalupe venía del culto guadalupano, mientras que lo de Calvo venía del apellido del gobernador y comandante militar. En 1836 inversionistas ingleses instalarían allí la primera máquina de vapor en el estado.

Calvo era un ferviente partidario de la educación pública. Donó su sueldo de gobernador para apoyar el funcionamiento de diversas instituciones educativas; esa inusitada decisión garantizó la subsistencia de la escuela lancasteriana en la capital del estado, fundada apenas en 1834 y dirigida por el profesor francés Bernard Gignour. En marzo de 1835 abrió sus puertas una escuela preparatoria, con el nombre de Instituto Literario del Estado, a cargo del abogado José María Bear. El 3 de abril de ese mismo año veía la luz el primer número del *Periódico Oficial del Estado*, donde se dio espacio a varios poetas locales, como Joaquín Arellano y Anastasio de Nava. De esta época son también las primeras obras geográficas sobre Chihuahua: las *Noticias estadísticas*, de José Agustín de Escudero, y el *Ensayo estadístico del estado de Chihuahua*, de Pedro García Conde. Estas dos obras ahora son de consulta obligada para cualquier estudioso.

LA PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS

La nueva guerra contra los nómadas tuvo lugar en un territorio muy diferente al de un siglo atrás. Para la década de 1830 el comercio con Santa Fe se había consolidado y una numerosa aunque dispersa población estadounidense comenzaba a irrumpir en los terrenos que antes eran del dominio de un gran número de grupos indios sedentarios y nómadas. Estados Unidos mostraba ya una gran dinámica demográfica gracias a la enorme emigración europea, que haría que casi 40 millones de personas se asentaran en ese país entre 1820 y 1930. Parte de esa creciente población se había dirigido a las grandes llanuras del medio oeste y de allí a Texas, Nuevo México y California.

Ese gigantesco movimiento de población tenía dos efectos que eran muy evidentes en la frontera septentrional de México en los años treinta del siglo xix: por un lado, los grupos indios se veían obligados a emigrar hacia el sur empujados por el avance del poblamiento estadounidense, y por otro, muchos de los grupos belicosos hallaron en esa misma expansión estadounidense un mercado para los productos robados en México. Dicho de otro modo, los apaches —y los comanches, nuevos protagonistas de este escenario violento— obtuvieron caballos, alcohol y armas de fuego a cambio de las cabezas de ganado que obtenían de sus ataques a las haciendas y ranchos mexicanos. Como se deja ver en la prohibición decretada por Calvo, algunos comerciantes mexicanos, como ocurría en la época colonial, también participaban en ese comercio. Los beneficiarios de ese comercio, sedentarios y mexicanos, es un tema que debería estudiarse más. El resultado fue que los apaches mejoraron enormemente su capacidad guerrera. Esta mejora, como ya se dijo, tenía lugar al mismo tiempo que cundía la desorganización general de los sistemas defensivos mexicanos y cuando se hacía evidente el enorme divisionismo político del nuevo país. Ambos hechos debilitaban aún más la capacidad de respuesta del poder público y de la misma sociedad.

El gran crecimiento demográfico estadounidense —uno de los

efectos más claros de la Revolución industrial europea— contrastaba con un aumento por demás lento de la población mexicana; en el norte de México, tal vez como resultado del retorno de la guerra apache, el crecimiento demográfico fue discreto, si bien un poco mayor al del país en su conjunto. Por esa razón la población mexicana era incapaz de avanzar en la ocupación de mayores porciones del enorme territorio septentrional.

Esa incapacidad se mostraba claramente en Texas. En 1821, como se vio, el gobierno mexicano autorizó el arribo de colonos angloamericanos a esa provincia. El objetivo era aumentar rápidamente la población para lograr una mejor explotación de los recursos naturales —que se consideraban de una enorme riqueza y abundancia— y con ello favorecer la prosperidad nacional. Los proyectos de los Austin, Moisés y su hijo Stephen, dieron resultado: la población de Texas aumentó de menos de 2 500 en 1821 a cerca de 40 000 en 1836. Este crecimiento, sin embargo, no fue visto con buenos ojos por los gobernantes mexicanos, porque era evidente que la gran mayoría de la nueva población era estadounidense y porque los principales contactos texanos eran con ciudades e intereses estadounidenses. A partir de 1827, por lo menos, hubo voces en México que advertían que Texas corría el riesgo de perderse; el riesgo era aún más cierto en vista del interés estadounidense por expandir su territorio a costa de las débiles provincias septentrionales mexicanas. Con base en las recomendaciones del general Manuel Mier y Terán, el gobierno mexicano intentó contrarrestar, a partir de 1830, el fenómeno de extranjerización de Texas enviando soldados y colonos mexicanos. Pudo enviar más soldados, pero no más pobladores.

Al establecerse la primera república centralista en 1835-1836, los texanos decidieron independizarse de México. Desde tiempo atrás habían buscado separarse de Coahuila y de su capital Saltillo y formar un nuevo estado de la República Mexicana. En ese sentido, los colonos texanos coincidían con los grupos políticos de buena parte de las entidades septentrionales que apoyaban el sistema federalista; es decir, una república compuesta por estados libres y soberanos. Al imponerse la república centralista mediante

las Siete Leyes, los estados fueron sustituidos por departamentos cuya autoridad recaía en un gobernador nombrado por el presidente de la República; además, el Poder Legislativo, que se organizaría en una Junta Departamental, quedaba reducido a una mera instancia de consulta del Ejecutivo estatal. Ante eso, los colonos texanos no vieron ninguna posibilidad de sostenerse como parte de la República Mexicana. La guerra estalló, y a pesar del esfuerzo militar mexicano, encabezado por el inefable Santa Anna, los texanos lograron su objetivo. En 1836 nació la República de Texas.

Los acontecimientos texanos no tuvieron un efecto directo en Chihuahua, pero esta entidad sí padecería su secuela. Por principio de cuentas, en 1837 una fuerza militar chihuahuense, comandada por el coronel Cayetano Justiniani, tuvo que trasladarse a Nuevo México para sofocar una rebelión que parecía tener un trasfondo texano. Esa rebelión le costó la vida al gobernador local, el general Albino Pérez. En 1841 y una vez más en 1843, las fuerzas chihuahuenses acudieron nuevamente a Nuevo México para combatir dos expediciones texanas que intentaban controlar el comercio de Santa Fe. Texas se mantuvo como república independiente entre 1836 y 1845. Cuando se incorporó a Estados Unidos, la guerra entre este país y México fue inevitable.

Los pobladores sedentarios de Chihuahua resintieron una creciente belicosidad de los “bárbaros”, que fue atribuida por algunos sectores del gobierno mexicano a la ayuda texana y estadounidense. Lo cierto es que desde 1836 Chihuahua vivió años de gran precariedad. La guerra contra los apaches consumía los escasos recursos públicos. Algunos extrañaban las grandes sumas que el gobierno colonial invertía en la defensa del septentrión. El Supremo Tribunal de Justicia fue cerrado por falta de fondos, los burócratas y soldados dejaron de recibir sueldos, y hasta el *Periódico Oficial* fue clausurado durante nueve meses. Algunos de los vecinos más ricos de la capital, como Ángel Trías y el acaudalado francés Esteban Curcier, organizaron por su cuenta una suscripción pública para sostener una sección de 100 hombres armados mientras durara la guerra. Numerosos ranchos y pequeños poblados mineros y ganaderos fueron abandonados por causa de los

constantes ataques de los nómadas. Poca gente se arriesgaba a salir sola a los caminos, temiendo ser víctima de robos o incluso sufrir heridas y muerte por parte de los apaches. El “camino de la plata”, entre Jesús María y Chihuahua, era atacado con frecuencia. Como parte de esa crisis general, las escuelas de varios poblados dejaron de funcionar. En Buenaventura, en 1836, hubo una intencional sublevación de varios vecinos que estaban desesperados ante la falta de apoyo gubernamental para enfrentar a los apaches. El gobierno general, alegando la organización de una campaña para reconquistar Texas, se mostraba insensible ante las solicitudes de ayuda que le formulaban no sólo Chihuahua, sino también los demás estados norteros asolados por los ataques.

En diciembre de 1839 el gobernador José María Irigoyen tomó una decisión difícil: contratar a un ejército privado para combatir a los nómadas. Al mando del irlandés Santiago Kirker, esta fuerza compuesta por 200 hombres haría la guerra a los apaches durante cuatro meses. Kirker recibiría un sueldo de cuatro pesos diarios y los soldados uno de cuatro reales. Para financiar este gasto, el gobernador tuvo que fijar una contribución extraordinaria de 100 000 pesos a los habitantes del estado, además de reducir los sueldos de los empleados gubernamentales. Esta contratación, que ilustraba con elocuencia las dificultades creadas por la vieja guerra que ahora retornaba, fue cancelada en mayo de 1840 por el nuevo comandante militar.

Este nuevo funcionario era el general Francisco García Conde, un militar de 36 años originario de Arizpe, Sonora, hijo de Alejo García Conde, el último comandante militar de la Nueva Vizcaya. Con el apoyo de la Junta Departamental, el presidente de la República lo designó más tarde gobernador del departamento. A pesar de su carrera militar, García Conde no comulgaba del todo con el belicismo de algunos sectores, expresado por ejemplo por José Agustín de Escudero.

“Guerra a muerte a los apaches” era la divisa de Escudero y de otros. Pero García Conde, buen conocedor de la estrategia española, insistió en el arreglo de pactos y tratados de paz con los apaches, con los que logró buenos resultados, a pesar del gasto

tan grande que implicaba la dotación de raciones y subsidios a los indios pacificados.

DIVISIÓN DE LAS ÉLITES Y GUERRA CONTRA ESTADOS UNIDOS

El régimen político colonial tenía la virtud de resolver las divergencias entre grupos y sectores políticos y económicos en el marco de la estructura política, es decir, sin llegar a la violencia. Al nacer el nuevo país la estructura colonial fue destruida y hubo necesidad de edificar una nueva estructura política capaz de mantener unida a la nación y de preservar el orden público. Como ya se vio, ese proceso se caracterizó por las grandes divisiones y enfrentamientos, que expresaban precisamente el desacuerdo entre los diversos grupos políticos sobre cómo formar el nuevo país. Si la destitución del emperador Iturbide en 1823 fue pacífica y si el ascenso de Anastasio Bustamante en 1829 provocó pequeños encuentros armados, la instauración de la república centralista en 1835 generó mucha más violencia armada. En Sonora, Coahuila, Zacatecas y Tamaulipas se sucedieron los enfrentamientos, y en la última entidad incluso surgieron grupos que propugnaban por la creación de una nueva república, la del Río Grande. Yucatán se separó del país entre 1839 y 1848. El centralismo intentaba concentrar las decisiones políticas fundamentales en el gobierno general con sede en la Ciudad de México, lo que significaba limitar grandemente el espacio político creado en torno a los gobiernos y congresos estatales. Tal espacio, como se dijo, dio entrada por primera vez a las élites regionales al poder. Esas élites fueron las que se opusieron firmemente a la instauración centralista.

Si se compara con lugares como Sonora y Coahuila, puede decirse que en Chihuahua el establecimiento del centralismo no generó grandes divisiones ni enfrentamientos. Los políticos chihuahuenses mostraban una gran obediencia al gobierno general y hasta presumían de ello. Sin embargo, la división surgió en 1843, cuando el gobierno de la República intentó imponer a sus simpa-

tizantes en el gobierno local para acrecentar el dominio de los militares santannistas.

A fines de 1842 el gobierno nacional ordenó la remoción del general Francisco García Conde, quien había hecho un buen papel como gobernante, en especial en la pacificación de los nómadas. Por esa razón, cuando se supo la noticia de su remoción, los vecinos principales de Chihuahua pidieron al supremo gobierno que rectificara su decisión. Pero el gobierno general no escuchó la voz local y nombró nuevo gobernador y comandante militar a un general originario de la Ciudad de México, José Mariano Monterde.

En junio de 1843 el gobierno centralista expidió las Bases Orgánicas, elaboradas por una asamblea nacional legislativa, cuyo fin era reorganizar la estructura gubernamental del país. Estas disposiciones no modificaban la facultad presidencial de nombrar a los gobernadores de los departamentos, pero sí introducían la modificación importante de que la Asamblea Departamental tendría facultades legislativas más amplias que las de la Junta Departamental, figura existente desde 1836. En octubre de 1843, en ocasión de las elecciones para diputados de la Asamblea Departamental, Monterde intentó manipular el procedimiento para favorecer a sus simpatizantes.

La reacción no se hizo esperar. Encabezados por un rico e influyente personaje de la ciudad de Chihuahua, Ángel Trías, a la sazón senador por el estado, varios grupos se opusieron a las maniobras del gobernador Monterde. Denunciaron los vicios electorales y lograron que el Congreso general declarara nulas las elecciones, que tuvieron que repetirse. La respuesta de Monterde fue violenta: confiado en el creciente poderío de los militares en el gobierno central, aprehendió al senador Trías y más tarde lo desterró de Chihuahua. El año de 1844 transcurrió en medio de un enfrentamiento creciente entre el grupo de Trías y el de Monterde. En enero de 1845, poco después de que en la Ciudad de México los opositores de Santa Anna habían derrocado al pelele Valentín Canalizo, Monterde fue removido. A pesar de su salida, el ex gobernador logró dejar en su lugar a Luis Zuloaga, hermano mayor de Félix, miembros de una familia sonorenses radicada en Chihua-

hua desde tiempo atrás. El grupo de Trías, que ya se denominaba a sí mismo “liberal”, mantuvo su oposición al pelele de Monterde. Desgastada la negociación política, los liberales optaron por las armas. Con una buena organización y con gran apoyo en diversas zonas del estado, las tropas liberales sitiaron la ciudad capital en los primeros días de junio. Sin apoyo militar, pues el comandante militar había abandonado poco antes la ciudad, el gobernador Zuloaga se vio obligado a renunciar. Esta violenta negociación política era cosa inédita en la breve historia estatal.

En agosto de 1845, a los 36 años, el ya general Ángel Trías asumía por primera vez el cargo de gobernador, en medio de la algarabía de ricos y pobres de Chihuahua. Tenía una larga carrera política en el ayuntamiento de Chihuahua y también en las fuerzas locales que combatían a los apaches, lo que le valió el ascenso en el escalafón militar. Había estudiado en Europa, dominaba siete idiomas e incluso había sido amigo del barón de Humboldt. Sus negocios eran el comercio y la ganadería; era arrendatario de las haciendas Encinillas y El Sauz, propiedad de la familia Cossío. Junto con sus partidarios, muchos de ellos funcionarios y burócratas locales, abogados y empleados, Trías logró expulsar del gobierno local al grupo político que prefería los intereses centralistas. Pero era la primera gran división política de las élites chihuahuenses, en este caso con una gran participación popular, por lo menos en la ciudad de Chihuahua.

Trías no duró mucho en el gobierno local. Ante el ascenso del general Mariano Paredes y Arrillaga a la presidencia, cargo que obtuvo al derrocar a José Joaquín Herrera en diciembre de 1845, Trías prefirió renunciar antes que reconocer al nuevo mandatario. La caída de Paredes y Arrillaga en agosto de 1846 marcó el final del centralismo, pues el Congreso general restableció la Constitución federal de 1824. Entonces Trías volvió al poder local como gobernador constitucional para el periodo 1847-1849.

Al grupo político de Trías le correspondió enfrentar la guerra contra Estados Unidos a partir de 1846. Sin gran ayuda del gobierno central, lo que obligó a Trías a gastar parte de su fortuna en la compra de pertrechos militares, las fuerzas chihuahuenses enfren-

taron a las tropas invasoras en Temascalitos, no muy lejos de Paso del Norte, el 25 de diciembre de 1846; en febrero siguiente tuvo lugar la batalla de Sacramento. En ambas batallas los mexicanos fueron derrotados con facilidad por las tropas estadounidenses, al mando del coronel Alexander Doniphan. La desorganización y la falta de armamento de las tropas locales, resultado del desastre provocado por la lucha independentista y las dificultades para organizar el nuevo Estado, tenían el costo de la derrota. Los invasores ocuparon la capital el 2 de marzo, y el gobierno local tuvo que refugiarse en Parral y más tarde en Guadalupe y Calvo. Sin embargo, las tropas extranjeras abandonaron el estado a mediados de mayo con rumbo a Coahuila, lo que permitió al gobierno retornar a la capital. Eso dio un respiro a los chihuahuenses mas no a los combatientes de otras regiones del país: el 14 de septiembre de 1847 las tropas estadounidenses tomaron la Ciudad de México.

Sin embargo, la pesadilla no terminaba. A pesar de que el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo que dio fin a la guerra, tropas estadounidenses comandadas por el brigadier Sterling Price cruzaron la frontera de Nuevo México e invadieron de nueva cuenta el estado. El 8 de marzo ocuparon la capital; el gobernador Trías decidió retirarse hacia el sur, a Rosales. El 16 de marzo los estadounidenses iniciaron sus ataques sobre esta plaza. Los chihuahuenses resistieron dos días, hasta que agotaron las municiones. Trías, Justiniani y otros jefes y oficiales fueron capturados. Los estadounidenses permanecieron en Rosales hasta el 9 de julio; el 24 de ese mismo mes abandonaron la ciudad de Chihuahua. A principios de agosto concluía la segunda invasión estadounidense. Así terminaba esta nueva clase de guerra por el territorio.

En el Tratado de Guadalupe Hidalgo se estableció la nueva frontera entre los dos países: México cedía el vasto territorio formado por la Alta California y Nuevo México; también se asentaba que México reconocía plenamente la incorporación de Texas a la Unión Americana. México recibió a cambio 15 millones de pesos. Con el triunfo estadounidense se hizo realidad lo que algunos habían previsto desde fines del siglo XVIII, es decir, que si el septen-

trión novohispano o mexicano no lograba poblarse y desarrollar una economía estable (agrícola), el territorio sería usurpado por los estadounidenses, un país que casi desde el momento de su nacimiento (1776) consideró como cosa natural su expansión hacia el oeste a costa de las posesiones mexicanas e inglesas (Canadá). Los mexicanos sabían que las ideas sobre el “Destino Manifiesto” estadounidense no tenían nada de fantasía.

Después de la guerra el pesimismo cundió a lo largo de la República, y más todavía por el estallido de la llamada “guerra de castas” en Yucatán y de un conflicto en la Sierra Gorda, en Querétaro. Además, el norte mexicano entero se vio envuelto en una creciente violencia por la intensificación de los ataques de los nómadas, sabedores, sin duda, de la difícil situación mexicana. Cabe resaltar que el cambio de la frontera permitió a los nómadas atacar en México y huir hacia Estados Unidos. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en la cláusula 11, se estableció el compromiso de Estados Unidos de evitar el paso de los nómadas hacia México y que en caso de daños pagaría indemnizaciones, obligación que no cumplió.

Para colmo, una epidemia de cólera morbus azotó Chihuahua en 1849, causando unas 6 000 muertes; fue más grave que la de 1833. Una de las víctimas fue el general Francisco García Conde. Como remate, los años de 1849 a 1851 fueron sumamente secos, lo que hizo escasear las cosechas y elevar los precios de los alimentos. Ni la aparición del primer fotógrafo en la ciudad de Chihuahua, el francés Frazier, en octubre de 1851, alcanzó a compensar el cúmulo de malas noticias. Ahora cabe preguntarse cómo sobrevivió el país en esos años de grave crisis. No había Nación, coincidían algunos observadores.

LA HEGEMONÍA LIBERAL

Al mediar el siglo XIX el estado de Chihuahua se hallaba en una situación desesperada. En su informe al Congreso local de febrero de 1849, el gobernador Trías decía:

Nuestro Estado, puede decirse que es hoy un vasto desierto, en donde se hallan esparcidas algunas pequeñas y miserables poblaciones, las que no tienen seguridad, ni bienestar sus habitantes; y a pesar de que la naturaleza ha prodigado a nuestro suelo abundantes riquezas y poderosos elementos de prosperidad, apenas se han entendido en nuestra sociedad, porque la civilización se halla en su cuna y nuestra población es por demás diminuta. ¿De qué nos sirven tantos dones con que la Divina Providencia ha colmado nuestro país, si la industria es apenas conocida; si la agricultura gime bajo la ferocidad de los salvajes; si nuestro comercio no tiene la menor seguridad para sus giros; si la minería se halla paralizada; si nuestra población es tan escasa que toda la que tiene el Estado diseminada en una área de más de diez y seis mil leguas cuadradas podría contenerse en una ciudad de tercer orden?

Según las cifras disponibles, las cuales no son muy confiables, la población chihuahuense pasó de 139000 en 1831, año del reinicio de la vieja guerra, a 164000 en 1857, es decir, aumentó 17% en 26 años. Este crecimiento contrasta con el registrado entre 1788 y 1823. Como se vio, en esos 35 años la población pasó de 64000 a 112000: un aumento de más de 75%. De cualquier modo, crecer 17% entre 1831 y 1857 era un indicio chihuahuense más que sobresaliente, pues el país apenas había crecido 3% en el mismo lapso.

Además, la distribución de la población había cambiado: las jurisdicciones ubicadas al norte de la capital del estado (Guerrero, Aldama, Galeana y Paso del Norte) redujeron su población de manera considerable, unos 6000 habitantes menos en el periodo. La comparación de las cifras de los cuadros VI.3 y VII.1 es ilustrativa. A diferencia de 1823, en que 33% de la población habitaba la porción norteña, en 1857 sólo lo hacía 19% de la población estatal. Esta disminución obedeció a la intensidad de los ataques de los "bárbaros", que erosionaron la ocupación de las zonas más periféricas y desprotegidas. No eran escasas las haciendas y ranchos abandonados, ni tampoco las pequeñas explotaciones mineras que quedaron desiertas. Incluso, no muy lejos de Santa Rosalía, sobre el Conchos, podían apreciarse parcelas y canales enmonta-

CUADRO VII.1. *Distribución de la población de Chihuahua en 1857*

<i>Cantones</i>	<i>Habitantes</i>
Chihuahua	21 520
<i>Sur</i>	
Allende	7 519
Hidalgo	11 579
Mina	8 500
Matamoros	8 173
Victoria	11 363
Rosales	11 028
Abasolo	12 211
Rayón	4 683
Jiménez	12 626
Morelos	11 537
Balleza	12 433
TOTAL SUR	111 652
<i>Norte</i>	
Guerrero	13 191
Aldama	6 270
Bravos	6 111
Galeana	5 329
TOTAL NORTE	30 901
SUMA TOTAL	164 073

FUENTE: Anexo de Manuel Orozco y Berra a la *Memoria del Ministerio de Fomento, Colonización y Comercio de la República Mexicana*, escrita por el ministro del ramo C. Manuel Siliceo, Imprenta de Vicente García Torres, México, 1857.

dos, lo que reflejaba el abandono y el desuso, según la crónica del estadounidense John Bartlett de 1852. Los nómadas parecían dueños del territorio y recordaban los días terribles de las décadas de 1760 y 1770.

En estos años Chihuahua participó en las iniciativas de otros estados para formar coaliciones contra los “bárbaros”. En 1851 las convocatorias fueron de Zacatecas y Nuevo León, y en febrero de 1852, otra vez de Zacatecas. Estas coaliciones de estados obedecían a la impotencia del gobierno federal para enfrentar en serio

las incursiones de los nómadas. En principio el gobierno general vio con simpatía esas iniciativas, aunque más tarde, en diciembre de 1852, el Senado de la República prohibió las coaliciones, temiendo fragmentaciones y poderes militares paralelos.

Una parte importante de la población local eran los habitantes de pequeños pueblos y rancherías: los rancheros, que surgieron a lo largo del siglo XVIII, en algunos casos al lado de las misiones jesuitas y franciscanas como enclaves de población civil no india, como en el valle del Papigochic. En otros casos se formaron a partir de los presidios y colonias militares creados por las autoridades españolas para combatir a los nómadas, como en Galeana y Namiquipa, dotadas de tierra por Teodoro de Croix en 1778, o en Santa Rosalía, sobre el río Conchos. Los rancheros eran pequeños productores agrícolas y ganaderos que utilizaban preferentemente el trabajo familiar para realizar sus actividades económicas. Con grandes familias extensas, estos rancheros tenían en las ayudas mutuas de sus parientes y vecinos uno de sus principales mecanismos para lograr su supervivencia. Por su ubicación en pequeños núcleos rurales, los rancheros se convirtieron en víctimas predilectas de los ataques apaches. Por esa razón también se vieron obligados a ser soldados; así, la defensa de sus vidas y propiedades se convirtió en un elemento básico de su reproducción social.

La debilidad gubernamental descrita en líneas anteriores —y que en estos años se mostraba en el fracaso de las colonias militares creadas por el gobierno central en julio de 1848— hizo que estos rancheros asumieran en gran medida la lucha contra los apaches. Ello dio lugar a una forma de organización social y de pensamiento por demás peculiar, en la que destacaba una gran independencia y autonomía con respecto al poder público. Frente a la amenaza de los nómadas y casi sin ningún amparo gubernamental, más valía ser valiente, diestro en las armas, disciplinado, laborioso y económico, en el sentido del ahorro.

La minería mantuvo su vigor a pesar de todo. Al descubrimiento de Jesús María en 1821 siguió el de Guadalupe y Calvo en 1835. De allí los propietarios de las minas extrajeron enormes cantida-

des de plata; tal riqueza atrajo a no pocos extranjeros y empresarios de la Ciudad de México. En 1844 comenzó a funcionar una casa de moneda en Guadalupe y Calvo, que acuñó casi cuatro millones y medio de pesos en monedas tanto de plata como de oro. Este establecimiento cerró en 1850. Por su parte, la casa de moneda de Chihuahua, que funcionó entre 1811 y 1814, fue reabierta en 1832 y hasta 1856 había acuñado casi ocho millones de pesos en monedas de plata (la mayor parte), oro y cobre. El comercio, a pesar de la amenaza nómada, continuaba siendo buen negocio, por lo menos para los grandes comerciantes. Ya se había abierto la ruta directa a San Antonio de Béjar que explotaban individuos tan ricos como el comerciante y terrateniente José Cordero, quizá el chihuahuense más adinerado de la época. La apertura de esta nueva ruta muestra que, pese a las grandes hostilidades de los "bárbaros", los negocios dejaban buenos dividendos; la posibilidad de obtener beneficios era aún más poderosa que la posibilidad de sufrir ataques, lesiones y hasta la muerte. Como los capitanes de presidio del siglo anterior, el coronel Emilio Langberg, nombrado inspector de colonias militares en Chihuahua en mayo de 1851, era un activo comerciante que buscaba beneficios privados, en particular con el tabaco, con base en su misión como militar en la zona del Bolsón de Mapimí.

La lucha política era más bien asunto de las ciudades y en ellas era sobre todo negocio de élites, es decir, de los terratenientes, comerciantes y mineros, y en menor medida de los burócratas y de los escasos integrantes de la clase media. Por ser la localidad más importante, la vida política tenía su escenario sobre todo en la capital del estado. Estos políticos eran los que recibían las noticias de los acontecimientos de la Ciudad de México y de los estados vecinos; eran quienes transmitían las órdenes del centro o bien los que se oponían a esas órdenes. Trías y el senador José María Urquidi eran más proclives a mantener cordialidad con el gobierno general, mientras que el grupo encabezado por Cordero era intransigente en la defensa de la soberanía local. Trías y Cordero no tardaron en convertirse en acérrimos enemigos. Puede afirmarse que fuera de la ciudad de Chihuahua la vida política

transcurría en paz, siempre y cuando hubiera respeto por la autonomía de los pueblos para manejar sus propios asuntos, su propia precariedad. Una descripción de 1849 del viajero francés Philippe Rondé, incluida en el libro *Viajantes por Chihuahua*, es ilustrativa: “De los 14 000 habitantes de la ciudad [de Chihuahua] dos tercios son indios o mestizos y el otro tercio es blanco. Aquí como en todo México, los blancos se hallan a la cabeza del gobierno y ellos se distribuyen las funciones y la caja pública”.

La unidad política que se había logrado en agosto de 1845 con el triunfo de los liberales encabezados por Trías, comenzó a resquebrajarse en 1849. En marzo de ese año Ángel Trías fue elegido gobernador del estado para el cuatrienio 1849-1852. Sin embargo no duró mucho tiempo en el cargo, en virtud de sus desacuerdos con los diputados. El punto de división, entre otros, fue la aprobación de un decreto el 25 de mayo de 1849 que fijaba precios a las cabelleras de los apaches: 150 pesos por cada apache muerto y 250 por cada prisionero de guerra o india mayor de 14 años. Trías se opuso, lo mismo que los periódicos de la Ciudad de México. Trías alegó que era inhumano; los diputados respondieron que en la guerra todo se valía. El gobernador vetó el decreto, pero los diputados volvieron a aprobarlo y Trías se vio obligado a expedirlo. Otras dificultades con la legislatura lo orillaron a renunciar en noviembre de 1850.

Trías parecía identificarse mucho más con los intereses políticos que se originaban en la Ciudad de México que con los intereses locales. Esta afirmación, que es una hipótesis de trabajo, parece no ser del todo descabellada si consideramos que luego de su renuncia como gobernador conservó el cargo de comandante militar. Desde allí sostuvo un agudo conflicto con muchos de sus antiguos amigos y aliados de 1845. Cuando el acaudalado comerciante José Cordero llegó a la gubernatura en enero de 1852, Trías trabó un agudo conflicto que incluso involucró al ministro de Guerra, quien acusó a Cordero de intentar rebelarse contra el gobierno general. Cordero respondió, con poca mesura, que efectivamente preparaba fuerzas armadas pero para la guerra contra los nómadas, una guerra —decía Cordero— que los chihuahuenses

libraban solos, sin ningún apoyo del gobierno de la República. La noción de que Chihuahua era una entidad abandonada por el gobierno federal era más que clara.

Los acontecimientos políticos de la Ciudad de México colocaron de nuevo a Santa Anna en el poder, marcando el retorno del grupo político encabezado por Lucas Alamán y que ya para entonces era conocido como “conservador”. Al igual que en 1835, este grupo afirmaba que, lejos de aglutinar al país, la república federal lo dividía y debilitaba; por ello era necesario contar con un gobierno central fuerte que tuviera grandes capacidades y facultades. Ése era el proyecto que subyacía al último regreso de Santa Anna al poder en 1853, con el Plan del Hospicio. En Chihuahua, el general Trías, que distaba de ser el hombre de 1845, encabezó a la fuerza santannista local que desplazó al gobernador Cordero y al grupo político más identificado con los federalistas o “liberales”, como también se conocía a este grupo político. Trías ocupaba una vez más la gubernatura el 23 de diciembre de 1852. Al profesor Francisco Almada no le gustaba repasar este tramo de la vida de Trías.

En este periodo tuvo lugar un nuevo enfrentamiento con los norteamericanos, en esta ocasión en torno a La Mesilla, una parte de Chihuahua y Sonora que los ingenieros consideraban vital para tender las líneas del ferrocarril que uniría a la costa atlántica con el Pacífico. El gobernador de Nuevo México intentó acelerar las negociaciones diplomáticas por medio de las armas. El gobernador Trías dejó el cargo en manos de Luis Zuloaga, el gobernador depuesto por la fuerza en junio de 1845, y salió al frente de las tropas (500 de infantería, 60 de caballería, ocho cañones y muchas mujeres) para impedir el nuevo despojo territorial. La negociación entre los dos países concluyó en el tratado de La Mesilla, también llamado la “compra Gadsen”, de diciembre de 1853. Así se evitó un nuevo enfrentamiento armado, pero el país —y Chihuahua— perdió una nueva porción territorial. Los chihuahuenses quedaron más que frustrados.

El sueño conservador y centralista fue destruido rápidamente. En agosto de 1855, ante el éxito del movimiento rebelde organizado en torno al Plan de Ayutla, encabezado por Juan Álvarez en

Guerrero, Santa Anna se vio obligado a abandonar el país. En Chihuahua, Trías intentó acomodarse con los nuevos ganadores sumándose el 30 de septiembre de 1855 al Plan de Ayutla. De poco le valió la maniobra, porque el general Álvarez, desde el Ejecutivo federal, nombró al abogado Juan N. Urquidi nuevo gobernador. Así, sin violencia, Trías fue expulsado del gobierno. Sus antiguos correligionarios (de la lucha de 1844-1845) controlaron desde entonces el poder local. Tres de estos personajes (José Eligio Muñoz, Pedro de Irigoyen y Alejo García Conde) participaron en los trabajos que concluyeron en la elaboración de la nueva Constitución General de 1857. Ésta ratificaba la organización republicana federal del país e introducía las reformas que separaban al Estado de la Iglesia y que decretaban la desamortización de los bienes de manos muertas; es decir, los bienes de la propia Iglesia y de los pueblos de indios. La reacción conservadora no se dejó esperar, y comenzó entonces la llamada Guerra de Reforma, de 1858 a 1860. Félix Zuloaga, hermano de Luis, encabezó a los enemigos del partido liberal.

Entre enero y abril de 1858 hubo diversos brotes rebeldes en Chihuahua, algunos de ellos encabezados por curas, que fueron sofocados con relativa facilidad. En abril y noviembre de 1859 los alzados conservadores repitieron sus intentonas, sin mayor éxito, a pesar de que en noviembre derrotaron a las fuerzas gubernamentales cerca de la ciudad de Chihuahua. El enfrentamiento mayor, sin embargo, ocurrió en enero y luego en julio de 1860, en virtud de las invasiones de los "tulices", una fuerza originaria de Teúl, Durango, comandada por el general español Domingo Cajén. En la primera invasión Cajén ocupó el área de Parral; en la segunda logró tomar la capital del estado. En estos acontecimientos bélicos se destacó la figura del coronel Luis Terrazas, entonces jefe político del cantón de la capital del estado. En septiembre de 1860, a sus 31 años, Terrazas ocupaba por primera vez la gubernatura. Nadie lo sabía, pero en Chihuahua comenzaba una nueva época; una nueva generación se hacía cargo del poder público y, también, del poder del dinero.

Los conservadores y la Iglesia nunca tuvieron en Chihuahua

gran poder de convocatoria. Dos hechos lo muestran. El primero, que durante 1858 y 1859 las tropas chihuahuenses fueron enviadas a combatir tan lejos como Tepic, y el segundo, que las acometidas conservadoras más poderosas fueron obra de las fuerzas duranguenses del general Cajén. A pesar de los repetidos levantamientos, la relativa facilidad con que fueron sofocados muestra que los grupos sociales locales simpatizaban sobre todo con la postura liberal. El historiador Fuentes Mares sostiene que el fracaso del Plan de Tacubaya en Chihuahua se explica porque la gente acomodada de Chihuahua, a diferencia de la de otros lugares del país, militó en el bando liberal. Y sobre la Iglesia indica que a los conservadores les faltó el apoyo del clero, poco numeroso y carente de una alta jerarquía. Esta afirmación deja de lado al grueso de la población, pero en realidad sabemos muy poco de la religiosidad popular, un tema que espera estudios detallados. Una cosa era venerar a san Isidro Labrador y otra muy distinta apoyar con las armas al bando de los conservadores.

LOS NUEVOS RICOS

Uno de los objetivos de los liberales era impulsar la economía con la desamortización de los bienes eclesiásticos y de los bienes de los pueblos de indios, bienes que se consideraban en “manos muertas” porque estaban fuera del mercado, de la libre compra-venta. Los liberales creían que si esas tierras y bienes se introducían al mercado impulsarían fuertemente a la economía nacional y darían lugar a la formación de una clase media agraria. Derrotada la fuerza conservadora, los liberales procedieron a impulsar esas reformas. En Chihuahua, el gobernador Terrazas publicó el decreto del 25 de enero de 1861, que autorizaba y fijaba las reglas para esas ventas. En el decreto se establecía que el producto de las ventas ingresaría a la tesorería estatal, cosa que contradiría a la ley general del 5 de febrero siguiente. Esta contradicción mostraba que aún no se resolvían del todo las relaciones entre el gobierno general y los gobiernos locales. Se vivía todavía la fragilidad

de la estructuración política nacional. Terrazas también vendió terrenos baldíos y dispuso de diversas rentas federales, todo ello contra las disposiciones del presidente Benito Juárez.

Pero Terrazas impulsó las reformas, mediante la publicación de las Leyes de Reforma, instauró el registro civil en abril de 1861 y extinguió las diputaciones territoriales de minería, que fueron sustituidas por los jueces de primera instancia. Terrazas resultó electo para gobernar el estado en el periodo 1861-1865.

El proceso de desamortización de los bienes de la Iglesia y la consolidación de Terrazas pasaron a segundo plano ante la invasión francesa. Provocada inicialmente por la suspensión de pagos de la deuda externa decretada por el presidente Juárez a mediados de 1861, la aventura francesa en México tuvo que ver también con el proyecto de varios políticos mexicanos que seguían creyendo que el país requería de un gobierno monárquico estable, y para ello convencieron a Maximiliano de Habsburgo de que viniera al país como emperador. A mediados de 1863 la capital fue tomada por los franceses, por lo que el gobierno juarista se retiró al norte, en un viaje que culminaría el 12 de octubre de 1864 cuando llegó a la ciudad de Chihuahua. Allí permaneció casi dos años. En un principio, la relación entre Juárez y Terrazas fue más que tensa. Enemigos de Terrazas habían advertido a Juárez que aquél preparaba una traición al estilo de la del gobernador neoleonés Santiago Vidaurri. Varios puntos de fricción dañaban esa relación política, entre ellos el control de las rentas federales, el envío de tropas locales al sur del país y el manejo de la desamortización de bienes. Por ello, el gobierno juarista impuso estado de sitio y se deshizo de Terrazas. En junio de 1864 designó gobernador al viejo general Trías; Terrazas intentó resistir por la fuerza, pero finalmente cedió. Juárez vivió en la ciudad de Chihuahua durante varios meses, hasta que en agosto de 1865, alarmado por el avance de las tropas francesas, se retiró al Paso del Norte. Los franceses tomaron la capital del estado en agosto, pero nunca se atrevieron a incursionar más allá. Sin duda, la cercanía de Juárez con el gobierno estadounidense inhibió semejante maniobra militar. En noviembre Juárez regresó a Chihuahua, pero en diciembre de 1865

nuevamente se refugió en Paso del Norte. Allí permaneció hasta junio de 1866, una vez que las fuerzas juaristas recuperaron la capital del estado.

En las elecciones de 1865 los chihuahuenses votaron nuevamente por Terrazas, quien resultó electo para el periodo 1865-1869. Para entonces Terrazas y Juárez habían limado asperezas y mostraban una gran cercanía política. En ese tiempo, Terrazas se mostró leal con el gobierno juarista, participando incluso en la organización de las fuerzas armadas y en su dirección. Así se explica que Juárez lo haya ascendido a general en diciembre de 1865 y que le confiriera el cargo de jefe de las tropas republicanas que actuaban en Chihuahua. Los malos momentos entre los dos habían quedado atrás. Los terracistas serían siempre de los primeros juaristas.

Derrotada la fracción conservadora, sin un clero poderoso y sin pueblos de indios situados en lugares o áreas estratégicas, la desamortización en Chihuahua se llevó a cabo de manera más bien pacífica. Francisco R. Almada calcula que en esos años se vendieron más de 160 fincas urbanas y rústicas que reeditaron unos 400 000 pesos al erario local. Sin embargo, el traslado de estas propiedades a particulares redundó en el acaparamiento y en la concentración de la riqueza. Los terracistas sacaron grandes beneficios de esta enajenación de bienes eclesiásticos. El mismo Almada documentó la manera en que los miembros del grupo político en el poder adquirieron gran número de propiedades provenientes de la desamortización. Terrazas, por ejemplo, adquirió buena parte de la hacienda Encinillas —aquella que arrendaba Trías—, así como terrenos en los distritos de Galeana y de la capital del estado. Las familias Culty, Cordero y Zuloaga, entre otras, también entraron al reparto de esa riqueza.

El gran beneficiario de la lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano fue Luis Terrazas. Con el prestigio obtenido por sus servicios en favor de la República y con el cercano apoyo del presidente Juárez, Terrazas y su grupo mostraron una solvente hegemonía política a lo largo y ancho del estado. Terrazas tenía apenas 38 años; en cambio, Ángel Trías, el gran perso-

naje de la generación anterior, fallecía en agosto de 1867. En 1869 el general Terrazas ganaba las elecciones para la gubernatura una vez más, en este caso para el cuatrienio que concluía en 1873.

Para entonces las propiedades ganaderas del general Terrazas ya alcanzaban la respetable cifra de 112 000 ha; pero en una sola operación, realizada en 1868, adquirió 386 000 ha más en la famosa y antigua hacienda Encinillas, un predio que un año antes había sido confiscado a la familia Martínez del Río por su apoyo al imperio de Maximiliano. Su vocación por la ganadería de gran escala conocía sus primeros éxitos, a pesar de los reiterados ataques de los apaches. Sin duda, en Chihuahua los avatares de la guerra apache en esos años no pueden entenderse sin considerar con todo cuidado el hecho de que el general Terrazas era uno de los ganaderos más poderosos y al mismo tiempo gobernador del estado. Dicho de otro modo, que lo público y lo privado coincidían en la lucha contra los nómadas, abigeos y contrabandistas. No parece coincidencia que un pariente de Terrazas, el coronel Joaquín de ese apellido, fuera el gran líder de la época en el combate a los nómadas.

A partir de 1871 Terrazas comenzó a diversificar sus inversiones. En ese año adquirió acciones de una fábrica textil ubicada en las afueras de la capital del estado, y en 1874 compró un molino de trigo. En 1879 incursionó en el negocio bancario al constituir el Banco Mexicano, junto con Antonio Asúnsolo, Luis Faudoa, Félix F. Maceyra y Miguel Salas. Terrazas había contraído matrimonio en febrero de 1852 con Carolina Culty, matrimonio del que surgieron 14 hijos. En la década de 1870 estos hijos comenzaron a casarse y con ello a crear relaciones de parentesco que dieron nuevos bríos al imperio económico terracista.

Terrazas era incondicional juarista. Apoyaba las reelecciones del presidente Juárez, tal vez porque éste apoyaba las suyas. En 1871, cuando Porfirio Díaz se alzó enarbolando el Plan de la Noria y la no reelección de gobernadores y presidentes, Terrazas encabezó las tropas para aplastar a los rebeldes. Desde diciembre de 1871 varios grupos se alzaron en Urique y Batopilas, y a mediados de 1872, casi coincidiendo con la muerte del presidente Juárez,

las tropas rebeldes del general porfirista Donato Guerra derrotaban a Terrazas en la hacienda de Tabalaopa y tomaban la capital del estado. Pero la derrota de los porfiristas en otros lugares del país debilitó su triunfo local. En septiembre de 1872 Guerra llegó a un acuerdo con Terrazas para abandonar el estado. Sin embargo, el mismísimo Porfirio Díaz se apareció en Chihuahua huyendo de las tropas federales. Díaz intentó disuadir a Donato Guerra de su acuerdo con Terrazas pero el 10 de octubre el rebelde oaxaqueño no tuvo más opción que rendirse a las fuerzas del gobernador Terrazas.

Sofocada la rebelión de Díaz, Terrazas entregó el poder al nuevo gobernador, el abogado Antonio Ochoa, electo para el cuatrienio 1873-1877. En este periodo de relativa tranquilidad, la economía local inició un tímido repunte; llegaron algunas inversiones extranjeras a la minería; se iniciaron las explotaciones de las salinas de Jaco y Palomas, y los servicios de diligencias llegaron de manera regular a distintos puntos del estado, e incluso a San Antonio, Texas. Se emitieron iniciativas para fomentar la educación obligatoria y en abril de 1876 las primeras líneas de telégrafo comunicaron a la capital del estado con Rosales; en agosto de 1877 las líneas unieron a la ciudad de Chihuahua con la capital de la República. Cuatro años después se instalaba la primera línea telefónica, que, no por coincidencia, comunicaba la oficina del Banco Mexicano con la Casa de Moneda.

Este periodo de relativa tranquilidad y prosperidad se vio súbitamente interrumpido por la rebelión, una vez más, de Porfirio Díaz, quien se oponía a la reelección del presidente Lerdo de Tejada. En junio de 1876 el hijo de Ángel Trías, del mismo nombre, se levantó en armas y sus fuerzas rápidamente tomaron control del gobierno estatal. En agosto, el general Terrazas, mostrando su lealtad al supremo gobierno, salió a combatir a los porfiristas. En septiembre las fuerzas leales, incluidas las de Terrazas, derrotaron a los rebeldes que se hallaban sitiados en la ciudad de Chihuahua. Una de las víctimas de esa batalla fue el general Guerra, el porfirista que había pactado la paz con Terrazas en 1872. De nuevo, el terracismo imponía su dominio en Chihuahua. Pero las

cosas en el resto del país no le favorecían. A pesar de ello, a la caída del sucesor de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, el gobierno local reconoció al abogado José María Iglesias como legítimo presidente, y más aún, el 7 de febrero de 1877, casi dos meses después de que Díaz había tomado la presidencia, los combates proseguían en Chihuahua. Fue necesario enviar una columna al mando del general Juan Caamaño para someter al estado dominado por los terracistas, que logró sin problemas. El 6 de febrero de 1877 comenzaba la época porfiriana en Chihuahua; para Terrazas significaba una grave derrota. Un antiguo amigo suyo, el abogado José Eligio Muñoz, fue nombrado gobernador del estado por el presidente Díaz.

VIII. LA SEGUNDA TRANSICIÓN (1880-1910)

HACIA LA LIQUIDACIÓN DE LOS NÓMADAS

LA PRESENCIA NÓMADA FUE COMBATIDA tenazmente por la población sedentaria chihuahuense. Era evidente la contradicción entre dos formas distintas de ocupar el territorio. Para los apaches, el robo de ganado en haciendas y ranchos mexicanos configuraba un patrón de subsistencia en el que participaba de manera muy intensa el comercio estadounidense. Las quejas de abigeato y contrabando que se sucedieron después de la guerra de 1848 expresaban el agravamiento de los despojos a terratenientes y rancheros mexicanos. Para éstos, los ataques apaches y de otros delincuentes dificultaban la actividad ganadera, el comercio y la agricultura, aparte del costo que tenían en pérdida de vidas. En la medida en que el poder gubernamental mostró una y otra vez su incapacidad para eliminar esa amenaza, en esa misma medida se mostraba la debilidad general de la ocupación de una amplia porción chihuahuense. La propiedad privada, base de la estructura social, no tenía las garantías suficientes: los nómadas y otros delincuentes, con su violencia persistente, la agredían en su médula. Si se quiere, la propiedad privada se fortalecía al otro lado de la frontera, vistas las claras conexiones entre los ataques de los nómadas y los comerciantes estadounidenses.

Como se puede ver en los cuadros VII.1 y VIII.1, el crecimiento de la población de Chihuahua se mantuvo lento entre 1857 y 1877. En esos veinte años apenas aumentó de 164073 a 180758, es decir, un 10%, tasa poco menor a la tasa en que crecía la población nacional. Ello contrastaba con el comportamiento de la población de Arizona, Nuevo México y sobre todo Texas, que vieron aumentar más de dos veces su población, de casi 700000 habitantes en 1860 a 1'750000 en 1880. Por otro lado, en Chihuahua la

CUADRO VIII.1. *Población de Chihuahua en 1877*

<i>Cantones</i>	<i>Habitantes</i>
Chihuahua	22 000
<i>Sur</i>	
Abasolo	13 776
Allende	4 022
Arteaga	14 378
Balleza	8 761
Camargo	14 914
Hidalgo del Parral	14 258
Jiménez	4 502
Matamoros	6 517
Meoqui	13 690
Mina	12 462*
Morelos	7 159
Rayón	6 841
Rosales	4 408
Victoria	8 403
TOTAL SUR	134 091
<i>Norte</i>	
Aldama	4 022
Bravos	9 086
Galeana	4 225
Guerrero	14 258
TOTAL NORTE	31 591
SUMA TOTAL	165 682

* Corresponde a 1869; por ello la suma total no coincide.

FUENTE: Luis González, *La República restaurada. La vida social*, Hermes, México/Buenos Aires, 1974, p. 116.

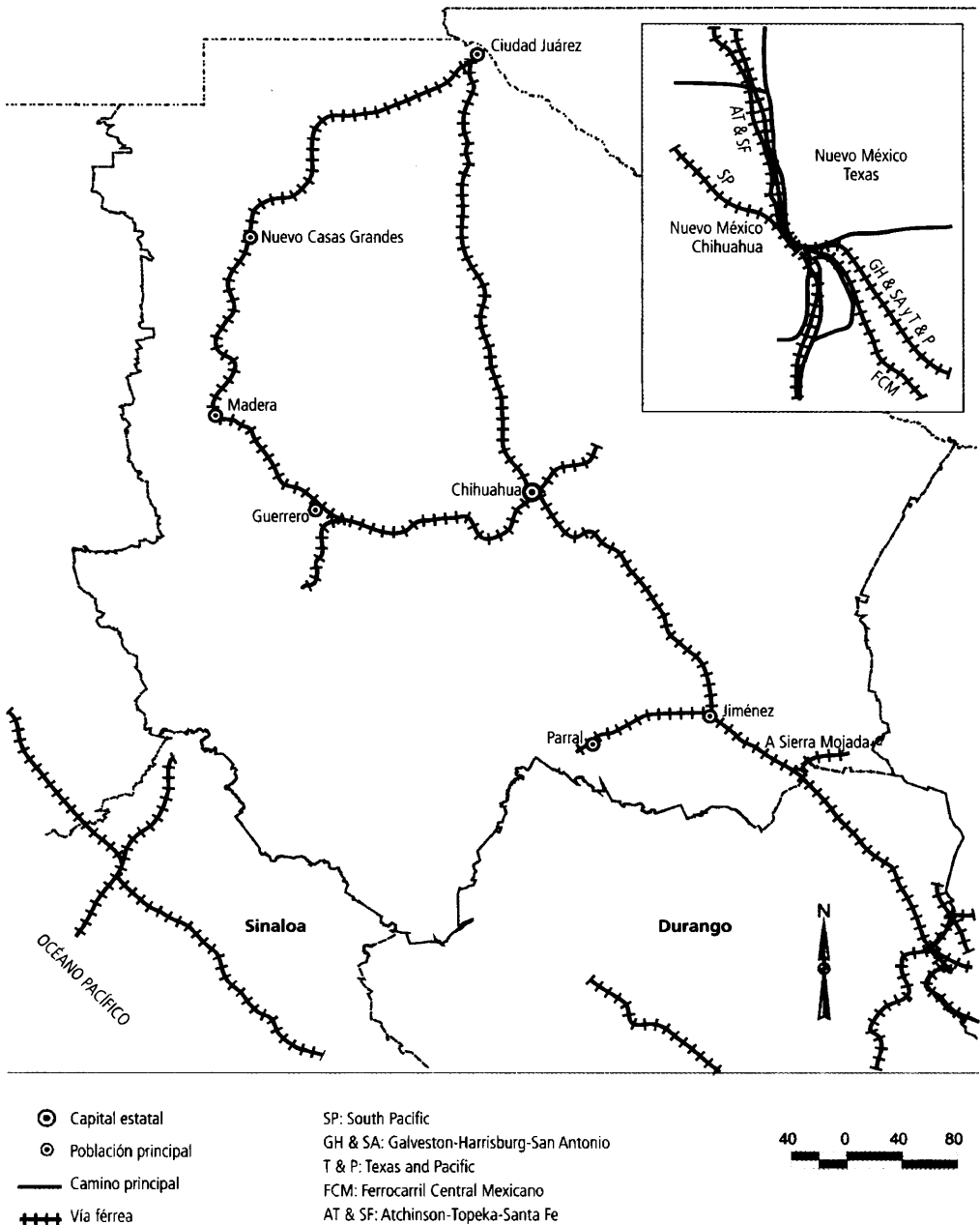
población seguía el patrón de distribución que parecía imponer la vieja guerra contra los nómadas, pues se concentraba de manera predominante en la porción sureña; mientras que la población de la parte norteña se mantenía en poco más de 30 000 habitantes, casi los mismos que en 1857. Por esa razón, el peso relativo del norte del estado era aún menor al que tenía en 1857 y mucho

menor al alcanzado en los años de bonanza de 1790-1830, según se vio en el capítulo anterior.

La derrota de los nómadas, que tuvo lugar en la década de 1880, se explica por la creciente ocupación del espacio por parte de los intereses capitalistas tanto en México como en Estados Unidos, así como por el cada vez mayor control territorial logrado por los gobiernos de los dos países. La expansión de la ganadería en el suroeste estadounidense, de sus comunicaciones y de la misma población orilló a los nómadas a refugiarse en lugares más y más inhóspitos y, por lo mismo, a cruzar constantemente la frontera para internarse en las entidades del norte de México. El cese de las hostilidades territoriales entre México y Estados Unidos también logró poner de acuerdo a todos los sectores y grupos involucrados en ambos lados de la frontera en torno a la necesidad de liquidar de una vez por todas a la población nómada. Los negocios con ellos ya no eran tan lucrativos. El ejército estadounidense, una vez superada la guerra civil, era cada vez más poderoso. Además, como sostiene Griffen, el avance de la tecnología militar era inaccesible a los apaches en este tiempo, a diferencia de lo que ocurrió en la época colonial, cuando los nómadas se apropiaron del caballo. En contraste, el ferrocarril, el telégrafo, las armas de repetición, los prismáticos, las balas más mortíferas, no estaban totalmente al alcance de los apaches. Otra diferencia fundamental era que en las últimas décadas del siglo *xx* los apaches eran mucho menos numerosos que en la época colonial. Sus correrías se limitaban a una estrecha franja del noroeste de Chihuahua; ya habían quedado atrás las grandes avanzadas hacia lugares tan distantes como Durango. En México, la expansión de la propiedad privada y de los intereses económicos también hizo que los ganaderos, encabezados por Terrazas, intensificaran las medidas de represión.

Terrazas maniobró a mediados de 1879 para volver a la gubernatura, cosa que logró mediante el Plan de Guerrero, con el que derrocó al gobernador Ángel Trías hijo, que distaba de contar con los atributos de su padre. A pesar de la malquerencia de Díaz y del envío de una fuerza federal para restablecer la paz (comandada por el general Francisco Naranjo), el presidente no pudo evitar

MAPA VIII.1. *Ferrocarriles en 1910*



FUENTE: Martín González de la Vara, *Irrupción capitalista y cambio socioeconómico en una región binacional: El Paso, 1848-1911*, tesis de historia, CEH, el Colegio de México, 2008.

que en 1880 Terrazas fuera elegido de nuevo para ocupar la gubernatura hasta 1884. El retorno del poderoso ganadero al poder público significó el inicio de una política más agresiva contra los apaches. Terrazas era duro. En una carta que aparece en *Y México se refugió en el desierto*, de José Fuentes Mares, afirmaba en 1863 que estaba “persuadido que ese enemigo de toda civilización y sanguinario más bien por carácter que por ignorancia, sólo cederá a la fuerza material”.

Si esto decía en 1863, cuando su riqueza ganadera no era tan considerable, habrá que imaginar lo que pensaba en 1880 cuando una partida de apaches, encabezada por Vitorio, escapó de las reservaciones estadounidenses y se asentó en las cercanías de la Laguna de Guzmán, en el noroeste del estado. Para entonces las propiedades de Terrazas alcanzaban ya la cifra de 623 960 hectáreas, muchas de ellas justamente en la zona de correrías de Vitorio. Terrazas nombró como jefe de armas locales a su pariente, el coronel Joaquín Terrazas, quien salió de inmediato a perseguir al jefe apache.

Entre el 14 y el 15 octubre de 1880 la fuerza del coronel Terrazas lo encontró y entabló la famosa batalla de Tres Castillos, la cual se considera el final de esta antigua guerra, porque entre los 72 apaches muertos se hallaba precisamente el jefe Vitorio. A partir de entonces los ataques declinaron aunque todavía cobraron algunas víctimas, entre ellas la del mayor Juan Mata Ortiz, quien fue quemado vivo en noviembre de 1882 por el capitancillo Ju, en venganza por un ataque traicionero.

De manera paulatina la presencia federal se hizo más visible en el estado, principalmente por medio de las armas. El envío de la fuerza del general Naranjo en 1879 era cosa inédita en los conflictos locales. Además, desde ese año había por lo menos un destacamento federal dedicado a combatir a los apaches, el cual por cierto se negó a participar en la batalla de Tres Castillos. En 1882 México y Estados Unidos firmaron un convenio para permitir el paso recíproco de tropas en persecución de apaches y abigeos. Así, de manera gradual, el escenario local se modificó con el fortalecimiento federal. Este proceso político ganó gran fuerza con la

inauguración en 1884 del Ferrocarril Central, que unió a Paso del Norte con la Ciudad de México. Esto significaba que el gobierno federal podía auxiliar de manera más expedita a las autoridades chihuahuenses, pero también podía intervenir más en los asuntos locales.

Las noticias de ataques apaches comenzaron a ser cosa de un pasado violento que se remontaba a principios del siglo XVIII, cuando la extinción de los conchos y el retiro de los tarahumaras hacia la sierra dejaron un vacío que llenaron los apaches. Sin embargo, esta vieja guerra había dejado varias secuelas en la sociedad chihuahuense, sobre todo en los lugares más agobiados por esa violencia. Una de ellas, bien apuntada por Friedrich Katz, era precisamente la unidad de todos los grupos sociales sedentarios contra los nómadas. En la guerra contra los apaches unían esfuerzos rancheros, hacendados y autoridades de gobierno. Pero al término de esa guerra, al desaparecer ese enemigo común, la unidad social local comenzó a resquebrajarse para dar paso a hondos enfrentamientos y conflictos entre ricos y pobres. Estos conflictos se vieron agravados por el rápido crecimiento económico que tendría lugar en el centro y norte de México a partir de 1880.

Uno de los rasgos de ese crecimiento fue la concentración de la riqueza en manos de los nuevos ricos, aquellos que nacieron como tales después de la Guerra de Reforma y de la Intervención francesa. Estas nuevas condiciones dieron inicio a un nuevo tipo de conflictividad y más tarde a una nueva clase de guerras: las disputas ya no eran asunto territorial, como ocurría con apaches y estadounidenses, sino de manera creciente se trataba de conflictos entre grupos sociales que se hallaban en posiciones distintas en el proceso productivo, en la división del trabajo. Por un lado los peones, pequeños rancheros y mineros, y por el otro los hacendados y las grandes compañías extranjeras; por una parte los empresarios, y por otra los obreros y empleados. Así, en 1881 los obreros que construían el Ferrocarril Central se fueron a la huelga a causa de una rebaja de salarios, y en 1883 los mineros de Pinos Altos estallaron un movimiento similar en virtud de que el administrador inglés les impuso la obligación de gastar la mitad de su sueldo en

la tienda (de raya) de la compañía. A este tipo de luchas se sumaron las de carácter agrario y político, como la de Tomóchic. El auge económico porfiriano trajo consigo la consolidación de estas nuevas relaciones, de estos nuevos conflictos.

HACIA LA PROSPERIDAD DE FINES DE SIGLO

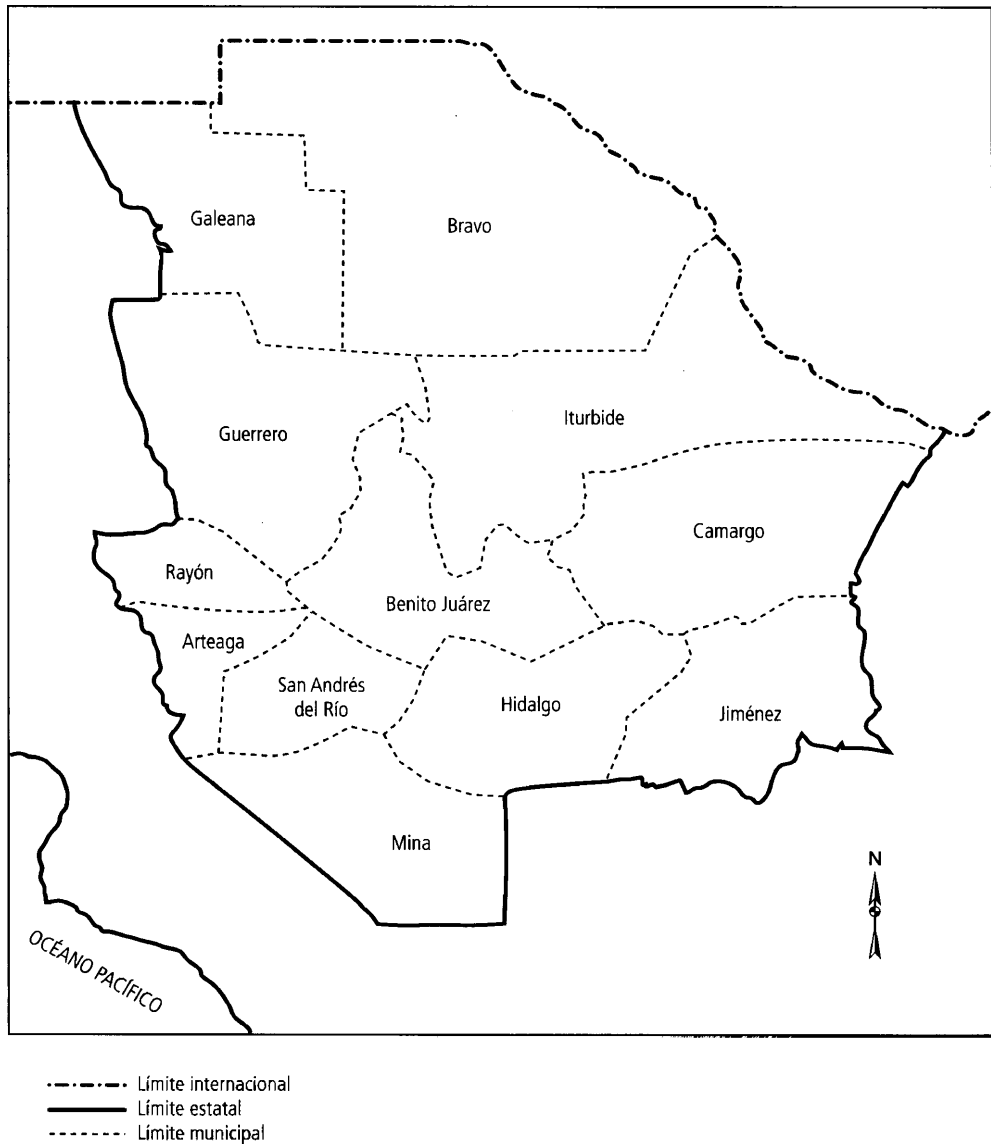
La economía mundial tuvo una recuperación notable después de la crisis de 1873, que afectó grandemente a Inglaterra y a Estados Unidos. Los capitales, ávidos de ganancia, comenzaron a fluir nuevamente a zonas y ramas económicas diversas. El gobierno porfiriano, atento a esa evolución económica, no escatimó esfuerzos para atraer la atención de capitalistas extranjeros, aspecto en el que se anotó uno de sus éxitos más notables. El capital extranjero, en buena parte estadounidense, inglés y francés, comenzó a llegar con mayor fluidez a México a partir de 1880.

En Chihuahua los capitales extranjeros hallaron un grupo económico que había logrado consolidarse desde la década de 1870. Estos nuevos ricos no se opusieron al arribo de los capitalistas estadounidenses; más bien aprendieron a convivir con ellos y a sacar ventajas de ello. Como bien mostró Mark Wasserman, los miembros de la élite terracista utilizaron sus contactos políticos para fungir como intermediarios entre los capitalistas y las autoridades gubernamentales. En algunos casos se asociaron con ellos, como en los ferrocarriles; en otros, especularon y vendieron concesiones o derechos sobre minas, aguas y bosques. Los gobiernos federal y estatal, por su parte, se esmeraron en fomentar el arribo de esas inversiones; brindaron importantes exenciones fiscales y otras facilidades que a veces, en el caso de algunas compañías extranjeras, se tradujeron en la inexistencia de alguna autoridad mexicana en sus propiedades.

Así surgieron las fábricas de cerveza, los molinos de trigo se modernizaron, las haciendas de beneficio de metales se multiplicaron, las empacadoras de carne también aumentaron. Inversio-

nistas extranjeros adquirieron las riquísimas vetas de Batopilas,

MAPA VIII.2. *División política de Chihuahua en 1906*



FUENTE: A partir de un mapa de Eugenia Meyer *et al.*, *Museo histórico de la Revolución en el estado de Chihuahua*, México, SEP-INAH, 1982.

Santa Eulalia, el distrito de Parral, Cusihuiriachic, y un sinnúmero de pequeñas minas de la zona serrana. Esa inversión extranjera trajo aparejado un enorme cambio tecnológico consistente en perforadoras neumáticas, bombas extractoras de agua, tranvías para transportar mineral, moledores mecánicos, electricidad y la refinación mediante cianuro. Esas compañías fueron en buena parte responsables de que el valor de la minería local aumentara notablemente: de poco menos de un millón de pesos en 1878 a más de 23 en 1908. El ferrocarril, construido también por compañías extranjeras, facilitó el transporte de mercancías y de materias primas, así como de gente, que comenzó a viajar a mayores distancias y con mayor frecuencia. El ferrocarril propició también un aumento notable en el valor de la tierra, ya que hizo más atractiva y viable la explotación agrícola, ganadera y forestal. Los pueblos del noroeste, antes asolados por los apaches, comenzaron a sufrir los embates de grandes latifundistas, los nuevos "bárbaros". El caso de Namiquipa es ilustrativo.

Algunos latifundios, especialmente en el norte y noroeste del estado, fueron adquiridos por empresarios extranjeros. Destacaban el de la Mexico Northwestern Railway (un millón de hectáreas), el de Bavícora, del empresario californiano y magnate de la prensa William R. Hearst (350 000 ha), y el de T. O. Riverside, en los municipios de Guadalupe y Ojinaga (500 000 ha). Por su parte, los terratenientes locales no se quedaron atrás. El general Terrazas adquirió casi dos millones de hectáreas más entre 1874 y 1907, los Zuloaga llegaron a más de 600 000 en Bustillos y Satevó, y los Luján consolidaron su propiedad de Santa Gertrudis con casi 200 000 ha. Estas adquisiciones tenían que ver con dos fenómenos ilustrativos: por un lado, el auge ganadero que significó la apertura del mercado estadounidense a las exportaciones de ganado mexicano, y por otro, el esfuerzo gubernamental encaminado a privatizar los terrenos baldíos y promover así su explotación. Esta privatización se hacía por medio de las compañías deslindadoras, según la ley de 1883. El gobierno federal otorgaba el derecho a compañías privadas para que deslindaran los terrenos baldíos (propiedad de la nación), que luego podían venderse

a particulares con todos los derechos en regla. Como compensación recibían un tercio de los terrenos deslindados. Este trato contribuyó a que los grandes terratenientes se hicieran de nuevas extensiones de terreno, pero hubo ocasiones en que crearon grandes conflictos tanto con pequeños rancheros como con hacendados. Incluso Luis Terrazas sufrió a causa de la actividad de las deslindadoras. Los ejidos dotados por Teodoro de Croix en la zona de Galeana-Casas Grandes fueron invadidos por grandes terratenientes, lo que sembró semillas de gran descontento. El arribo de los mormones al noroeste del estado en 1885, al que se opusieron vecinos y autoridades locales, fue parte de esa estrategia porfiriana.

Pero de manera simultánea hubo casos en los que las grandes propiedades se fraccionaron para dar lugar a mancomunidades o condueñazgos. Grupos de vecinos se unían para adquirir porciones de esas propiedades y luego fraccionaban el terreno entre ellos. Un caso de ese tipo fue el de la antigua hacienda jesuita de San Marcos, cuando parte de sus terrenos fueron adquiridos por vecinos de Saucillo, Meoqui y algunos otros puntos. Este fraccionamiento de la gran propiedad tiene que relacionarse con el aumento notable en el número de ranchos en distintas zonas de la entidad, como en los distritos de Guerrero y Benito Juárez (Cusihuiriachic). En este último, por ejemplo, los ranchos pasaron de 79 en 1893 a 297 en 1908. De la misma manera, los ranchos ganaron población a lo largo de la década 1900-1910 a costa de ciudades y pueblos. Las haciendas se expandieron, pero los ranchos también.

La ganadería se consolidó entonces como la principal actividad económica de la élite local. Y ya no era la ganadería tradicional de terrenos libres y de ganado suelto. Comenzaron a establecerse las cercas de alambre de púas para precisar los linderos de las propiedades, y se aumentaron las penas por abigeato, lo que trajo consigo cambios drásticos en la manera de explotar y apropiarse de la tierra y del ganado. Los pequeños ganaderos sufrieron incontables agravios por esa causa, según el estudio de María Aparcida de Sousa Lopes. También se introdujeron nuevas razas, por ejemplo, la Hereford. Se decía que en las propiedades de Terrazas

había más de 400 000 reses, 100 000 ovejas y 25 000 caballos. La exportación de ganado vacuno, el gran negocio de la ganadería nortea, creció enormemente: de 10 000 cabezas en 1887 a 310 000 en 1897. En contraste, la agricultura chihuahuense quedó en manos de una gran diversidad de pequeños productores: rancheeros, aparceros, medieros, arrendatarios. Chihuahua no tuvo el henequén yucateco, el café chiapaneco, el garbanzo o el trigo sonorense, la caña de Morelos ni el algodón lagunero. En Chihuahua la ganadería, y no la agricultura, daba sentido al latifundismo.

Este auge económico, que involucraba al conjunto de las entidades nortea, aunque de distintas maneras, se vio acompañado de un importante movimiento demográfico que hizo que estas provincias crecieran a ritmos más acelerados que el resto del país. En Chihuahua se repitió el gran crecimiento ocurrido entre 1790 y 1830, pero en mucha mayor cuantía: de 181 000 en 1877 a 405 000 en 1910. Se rompía así el periodo de lento crecimiento que había caracterizado a la población local entre 1830 y 1880. Una parte de esta población era originaria de otros lugares, como Durango, Zacatecas y otras entidades del centro del país, y llegaba atraída por los altos salarios que se pagaban en Chihuahua. También debían contarse pobladores de otras nacionalidades, como chinos, estadounidenses y españoles, entre otros.

Los cuadros VIII.1 y VIII.2 muestran la magnitud del aumento de población entre 1877 y 1910. Por ejemplo, el distrito de Parral pasó de 14 000 habitantes a casi 59 000. Pero ningún crecimiento fue tan notable como el de Galeana: de 4 225 a 23 259, un aumento de más de cinco veces. Esto muestra el repoblamiento del noroeste del estado, una vez concluida la vieja guerra contra los nómadas, así como el efecto de la inversión extranjera, incluido el arribo mormón. En efecto, ya vimos que entre 1857 y 1880 la población de las jurisdicciones situadas al norte de la ciudad de Chihuahua se mantuvo prácticamente estancada en 30 000 habitantes. En 1910 el número de habitantes de esa área había aumentado hasta casi 79 000. El sur del estado, empero, seguía siendo la porción más poblada, con más de la mitad de la población total. Un ingrediente de este comportamiento demográfico fue sin duda el movimiento

CUADRO VIII.2. *Población de Chihuahua en 1910*

<i>Distritos</i>	<i>Habitantes</i>
Chihuahua	93 912
<i>Sur</i>	
A. del Río	25 228
Arteaga	11 866
Benito Juárez	34 349
Camargo	40 751
Hidalgo	58 893
Jiménez	27 301
Mina	18 914
Rayón	15 743
TOTAL SUR	233 045
<i>Norte</i>	
Bravos	16 346
Galeana	23 259
Guerrero	39 145
TOTAL NORTE	78 750
SUMA TOTAL	311 795

FUENTE: *Tercer Censo de Población de los Estados Unidos Mexicanos*, Dirección General de Estadística, México, 1918.

de la población hacia el campo, no sólo por el cese de las hostilidades con los nómadas, sino también por el flujo de inversiones que abrían nuevas oportunidades de trabajo. Un buen ejemplo de ello fueron los negocios forestales del estadounidense William C. Greene, que hicieron nacer a la localidad de Madera en 1906.

Este auge fue reconocido por las autoridades eclesiásticas que decidieron crear el obispado de Chihuahua en junio de 1891, con lo que concluyó la última dependencia respecto a Durango, la capital de la vieja provincia de la Nueva Vizcaya. El primer obispo fue José de Jesús Ortiz. Uno de los logros de éste fue el retorno de los jesuitas, quienes rehicieron sus misiones en septiembre de

1900, ahora con cabecera en Sisoguichic. Para entonces ya había una importante presencia protestante en algunas localidades del estado. Las primeras noticias de protestantes datan de 1882, con la llegada de Santiago D. Eaton. En 1886 y 1890 se fundaron los primeros colegios protestantes en la capital: el Chihuahuense y el Palmore.

Las ciudades crecieron notablemente entre 1895 y 1910. Por ejemplo, la capital pasó de 18000 a 39000 habitantes, Parral de 7300 a 14000 y Ciudad Juárez de 7000 a casi 11000. La infraestructura urbana mejoró de manera sensible. En 1881 se comenzó a construir el palacio de gobierno en la capital, con un costo de 390000 pesos, y más tarde el Teatro de los Héroes, obra del arquitecto Jorge King. El abasto de agua a esa misma ciudad mejoró gracias a la construcción de la presa Chuvíscar, inaugurada en 1907. Por su parte, Paso del Norte (Ciudad Juárez desde 1888) se convirtió en una de las aduanas más importantes del norte del país. La frontera con Estados Unidos mostraba un gran dinamismo en los intercambios y ello favorecía el desarrollo comercial e incluso agrícola del valle de Juárez. Ciudad Juárez comenzaba su despegue, aunque no al ritmo realmente impresionante de la localidad "gemela", El Paso, Texas. De estos años porfirianos data el origen de la notable desigualdad entre las dos localidades, según se lee en la tesis de Martín González de la Vara.

De la misma manera, Parral se vio beneficiada por el enorme movimiento económico propiciado por la inversión extranjera en la minería local. Surgieron fundidoras y las excavaciones se hicieron con técnicas cada vez más sofisticadas. Además, Parral mantuvo su función de centro comercial de primer orden en razón de que los habitantes de las múltiples localidades serranas acudían a ese lugar a realizar sus intercambios.

Varios elementos de la cotidianidad urbana contemporánea llegaron en ese tiempo: el alumbrado público en 1897, el cine en 1899 y el automóvil en 1903. La supremacía de la ciudad de Chihuahua era evidente en el número de teléfonos: en 1907 tenía 375 aparatos, contra apenas 85 en Ciudad Juárez, 105 en Parral y 35 en Camargo.

La consolidación de Chihuahua como la principal ciudad de la entidad y el florecimiento de Ciudad Juárez fueron hechos que fortalecieron el viejo camino de Tierra Adentro, al menos en su porción mexicana. En ello influía decisivamente el trazo ferrocarrilero, el cual, a través de Torreón, Jiménez, Camargo, Chihuahua y Ciudad Juárez, se constituyó en la columna vertebral del estado, dejando al margen el eje Parral-Cusihuiachic-Casas Grandes. Éste, como se vio, fue el eje de la ocupación española en los primeros dos siglos de dominación europea.

Los ferrocarriles se multiplicaron y al hacerlo afianzaron el lugar cada vez más preponderante de los valles. A la sierra y a la planicie oriental sólo llegarían ramales. A la primera línea férrea (que unía a Ciudad Juárez y El Paso con la Ciudad de México), concluida en 1884, se sumaron más tarde las líneas del noroeste, que comunicaban a Ciudad Juárez con Chihuahua a través de Casas Grandes y Temósachic; también se abrió comunicación ferroviaria entre Chihuahua y Santa Eulalia, entre Escalón y Sierra Mojada, en Coahuila; se construyeron las líneas entre Estación Conchos y Naica, entre Jiménez y Parral (concluida en 1898) y entre Camargo y Boquilla. En 1903 se inauguró el primer tramo del Ferrocarril Kansas City-Mexico y Oriente, que contemplaba comunicar a Ojinaga con Topolobampo, en el Pacífico. Por su parte, El Paso estaba comunicado con ferrocarril desde mayo de 1881, tanto con Nueva Orleans y Los Ángeles, como con Santa Fe, en Nuevo México, y San Luis, Missouri. Las líneas férreas que comunicaban a El Paso eran la Atchinson-Topeka-Santa Fe, la Galveston-Harrisburg-San Antonio, la Texas and Pacific y la Southern Pacific.

Sagaz político, Porfirio Díaz no interfirió con los negocios de su acérrimo enemigo, Luis Terrazas. Al contrario, parecía clara su intención de brindarle facilidades con tal de que se olvidara de la política. En 1884, al término del periodo de Terrazas, Díaz manióbró para que uno de sus allegados, el general Carlos Pacheco, fuera elegido gobernador del estado. Para contrarrestar la influencia terracista, el nuevo gobernador Pacheco se apoyó en un grupo político denominado "Papigochic", formado por líderes de esa zona del estado. Desde entonces y durante ocho años los pache-

quistas controlaron el gobierno local, cosa que Terrazas aprovechó para incrementar sus negocios. Además de comprar nuevas extensiones de tierra ganadera, Terrazas amplió sus intereses bancarios tanto en el Banco Minero (fundado en 1882) como en las conexiones con capitalistas de La Laguna y Monterrey. Estas redes de capitales dieron forma a un nuevo norte que poco se parecía al que en 1850 lamentaba su mala fortuna.

Durante el periodo 1886-1892 tuvieron lugar fuertes pugnas políticas en razón de la debilidad de los gobernantes pachequistas. Éstos, como Lauro Carrillo, no mostraban ni habilidad ni fortaleza para enfrentar las crecientes dificultades que se oponían al modelo de desarrollo porfiriano en Chihuahua. Para colmo de sus adversidades, el general Pacheco falleció en 1891, dejándolos sin el apoyo del centro. Entre noviembre de 1891 y octubre 1892 tuvo lugar la lucha de Tomóchic contra las fuerzas federales. Acusados de participar en robos, los tomochitecos fueron orillados a defenderse con las armas. La adoración a Teresa Urrea, la Santa de Cabora, dio vigor a la resistencia de los habitantes de este pequeño poblado. El salvaje e infructuoso asedio armado a una población civil desacreditó a las autoridades locales. Como trasfondo de este incidente estaban los rápidos cambios que se habían sucedido en los años anteriores: a saber, el fin de la guerra apache y su secuela de divisionismo entre los distintos grupos de población; la avalancha de capitales extranjeros y el subsecuente acaparamiento de tierra, y la tendencia manifiesta en la Constitución local de 1887 a la centralización política mediante la creación de las jefaturas políticas, que disminuían grandemente las facultades de los ayuntamientos. Por lo pronto, los jefes políticos serían designados por el gobernador, y no elegidos popularmente, como ocurría desde 1847. En 1889 una reforma a la Constitución local suprimió las presidencias municipales de las cabeceras de distrito, y se asignó esa labor al jefe político. Las elecciones también evidenciaban la creciente injerencia del gobierno estatal, que insistía en hacer triunfar a toda costa a candidatos impopulares, caciques algunos de ellos, provocando reacciones violentas, como la de Cusihiuriachic en 1886 y la de Ascensión en 1892. En noviembre de 1904 este proceso de

centralización llegó aún más lejos, pues el Congreso local aprobó la iniciativa del gobernador Creel para suprimir a los presidentes municipales y de sección municipal. En lugar de ser elegidos, en lo sucesivo serían designados por el gobernador del estado.

Esta centralización política ocurría también en el plano federal. Durante el porfiriato se consolidó la tendencia, presente desde décadas anteriores, consistente en sumar atribuciones al gobierno federal a costa de los gobiernos locales. Los terrenos baldíos se federalizaron definitivamente con las leyes de 1875 y de 1883; lo mismo ocurrió con la minería, los bancos y el agua durante la misma década de 1880. Así, el centralismo, tan combatido por los federalistas en las décadas anteriores, como por Trías en 1845 y por Cordero en 1852, se imponía silenciosamente a costa de las facultades de los estados. En materia de baldíos, los diputados chihuahuenses intentaron preservar la jurisdicción del gobierno local, pero fue en vano. Los banqueros locales tuvieron que solicitar la ratificación de sus concesiones ante el gobierno federal. La Casa de Moneda, reabierta en 1832, fue cerrada en 1895 por orden de la Secretaría de Hacienda. El impuesto federal del timbre comenzó a extenderse a un número cada vez mayor de mercancías.

Uno de los ramos que no cayó en manos federales fue el de la educación. Los gobernantes chihuahuenses mostraron en esa época un gran interés por impulsar la educación laica y gratuita. En estos años porfirianos se ordenó a los terratenientes abrir escuelas en sus haciendas, se trajeron maestros de Xalapa y de la Ciudad de México, se formaron escuelas siguiendo el método del pedagogo Enrique Rébsamen, se becó a algunos alumnos aventajados (que incluso estudiaron en la Escuela Nacional de Maestros), se adoptó el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria en el Instituto Científico Literario y se crearon dependencias específicas. En tiempos del gobernador Enrique Creel se construyó un gran número de escuelas, que llegaron a 226 oficiales y 110 subvencionadas. Desde 1882 se reglamentaron las carreras de abogacía, notaría, ingeniería y de profesor de educación primaria. En 1884 se graduaban los primeros maestros, entre ellos algunas mujeres.

En febrero de 1906 nació en Ciudad Juárez la Escuela de Agricultura de los hermanos Escobar.

LA RECONCILIACIÓN Y EL MÁXIMO AUGE

El largo gobierno del colimense Miguel Ahumada (1892-1902) apaciguó ánimos políticos entre terracistas y pachequistas, aunque no eliminó las fuentes profundas de malestar social. Las facciones políticas, con la intervención del presidente Díaz, llegaron a un compromiso que evitó grandes confrontaciones. Sin embargo, el poderío económico de los Terrazas no podía quedar al margen del poder. A lo largo del periodo de Ahumada se hicieron esfuerzos diversos para propiciar un acercamiento entre Terrazas y Díaz. La reconciliación tan esperada llegó en 1903, cuando Terrazas, a sus 73 años, ocupó la gubernatura por última vez. De esa manera se hizo más evidente que nunca el carácter del modelo porfiriano, basado en el enriquecimiento ilimitado de las élites, cuyos miembros, además, ocupaban los cargos públicos, desde donde se manejaban de acuerdo con sus intereses. Lo público y lo privado se unían de manera inequívoca para favorecer a las élites, en este caso, a Terrazas y a su clan, cada vez más ricos. En otros lugares del país, como Tlaxcala, este modelo no era del todo evidente, lo que lleva a evitar generalizaciones apresuradas, casi siempre con poco fundamento empírico, sobre la naturaleza del porfiriato.

Terrazas tuvo 14 hijos y todos ellos escogieron a sus cónyuges entre miembros de familias adineradas y de prestigio: Creel, Sisiniega, Luján, Márquez, Falomir, Cortázar. De allí que se haya acuñado el término "clan Terrazas". Algunos hijos y parientes políticos resultaron buenos para los negocios, como Juan Terrazas y sobre todo Enrique Creel.

Este último mostró cualidades especialmente sobresalientes. Hijo de un cónsul estadounidense en Chihuahua, Creel se casó con Ángela, la quinta hija del general. Y el matrimonio beneficiaría grandemente a ambos, pues Creel aportó su sentido empresarial (que rebasaba fronteras) y Terrazas aportó su enorme fortuna para

que su yerno moviera el capital de la mejor manera posible. Esa conjunción se hizo más evidente cuando Creel ocupó la gubernatura en agosto de 1904, sustituyendo al anciano terrateniente, quien había obtenido una licencia. Su habilidad empresarial, su lealtad al régimen y el dominio de la lengua inglesa lo llevaron primero a la embajada de México en Washington y más tarde, en 1910, a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esta primera gubernatura de Creel tuvo lugar en el periodo de máximo auge económico chihuahuense, así como de la máxima integración entre intereses oligárquicos e intereses gubernamentales. La economía chihuahuense creció a ritmos acelerados desde 1899 y así siguió hasta 1906. La inversión extranjera continuaba llegando. La American Smelting and Refining Company (Asarco) construyó la gran fundidora de Ávalos, y en Boquilla se daban los primeros pasos para construir una enorme presa de almacenamiento para instalar la hidroeléctrica que alimentaría las plantas mineras; esta obra se concluyó en 1915. En Parral, la riqueza de Pedro de Alvarado y de su mina Palmilla asombraba a propios y extraños. Las finanzas públicas mostraban un gran incremento, aunque había una tendencia creciente del gobierno al endeudamiento bancario (con bancos de los Terrazas). Cundía el optimismo entre los más ricos. El gobernador Creel se esmeró en festejar en grande el centenario del natalicio de Benito Juárez, como prueba de su patriotismo. Las ciudades vivían el auge de la obra pública: parques, monumentos, penitencierías, presas y demás obras para provisión de agua, escuelas, hospitales; la electricidad se extendía al transporte urbano y el alumbrado público. Era terreno ideal para los negocios. En 1907, ya en franco romance político entre el clan Terrazas y el presidente Díaz, Creel ganó las elecciones para ocupar la gubernatura durante el periodo 1907-1911. El católico Silvestre Terrazas, un pariente lejano de don Luis, cuestionó desde su diario *El Correo de Chihuahua*, fundado en 1899, la capacidad legal de Creel para ser electo, porque se decía que era hijo de un diplomático estadounidense en funciones. Pero nadie hizo mayor caso. Era el tiempo de los ricos para los ricos.

El optimismo de Creel lo llevó a impulsar un proyecto para la

población indígena. Mediante su ley de 1906 para el mejoramiento de la raza tarahumara, el gobernador propuso un sistema semejante al de las reservaciones estadounidenses para “hacer entrar al indio en la marcha del progreso”. Creel parecía asombrado de que en medio de tanta prosperidad hubiera sectores tan marginados como este grupo indígena. Lo más grave es que en nuestros días, sin el optimismo ni la prosperidad de la época de Creel, el mismo asombro siga vigente en toda su extensión. En el fondo, Creel se proponía establecer un sistema de protección gubernamental, una especie de tutela sobre la población tarahumara, algo no muy distinto de lo que luego haría el indigenismo posrevolucionario. Según una tesis reciente, en un principio el presidente Díaz apoyó con entusiasmo el proyecto del gobernador, pero más adelante se desdijo, lo que hizo fracasar la iniciativa indigenista de Creel.

IX. LA REVOLUCIÓN ANTITERRACISTA Y LA REORGANIZACIÓN POLÍTICA (1910-1930)

LOS PROLEGÓMENOS

EL PARAÍSO DE LA OLIGARQUÍA TERRACISTA comenzó a resquebrajarse a partir de 1907. En ese año una crisis sacudió a la economía estadounidense, lo que afectó con gran fuerza al norte de México, cada vez más integrado a los vaivenes de la economía de aquel país. Muchas de las exportaciones ganaderas y mineras tenían como destino Estados Unidos. La contracción de la demanda de productos y la baja de precios obligaron a cerrar las industrias, disminuir salarios y despedir trabajadores, como ocurrió con algunas empresas mineras y forestales. Los bancos dejaron de prestar dinero. Cientos de mexicanos tuvieron que regresar de Estados Unidos ante el cierre de empresas allende el Bravo.

Los años de 1908 y 1909 agravaron las dificultades. Sequías y heladas hicieron disminuir las cosechas chihuahuenses. La escasez y la carestía de los alimentos fueron de la mano: en octubre de 1909 el hectolitro de maíz había subido de 3.5 pesos a siete, el de frijol de seis a 15, mientras que los salarios se redujeron de dos o más pesos a un peso y hasta a 75 centavos. Esta baja salarial contrastaba con el periodo de alza de los salarios ocurrida en años anteriores, producida por la escasez de mano de obra y la diversidad de opciones de empleo (minas, ferrocarriles, industrias, aserraderos). La situación en el campo era grave y la secuela de algunas medidas gubernamentales contribuía a esa gravedad. Con base en una ley de 1905, los ayuntamientos recibieron facultades para vender los terrenos municipales. En muchos lugares los adinerados se hicieron de las mejores tierras. Por otro lado, el abuso y la prepotencia de los poderosos, en contubernio con las autoridades, irritaron a la clase media urbana. Así ocurrió en el caso del

robo al Banco Minero en 1908. En este incidente, que algunos calificaban de autorrobo, la justicia se esmeró en castigar duramente a tres empleados. *El Correo de Chihuahua* tomó partido por los empleados y fustigó acremente a los banqueros, como parte de una tendencia crecientemente crítica respecto al grupo terracista.

Por otro lado, opositores al régimen porfiriano trabajaban intensamente desde San Luis, Missouri, es decir, la misma localidad de donde provinieron las primeras caravanas de comerciantes estadounidenses en 1820. Los hermanos Flores Magón se habían refugiado en Estados Unidos después de sufrir los acosos de la policía porfiriana. No era la primera vez que opositores del gobierno mexicano se refugiaban y actuaban en ese país. Por lo menos en 1892, en coincidencia con el sitio de Tomóchic, Catarino Garza también intentó organizar un amplio movimiento político-militar contra Díaz. Los Flores Magón (Ricardo y Enrique), Antonio I. Villarreal y otros emitieron el programa y manifiesto del Partido Liberal de junio de 1906 y ya habían reanudado la publicación del periódico *Regeneración*, en el que sostenían su posición antiporfirista. En el manifiesto se pronunciaban por demandas que más tarde serían retomadas por otros grupos: jornada de ocho horas y reglamentación de derechos laborales, restitución de ejidos y distribución de tierras ociosas, oposición a la reelección consecutiva del presidente, desaparición de las jefaturas políticas y varias demandas de carácter anticlerical. Pronto los magonistas pasarían de las ideas y la agitación política a las armas. En octubre de 1906 un grupo intentó apoderarse de Ciudad Juárez y más tarde, en junio de 1908, de Palomas, en este caso como parte de un plan militar que incluía la toma de plazas de Coahuila. En Chihuahua este grupo tenía simpatizantes, sobre todo en la frontera y en algunos centros mineros del noroeste del estado. Los grupos radicales anarquistas estadounidenses de la Western Federation of Miners intercambiaban información e ideas en ambos lados de la frontera. El gobernador Creel no ocultó su preocupación por las actividades de este grupo político y se esmeró por espiar sus actividades y contactos.

En diciembre de 1908, una vez que Díaz había declarado al periodista Creelman que México ya estaba preparado para la democracia, Francisco I. Madero, un rico terrateniente de La Laguna, se lanzó a la lucha electoral. En mayo de 1909 Madero y otros formaron el Centro Antirreeleccionista de México. Entre la clase media y algunos grupos oligárquicos, el mensaje maderista pareció ganar fuerza. A principios de junio de 1910, ya como candidato del Partido Antirreeleccionista, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí. Las elecciones, en las que se impuso la fórmula oficial Porfirio Díaz-Ramón Corral, se realizaron con Madero en la cárcel; los maderistas reunieron gran cantidad de testimonios del fraude electoral y exigieron la anulación de los comicios. La respuesta negativa del gobierno exacerbó los ánimos. Las armas se perfilaron entonces como la única opción. En esas circunstancias se proclamó el Plan de San Luis, emitido desde San Antonio, Texas, el 5 de octubre, una vez que Madero había huido de la cárcel y del país. El sufragio efectivo y la no reelección ya eran la consigna clave del maderismo. El plan llamaba a tomar las armas el 20 de noviembre de las seis de la tarde en adelante.

En Chihuahua el llamado maderista tuvo eco. El dirigente principal era un hombre de 46 años, Abraham González, antiguo empleado de los oligarcas chihuahuenses. Originario de Ciudad Guerrero, González había estudiado en la Ciudad de México y en la Universidad de Indiana; rápidamente ganó prestigio como líder del club maderista "Benito Juárez", y nadie en Chihuahua cuestionaba su liderazgo. Así lo reconocían individuos como Pascual Orozco, un ex arriero de 28 años originario del mismo rumbo de González, y Francisco Villa, un duranguense que había sido mediero, comerciante y abigeo, y que por esto era perseguido por la justicia del gobierno terracista. Pocos días antes del 20 de noviembre, en Cuchillo Parado, una pequeña localidad de la jurisdicción de Coyame, un grupo encabezado por Toribio Ortega se alzó en armas. En este caso los agravios de los vecinos tenían que ver con los abusos de la poderosa familia Muñoz y de los caciques de la cabecera municipal.

Después del día 20, Chihuahua fue uno de los estados en donde más partidas rebeldes se levantaron en armas. El historia-

dor José María Ponce de León se apresuró a mostrar su lealtad con el régimen terracista: calificó de “ilusos” y de “malhechores” a los rebeldes. Pero las razones para el levantamiento eran más complejas. Una de ellas era que la clase media urbana y rural, desarrollada en buena medida al calor de la prosperidad porfiriana, reclamaba mayores espacios de participación política y económica. Otra era que en Chihuahua, por la cercanía de la frontera y por la diversidad de ramas económicas, había crecido un sector de trabajadores con gran movilidad laboral y geográfica. Era gente con poco arraigo en sus respectivos terruños. Este hecho facilitó el reclutamiento y la movilidad de las partidas rebeldes. En muchos casos, hacerse rebelde era una opción para ganarse la vida o una forma de saldar viejas deudas personales. El viejo general Terrazas veía con sorpresa que muchos de sus sirvientes simpatizaban con los rebeldes; por ello descartó la opción de armarlos. Así se caía a pedazos una antigua relación social fundamental en Chihuahua, la de los sirvientes y el amo, el patriarca. Sin ánimo de exagerar, esa carta de Terrazas, uno de cuyos párrafos reproduce Fuentes Mares en su libro, es memorable pues marca un cambio histórico de gran alcance: la destrucción de la servidumbre agraria. Lo cierto es que en Chihuahua el movimiento armado tuvo la ventaja del antiterracismo, un eje aglutinador de grupos de muy diverso origen y condición social.

El movimiento armado creció rápidamente, sobre todo en el oeste y noroeste del estado, en el camino de la capital del estado a la sierra. Las fuerzas federales lo combatieron con empeño, pero pronto mostraron sus limitaciones. El régimen porfirista nunca se había esmerado por contar con un ejército poderoso, temiendo una eventual asonada militar en su contra. En los primeros meses de 1911 el levantamiento ya era incontenible. En febrero, Madero regresó al país cruzando la frontera en un punto no muy alejado de Ciudad Juárez.

En los primeros días de mayo de 1911 los rebeldes sitiaron Ciudad Juárez, esperando tomar una aduana estratégica. El 9 de mayo empezaron las hostilidades, a pesar de las intensas pláticas que sostenían representantes gubernamentales y maderistas. Ma-

dero nunca ordenó la toma de Ciudad Juárez; pero el día 11 caía en manos de los rebeldes.

El gobierno de don Porfirio se derrumbó con gran rapidez. El 21 se firmaban los acuerdos de Ciudad Juárez que establecían la renuncia de don Porfirio, el cese de hostilidades y el desarme de los rebeldes. Francisco León de la Barra asumió la presidencia y convocó a nuevas elecciones para octubre de ese mismo año. El 25 de mayo Díaz salía del país por Veracruz en el buque *Ipiranga* con rumbo a París. Se cerraba una época de la historia mexicana.

En Chihuahua, el gobernador Miguel Ahumada renunció al cargo, que apenas había tomado en febrero anterior, en un acto desesperado del régimen porfirista por tranquilizar los ánimos. Fue sustituido por Abraham González. No extraña que una de las principales medidas del nuevo gobernador haya sido la supresión de las jefaturas políticas y el retorno del municipio libre, es decir, de los ayuntamientos elegidos directamente por los habitantes de los pueblos; ello muestra la importancia de esa demanda política. Al mismo tiempo se elevó a la categoría de municipios a cuatro localidades que vivían de hecho en manos de empresas extranjeras: Madera, Naica, Bocoyna y Dolores.

EL ASCENSO VILLISTA

Una vez que Madero tomó posesión como presidente, nombró a Abraham González secretario de Gobernación. Apenas se estrenaban ambos en esos importantes cargos, cuando comenzaron las dificultades con diversos grupos descontentos con el triunfo maderista y el ascenso de Pino Suárez a la vicepresidencia, en detrimento de la figura del médico Francisco Vázquez Gómez. Los brotes de violencia de enero y febrero de 1912 en Chihuahua, dirigidos por jefes como José Inés Salazar y Emilio Campa y por maestros como Braulio Hernández, ganaron fuerza cuando se vincularon a la carismática figura de Pascual Orozco. Éste no ocultaba su enfado con Madero por los nombramientos de parientes

y de militares porfiristas, y quizá por eso no cesaba de hostilizar a maderistas como Camilo Argüelles, administrador de la aduana de Ciudad Juárez y dueño de un molino y un rancho cercanos a esa localidad. Además, Orozco se rehusó a combatir a los zapatistas en Morelos, como parece haber sido la intención del presidente. A principios de marzo de 1912 Orozco se rebeló contra Madero, y rompió así la unidad de los grupos locales que se habían levantado en armas contra el terracismo durante 1910 y 1911.

El alzamiento orozquista ha sido un serio problema para los historiadores. El estudio más detallado sobre Orozco plantea que ese movimiento se explica por un gran engaño. Los oligarcas chihuahuenses, preocupados por aumentos inminentes de impuestos y en general por el ascenso de Madero, se acercaron a Orozco considerando sus grandes diferencias con aquél. Los oligarcas financiaron en parte el movimiento armado. Pero este acercamiento con los oligarcas no invalida que Orozco repudiara a Madero debido al tibio rumbo de su administración y el escaso interés por imponer reformas sociales de fondo. Orozco suscribió el Plan de la Empacadora en marzo de 1912, en el que se retomaban algunas de las demandas magonistas de 1906, como el respeto a los derechos laborales, la libertad de expresión y la autonomía efectiva de los municipios, y se expresaba una fuerte oposición a los intereses estadounidenses. Pero además en el plan se definían con precisión los pasos a seguir para redistribuir la propiedad de la tierra, pues se anunciaban expropiaciones e incautaciones de terrenos ociosos. Este radicalismo orozquista, nutrido además con el de antiguos magonistas, se expresó en la furia con que fueron tratados los mormones de Casas Grandes, quienes se vieron obligados a abandonar sus colonias en el curso de ese 1912. Los terracistas no objetaron ese documento radical con tal de ganar el apoyo popular a su causa antimaderista y conservadora. Esto significa que los oligarcas manipularon el radicalismo de algunos sectores orozquistas (y por allí puede hablarse del engaño) para impulsar su proyecto político dirigido a restaurar el antiguo orden de cosas. La estrategia de los conservadores pareció tener éxito al principio, pero a largo plazo se volvería contra ellos.

En unos cuantos días el orozquismo controló la mayor parte del estado. Villa mostró su fidelidad con Madero y González y se lanzó a combatir a los “colorados”, como eran conocidos los orozquistas por sus antecedentes magonista-anarquistas. Sin embargo, los rebeldes recibieron muy pronto una severa derrota política. El gobierno estadounidense prohibió la venta de armas al orozquismo, que de ese modo perdió una fuente indispensable de aprovisionamiento. Esa medida, que muestra la pesada influencia del vecino país en los acontecimientos mexicanos, inclinó la balanza a favor del gobierno maderista. Para mediados de 1912 el orozquismo estaba ya derrotado. Pero antes había vencido a las tropas maderistas en varias batallas; la más importante ocurrió en la estación de Rellano, que llevó al suicidio al general José González Salas, el comandante derrotado. En el desenlace desfavorable al orozquismo también contó la fuerza del ejército federal, dirigido por el general Victoriano Huerta, a la que se sumaron las fuerzas irregulares de Villa. En agosto Orozco no tuvo más remedio que huir hacia Estados Unidos.

En febrero de 1913, sin embargo, se inició la fase más violenta de la Revolución. El ejército federal, cuya estructura porfirista permanecía intacta, derrocó y más tarde ejecutó al presidente y al vicepresidente. El general Huerta asumió entonces el Ejecutivo federal, cosa que provocó la reacción violenta de varios grupos en diversos lugares del país. En Chihuahua, el jefe militar Salvador Mercado obligó al gobernador Abraham González a dejar el poder; más tarde González fue asesinado cerca de Bachimba. Jefes como Orozco, Salazar y Rodrigo M. Quevedo se sumaron al régimen huertista. En contraste, los jefes más cercanos al maderismo y a Abraham González, como Villa, Toribio Ortega y otros, se afiliaron al movimiento antihuertista que encabezaba el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Este grupo pronto fue conocido como Ejército Constitucionalista.

Para sorpresa y admiración de muchos, entre marzo y noviembre de 1913 Villa logró organizar un poderoso ejército que acabó con los huertistas locales, incluidas las fuerzas orozquistas. El primero de octubre Villa venció a los federales en Torreón, y el 5 de noviembre sitiaba la capital del estado de Chihuahua. Al fracasar

en su intento de tomarla, Villa movilizó sorpresivamente sus tropas hacia Ciudad Juárez, plaza que cayó el 15 de noviembre. Con esta victoria Villa preparó en mejores condiciones la toma de la capital del estado. El general Mercado intentó detener a los villistas antes de que se acercaran. Pero el 25 de ese mes la fuerza dirigida por el orozquista Salazar fue derrotada en Tierra Blanca, lo que dejaba el camino libre hacia Chihuahua. Ante la derrota de Salazar, cundió el pánico entre huertistas y millonarios de la ciudad de Chihuahua. El 27 de noviembre evacuaban juntos la ciudad con rumbo a Ojinaga. Don Luis Terrazas, con sus 84 años a cuestas, abandonaba el estado junto con las tropas, que mal que bien conservaban sus privilegios. La ciudad de Chihuahua casi se vació de ricos; Villa, simplemente los aterrorizaba.

Villa asumió el cargo de gobernador el 8 de diciembre de 1913. Fue entonces cuando se mostró el alcance del radicalismo antiterracista. Por principio de cuentas, Villa ordenó la incautación de los bienes de las principales familias de la oligarquía local, justamente las que habían huido con las tropas huertistas. Instrumentó luego un sistema de administración de esos bienes, que entregó a don Silvestre Terrazas, el ex director de *El Correo de Chihuahua*. Este sistema garantizaba la continuidad productiva de haciendas y demás propiedades, algo fundamental para financiar al ejército villista. Más tarde Villa buscó lograr un abasto regular y a bajo costo de carne y otros alimentos a las ciudades. El fraccionamiento de las grandes haciendas y su entrega a los campesinos se efectuarían una vez concluida la guerra. Por esa razón, Villa combatió a Máximo Castillo, un líder revolucionario de trayectoria maderista y orozquista que procedió a repartir tierras de ocho haciendas terracistas en junio de 1913.

Luego de un incidente naval, el 21 de abril de 1914 los estadounidenses tomaron a sangre y fuego el puerto de Veracruz. Carranza, que por esos días vivía en Chihuahua, protestó enérgicamente contra la invasión. Pero Villa, mostrando su pragmatismo, manifestó su amistad con los estadounidenses y su confianza en que jamás cruzaría fuego con ellos. Este deslinde de opiniones marcó el inicio de una fuerte hostilidad entre Carranza y Villa, que

tendría graves consecuencias. Villa, no sobra decirlo, se esmeraba en proteger las negociaciones estadounidenses, y por ello no sorprende que la enorme presa de la Boquilla, sobre el Río Conchos, una de las más grandes del mundo en esa época, pudiera seguir construyéndose a lo largo de estos años de gran violencia armada. Esa relación de Villa con los estadounidenses tal vez pueda explicarse por su interés por conservar el acceso al mercado de armas y a la salvaguarda de una relación político-diplomática que tenía gran peso en la turbulenta vida política mexicana.

El aparato político-militar del villismo era importante porque el régimen de Huerta aún era un enemigo poderoso. En mayo de 1914, las fuerzas villistas, ya conocidas como la División del Norte del Ejército Constitucionalista, salieron con rumbo a Torreón. Allí tuvo lugar una dura batalla contra el reducto huertista, que duró más de una semana. El 20 de mayo Torreón era villista. Fue entonces cuando se agudizó la enemistad entre Villa y Carranza. Éste deseaba detener el avance de Villa hacia Zacatecas, para dar tiempo a que Álvaro Obregón, con su División del Noroeste, llegara primero a la Ciudad de México. Villa desobedeció a Carranza y atacó Zacatecas en la última semana de junio. Allí se trabó una de las batallas más encarnizadas y sangrientas de la Revolución. El triunfo villista debilitó grandemente al huertismo, que también veía cómo Obregón tomaba y dejaba atrás Guadalajara y se dirigía velozmente hacia la capital del país. En agosto de 1914 Obregón firmó los tratados de Teoloyucan que formalizaban la derrota del régimen de Huerta y el triunfo del constitucionalismo encabezado por Carranza. Uno de los acuerdos fue la disolución del ejército federal, algo que Madero debió haber hecho desde mayo de 1911.

Villa no tomó la Ciudad de México, pero mostró la enorme capacidad organizativa de su poderoso ejército. Con base en la ciudad de Chihuahua, este ejército recibía recursos y pertrechos desde Ciudad Juárez, en donde eran adquiridos de los comerciantes estadounidenses. Por ello todos los grupos revolucionarios buscaban controlar un punto fronterizo con Estados Unidos. Sin embargo, el aparato militar de Villa, incluido su servicio médico, era por mucho el más sofisticado y eficiente.

EL DESCENSO VILLISTA

Durante 1914 y la mitad de 1915 Chihuahua fue un territorio dominado completamente por el villismo, que vivía sus mejores momentos. La historia comenzó a cambiar en la segunda mitad de 1915.

Aliado con Emiliano Zapata, Villa dominó la Convención de Aguascalientes, que desconoció a Carranza y nombró presidente a Eulalio Gutiérrez. Ante eso, no quedaba más que la voz de las armas. El nuevo episodio militar tuvo lugar en el Bajío en la primavera de 1915. Allí, el mejor general del carrancismo, Obregón, derrotó una y otra vez a las huestes villistas. A fines de ese año de 1915 Villa regresó con escasas fuerzas a Chihuahua. Todavía intentó hacer campaña en Sonora, donde los carrancistas lo apalearon, por lo que no le quedó más remedio que refugiarse en las montañas chihuahuenses e iniciar un periodo de guerrillas que terminaría en 1920. Entre diciembre de 1915 y enero de 1916 un gran número de villistas: 40 generales, 1 347 jefes, 3 699 oficiales y más de 11 000 elementos de tropa depusieron las armas, además de entregar armamento, municiones, vagones sanitarios, caballos y hasta tres aeroplanos. El general Felipe Ángeles y otros miembros ilustres y educados del villismo abandonaron la causa. El villismo se definió entonces con mayor nitidez como un movimiento de raíces populares.

Al comenzar 1916 los carrancistas ya controlaban el gobierno local, así como las principales ciudades y localidades del estado. El gobernador era el coronel Ignacio Enríquez, un agrónomo graduado en Illinois que ingresó a la Revolución después de que Huerta ultimó a Madero. Enríquez había preferido unirse a los antihuertistas en Sonora y no en su estado natal. Según relata el hijo de Enríquez, su padre vio cómo Villa asesinó a un carnicero de nombre Claro Reza. Desde entonces, según esta versión, Enríquez no ocultó su animadversión por Villa. Sostenía, por ejemplo, que la Revolución había tenido cuatro enemigos: Díaz, Orozco, Huerta y Villa.

El gobierno constitucionalista apenas daba sus primeros pasos para reorganizar el estado cuando fuerzas villistas asesinaron, el 10 de enero de 1916, a 17 empleados estadounidenses de la Cusi

Mining Co. cerca de Santa Isabel. Como respuesta, el gobierno carrancista declaró fuera de la ley a Villa: ya no era una fuerza beligerante sino un bandido, por lo menos para el régimen carrancista. El malestar estadounidense fue enorme, y se hizo todavía más grande cuando el 10 de marzo siguiente tropas villistas atacaron el pequeño poblado de Columbus, en Nuevo México. Según Katz, una de las razones de este ataque fue que Villa se sintió traicionado por el presidente Woodrow Wilson cuando el gobierno estadounidense reconoció a Carranza en diciembre de 1915.

El gobierno de Wilson reaccionó enviando la llamada "Expedición Punitiva", seis días después del ataque villista. Unos 10000 soldados buscaron a Villa durante casi un año sin mayor éxito. En ese tiempo el villismo fue atacado por dos flancos: por carrancistas y por estadounidenses. Algunos jefes villistas, como Martín López, cayeron en manos del gobierno y de inmediato fueron fusilados. Villa respondía, a veces con éxito: en noviembre y diciembre de 1916 sus fuerzas se apoderaron de plazas tan importantes como la ciudad de Chihuahua y Torreón.

En este contexto de guerra sostenida por villistas, carrancistas y estadounidenses, comenzaron a formarse núcleos armados en los pueblos que pronto se denominarían "Defensas Sociales". Eran grupos armados que en principio buscaban la seguridad de los propios pueblos. Pero de manera simultánea, el gobernador Enríquez promovió la formación de esos cuerpos como una táctica para debilitar el apoyo popular que recibían las fuerzas villistas, sobre todo después del ingreso de la Expedición Punitiva. La autodefensa se transformó rápidamente en antivillismo, y muchos antiguos villistas se sumaron a las Defensas Sociales, encabezadas en algunos casos por vecinos pudientes de los pueblos. Parecía haber un agotamiento por los largos años de guerra y quizá una percepción de que la guerrilla villista era más un asunto personal que una lucha justa. Este consenso antivillista pudo haber sido más amplio si los continuos abusos de las fuerzas carrancistas, sobre todo en tiempos del general Francisco Murguía, no hubieran provocado grandes inconformidades. Por supuesto, la intervención extranjera en nada ayudó al gobierno carrancista. El 21

de junio de 1916 tropas mexicanas y estadounidenses se enfrentaron en Carrizal, con un saldo que rebasó las cuatro decenas de muertos. En Parral ocurrió el incidente de que las tropas estadounidenses tuvieron que huir acosadas por una furibunda muchedumbre que no dejaba de gritar "Viva Villa". Finalmente, en febrero de 1917 las tropas de Estados Unidos abandonaron el estado, pero entonces el villismo vivía sus peores momentos. Aislados, casi sin pertrechos ni gente, los villistas andaban de un lado a otro, asaltando aquí y allí y sometidos a intensas persecuciones. De vez en cuando daban golpes que recibían gran publicidad. Por ejemplo, el 22 de abril de 1919, cuando tomaron Parral y fusilaron a José de la Luz Herrera y a dos de sus hijos, o el 14 de junio siguiente, cuando los villistas se apoderaron de Ciudad Juárez. En esta ocasión tropas estadounidenses desalojaron a los villistas y devolvieron la plaza a la guarnición de las tropas carrancistas.

El año de 1917 fue de lluvias torrenciales que generaron grandes inundaciones y pérdidas agrícolas; el año siguiente fue más terrible aún, en virtud de la epidemia de influenza española que azotó a la sufrida población chihuahuense. Es probable que esta enfermedad haya provocado muchas más víctimas que la misma Revolución, como lo proponen algunos demógrafos. Según narra doña Celia Herrera, en Parral llevaban los cadáveres en "carruchas" y en montones, las calles eran regadas a toda hora con desinfectante y la gente se ponía algodones con alcanfor en los oídos y en las fosas nasales.

El régimen carrancista era incapaz de suprimir la guerrilla villista. En 1919 se recurrió a la consabida táctica antiguerrillera de concentrar a la población en sitios con guarniciones militares para evitar el apoyo popular al villismo. Así se hizo en los ranchos y pueblos de las cuencas de los ríos Florido y Conchos.

Un triunfo importante del gobierno carrancista fue la captura y fusilamiento del general Felipe Ángeles. El prestigioso militar había regresado a Chihuahua a fines de 1918 para invitar a Villa a sumarse a la Alianza Liberal Mexicana, una organización anticarrancista que gozaba de amplio apoyo en Estados Unidos; era indispensable para ese grupo atraer a Villa, y éste aceptó la invitación. Sin em-

bargo, Ángeles fue capturado a mediados de noviembre de 1919 por un grupo de Defensas Sociales que obedecía instrucciones específicas del general Rodrigo M. Quevedo. Fue sometido a juicio militar y condenado a la pena de muerte. En la madrugada del 26 de noviembre Ángeles fue fusilado. Los intentos por salvarle la vida fueron infructuosos, y ello causó fuerte indignación en el estado. El carrancismo perdió mucha estima entre los chihuahuenses.

La rendición de Villa tuvo lugar en julio de 1920, como resultado del asesinato de Carranza en mayo anterior y el ascenso político de los sonorenses encabezados por Obregón. El Plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza, fue la reacción de los obregonistas ante la intención de éste de imponer como su sucesor en la presidencia a Ignacio Bonillas, un civil desconocido. Hasta el fin de Ignacio Enríquez, quien nunca había renegado de su cercanía con Carranza, se sumó al Plan de Agua Prieta y a la veloz carrera de Obregón hacia la presidencia de la República.

Ya sin Carranza, Villa pudo negociar su rendición en mejores condiciones. El presidente interino Adolfo de la Huerta desoyó las voces que le exigían la eliminación de Villa, y pactó con éste en condiciones favorables mediante los Convenios de Sabinas del 28 de julio. Villa se retiró de la vida militar y de la política y se dedicó a sus negocios agrícolas en la hacienda de Canutillo, Durango, que obtuvo como parte del convenio de rendición.

Cinco meses después de la rendición de Villa, el viejo general Terrazas regresó a su ciudad natal. Poco antes el gobierno de Carranza le había devuelto sus extensas propiedades incautadas desde 1914, es decir, las que Villa le había quitado. El radicalismo villista era rectificado, y esa rectificación era el presagio del conservadurismo que definiría la vida política local a partir de entonces.

ASCENSO Y DESCENSO OBREGONISTA

Concluida la hostilidad villista, nadie dudaba de quién había ganado la Revolución en Chihuahua. En las primeras elecciones desde 1911, el mejor exponente del obregonismo triunfante, Ignacio En-

riquez, fue elegido gobernador del estado para el cuatrienio 1920-1924. A Enríquez le correspondió enfrentar una situación difícil, caracterizada por una gran inestabilidad social (abundancia de robos y de partidas armadas) y por ataques de los partidarios de Carranza refugiados en Estados Unidos. Uno de los efectos más sensibles de la Revolución fue la pérdida ganadera, resultante del uso y abuso que hicieron los bandos revolucionarios del ganado para obtener fondos; algunas estimaciones indican que dicha pérdida alcanzó casi tres cuartas partes en lo que se refiere al ganado vacuno.

Enríquez también enfrentó las primeras demandas populares en favor del reparto de la tierra. Pero ni creía en la viabilidad de los ejidos ni tampoco en los arranques radicales de Obregón, sobre todo en materia religiosa. Por ejemplo, en junio de 1923 el gobernador se opuso a reglamentar el culto argumentando que hacer eso en una entidad católica como Chihuahua no era más que promover el divisionismo y la inconformidad. Dos de sus hermanos eran religiosos y él jamás había ocultado su catolicismo.

Sobre la cuestión ejidal, Enríquez se mostraba renuente a aceptar una forma de tenencia de la tierra que no culminara en una auténtica propiedad privada de la tierra. En esto mostraba su profundo liberalismo decimonónico: la base de la sociedad era la propiedad privada y, con más precisión aún, la pequeña propiedad agraria. Apartándose del espíritu del artículo 27 constitucional, Enríquez se inclinaba por reconocer los derechos de propiedad tal y como habían llegado a 1920. Dicho de otro modo, no se discutían los probables abusos y despojos contra pueblos y comunidades. Más bien, Enríquez proponía —y de ello hablaba la Ley Agraria local, emitida en mayo de 1922— un procedimiento encaminado a fraccionar la gran propiedad en el que los mismos dueños decidieran cuál porción conservar y cuál vender. Luego, con la vigilancia del gobierno local, los propietarios entrarían en tratos con los aparceros y arrendatarios interesados en adquirir esos terrenos excedentes. Los términos del contrato de compra-venta serían supervisados por el gobierno local, que en sentido estricto no tenía injerencia directa en el fraccionamiento de la gran propiedad. Dicho

de otro modo, el cambio agrario sería obra del mercado, no del Estado, a diferencia de lo que ocurría en entidades como Morelos.

Por otro lado, Enríquez mostraba gran preocupación por la mala situación económica. Los terrenos inexplotados abundaban, y más en razón de la gran pérdida ganadera; por ello, con sentido práctico, veía la necesidad de atraer a los capitalistas para reanimar la economía local. No había que romperse la cabeza para comprender que los únicos capitales disponibles en esas circunstancias eran los estadounidenses.

La oposición de Enríquez al reparto ejidal y su preocupación por la economía confluyeron para que intentara llevar a cabo un enorme y audaz proyecto de desarrollo económico. Este proyecto se formalizó en el contrato McQuatters, firmado en febrero de 1922. El gobierno local avalaba y apoyaba la transacción privada que Arthur McQuatters y sus socios estaban a punto de realizar con el general Terrazas. Esa transacción se refería a la compra que efectuarían los estadounidenses del enorme latifundio de más de dos millones de hectáreas de Terrazas. A cambio del apoyo de Enríquez, los empresarios se comprometían a vender esa tierra de preferencia a mexicanos, a fomentar el repoblamiento ganadero, a irrigar 40 000 ha, a formar un banco de crédito agrícola y a crear poblados y escuelas. Al mismo tiempo, McQuatters y el gobernador llegaron a un acuerdo para llevar a cabo un enorme proyecto de riego con aguas del Conchos almacenadas en la presa Boquilla. El proyecto irrigaría unas 150 000 ha en los valles del Conchos-San Pedro.

Enríquez era un gobernador poderoso, pues tenía bajo su mando a las fuerzas militares organizadas desde 1916 para combatir al villismo. Su número se estimaba en unos 11 500 efectivos; además, era bien sabido que el presidente Obregón lo tenía en alta estima. Tal vez por ello Enríquez pudo conservar ese aparato militar y además recibir recursos extraordinarios para sostenerlo. Con esto se quiere decir que Enríquez muy bien pudo haberse limitado a gobernar un estado golpeado por 10 años de guerra continua. Pero su obsesión por sacar al estado de la ruina lo llevó a insistir en sus propuestas económicas.

El gobierno federal apoyó en principio los planes del gobernador chihuahuense. Pero las protestas de distintos sectores agrarios, sindicales y de grupos políticos (Villa incluido), que incluso exigían juzgar a Enríquez por traición a la patria, obligaron a Obregón a cortar de tajo todo el trato con McQuatters. A fines de marzo de 1922 el gobierno federal anunció la expropiación del latifundio Terrazas, aunque más tarde el mismo gobierno lo compraría en 13 millones de pesos por medio de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura. El gran proyecto enriquesta se vino abajo, porque McQuatters dejó de interesarse también en el proyecto del Conchos.

Enríquez se desilusionó tanto que renunció en 1923, aunque Obregón lo convenció de que continuara en el puesto. No era hombre para la política de esos años. Por ejemplo, en la Convención Agraria de 1923, donde los campesinos denunciaban la lentitud del reparto ejidal y los ataques de las Defensas Sociales, además de que protestaban contra el arribo de los colonos menonitas a la hacienda de Bustillos, Enríquez repartió ejemplares de la Ley Agraria local buscando inclinar a los agraristas hacia la formación de colonias formadas por auténticos pequeños propietarios. Años más tarde, Enríquez explicaría que el entonces secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, se había opuesto a la Ley Agraria de Chihuahua argumentando, justamente, que dejaba de lado al gobierno en el asunto agrario y que era muy riesgoso poner en contacto a los campesinos sin tierra con los latifundistas. Algunos núcleos formaron colonias siguiendo el modelo de la ley local, pero con poco éxito. Algunas se convirtieron en ejidos.

En marzo de 1922 comenzaron a llegar los menonitas, provenientes de Canadá. Con grandes facilidades otorgadas por el gobierno federal, estos extranjeros pudientes adquirieron primero unas 90 000 ha del latifundio Bustillos, propiedad de la familia Zuñiga. Allí establecieron sus campos, donde se fue acomodando un flujo de inmigrantes que se prolongó hasta 1927. En 1930 ya eran más de 6 000. No era del todo comprensible la razón por la que se aceptaba a esos extranjeros, si se negaba el acceso a la tierra a los mexicanos.

Seguramente Enríquez hubiera insistido en su renuncia de no haber estallado, a fines de 1923, la rebelión delahuertista. El espiado gobernador chihuahuense intentó reconciliar a las partes aprovechando su cercanía con De la Huerta y Obregón. En Chihuahua los antiguos villistas, furiosos por el asesinato del general Villa en julio anterior, se sumaron al delahuertismo encabezados por Manuel Chao, Nicolás Fernández y Rosalío Hernández. Pero la fuerza militar de Enríquez probó su capacidad y en poco tiempo los rebeldes abandonaron el estado. Concluida esta asonada, en abril de 1924 Enríquez renunció a la gubernatura a pesar de la oposición presidencial. Como última oferta, Obregón lo invitó a asociarse con él en sus negocios garbanceros de Sonora. Enríquez declinó la invitación y se retiró a vivir en su hacienda de Atitalaquia, Hidalgo.

Entre 1924 y 1928 la política local mostró mucho del sello de Enríquez, aunque en sentido negativo. Esto significa que se dejaron de lado los intentos por impulsar un desarrollo económico local, pero se mantuvo la oposición al reparto ejidal, y en general a cualquier tipo de reparto de tierra. La Caja de Préstamos, además, se mostraba como un celoso terrateniente y se defendía de cualquier afectación o segregación de su extensa propiedad. A pesar de la oposición gubernamental, los vecinos de los pueblos del noroeste lograron recuperar entre 1926 y 1927 las tierras repartidas desde los tiempos de Teodoro de Croix: Galeana, Casas Grandes, Namiquipa y Las Cruces, con 112000 ha cada una. Por ello Chihuahua mostraba cifras muy altas en la estadística ejidal nacional. Allí la tenaz lucha agraria, originada desde que los Terrazas y otros terratenientes nacionales y extranjeros habían despojado a la mayor parte de los ejidos coloniales, había culminado con estos repartos. Otras haciendas importantes, como Bustillos, fueron afectadas en algunas porciones pequeñas, una de ellas para crear el ejido de San Antonio de los Arenales, que daría lugar al surgimiento de la nueva Ciudad Cuauhtémoc en 1927.

A pesar de lo anterior, hay indicios de que la expectativa del reparto de tierra y la creciente pacificación del medio rural favorecieron un movimiento de población hacia el campo, donde se

crearon múltiples asentamientos pequeños, cuyos habitantes no tardarían en presionar por repartos de tierra. La tensión agraria hizo más evidente aún el conservadurismo de los gobernantes, sobre todo por su renuencia a afectar grandes latifundios de nacionales y extranjeros. Junto a esta población, los hatos ganaderos comenzaron a recuperarse lentamente, aprovechando las dificultades que enfrentaron los ganaderos estadounidenses a causa de las escasas lluvias de 1922 y 1923. Estos ganaderos obtuvieron permiso para internar temporalmente sus hatos en los vacíos pastizales chihuahuenses, lo que contribuyó al repoblamiento ganadero.

Las luchas obreras y agraristas no contaron en este tiempo con una organización sólida que las unificara. Los comunistas no tenían gran peso y tampoco los simpatizantes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la organización obrera nacional más importante en ese entonces. Al parecer, la lucha agrarista y sindical se llevaba a cabo de manera sostenida aunque aislada en los ejidos y las fábricas. El gobierno de Jesús Almeida, heredero de Enríquez, se caracterizó por su tibieza reformista, al extremo de que se le acusó de cristero. A pesar de la tolerancia de Almeida, el periodista Silvestre Terrazas, un activo militante católico, fue enviado a prisión en el verano de 1926. Tal vez su afición por los negocios madereros y el amor por su elegante esposa, hija de una familia de buena estirpe porfiriana, alejaron a Almeida del radicalismo. Fue derrocado el 15 de abril de 1927 por partidarios del general Marcelo Caraveo y sustituido por Fernando Orozco. Con el arribo de Orozco se daba entrada al grupo de políticos de origen orozquista que controlaría el poder local hasta 1936. La llegada de éstos, muy alejados también del radicalismo de algunos de sus correligionarios influidos por el anarquismo, no significó grandes cambios en la política local. Parecía que los nuevos gobernantes estaban empeñados en mostrar su lealtad al viejo orden.

Las muertes parecen reveladoras del signo de los tiempos. Don Luis Terrazas y el general Francisco Villa murieron en 1923.

Primero falleció el general Luis Terrazas, el 14 de junio. Murió en su cama, rodeado de su familia. No deja de impresionar que alguien haya podido vivir la pérdida de Texas a los siete años, el

primer arribo de Ángel Trías a la gubernatura a los 16, la llegada del presidente Juárez a Chihuahua a los 39, la extinción de la guerra apache y la llegada del ferrocarril a los 55, y el estallido de la Revolución a los 81. Sin duda, para 1923 Terrazas ya se había repuesto del susto revolucionario y veía cómo las cosas volvían a ser las de antes. Había que soportar a los nuevos políticos, verdaderos advenedizos, y cosas molestas como las organizaciones agrarias y los sindicatos. Pero veía también cómo los nuevos políticos se esmeraban en casarse con gente decente del porfiriato y cómo esos nuevos gobernantes permitían la recuperación de algunas porciones del antiguo latifundio; también le tranquilizaba que su yerno Creel tuviera tan buena acogida en el mundillo financiero de la Ciudad de México. Y si las cosas no podían ser como en el paraíso de 1900-1906, había que aceptar que en la historia, como en la vida, las cosas tienen que cambiar. Tal vez por todo ello el viejo general Terrazas murió contento, además de que lo enterraron, a la vieja usanza, en el atrio del santuario de Guadalupe.

Por su parte, Francisco Villa murió el 20 de julio, a menos de dos meses de haber cumplido los 45 años, en una calle de Parral, víctima de una emboscada. En febrero de 1926 su cadáver fue decapitado. El estupendo militar y gran líder carismático tuvo así un final infame.

X. LOS ÚLTIMOS AÑOS (1930-2008)

DEPRESIÓN E INESTABILIDAD POLÍTICA

LA DEPRESIÓN MUNDIAL de 1929 tuvo efectos más severos en Chihuahua que la de 1907; al igual que ésta, también la de ese año estuvo acompañada de una pésima temporada de lluvias. A los cierres de empresas y recortes de personal se sumó la avalancha de repatriados que buscaban acomodo en cualquier empleo. De nuevo, las empresas mineras fueron las más sensibles a la baja de precios. En esos años las actividades de Santa Eulalia y Parral casi se suspendieron; San Francisco del Oro y Cusihuiriachic estuvieron a un paso de desaparecer por el cierre de las principales compañías mineras extranjeras. Donde sí se suspendieron las labores fue en los minerales de Dolores, cerca de Madera, y en Félix U. Gómez, al oriente de Villa Ahumada. En estos casos la depresión económica obligó al Congreso local a desaparecer a los dos municipios.

En el campo la situación era más compleja. La ganadería se vio seriamente afectada por el cierre de la exportación al mercado estadounidense. Los grandes ganaderos, entre ellos Luis L. León (en su hacienda Terrenates), se vieron obligados a gastar enormes sumas para alimentar sus vacas y becerros. En la agricultura se vivían cosas aparentemente paradójicas. Por un lado, la sequía de 1929 redujo la disponibilidad de granos, lo que obligó al gobierno local a tomar medidas para compensar la escasez, incluso mediante donaciones y préstamos del gobierno federal. Pero poco después los precios de las cosechas se redujeron a tal punto que levantar la cosecha era a todas luces incosteable. En el Valle de Juárez, los pequeños productores de algodón protestaron airadamente en 1933 por el bajo precio de la fibra. Al mismo tiempo, sin embargo, el sector agrícola era una opción frente al desempleo

minero y urbano. Así como en Sonora muchos mineros desempleados emigraron hacia los valles de la costa, en Chihuahua algunos recurrieron a las obras del proyecto de la Comisión Nacional de Irrigación en el Conchos y a los campos menonitas en busca de trabajo. Otros se sumaron a las listas de solicitantes ejidales y de colonias agrícolas.

En Ciudad Juárez la depresión se vivió de manera particularmente terrible, pues coincidió con la decisión del gobierno estadounidense de cancelar en 1933 la famosa Prohibición o Ley Seca. El turismo declinó, con el consecuente aumento del desempleo. Un solo cabaret, el Nuevo Tívoli, despidió a 150 personas. La crisis se reflejó mejor en el comportamiento demográfico: entre 1930 y 1940 la población de esta localidad fronteriza sólo creció 23%, al llegar a 49 000 habitantes en el último año, mientras que entre 1921 y 1930 el incremento fue de 100%. Para colmo, como puerta de entrada, Ciudad Juárez tuvo que enfrentar el arribo de los repatriados, que llegaban en condiciones lamentables. El remate fueron las devaluaciones del peso, que llevaron la vieja paridad de dos pesos por dólar a casi tres en 1931 y a más de cinco en 1940. El encarecimiento e incluso la escasez de mercancías fue un gran dolor de cabeza para los juarenses.

Esta difícil situación económica fue el escenario de una complicada coyuntura política. El cuatrienio 1928-1932, que debía ser de la responsabilidad del general Marcelo Caraveo, vio pasar a seis gobernadores más. Tal turbulencia política, que corría a la par de la del país entero, parecía provenir del hecho de que después del mandato del poderoso Enríquez no había quedado ningún grupo político más o menos consolidado. No es que hubiera un vacío de poder, sino que ningún grupo o líder militar o político tenía el suficiente peso entre la clase política como para garantizar un gobierno estable.

Los problemas comenzaron cuando el general Caraveo, de antecedentes orozquistas, se sumó a la rebelión escobarista a principios de marzo de 1929, justo cuando en Querétaro nacía el Partido Nacional Revolucionario (PNR), un partido que intentaba agrupar a la llamada "familia revolucionaria". Un mes después las tropas del

gobierno federal derrotaban a los escobaristas en Jiménez, lo que llevó a la dispersión de los rebeldes. En abril tomaba posesión como gobernador el ingeniero Luis L. León, antiguo secretario de Agricultura del ex presidente Calles. León fue sustituido poco después por Francisco R. Almada, el historiador que a los 32 años llegaba al punto culminante de su larga carrera política. A Almada siguió el ingeniero Rómulo Escobar, quien preparó el ascenso del gobernador electo, el antiguo carrancista Andrés Ortiz. Éste cayó en noviembre de 1931, en medio de grandes inconformidades y divisiones políticas, y lo sustituyó el piloto aviador Roberto Fierro, en cuya breve gestión enfrentó los peores momentos de la depresión. Por último, el diputado local Eduardo Salido logró concluir el periodo de Caraveo.

Pero en este enredo de nombres y de incidentes ocurrieron por lo menos dos fenómenos que vale la pena destacar. El primero se refiere al avance de la centralización política del gobierno federal. Las guardias municipales, herederas de los cuerpos de Defensa Social, quedaron bajo el control de la comandancia militar, es decir, del secretario de Guerra. Ello ocurrió a fines de 1931, cuando se debatía la suerte de Fierro, el gobernador en turno. Algunos líderes agrarios alcanzaron a protestar por esa subordinación, pero al parecer las inclemencias económicas y la dura confrontación política impidieron cualquier protesta generalizada.

El segundo fenómeno se refiere al manejo pragmático del reparto agrario. Al término de la rebelión escobarista, León, el nuevo gobernador, arribó con un lenguaje radical que llamaba a cerrar filas contra los terratenientes y los políticos que habían traicionado las mejores causas de la Revolución. León y Almada, su sucesor, criticaron duramente a las anteriores autoridades, sobre todo a Caraveo; las acusaron de reprimir a los trabajadores y campesinos y de cancelar virtualmente el reparto de tierra. Durante 1929 y parte de 1930 este radicalismo verbal tuvo algún respaldo en la práctica: se repartió gran número de ejidos, a tono con el interés del presidente Emilio Portes Gil. Sin embargo, de 1930 en adelante nuevamente surgieron los llamados a la concordia y a la unidad

de la “familia” chihuahuense. Los campesinos, que habían logrado avances organizativos importantes (encabezados por Andrés Mendoza desde Cuauhtémoc), vieron cómo se volvía a endurecer la política oficial. En julio de 1932 fueron asesinados 12 líderes agrarios de la región de Bustillos por una partida del ejército. Posteriormente, el general Antonio Guerrero fue acusado por Mendoza de ser el responsable de ese asesinato.

A pesar de los vaivenes de las políticas gubernamentales, los líderes de la Liga de Comunidades Agrarias apoyaron al candidato del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y del Partido Revolucionario Chihuahuense (PRCH), el general de división Rodrigo M. Quevedo, para contender en las elecciones de gobernador de mediados de 1932.

El ascenso de Quevedo mostraba que los verdaderos vencedores de la Revolución en Chihuahua habían sido, más que los obregonistas, los enemigos de Villa. Sólo así puede explicarse que a dos partidarios de Obregón, Enríquez y Almeida, le siguieran por lo menos tres orozquistas o “colorados”: Fernando Orozco, el general Caraveo y el propio Quevedo, así como un carrancista, Andrés Ortiz.

Originario de Casas Grandes, una de las tierras predilectas del magonismo y luego del orozquismo, Quevedo fue el primer gobernador que logró concluir su mandato desde que el popular gobernador Ahumada lo hiciera a principios del siglo xx. Por su inclinación al nepotismo y a los negocios privados, Quevedo era un hombre prototípico del “maximato”, el periodo de la hegemonía política del ex presidente Calles. Según un desplegado publicado en un diario de la Ciudad de México en mayo de 1936, Quevedo dio empleo en el gobierno a sus 11 hermanos y a otros 70 parientes. Su enorme familia también servía para los negocios: poseía comercios y compañías eléctricas en Ciudad Juárez, al lado de clubes nocturnos; ranchoes ganaderos en el ex latifundio de Terrazas, y lotes y despepitadoras en el sistema de riego de Delicias.

De esa manera, los Quevedo ganaron un peso importante en la economía estatal y no tardarían en vincularse con otros empre-

sarios de origen revolucionario, como los Almeida, y de origen porfirista, como los mismos Terrazas. Un ejemplo de esta vinculación entre los viejos y los nuevos ricos es que los apellidos Quevedo, Terrazas y Almeida compartían cargos en la directiva de la Unión Ganadera Regional en 1942.

También como buen callista, Quevedo exhibía un radicalismo anticlerical de primera línea que se tradujo en severas restricciones al culto católico, sobre todo a partir del decreto de octubre de 1934 que retiró las licencias a los sacerdotes. Ya desde antes, una iniciativa aprobada por el Congreso local había cambiado los nombres de varias localidades: por ejemplo, Santa Eulalia se llamó Aquiles Serdán, Santa Isabel pasó a ser General Trías, a San Lorenzo le correspondió el complicado nombre de Doctor Belisario Domínguez, a Carretas el de Gran Morelos, etcétera. Hubo dos San Franciscos que se salvaron: Conchos y Borja; también se salvó Santa Bárbara. Los católicos vivieron años difíciles pues volvieron las misas y bautizos a escondidas. El 3 de mayo de 1936 hubo un enfrentamiento armado entre católicos y sindicalistas en Camargo, con saldo de varios muertos, heridos y detenidos; el gobernador explicó el asunto como una provocación de los fanáticos católicos del lugar.

Quevedo también adoptó con fervor la educación socialista; se impulsaron campañas propagandísticas contra la educación católica y a favor de la educación sexual, lo que provocó gran enojo entre los sectores católicos. Luis Urías y Jesús Barrón recorrieron el estado llevando el mensaje contra el fanatismo religioso y a favor de la educación socialista. Cuando Quevedo vio que los proletarios aparecían en labios del presidente Lázaro Cárdenas, no dudó en incorporar a su discurso las declaraciones acerca de su identificación de clase con obreros y campesinos, por ejemplo en la inauguración del Congreso Campesino de 1935. Pero era mucho más un discurso que una práctica política consistente.

A Quevedo le correspondió una época económica mucho más favorable que a sus antecesores inmediatos. Por ejemplo, 1935 fue un buen año para la minería. En Cusihiuriachic la compañía extranjera reanudó actividades, con excelentes resultados, y en Maguarichic un descubrimiento de oro hizo prosperar a una antigua

pero modesta localidad serrana. Entre agosto y octubre de ese año, los 1200 obreros de la fundición de Ávalos, la Asarco, sostuvieron una huelga en busca de mejoras salariales y de su contratación colectiva. La huelga fue apoyada por el gobierno local con dinero proveniente de descuentos aplicados a los sueldos de los burócratas locales. El triunfo de los huelguistas inauguró una nueva época en las relaciones laborales en este importante sector de la economía local, pues consolidó al Sindicato Minero Nacional, formado apenas en abril de 1934. Poco después varias secciones sindicales mineras de Chihuahua imitarían los pasos de la de Ávalos; se avanzaba así en el establecimiento de una relación contractual entre patrones y trabajadores de carácter nacional.

Sin embargo, en estos años se consolidó también el contraste entre las grandes explotaciones mineras (en su mayor parte en manos extranjeras), ubicadas en el corredor Parral-Chihuahua, y la pequeña minería y el gambusinaje en un sinnúmero de centros mineros ubicados en la sierra. Este último sector no tenía la capacidad financiera ni tecnológica de los extranjeros; pero ambos contribuían a hacer de la minería una de las actividades más importantes de la economía —y de la cultura— de la entidad. El empleo de la pequeña minería y la subsistencia de pequeñas empresas familiares eran algunos de los ingredientes más sobresalientes de la historia local en ese tiempo.

En la agricultura, a pesar de que 1935 no fue un buen año de lluvias, las cosechas mejoraron notablemente. El precio del algodón se mantenía a la alza y los productores del Valle de Juárez y de la nueva zona agrícola de Delicias, abierta apenas en 1933 en virtud de las obras de riego construidas por el gobierno federal, mostraban cifras crecientes en cuanto a rendimientos y ganancias: en 1936 la superficie abierta al cultivo en Delicias superaba las 20000 ha y el valor de la producción casi llegaba a los siete millones de pesos, un monto similar al del valor de la producción agrícola de todo el estado en el terrible año de 1931. Para beneplácito de los ganaderos, en 1935 se reanudó también la exportación de ganado: la venta de ganado bovino a compradores esta-

dounidenses aumentó de unas 60 000 cabezas al año en 1933 y 1934 a más de 245 000 en 1935. La fundación de Ciudad Delicias en 1933, como cabecera del sistema federal de riego del Río Conchos, significó la consolidación del poblamiento de los valles, signo de los nuevos tiempos. Situada a una altitud de 1 185 msnm, la nueva localidad nació al lado de la línea del Ferrocarril Central.

Donde se sufría más era en las zonas temporales, sobre todo en las colonias formadas al amparo de la Ley Agraria local. Repetidas quejas de los colonos acerca de la dificultad para pagar los abonos y la falta de créditos llenaban los escritorios de las autoridades. En algunos casos los colonos se olvidaban de su intención de adquirir los lotes de la colonia y preferían el reparto por la vía ejidal, como ocurrió en la colonia Gardea en 1927 y como sucedió en los años que venimos comentando en la colonia Cuauhtémoc, del municipio de Chihuahua.

Para los disidentes políticos del gobierno estos años fueron de gran rudeza. Por ejemplo, un antiguo aliado de Quevedo, el líder agrarista Andrés Mendoza, tuvo que huir del estado por causa de la fuerte represión que el gobierno local ejercía sobre él y su organización. Mendoza denunció el hecho ante el presidente Abelardo L. Rodríguez sin lograr mayor eco, aunque en 1935 el presidente Cárdenas lo envió como agente general de la Secretaría de Agricultura y Fomento. No escaseaban las noticias de asesinatos mediante la ley fuga ni de crímenes ligados al contrabando y a la política de Ciudad Juárez. La dureza fue uno de los rasgos del gobierno de Quevedo.

Es difícil explicar la supervivencia de Quevedo al frente del gobierno local luego de la ruptura de Cárdenas con Calles. Los cónsules estadounidenses en Chihuahua se quebraban la cabeza tratando de explicar la permanencia de Quevedo, pues era por demás evidente que su forma de gobierno, sus nexos con los negocios privados y su nepotismo no eran precisamente los atributos favoritos del presidente Cárdenas. La única explicación eran las fuertes ligas de Quevedo con los altos mandos del ejército y quizá la urgente necesidad del presidente de la República de contar con el respaldo de gobernadores no callistas.

Este probable vínculo de Quevedo debió tener un gran peso, pues el general mantuvo fuerte presencia política en Chihuahua después de que el gobernador concluyera su mandato en 1936. Su sucesor fue el agrónomo Gustavo L. Talamantes, un político formado en las lides agrarias desde los tiempos de Enríquez. Talamantes contó con el apoyo de la maquinaria electoral oficial y con la simpatía de Quevedo; pero no pasaría mucho tiempo antes de que Talamantes y el ex gobernador Quevedo se repudiaran. Talamantes argumentó que Quevedo pretendía manejar su gobierno y éste alegaba la traición de aquél. Para fortalecer su posición, el gobernador intentó acercarse al presidente Cárdenas y promover su propia organización campesina. La división de este sector se hizo evidente en abril de 1937 cuando nació una liga que se reivindicaba como la auténtica representación campesina. Del mismo modo, Talamantes comenzó a dismantelar el anticlericalismo quevedista, aunque no con la rapidez suficiente como para impedir el asesinato del sacerdote de Santa Isabel, Pedro Maldonado, el 11 de febrero de 1937. Talamantes también era acusado de reprimir a los campesinos y de entregar tierras ejidales de mala calidad. En ese contexto ocurrió el asesinato, en abril de 1939, del famoso líder Socorro Rivera, quien encabezaba la lucha por la afectación del enorme latifundio de Bavícora, propiedad del empresario del periodismo estadounidense William Hearst.

Pero las cifras disponibles muestran que el reparto agrario se incrementó notablemente en estos años, en coincidencia con el radicalismo del gobierno cardenista. Entre 1930 y 1940 la superficie ejidal pasó de poco más de un millón a casi tres millones de hectáreas.

El 12 de marzo de 1938 el general Quevedo asesinó al ingeniero Ángel Posada, un antiguo correligionario suyo, en un hotel de Ciudad Juárez. Poco después, y como muestra del enrarecido ambiente de la política local, un paquete bomba mató al presidente municipal de Ciudad Juárez, José Borunda. Éste era miembro de un grupo político denominado Bloque Izquierdista del Norte. Quevedo se entregó a las autoridades aunque pronto recibió el espaldarazo de Maximino Ávila Camacho, un poblano poderoso,

y quien pagó la fianza de 10000 pesos. Más tarde Quevedo fue nombrado jefe militar en Puebla.

Pero lo más importante estaba por venir. El enfrentamiento entre Talamantes y Quevedo tomaría proporciones mucho más complejas al acercarse las elecciones para nombrar al nuevo gobernador en julio de 1940, en coincidencia con la elección presidencial. Quevedo, el Partido de la Revolución Mexicana (el sucesor del PNR) y algunos sectores locales expresaron su apoyo a la candidatura del subsecretario de Agricultura, el ingeniero Fernando Foglio Miramontes. Sin embargo, el gobernador Talamantes, los líderes locales del PRM, algunos líderes campesinos y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), e incluso miembros del Partido Comunista Mexicano (PCM), prefirieron apoyar al ex jefe de la policía estatal Alfredo Chávez.

Buena parte de 1939 y del siguiente año se consumió en la disputa electoral. Los dos candidatos buscaron el favor del presidente Cárdenas y del líder del PRM, Heriberto Jara. Ambos se manifestaron a favor del candidato presidencial Manuel Ávila Camacho y atacaban duramente a su opositor Juan Andrew Almazán. El PRM, por medio de su jefe Jara, optó por Foglio e incluso, en mayo de 1940, aprobó la expulsión de los simpatizantes de Chávez, incluyendo al propio gobernador Talamantes. Así llegaron a las elecciones de julio de 1940. Pero las elecciones no aclararon mucho. Ambos candidatos se declararon triunfadores, por lo que el gobierno federal tuvo que intervenir. En septiembre se llegó a un arreglo de altos vuelos cuyos términos apenas se adivinan: Chávez gobernaría el cuatrienio 1940-1944 y Foglio el sexenio 1944-1950; los chavistas tendrían el Congreso local, pero los foglistas la representación de diputados al Congreso federal y los senadores. El presunto acuerdo se respetó: Chávez gobernó durante su periodo y el 4 de octubre de 1944 tomaba posesión su acérrimo enemigo, el ingeniero Foglio Miramontes, quien concluyó el primer sexenio local en octubre de 1950.

EXPANSIÓN ECONÓMICA Y URBANIZACIÓN

A partir de 1940, y quizá hasta 1960, la economía chihuahuense vivió años de sostenida expansión, especialmente en el campo. Por lo menos tres elementos así lo sugieren: el aumento de la producción algodonera, la ampliación de la frontera agrícola en las zonas temporeras y el crecimiento ganadero.

La agricultura chihuahuense creció a tasas aceleradas como resultado de las inversiones y las acciones gubernamentales en la década de los años treinta. El sistema de riego de Delicias, con la terminación de la presa Las Vírgenes en 1949, se amplió a las 53 000 ha previstas desde 1928; con ello se convirtió, por mucho, en el área irrigada más importante de la entidad. Allí la economía algodonera mostró gran capacidad para aglutinar relaciones obrero-patronales, mecanismos financieros y comerciales, y para permitir el enriquecimiento de unos cuantos agricultores. La ciudad sede de esta verdaderamente nueva región, Delicias, creció de apenas 6 000 habitantes en 1940 a casi 40 000 en 1960 y a más de 53 000 en 1970. Delicias se "tragó" literalmente a las localidades de origen colonial o del siglo xix ubicadas en los límites del distrito de riego, como Camargo, Saucillo, Meoqui y Rosales. Era el nuevo Valle de San Bartolomé, aunque ahora sin vínculos estrechos con la actividad minera local. Por efectos de la división del trabajo y de la formación del mercado interno en el país, el algodón se vendía a compañías extranjeras (estadounidenses), que lo exportaban a otros países o lo enviaban para el consumo de la creciente industria textil ubicada preferentemente en el corredor Orizaba-Puebla-Ciudad de México.

Por su lado, la agricultura de granos básicos se expandió notablemente entre 1940 y 1960. Las cifras sorprenden: en 1941 se sembraban 123 000 ha de maíz y 28 000 de frijol; dos décadas después, de maíz se sembraban 236 000 y de frijol 124 000. Tal aumento tuvo lugar en buena medida en el oeste de la entidad, donde el régimen de lluvias posibilitaba cultivar sin riego, algo casi imposible en la zona más baja y cálida de Delicias, o bien

en el Valle de Juárez. En esta amplia zona, ubicada en el suave declive oriental de la Sierra Madre, el reparto agrario propició cambios drásticos en el uso del suelo. Las grandes empresas ganaderas, desarrolladas sobre todo en tiempos del porfiriato, fueron sustituidas en algunos lugares por un conjunto numeroso de familias campesinas dedicadas a la agricultura maicera, aunque también a la ganadería de pequeña escala. Tal cambio trajo consigo un importante aumento de población que dio lugar a la formación de nuevos municipios; por ejemplo, el de Gómez Farías en 1951. Este fenómeno de expansión de la frontera agrícola dio lugar a un paisaje más agrario y a una consecuente debilidad urbana. Por ello esta zona se distinguía de las áreas de la porción más baja, en las que se asentaban grandes ciudades, como Ciudad Juárez y la capital del estado. La excepción a la regla era justamente una ciudad que había nacido en 1927: Cuauhtémoc. Pero su excepcionalidad puede explicarse en razón de su función comercial en esa vasta región agraria conocida popularmente como el "Noroeste", en la que la presencia menonita era un ingrediente importante.

La ganadería empresarial recibió un gran espaldarazo político-jurídico de manos del presidente Cárdenas, el mismo que con su radicalismo agrario ponía en grave predicamento la viabilidad de esta actividad privada que marcó el prototipo del capitalista chihuahuense porfiriano. Los certificados de inafectabilidad agraria, emitidos por un periodo de 25 años a partir de 1937, dieron confianza a los ganaderos, quienes se empeñaron en hacer crecer sus negocios. La ganadería se vio duramente afectada por la fiebre aftosa que obligó a suspender las exportaciones entre 1947 y 1951; a los grandes ganaderos les pareció buen negocio abrir varias empacadoras de carne para insistir en la exportación de carne al vecino país del norte. Las cifras disponibles muestran el notable aumento de la ganadería de gran escala, que ocupaba enormes porciones de la zona desértica y de la parte norte del estado. El hato conoció mejoras en las variedades. La incorporación de sementales Hereford, lenta en tiempos del porfiriato, se hizo más veloz en estos años; a fines de los años sesenta se introdujeron

nuevas razas: la Brangus y la Charolais, esta última gracias a la iniciativa personal del entonces inminente gobernador Óscar Flores Sánchez. Para 1980 se estimaba que más de 40% del ganado vacuno era de raza mejorada. El principal mercado de esta ganadería, como la del resto del norte mexicano, era la hambrienta población estadounidense, que ya había popularizado la hamburguesa y el hot dog. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980 las cifras de exportación se mantuvieron, con vaivenes, en torno a las 200 000 cabezas anuales.

En materia forestal, los empresarios locales avanzaron paulatinamente en el control de una rama en la que la depresión de 1929 había debilitado las inversiones extranjeras, de empresas como la Mexico Northwestern Railway, que llegó a tener más de un millón de hectáreas de bosques en la sierra, además de las instalaciones forestales ubicadas precisamente en Madera. Entre 1946 y 1952, varios empresarios ligados al Banco Comercial Mexicano adquirieron las inversiones canadienses en ferrocarriles, tierras y fábricas madereras. Entre ellos estaban el general Antonio Guerrero y Esteban Almeida, ambos vinculados con gobernantes de años anteriores. Con estos intereses se formó en 1952 la empresa Bosques de Chihuahua. Ésta vendió el ferrocarril al gobierno federal y obtuvo concesiones y facilidades para explotar los bosques y abastecer de materia prima a las compañías madereras del mismo grupo. La empresa poseía casi 260 000 ha de bosque; el resto de la madera lo obtenía del arrendamiento de propiedades privadas y ejidales. Poco después estos mismos capitalistas construyeron plantas de celulosa y triplay en la Colonia Anáhuac, junto a la Laguna de Bustillos, y para ello contaron con capital y tecnología de origen italiano.

Sin duda alguna, el surgimiento de Bosques de Chihuahua expresaba el carácter de los aires predominantes de la época: puertas abiertas y estímulos a la iniciativa privada. Los tarahumaras, que apenas habían comenzado a recibir ejidos para formalizar su posesión de siglos sobre estos bosques, quedaron sometidos a relaciones de explotación de increíble dureza. Como pobre compensación, en 1952 se inauguró el centro coordinador del Insti-

tuto Nacional Indigenista (INI), en Guachochi. A partir de entonces el INI, dirigido por el antropólogo Francisco R. Plancarte, desarrolló una amplia actividad en materia educativa, de salud, de infraestructura carretera y de apoyo en los trámites agrarios. En estas labores comparte méritos con los jesuitas, quienes desde su retorno en 1900 habían insistido en trabajar entre los tarahumaras, tal y como lo habían hecho desde su llegada hasta el momento de su expulsión en 1767. Sin embargo, el deterioro tarahumara no se alcanzó a frenar.

Eloy Vallina es el hombre prototípico del desarrollismo o del milagro económico local. De origen español, Vallina llegó a Chihuahua en 1925 y fundó el Banco Mercantil. Bien casado con una hija de una familia de industriales (Lagüera), Eloy logró atraer a miembros de la élite local y formar con ellos el Banco Comercial Mexicano en 1934. Años después su banco figuraba entre los cinco más grandes del país. En torno a ese banco se asociaron por igual los Terrazas y los Almeida, sucesores del gobernador derrocado en 1927, y otras familias de gran renombre desde tiempos porfirianos. Con el tiempo, el grupo económico organizado alrededor del Banco Comercial Mexicano, el grupo Comermex, llegó a contar con 24 000 empleados. Don Eloy, el mayor símbolo empresarial de la época, fue asesinado en mayo de 1960.

El auge de este grupo bancario, con sede en la capital del estado, era señal inequívoca de los grandes cambios que ocurrían en la sociedad local. En 1970 la mayor parte de la población chihuahuense (55%, si consideramos como urbana a la población que se asentaba en localidades mayores de 15 000 habitantes) vivía en las ciudades. En el periodo 1940-1970 se habían desarrollado ampliamente las actividades típicamente urbanas, como los servicios y el comercio. Al mismo tiempo, y al compás de los cambios demográficos nacionales, la población superaría con mucho las tasas de crecimiento de los dos periodos de auge demográfico de antaño, el de 1790-1823 y el de 1880-1910. Después de la disminución de la década revolucionaria, la población chihuahuense aumentó a tasas aceleradas: de 530 000 habitantes en 1930 a 1 600 000 en 1970, es decir, un aumento de casi tres veces en esos 40 años, un

aumento apenas superior al de la población del país en el mismo periodo.

Las principales ciudades de Chihuahua eran la capital, la fronteriza Ciudad Juárez, Parral, Delicias y Cuauhtémoc: tres de origen colonial y dos del siglo xx. Tres se hallaban por debajo de los 1 500 msnm (la capital, Ciudad Juárez y Delicias) y dos por encima (Parral y Cuauhtémoc). La acelerada urbanización del siglo xx “bajaba” a la población desde las partes altas cercanas a la sierra a los valles situados más abajo. Ciudad Juárez entró en auge en ocasión de la segunda Guerra Mundial. Su población se dedicó de lleno al comercio, a los servicios y al turismo. La vida alegre era una actividad de no escasa importancia. El censo de 1950 mostró que por primera vez Ciudad Juárez era más grande e importante que la ciudad de Chihuahua. Ello expresaba el cambio de los tiempos: era más próspera una ciudad que vivía de la actividad fronteriza con el país más poderoso del mundo en ese tiempo, que la ciudad capital y centro comercial y financiero del estado, además de beneficiaria de la minería de Santa Eulalia.

Parral, por su parte, se consolidaba como el centro minero y comercial más importante del sur de la entidad. Aunque con un crecimiento menos notable que el de otras ciudades, su función como centro comercial de una amplia área serrana (Guadalupe y Calvo) le brindaba la diversificación económica que bien podría salvarla de un periodo de crisis minera.

Detrás de estas cinco ciudades, que en 1970 concentraban 93% de la población urbana y 51% de la total del estado, se ubicaban las localidades medianas de Camargo, Santa Bárbara, Jiménez, Casas Grandes y Guerrero, cuyas tasas de crecimiento eran menores, quizás, por la presencia cercana de una localidad más dinámica o, de plano, por el claro predominio de las actividades agrarias en sus alrededores.

A principios de la década de los años cincuenta esta red de ciudades estaba comunicada en su mayor parte por carreteras pavimentadas. Desde 1929 comenzaron los trabajos para construir la carretera entre Chihuahua y Ciudad Juárez, no por coincidencia las dos ciudades principales. Más tarde se abrieron frentes

de trabajo entre Chihuahua y Cuauhtémoc y entre Chihuahua y Parral a través de Camargo. El 5 de mayo de 1951 se inauguró la Carretera Panamericana, que unía la frontera norte con la frontera sur. Pronto, sobre esa larga carretera, comenzaron las carreras de automóviles que asombraron a propios y extraños. La vía más tardía fue la que va de Chihuahua a Casas Grandes, que todavía estaba en construcción a fines de 1952.

De lo anterior pueden destacarse dos aspectos: por un lado, la categoría de centro de primer orden que adquirió la ciudad de Chihuahua, pues todas estas carreteras la tenían como punto de confluencia; y segundo, que en cierto modo se trataba de la pavimentación del camino abierto por Oñate a fines del siglo xvi en su expedición hacia Nuevo México. La estructuración espacial del estado, originada con el surgimiento de Chihuahua-Santa Eulalia en 1709, se veía ratificada a mediados del siglo xx. Esta ratificación

CUADRO X.1. *Población de las principales localidades del estado de Chihuahua (1645-2000)*

Años	Parral	Cusi	Paso del Norte		Camargo
			(Cd. Juárez)	Chihuahua	
1645	10 000	—	—	—	—
1742	4 870	800	3 000	17 850*	—
1765	2 963	1 353	4 101**	4 652	—
1803	5 000	—	6 209***	11 600	—
1823	9 300	2 779	5 247	9 250	1 581
1900	14 748	1 755	8 218	30 405	4 709
1950	32 063	378	122 566	87 000	11 945
1990	88 197	183	789 522	516 153	33 582
2000	198 876	97	1 187 275	671 876	37 456

* Incluye Santa Eulalia.

** Cifra de 1784.

*** Cifra de 1805.

FUENTES: Okah L. Jones, *Nueva Vizcaya. Spanish Settlers on the Northern Frontier of New Spain*, University of Oklahoma Press, Norman, 1979; Graziella Altamirano y Guadalupe Villa, *Chihuahua. Textos de su historia*, ya citada; Peter Gerhard, *México en 1742*, Porrúa, México, 1964, e INEGI, *Censo de Población 2000*.

significaba también que la economía y la política favorecían a la llanura baja en detrimento de la Sierra Tarahumara, que así veía ratificada también su marginación, su pobreza. La inauguración del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, en noviembre de 1961, hizo realidad un antiguo sueño de gobernantes y empresarios, pero tampoco alcanzó a modificar la tragedia tarahumara ni la organización espacial básica de la entidad.

LOS AÑOS DE MADERA

La panorámica anterior sobre el cambio económico y social en el periodo del llamado "milagro mexicano" no incluye cuestiones de índole político-ideológica que ahora conviene revisar brevemente. Los años entre 1940 y 1960 fueron de un profundo conservadurismo en los gobiernos locales, que no ocultaban su interés por apuntalar los negocios de las nuevas élites urbanas. Un movimiento popular de mediados de los años cincuenta, iniciado a raíz del asesinato de un taxista en la ciudad de Chihuahua, obligó al gobernador Óscar Soto Máynez a abandonar el cargo. Soto Máynez había sucedido a Foglio Miramontes en el gobierno local y le correspondió enfrentar la chispa prendida en Delicias por simpatizantes de la candidatura presidencial del general Miguel Henríquez, en la madrugada del 15 de enero de 1954. Un antiguo colono del distrito de riego y presidente municipal entre 1944 y 1945, Emiliano J. Laing, era el líder de los rebeldes que atacaron el cuartel militar ubicado sobre la Carretera Panamericana. Laing murió víctima probablemente de una traición, pues los soldados parecían estar esperando el desorganizado ataque rebelde, según se narra en el libro del cronista deliciense Carlos Gallegos. A Soto Máynez también le correspondió fundar la Universidad Autónoma de Chihuahua, en 1954, con base en el viejo Instituto Científico y Literario. Las primeras escuelas fueron las de Medicina, Derecho e Ingeniería.

El médico Jesús Lozoya concluyó el periodo de Soto Máynez en 1956. El nuevo gobernador, el senador Teófilo Borunda, un an-

tiguo enemigo de los Quevedo, se distinguió por su apoyo a la ganadería y a la fruticultura, en particular en el oeste y noroeste de la entidad. Una muestra del carácter de todos estos gobernadores tal vez sea la caída de las cifras del reparto agrario, que tuvieron uno de sus periodos de menor brillo. La suspensión virtual del reparto y los apoyos decididos a la agricultura y la ganadería privadas alimentaron un malestar social que no estaba previsto en el proyecto de estos gobernantes.

La década de los sesenta, quizá una de las más intensas del siglo xx a lo largo y ancho del planeta, reservaba el estallido de un importante movimiento social. Casi 30 000 campesinos invadieron varios ranchos ganaderos alegando el fin de las inafectabilidades decretadas por Cárdenas en 1937; los menonitas también fueron víctimas de las amenazas de grupos campesinos que creían que las concesiones otorgadas en los años veinte a esos extranjeros fenecían a mediados de la década de 1960. Los maestros y estudiantes normalistas de Saucillo y Salaices y algunos otros sectores de la burocracia local realizaron varias movilizaciones. El año de 1964, en el contexto de una grave baja en el precio del ganado de exportación y de una tremenda crisis algodonera (sobre todo en Delicias), fue particularmente activo. Al calor de la Revolución cubana, antiguos líderes sociales y políticos y una nueva generación de maestros y estudiantes normalistas hallaron campo propicio en las inconformidades sociales acumuladas en los años anteriores. En marzo de 1964 las protestas contra los caciques de la zona serrana llegaron a las armas con la muerte de Florentino Ibarra. Nacía la guerrilla.

El 23 de septiembre de 1965 ocurrió el asalto armado a Madera. Jóvenes normalistas y maestros, encabezados por el profesor Arturo Gámiz y el médico Pablo Gómez, atacaron el cuartel militar de esa localidad, originada al calor de las inversiones extranjeras del porfiriato. Los soldados, como en 1954, repelieron y victimaron a los rebeldes: Miguel Quiñones Pedroza, Antonio Escobedo Gaytán, Arturo Gámiz García, Manuel Martínez Valdivia, Pablo Gómez Ramírez, Emilio Gámiz García y Salomón Gaytán. El gobernador del estado era entonces el general camarguense Práxedes Giner Durán,

el único militar con antecedentes villistas que alcanzó la gubernatura del estado.

Una de las demandas de los alzados de Madera era precisamente la afectación de los latifundios y su reparto entre los campesinos sin tierra, lo que fue corroborado por el general Lázaro Cárdenas, enviado por el presidente Díaz Ordaz a la zona de conflicto meses después. Las actividades guerrilleras continuaron. En agosto de 1967 otro cacique de la sierra fue ejecutado y en julio de 1968 los guerrilleros asaltaron y destruyeron un aserradero de la empresa Bosques de Chihuahua. Poco después los guerrilleros fueron capturados y fusilados en el estado de Sonora. Con métodos violentos, este grupo enfrentaba la política favorable a la ganadería y a la explotación forestal de los grandes capitalistas locales. No en balde el sucesor de Giner, el abogado Óscar Flores Sánchez, se esmeró en llegar a un acuerdo entre las organizaciones campesinas y los grandes ganaderos (como lo era él mismo) para finiquitar "el problema agrario". Para 1970 se habían firmado ya varios convenios que dejaban a salvo los extensos ranchos ganaderos, favorecidos por el método de calcular la pequeña propiedad en terrenos ganaderos según un índice de agostadero que podía llegar hasta a 20 hectáreas por cabeza. Con ese índice, el propietario podía poseer legalmente 5 000 ha. Si a ello se le sumaban los arreglos familiares, el resultado era que a pesar de la reforma agraria las nuevas élites acaparaban porciones importantes de tierra ganadera. Eso contrastaba con la escasez de agostaderos en los ejidos, lo que llevaba a una división del trabajo del todo desfavorable para los pequeños productores, que tenían que criar el ganado en sus primeros meses de vida, justamente cuando hay más riesgos y cuando el aumento de peso no es tan significativo. El gobierno federal, por medio del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, respaldó la gestión de Flores. Sin embargo, las invasiones de tierra continuaron a lo largo del sexenio echeverrista (1970-1976) e incluso se prolongaron, con menor intensidad, hasta 1988.

Pero no sólo se invadían tierras ganaderas. A los problemas rurales derivados de rezagos y acaparamientos indebidos se suma-

ron los movimientos populares en las zonas periféricas de las ciudades. Era una de las secuelas de la urbanización acelerada y del empobrecimiento rural. En junio de 1968, en las postrimerías del gobierno de Giner, 300 familias invadieron varios predios situados al norte de la ciudad de Chihuahua, propiedad de familias adineradas como las Laguette, Valenzuela y Pinnoncelly. Organizada por activistas desprendidos del Partido Comunista, encabezados por Rodolfo Ramos Beltrán, esta invasión atrajo en poco tiempo a cientos de familias que acabaron por formar la colonia Francisco Villa. El proyecto político era hacer de la colonia un centro de agitación revolucionaria y vincularse con otros movimientos de masas. El liderazgo de Ramos declinó en 1969 y su lugar fue tomado, hasta nuestros días, por Rubén Aguilar Jiménez.

Tal vez por esas tensiones múltiples el presidente Echeverría decidió afectar en 1971 la propiedad de Bosques de Chihuahua para formar el ejido más grande del país: el Largo, con 256 000 ha. Los ejidatarios, sin embargo, quedaron obligados a abastecer de madera a la empresa privada, que conservó sus instalaciones industriales.

El 15 de enero de 1972 tres asaltos simultáneos a tres sucursales bancarias de la ciudad de Chihuahua sirvieron para probar la rudeza del gobernador Flores Sánchez. Los responsables fueron rápidamente capturados, pero, para sorpresa e indignación de la opinión pública, aparecieron muertos poco después. Estos jóvenes eran herederos de la vertiente radical del movimiento que derivó en el asalto a Madera y que fue reforzada después de la masacre estudiantil ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

La protesta por el asesinato de los tres asaltantes de los bancos creció y atrajo a gran número de grupos. El movimiento culminó el 28 de enero siguiente con la formación del Comité de Defensa Popular (CDP), que fungiría como centro coordinador y aglutinador de organizaciones diversas, como la colonia Francisco Villa, el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, el Sindicato de la Universidad, el Sindicato de Aceros de Chihuahua, el Frente Auténtico del Trabajo, la sección 25 del Sindicato de Electricistas, el Movimiento Revolucionario del Magisterio y el Consejo Estudiantil de Lucha.

El CDP mantuvo ese carácter hasta 1974, cuando quedó reducido al movimiento de la colonia Francisco Villa.

LA HORA DE LAS MAQUILADORAS

Salvo por las plantas mineras, la industria no había sido una actividad sustancial en la economía estatal. Era una industria local compuesta por plantas despepitadoras de algodón, fábricas textiles y procesadoras de alimentos (harina de trigo) y bebidas. A partir de 1947, con la apertura de Cementos de Chihuahua, se inició un cambio industrial que incluyó la celulosa ya referida y la industria acerera.

Sin embargo, el cambio más drástico ocurrió en la década de 1960 gracias a la confluencia de dos fenómenos: por una parte, el interés gubernamental por apuntalar la economía de la frontera, que se tradujo en el Programa Nacional Fronterizo y en la formación de parques industriales que brindaban grandes facilidades a la instalación de industrias extranjeras en las ciudades fronterizas del norte de México. Esto tenía que ver con la terminación, en 1964, de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre el paso de trabajadores mexicanos a ese país, el llamado Programa Bracero, iniciado en 1942, en plena segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el interés de algunas empresas de Estados Unidos por mejorar los rendimientos de capital mediante el establecimiento de plantas en zonas de bajos salarios y de abundante mano de obra. Las transformaciones de los procesos de trabajo de la industria en el mundo obligaban a las empresas a relocalizar en distintos lugares del mundo fases de los procesos productivos. Las comunicaciones y los transportes cada vez más rápidos y eficientes permitían dividir la cadena productiva para alcanzar mejores rendimientos.

El resultado de estos dos intereses fue el inicio de la instalación de plantas maquiladoras en el norte del país, sobre todo en Tijuana y Ciudad Juárez. En 1965 el empresario Jaime Bermúdez inauguró un parque industrial en Ciudad Juárez y el crecimiento fue notable: en 1970 había apenas 22 plantas con 3 165 obreros;

en 1974 las cifras habían subido a 89 plantas con 17 484 trabajadores, y para 1987 las plantas eran 252 con poco más de 95 500 trabajadores. Para este último año algunas compañías se habían instalado en varias localidades del estado, preferentemente en la capital (47 plantas con 24 500 obreros) y en Delicias (seis plantas con 2 500 obreros). En 1982 tuvo lugar un gran acontecimiento industrial: la instalación en las afueras de la ciudad de Chihuahua de la planta armadora de motores de la empresa Ford, capaz de producir 600 000 al año. Con base en equipos automáticos y formas de organización inspiradas en innovaciones japonesas, esta planta empleó a más de mil obreros y se convirtió en un gran estímulo para el establecimiento de otras industrias en la zona norte de la ciudad capital.

Por lo menos cuatro aspectos deben destacarse de este desarrollo industrial: primero, el crecimiento de las maquiladoras superó por mucho las tasas de crecimiento de las otras ramas industriales (por ejemplo, en términos de generación de empleos); segundo, hubo una gran transformación tecnológica entre las primeras maquiladoras, dedicadas a la distribución de cupones para las promociones de mercadotecnia y la fabricación de prendas de ropa, y las modernas plantas, que integraron computadoras, robots y métodos de ensamble automatizado de componentes. El tercer aspecto es la incorporación del trabajo femenino a la industria, hecho que ha trastocado patrones y formas culturales en el interior de los hogares basados en la proletarización masculina y en la dedicación femenina a las tareas domésticas y a la crianza de los hijos. El cuarto y último aspecto es la preponderancia de empresarios involucrados en el negocio de las maquiladoras, como Jaime Bermúdez, cuyo ascenso se da a la par del declive de la familia Vallina, cabeza del otrora poderoso grupo Chihuahua. No hay que olvidar que Bermúdez fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el periodo 1947-1958.

Este movimiento económico afianzó las tendencias demográficas anteriores a 1970, es decir, consolidó la concentración de la población en las ciudades. Así, para 1990 dos municipios, el de la capital y el de Ciudad Juárez, contaban con más de la mitad

(54%) de los 2'442'000 habitantes del estado. Si a estos municipios se agregan aquellos con más de 100 000 habitantes (Cuauhtémoc y Delicias), el porcentaje sube hasta casi dos tercios del total (63%). Ese movimiento poblacional se mantuvo en la década de 1990. Según el censo del 2000, ya 61% de los chihuahuenses vivía en la capital y en Ciudad Juárez, y 69% vivía en estos municipios y en los otros dos (Cuauhtémoc y Delicias) con más de 100 000 habitantes. El conteo de 2005 confirmó esa tendencia, pues los habitantes de los municipios de Ciudad Juárez y de la capital representaban 64%, mientras que la población que sumaba la de estos municipios y la de los que contaban con más de 100 000 habitantes (Cuauhtémoc, Delicias y Parral) alcanzó 75 por ciento.

Un aspecto que con frecuencia pasa desapercibido es que la urbanización descrita requirió crecientes volúmenes de agua, que se extrajo de mantos subterráneos cada vez más distantes y profundos y, por ende, a un costo cada vez mayor. A mediados de 1989 entró en servicio el acueducto del Sauz, de 45 km de longitud, para proveer del líquido a la capital del estado. Al mismo tiempo se intensificó la explotación del acuífero Tabalaopa-Aldama, cuyo nivel ha descendido en vista de la sobreexplotación. En 1999 se estimaba que para 2008 el abatimiento de ese acuífero alcanzaría cuatro metros al año. La situación en Ciudad Juárez no es más halagüeña. Y la presión sigue. Próximamente se instalará una fábrica de cerveza en Meoqui, con capacidad de 500 millones de litros anuales, que también hará un uso intenso de las aguas subterráneas.

En términos de la perspectiva que brinda el recorrido histórico general, el rasgo más importante del siglo xx es el movimiento de población hacia las ciudades, un fenómeno nacional y mundial; en ese sentido, cabe destacar el crecimiento de Ciudad Juárez, el gran protagonista del siglo xx. De acuerdo con el método seguido en este libro para mostrar esa distribución (distinguir entre norte y sur del estado y eliminar la población de la capital), tenemos que para 1990 casi la mitad de la población (46%) vivía al norte de la ciudad de Chihuahua. En el 2000 el porcentaje alcanzó 49%. El sur seguía siendo la zona más poblada del estado, tal y como lo fue

desde su nacimiento. Sin embargo, nunca antes la porción norteña había tenido tanto peso demográfico en el estado. Sin duda alguna, el crecimiento de Ciudad Juárez explica por entero la gran importancia del norte chihuahuense en la distribución de la población. Tal vez por ello el periodo 1930-2008 sea de Ciudad Juárez, como antes hubo periodos de Santa Bárbara, de Parral y de Chihuahua-Santa Eulalia. Del mismo modo, la acelerada urbanización de la segunda mitad del siglo xx completó el cambio en la distribución de la población apuntado en el primer capítulo: un doble movimiento poblacional, uno de arriba hacia abajo, de la sierra a los valles, de oeste a este, y el otro de sur a norte, de Parral hacia Ciudad Juárez, resumen el sentido de la moderna organización del espacio chihuahuense.

La creciente población urbana sería la gran protagonista de un nuevo tramo de esta historia: la lucha electoral.

LUCHA ELECTORAL Y GOBERNADOR PANISTA

Con excepción de las elecciones de 1940, los chihuahuenses parecían conformes con la organización electoral del Estado mexicano posrevolucionario. La caída del gobernador Soto Máynez en 1955 no alcanzó a configurar una oposición sistemática contra esa organización nacional, a pesar de la candidatura del panista Luis H. Álvarez en las elecciones para gobernador de 1956. Fueron más importantes las luchas sociales de los años sesenta y setenta de maestros, de campesinos y de algunos sectores obreros.

Pero esas luchas no se traducían en gran participación en las elecciones; incluso, el CDP tuvo durante años una postura antielectoral. Esa situación comenzó a cambiar en 1983, cuando en las elecciones de ese año prácticamente todos los municipios importantes (incluidos Chihuahua y Ciudad Juárez) fueron ganados por la oposición panista; Ciudad Cuauhtémoc quedó en manos del Partido Socialista de los Trabajadores y Zaragoza en poder del Partido Socialista Unificado de México. Con ese resultado, más de 65% de los chihuahuenses sería gobernado por autoridades surgidas de

la oposición. Este hecho, así como un conflicto universitario en el verano de 1985, obligaron al gobernador Óscar Ornelas a renunciar el 19 de septiembre, el día del terremoto en la Ciudad de México. El senador Saúl González Herrera terminó su periodo.

Para explicar esta súbita agitación electoral, los estudiosos han concedido gran importancia a la nacionalización bancaria decretada en septiembre de 1982. Esa medida gubernamental estremeció la relación entre los grandes empresarios locales y el aparato gubernamental. Al mismo tiempo, los obispos de Chihuahua y Ciudad Juárez expresaron la necesidad de que el voto fuera respetado. Esta "emergencia electoral" imprimió otro sello a los movimientos sociales en la entidad, por lo menos entre 1983 y 1986. Allí confluyó una gran inconformidad de diversos grupos y sectores de la población. Otro asunto oscuro fue el auge del narcotráfico: a fines de 1984 las autoridades descubrieron un enorme plantío de marihuana en Búfalo, muy cerca de Jiménez, de casi mil hectáreas.

El triunfo de la oposición distinguió a Chihuahua en el escenario político nacional, y más aún por la proximidad de los comicios de 1986 para elegir nuevo gobernador. El año electoral de 1986 comenzó con altas temperaturas político-sociales. Los obreros de Aceros de Chihuahua mantenían una huelga desde octubre del año anterior, los campesinos del noroeste habían tomado varias bodegas en protesta por los bajos precios de garantía y el CDP invadía terrenos en Casas Grandes.

En ese clima contendieron de un lado el priista Fernando Baeza, ex presidente municipal de Delicias y ex subprocurador general de la República, y del otro el contador público panista Francisco Barrio, quien había ganado las elecciones municipales de Ciudad Juárez en 1983. La campaña política fue intensa y no se veía tan lejana la posibilidad de un triunfo blanquiazul. El resultado finalmente favoreció a Baeza, hecho que desató una intensa movilización en las principales ciudades en contra de lo que se consideraba un gran fraude electoral. Marchas, mítines, bloqueos de calles, paros de empresas, huelgas de hambre de connotados personajes y cierres de puentes fronterizos llenaron los encabezados de los periódicos locales, nacionales y del extranjero. Uno

de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando el arzobispo de Chihuahua anunció la suspensión de cultos para el domingo 20 de julio, lo cual se impidió mediante una rápida intervención de la diplomacia del Vaticano. Pero la lucha de la oposición fue infructuosa, y Baeza tomó posesión en octubre de 1986.

Una obra pública de grandes proporciones (por ejemplo, el programa carretero) y un aumento sostenido de la industria maquiladora por lo menos hasta 1988 (cuando alcanzó tasas de crecimiento del empleo de 12% anual), junto con buenos precios de la exportación de ganado, propiciaron que la década de 1980 no fuera tan terrible para Chihuahua como para otras regiones del país. Sin embargo, los agricultores comenzaron a padecer en virtud del estancamiento de los precios de garantía, la eliminación de subsidios (por ejemplo, a la electricidad) y la contracción del crédito oficial. Varias movilizaciones salpicaron estos años. La década de los ochenta también vio crecer el problema del narcotráfico, con sus secuelas de violencia rural y urbana. A pesar de todo, Baeza logró concluir su sexenio. Pero antes tuvo que aceptar la derrota de su partido, lo que le impidió dejar a un sucesor cercano a él.

Nada parecía presagiar el desenlace de las elecciones de 1992. El partido oficial eligió a un mal candidato: el alcalde de Ciudad Juárez, Jesús Macías. El PAN insistió en Francisco Barrio. Sin la movilización panista de 1986, las campañas se veían muy competidas, en gran medida por el escaso carisma del candidato oficialista. Y Barrio ganó gracias al electorado urbano, que derrotó la preferencia por el PRI de los electores rurales.

De esa manera, el 4 de octubre de 1992 Chihuahua tenía al primer gobernador de oposición. Buena parte de los chihuahuenses no ocultó sus esperanzas de que el cambio político trajera mayores beneficios a la colectividad.

EL ÚLTIMO TRAMO

Para las autoridades panistas no fue fácil aprender a gobernar en medio de una estructura política basada en intereses, prácticas y

procedimientos creados durante la larga permanencia del PRI en el gobierno. El largo conflicto sostenido con los maestros, agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue ilustrativo de esas dificultades.

Sin embargo, el nuevo gobierno se topó con las características de su propio proyecto político. Centrado por un lado en el combate a la corrupción y a la inseguridad, y por otro en el impulso a la eficiencia administrativa y la inversión privada, el gobierno panista parecía alejado de las expectativas y necesidades de la población. Era un “gobierno frío”, sostiene Alberto Aziz en uno de sus libros. Por ello, las esperanzas abiertas por el triunfo electoral de 1992 se desgastaron muy pronto. En las elecciones intermedias de 1995 el PAN sufrió un duro revés, que se tradujo en la pérdida de varios municipios y del control del Congreso local.

Para fortuna de los nuevos gobernantes, los apremios políticos se vieron compensados por el comportamiento de la industria maquiladora, que se mantuvo como una fuente de empleo y en general de crecimiento económico. Entre 1990 y el 2000 las plantas en el estado aumentaron de 311 a 447 y los obreros y empleados, de 166 749 a 319 048. Este crecimiento permitió, como en la década de 1980, que el estado sorteara con cierta solvencia la crisis derivada de la devaluación del peso de diciembre de 1994, el mismo año del alzamiento zapatista en Chiapas y del asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio.

Sin embargo, otras ramas de la economía se comportaron de manera distinta. La agricultura y la ganadería sufrieron las consecuencias de los cambios de la economía mundial y de las políticas gubernamentales. La apertura comercial, derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde el 1° de enero de 1994, consolidó la estrategia general: reducción de apoyo oficial y competencia con productos extranjeros subsidiados. Los agricultores, como aquellos agrupados en el Frente Democrático Campesino, se movilizaron de nueva cuenta pero con escaso éxito. Ante ese panorama, algunos se arriesgaron y se dedicaron a la siembra de enervantes en la sierra, y otros optaron por emigrar a las grandes ciudades y también a Estados Unidos.

A las dificultades económicas que enfrentaba el campo se sumó la sequía registrada a lo largo de la década, especialmente en 1994-1995, cuando la precipitación media bajó 68% respecto de años anteriores. A pesar de no haber sido tan larga como la de 1949-1958, la reducción de la precipitación pluvial de esos años tuvo consecuencias dramáticas en un entorno ya de por sí adverso para la vida rural. En el principal distrito de riego del estado, el de Delicias, la superficie cultivada se redujo de 140 000 ha en 1990 a sólo 30 000 en el 2000. Cabe preguntarse qué tanto de tal reducción obedeció a la sequía y qué tanto al libre comercio y al retiro gubernamental del fomento agrícola. En Aldama el agua para las siembras comenzó a dedicarse de manera creciente a los numerosos balnearios. En 1996 se fundó en esta última localidad el Centro de Investigación sobre la Sequía (CEISS), del que se espera la generación de importantes conocimientos. En 2002 la sequía provocó un agudo conflicto con Texas, que exigía el pago de una deuda de alrededor de 2 000 millones de m³ de agua. Algunos pusieron en duda las bondades del Tratado de Aguas de 1944 suscrito por México y Estados Unidos.

Adversidades económicas y climáticas impusieron una pesada carga sobre el campo chihuahuense. El censo de población del 2000 ofrece un indicio de ese agobio: 37 de los 67 municipios perdieron población respecto a 1990. La gran mayoría de ellos se localizaba, no por coincidencia, en las principales áreas agrícolas del estado, como la cuenca del Conchos y el noroeste. El abandono rural parece imparable.

La impopularidad del gobierno de Barrio se confirmó en las elecciones de 1998. El priista Patricio Martínez, un librero oriundo de la capital del estado, ganó las elecciones para gobernador y en octubre siguiente asumió el cargo para el periodo 1998-2004. Además, el PRI ganó la mayoría de los municipios y obtuvo el control del Congreso local. Ciudad Juárez se mantuvo como bastión del panismo. Sin embargo, los priistas locales no pudieron ocultar su desazón en el 2000, pues en las elecciones presidenciales los chihuahuenses prefirieron al candidato del PAN, Vicente Fox, y contribuyeron con holgura a su triunfo.

El cambio de siglo no parecía favorable para el estado. El 17 de enero de 2001 una mujer atentó contra la vida del gobernador Martínez en el palacio de gobierno. La bala hirió en la cabeza al gobernante, quien asombrosamente sobrevivió. Tres meses después reasumió el cargo.

Quizá ese atentado fue presagio de otras malas noticias que sacudieron al estado. Por un lado, la sequía se mantuvo, limitando la actividad agrícola y dificultando el abasto de agua en algunas ciudades; por otro, los movimientos de la economía mundial, entre ellos el bajo crecimiento de la economía estadounidense, hicieron estragos en la industria maquiladora local. Desde mediados de 2001 las plantas maquiladoras comenzaron a cerrar y a emigrar. En mayo de 2003 una fuente estimaba en poco más de 70 000 el número de empleos perdidos en esa industria. Se alegaba que por los altos costos de la mano de obra, en comparación con los costos de otros países de Centroamérica o China. Una actividad que durante dos décadas había sido considerada el eje de la economía chihuahuense se mostraba titubeante

Desde 1993 empezó a destacar un asunto que al principio sólo era materia de la nota roja, a saber, el asesinato de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. La estadística creció hasta superar las 300 en 2003 y llegar a 544 en septiembre de 2008. La indolencia, si no es que la complicidad de las autoridades, y la falta de castigo a los culpables llamaron la atención de propios y extraños. Intervinieron organismos nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Ciudad Juárez se convirtió, tristemente, en noticia mundial. Ya de por sí esa localidad había sido agraviada al haber dado su nombre a un cártel del narcotráfico encabezado por Amado Carrillo Fuentes. En la primavera de 2004 la Organización de las Naciones Unidas se pronunció acerca de los crímenes de mujeres de Ciudad Juárez para exigir resultados a las autoridades. Ese hecho muestra, puesto que involucra por igual al gobierno panista de Barrio y al gobierno priista de Martínez, las limitaciones de la alternancia electoral. De nueva cuenta los chihuahuenses, como todos los mexicanos, em-

pezaron a buscar fórmulas para lograr que la política fuera una manera de alcanzar el bienestar general de la población.

Sin embargo, en las elecciones de julio de 2004 el electorado dio el triunfo al candidato priista José Reyes Baeza, el segundo gobernador oriundo de Ciudad Delicias y de la misma familia en menos de 20 años. No obstante el peso y buen perfil del candidato del PAN, el senador juarense Javier Corral, los ciudadanos prefirieron al priista, que antes había sido presidente municipal de la capital del estado. El PRI también ganó en 41 (contra 21 del PAN) de los 67 municipios y logró una mayoría holgada de diputados locales. Pero al igual que en el 2000, en las elecciones presidenciales de 2006 los ciudadanos chihuahuenses dejaron de lado su priismo y con una mayoría más que desahogada votaron a favor del panista Felipe Calderón, como de hecho ocurrió a lo largo y ancho del norte del país. No ocurrió así con las diputaciones federales, que correspondieron en su mayoría al PRI. En las elecciones intermedias de 2007 el PRI volvió a ganar en 47 de los 67 municipios y obtuvo de nueva cuenta la mayoría en el Congreso local. Al igual que en 2004, los principales municipios, el de Ciudad Juárez y el de la capital del estado, quedaron en manos del PRI el primero y del PAN el segundo. Lo anterior hace pensar en una combinación electoral: votar por el PAN en las elecciones presidenciales y por el PRI en las locales.

Al gobierno de Baeza le tocó enfrentar el enrarecimiento de la vida social del país entero y en particular del estado, en vista de la creciente violencia desatada por las actividades del narcotráfico y la delincuencia organizada. Es un fenómeno complejo, pues no sólo deja ver la muy peligrosa debilidad gubernamental, o del Estado mexicano si se quiere, lo mismo que la corrupción galopante de los distintos cuerpos de policías y otros funcionarios públicos, que se traduce en una dolorosa impunidad. También deja ver la hipocresía extrema de las autoridades y la opinión pública estadounidense (por ejemplo, en torno al altísimo consumo de estupeficientes y a la venta de armamento). Es innegable que en México el consumo de drogas se ha disparado en las últimas décadas; también lo es que el narcotráfico es una actividad que resulta cada

vez más atractiva para jóvenes y no tan jóvenes, en un contexto laboral marcado por su estrechez y por las bajas remuneraciones. La violencia se presentó sobre todo en Ciudad Juárez, donde al viejo agravio de las mujeres asesinadas, cuyo número no dejó de crecer en estos años, se sumó el de las ejecuciones, secuestros y extorsiones. Más de 1 600 ejecuciones tuvieron lugar en esa localidad durante 2008 (de un total de 5 630 en todo el país y 2 206 en el estado), lo que significa un promedio 133.3 al mes, 4.3 al día. Por desgracia, esa clase de violencia se extendió a otras localidades y zonas de la entidad, si bien con menor intensidad. En la ciudad de Chihuahua, sin embargo, las ejecuciones aumentaron notablemente durante 2008 así como los secuestros y las extorsiones a ciudadanos y establecimientos comerciales. En octubre de ese año el gobernador Baeza se quejó del abandono en que mantenía el gobierno federal a Chihuahua, un reclamo que hacía recordar el que se expresaba a mediados del siglo xix ante la fiereza de los ataques apaches y comanches. Las fuerzas federales, militares y policiacas, se hicieron presentes pero sin mayores resultados. En enero de 2009 surgió un comando ciudadano o paramilitar que amenazó con liquidar a un delincuente cada día si para el 5 de julio siguiente, día de elecciones, las autoridades no han extinguido la violencia. Se trata sin duda de una muy mala noticia.

Para colmo, a fines de 2008, en el mes de octubre como en 1929, estalló la crisis económica general en Estados Unidos. Aunque al momento de escribir estas líneas todavía no se perciben con claridad sus efectos en Chihuahua, no es de extrañar que se traduzcan en una disminución de la actividad de la industria maquiladora, automotriz y cementera, y que todo eso acreciente el desempleo y el desamparo de millares de familias. Si así ocurrió con la pequeña crisis de 2001, habrá que imaginar lo que se viene ahora cuando el diagnóstico es mucho más grave. Es el costo de la vinculación cada vez más estrecha de la economía local con la del país vecino, un vínculo que se formó con el camino a Santa Fe en 1820 y que en las décadas siguientes no hizo más que expandirse hasta convertirse en parte esencial de Chihuahua, del norte mexicano y de todo México.

En suma, al despuntar 2009 la violencia extrema (que incluye un extraño incidente que parece un atentado fallido contra el gobernador del estado) y la crisis económica general configuran un panorama muy poco halagüeño para los chihuahuenses y para los mexicanos en general.

CHIHUAHUA IMÁGENES DE SU HISTORIA

Investigación y gestión iconográfica
Laura Villanueva Fonseca

Reprografía y fotografía
Miriam Teodoro González

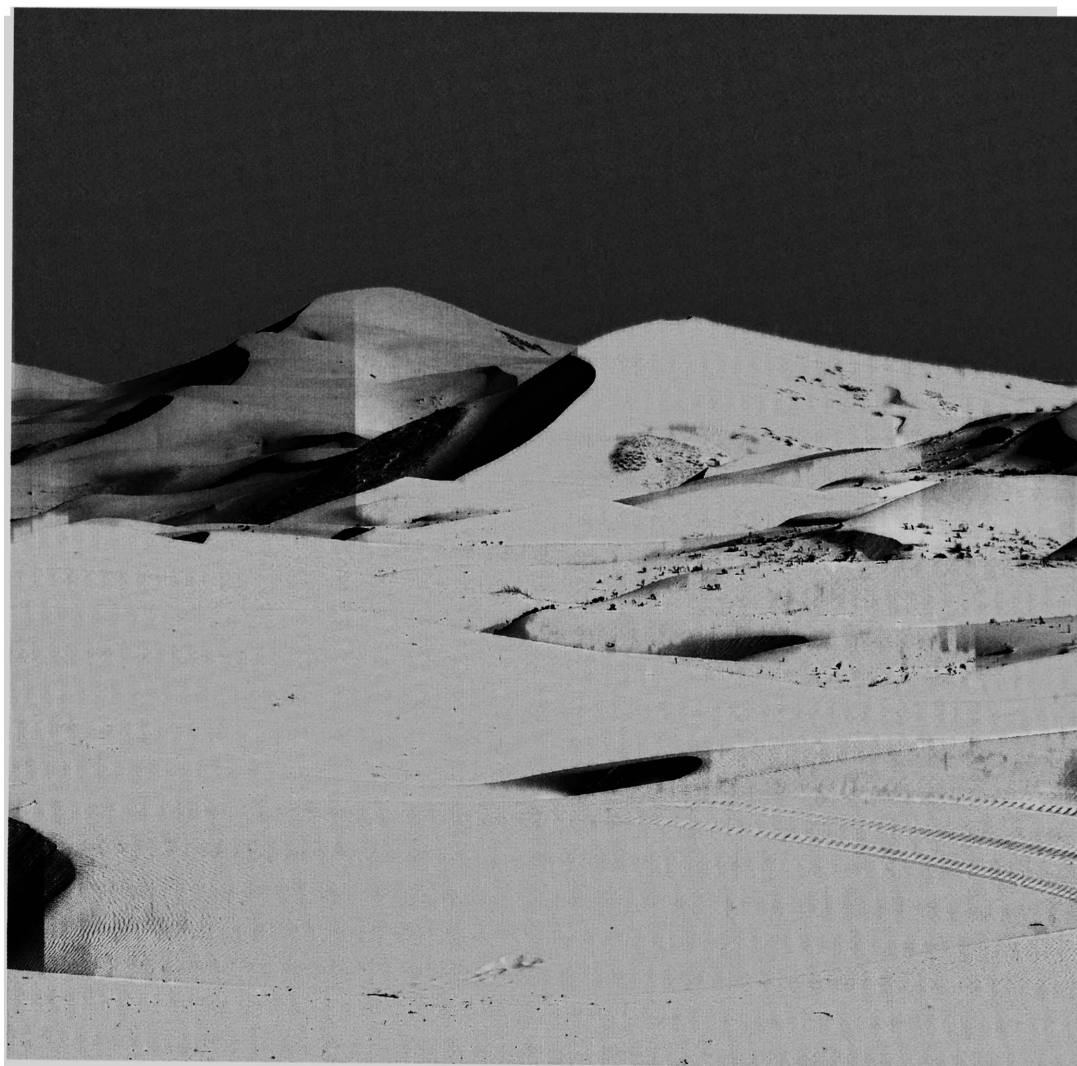
Texto y selección de imagen
Yovana Celaya Náñez

El territorio chihuahuense



1. La Sierra Tarahumara, 1933

La extensión territorial del estado de Chihuahua da cuenta de la diversidad de ecosistemas y microclimas, que incluyen la Sierra Tarahumara, el Desierto de Samalayuca y hermosas planicies y llanuras que forman la Mesa Central. Es un territorio en el que se marcan las distintas fases de poblamiento, la riqueza agrícola e industrial y la diversidad cultural del estado.



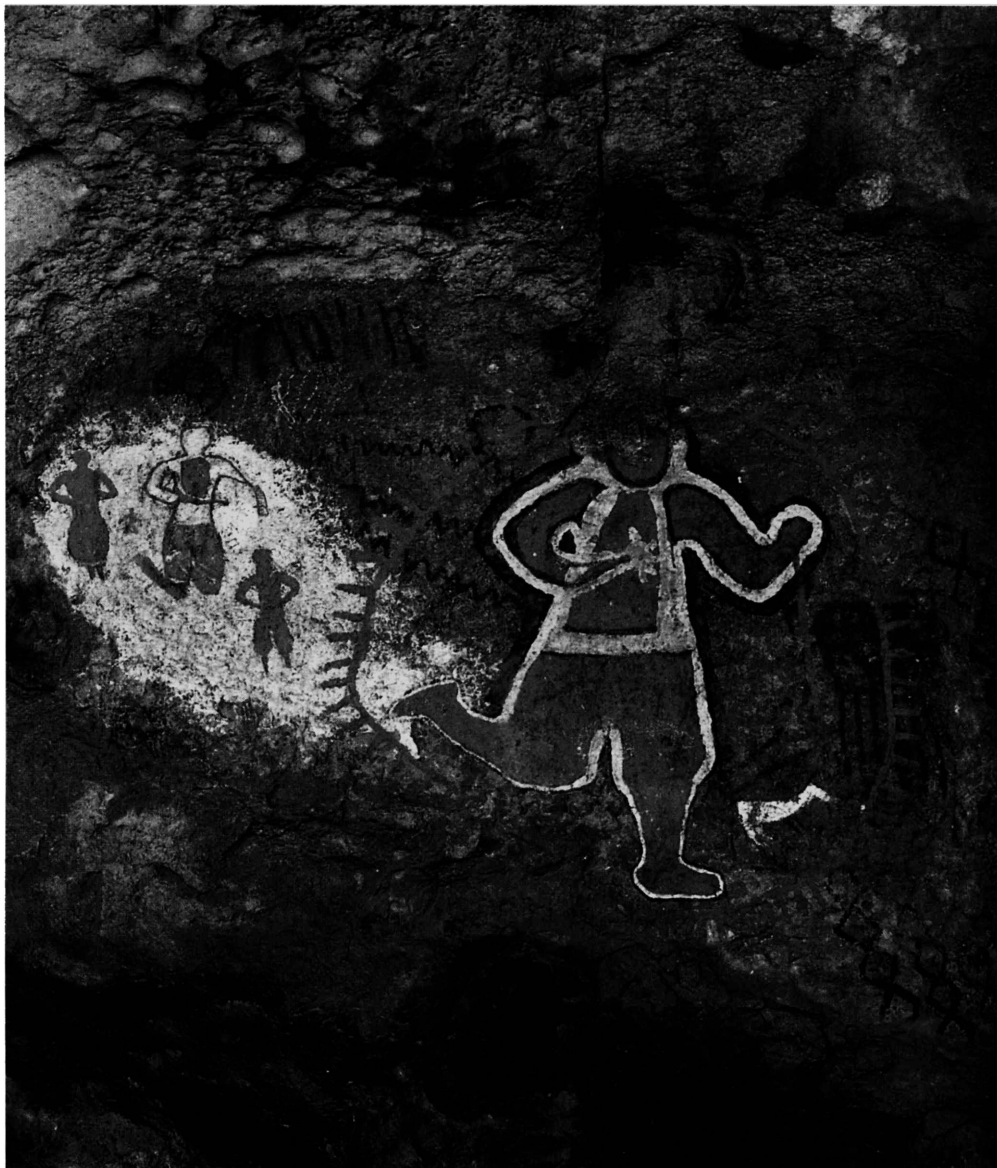


2. Dunas de Samalayuca, municipio de Juárez

3. Olla prehispánica de Casas Grandes

4. Dibujo de sonaja de cobre en forma de tortuga

Primeros pobladores



5. Muro interior de la Cueva de las Monas



6. Ruinas de El Garabato, enero de 1892

Tepehuanes, conchos, tarahumaras y tobosos habitaron el amplio espacio chihuahuense y se desplazaron en la diversidad geográfica.



7. Theodoro Alvarado, cazador mexicano disfrazado de antílope. Llanos de San Diego, 1891

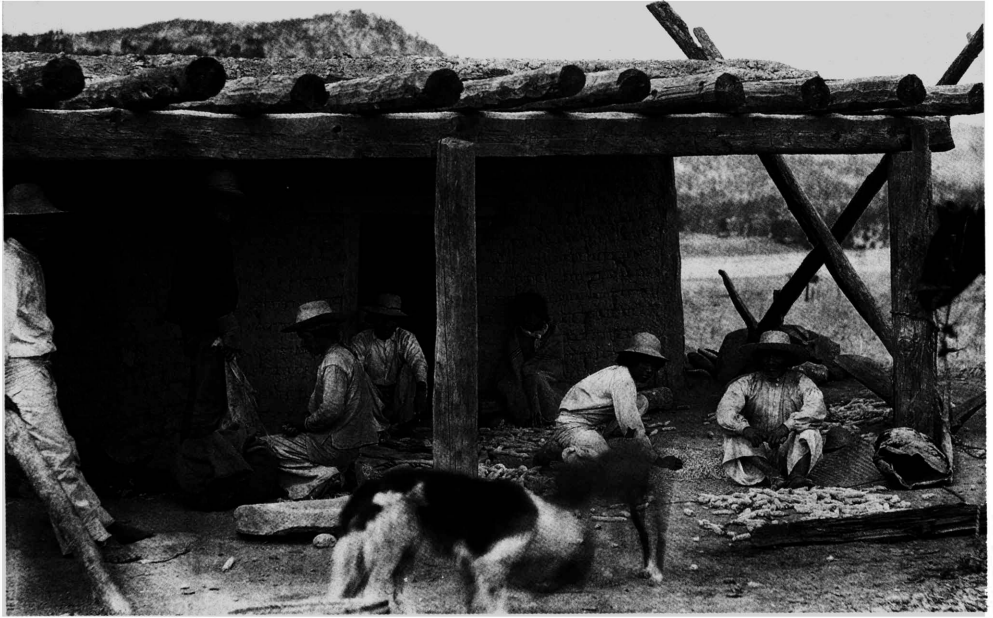
8. Pareja de tepehuanes. Mesa de Milpillas, 1893
9. Una familia de las serranías de Chihuahua, 1924



10. La Cueva de la Olla, granero dentro del Valle de las Cuevas, 1891

11. Pimas y tarahumaras desgranando maíz. Tosanachic, 1892

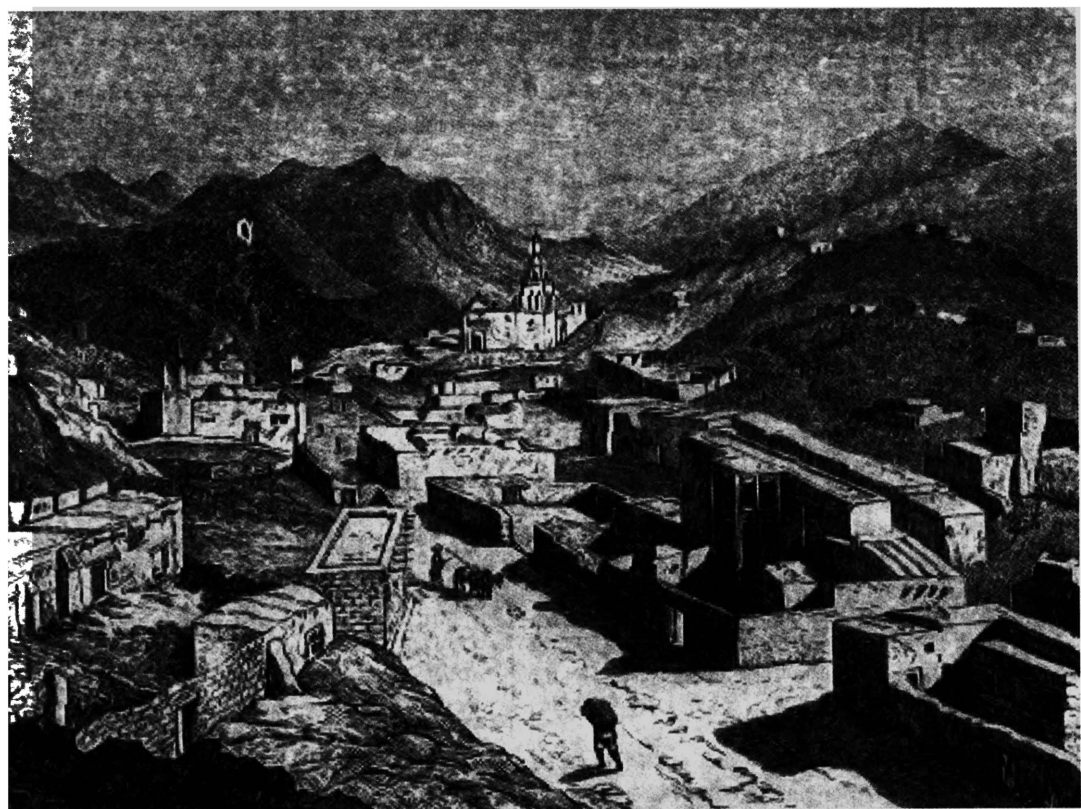
12. El riego de tierras por menonitas



Desarrollo agrícola e industrial

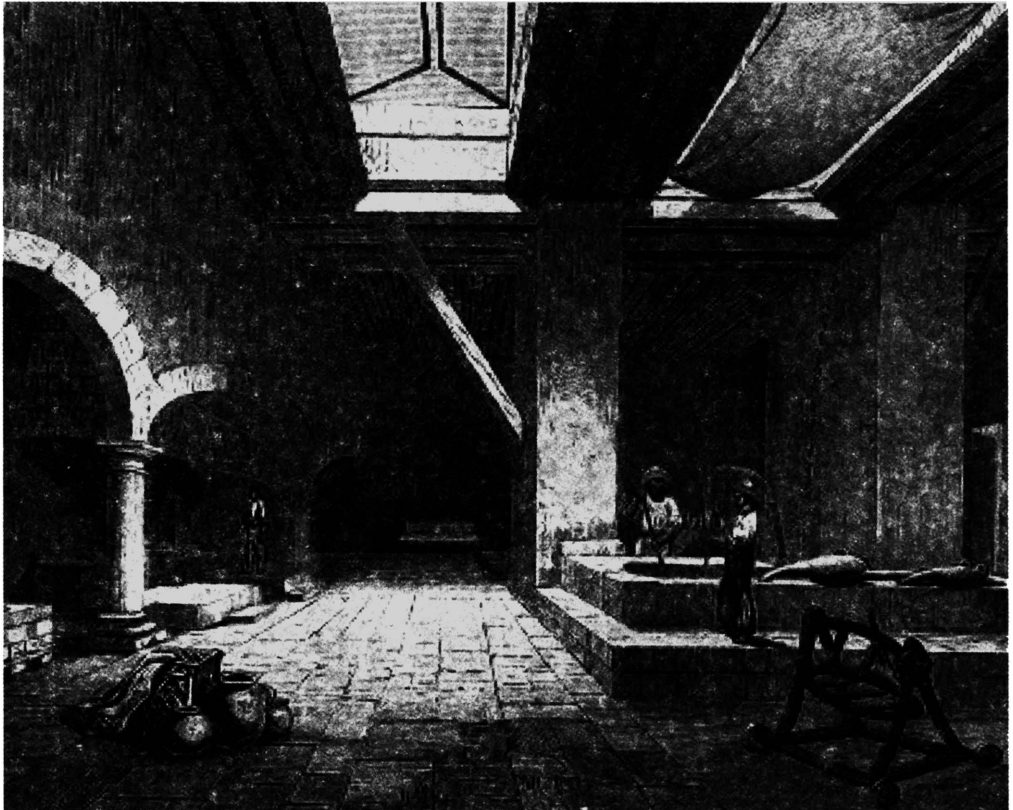
La riqueza agrícola en las tierras del valle es evidente desde los primeros pobladores. La sociedad chihuahuense ha desarrollado sistemas de cosecha, almacenamiento y riego de terrenos según las demandas del consumo local, nacional e internacional.





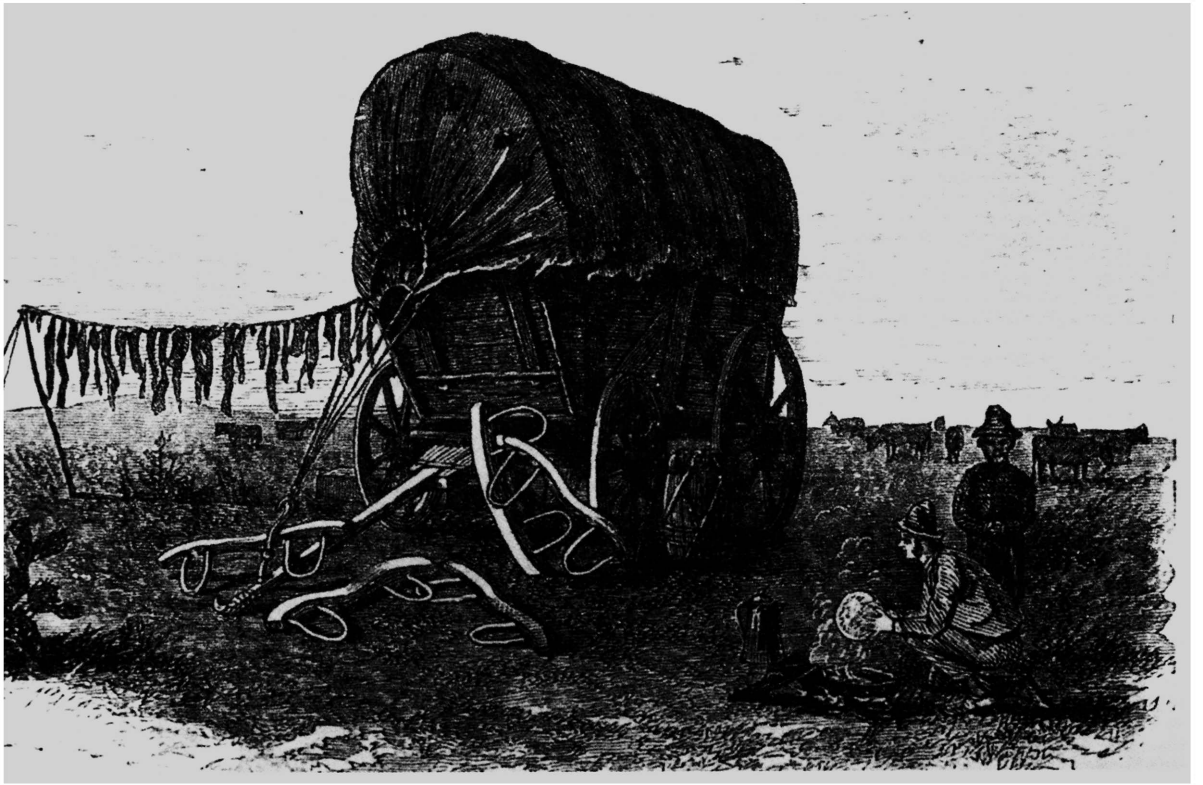
13. Presa Delicias, 1949
14. Panorámica de Santa Eulalia

El descubrimiento de las minas de Santa Eulalia y la formación casi simultánea de la villa de Chihuahua en el siglo XVIII dieron pie a un dinámico proceso económico y de poblamiento.



15. Taller de fundición de la casa de moneda de Chihuahua
(funcionó de 1810 a 1896)

16. Arrieros chihuahuenses descansando y preparando
la comida: carne seca, chile pasado y tortilla de harina



El progreso agrícola permitió la configuración de espacios mercantiles para los comerciantes arrieros de larga tradición, que articularon con sus mercancías a toda la región chihuahuense.

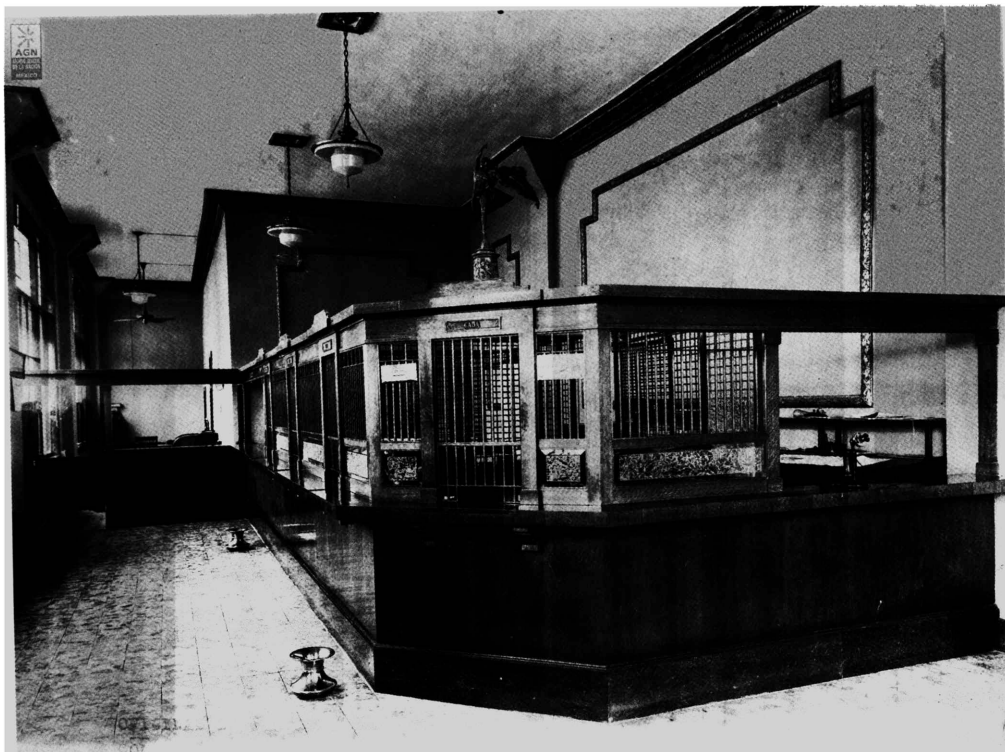


17. Comerciantes, 1910

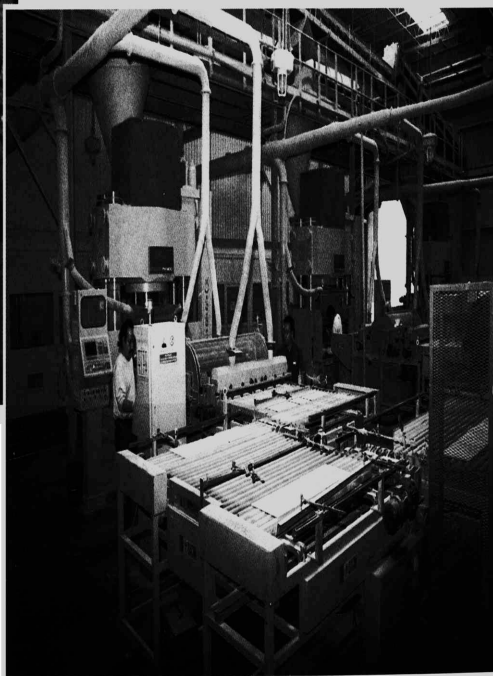
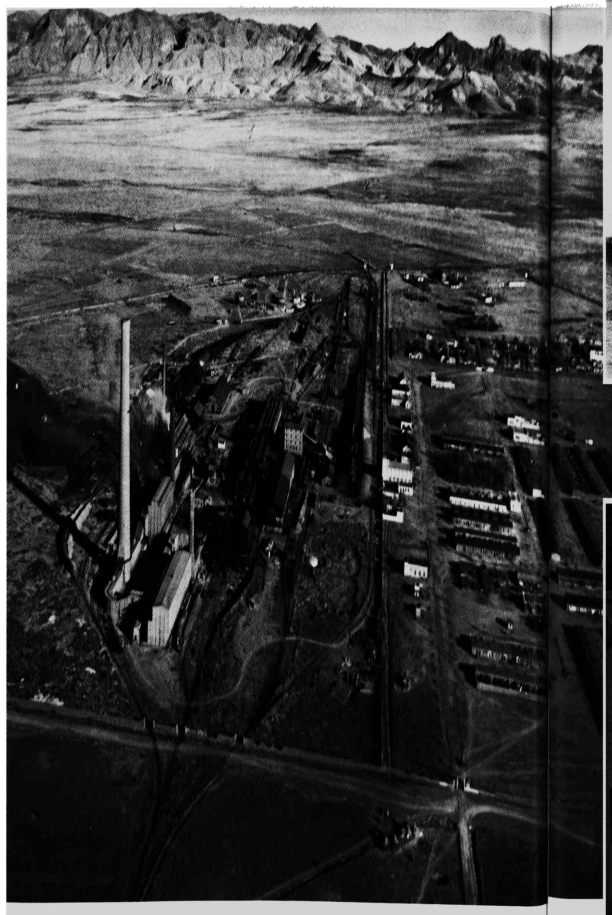
18. Billeto de 25 centavos expedido
por el Banco de Chihuahua, 1889

19. Oficinas de la Compañía Bancaria
y de Inversiones de Ciudad Juárez, 1922

El desarrollo de la economía estuvo soportado por un sistema bancario que se consolidó en la época porfiriana.



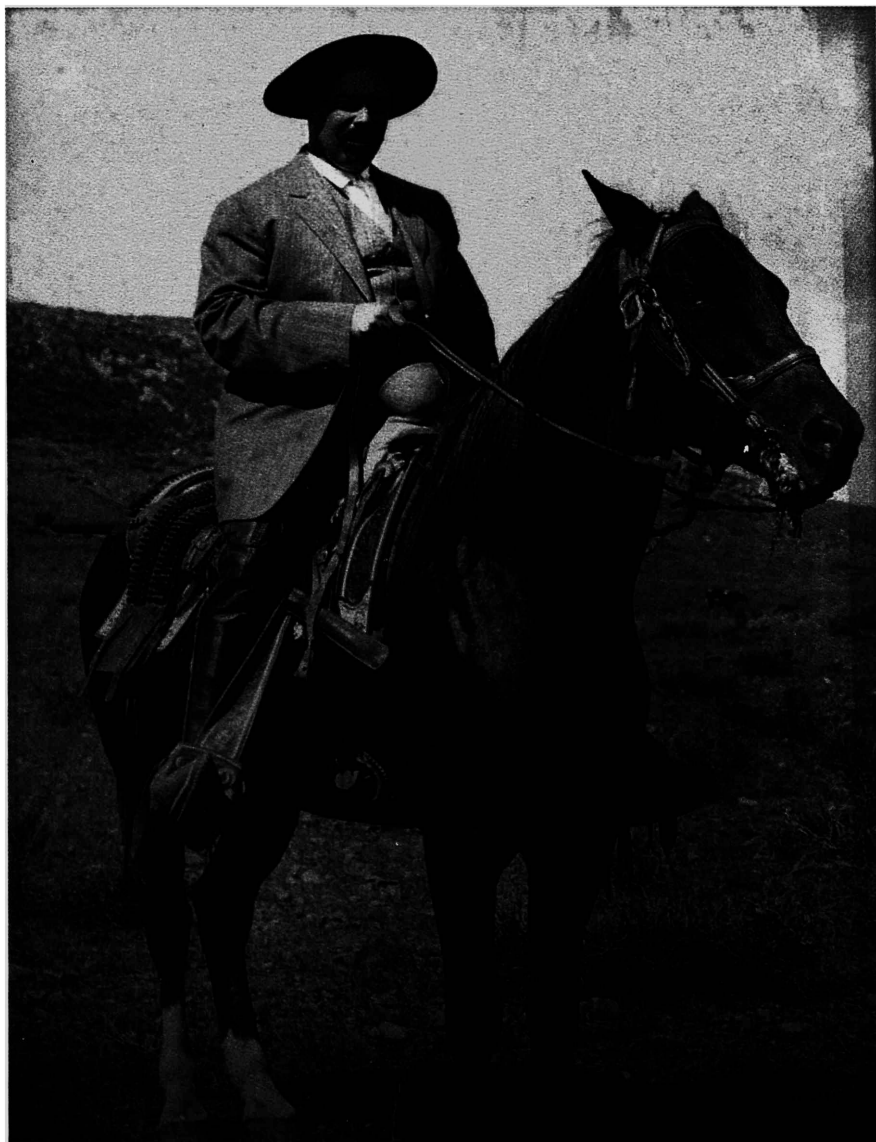
El desarrollo industrial del siglo xx se ha diversificado en los rubros de electrónica y telecomunicaciones, automotriz y autopartes, confección, agroindustria y alimentos, forestal, muebles, materiales para la construcción y minería.



20. American Smelting and Refining. Co. (Asarco), 1933

21. Cervecería de Ciudad Juárez, 1922

22. Maquiladora, Chihuahua



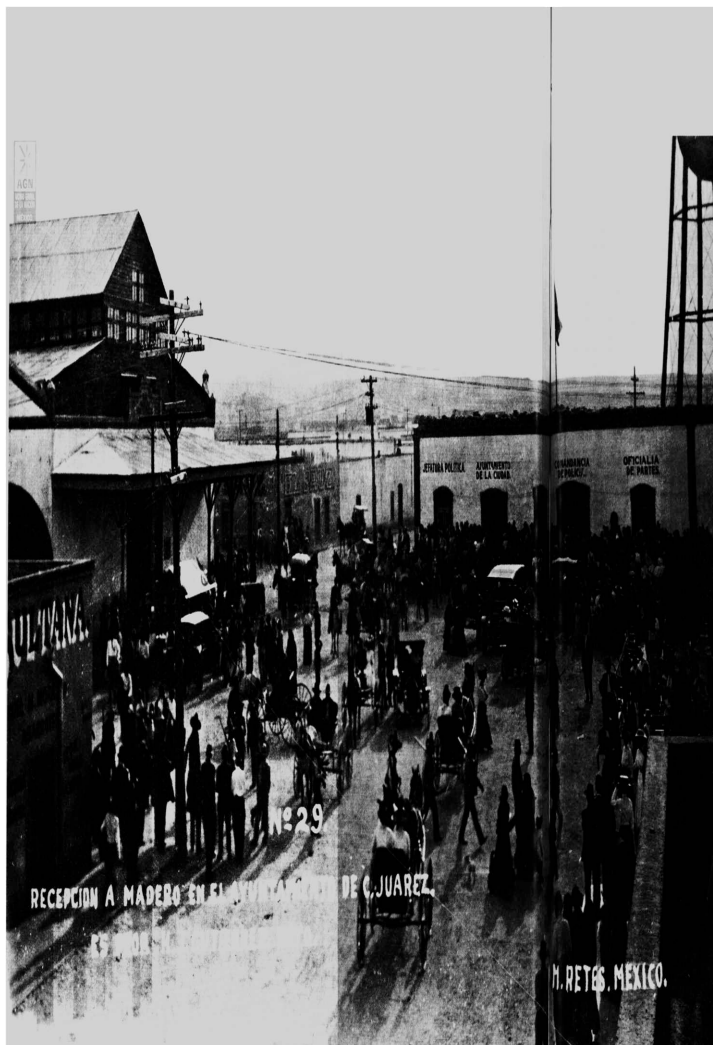
23. Francisco Villa, 1914

Y llegó la Revolución...

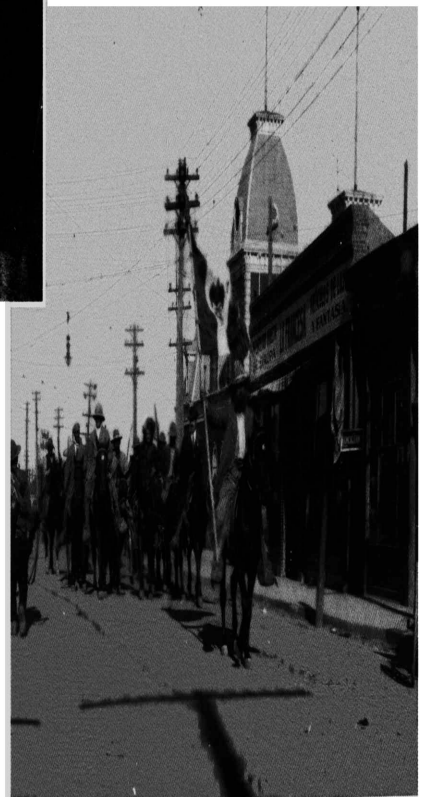
En 1909 Porfirio Díaz se preparaba para realizar los festejos del centenario de la Independencia; sin embargo, otro movimiento se gestaba. Durante la etapa de la Revolución, Chihuahua fue escenario del movimiento maderista y, después, del desarrollo del constitucionalismo y del villismo, con la participación de las figuras heroicas de Francisco Villa, Práxedes G. Guerrero, Abraham González, Toribio Ortega y Pascual Orozco, entre otros.



24. El general Porfirio Díaz en Ciudad Juárez, 16 de octubre de 1909

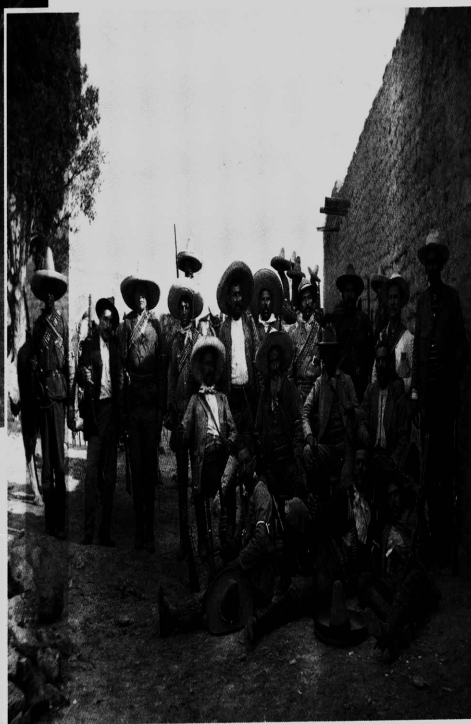
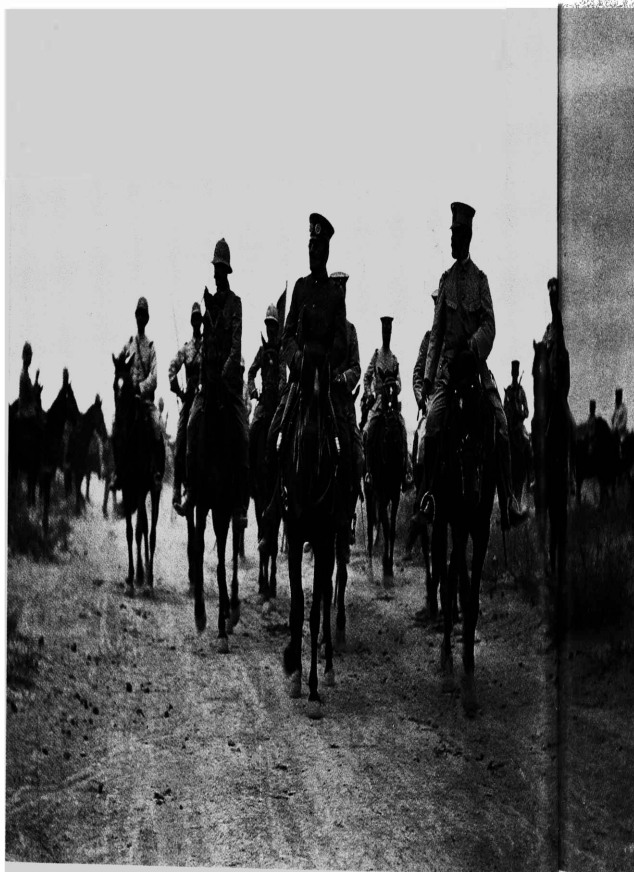


25. Recepción a Madero en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez



26. Entrada a Ciudad Juárez

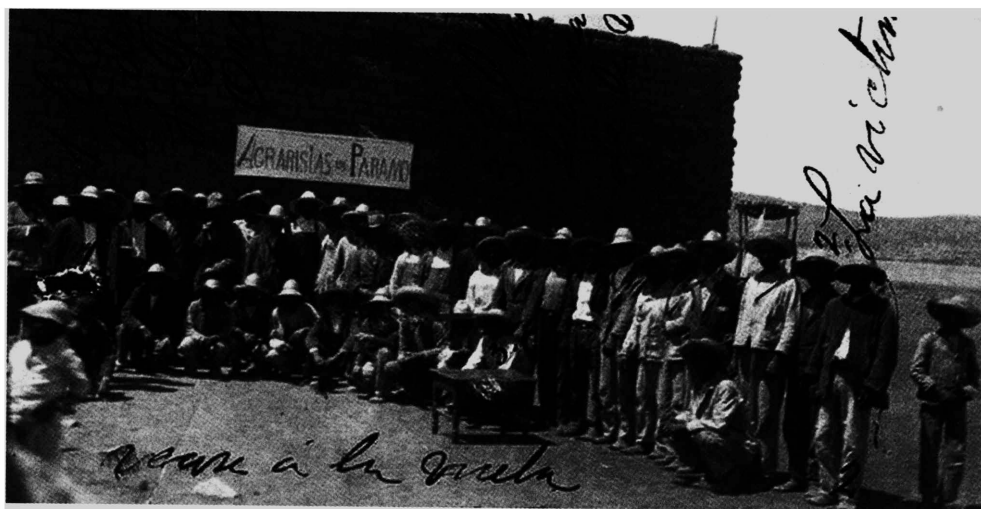
Además de generales, la Revolución también la hicieron campesinos, indios, rancheros y mujeres que se desplazaron por amplias zonas del país. El ferrocarril se integró a la lucha armada, en la que algunas veces sirvió como medio de transporte para refugiados o revolucionarios, y en otras como una poderosa arma.



27. Los generales Huerta y Téllez pasan revista a sus tropas antes de la Batalla de Bachimba en la campaña contra Orozco, 1912

28. Dos señoritas revolucionarias. Ciudad Juárez

29. Revolucionarios maderistas en un descanso. Casas Grandes, 1911



30. Agraristas del poblado Páramo, 1924
 31. Manifestación, Parral

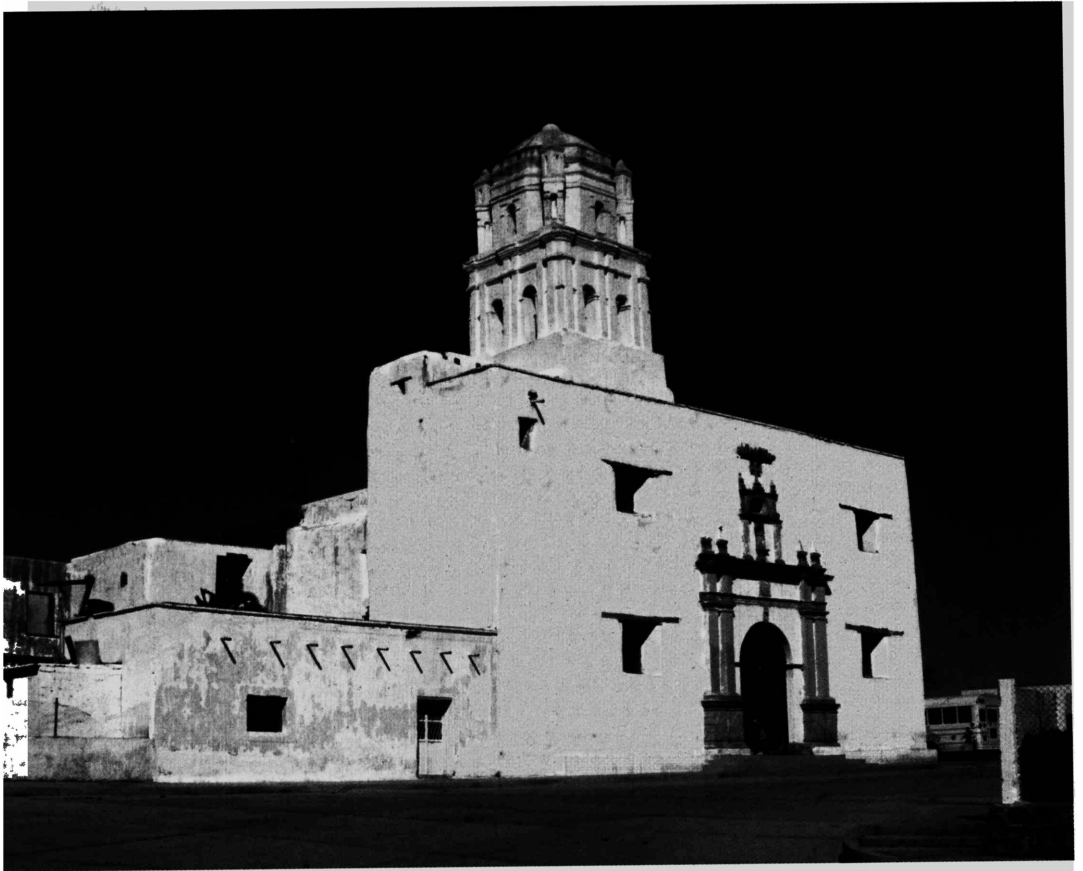
Religiosidad

El catolicismo llegó con los españoles. En la región chihuahuense, las imponentes misiones son el mejor testigo de los esfuerzos evangelizadores de jesuitas y franciscanos. Las misiones religiosas se convirtieron en centros de evangelización y trabajo para los indios de la región. Su actividad fue una parte importante en la conformación de lo que hoy son las sociedades nortenas.



32. Interior y altar de la iglesia de los Cinco Señores de Cusárare, s. f.





33. Guachochi, Papajichi

34. Misión de Temeychi

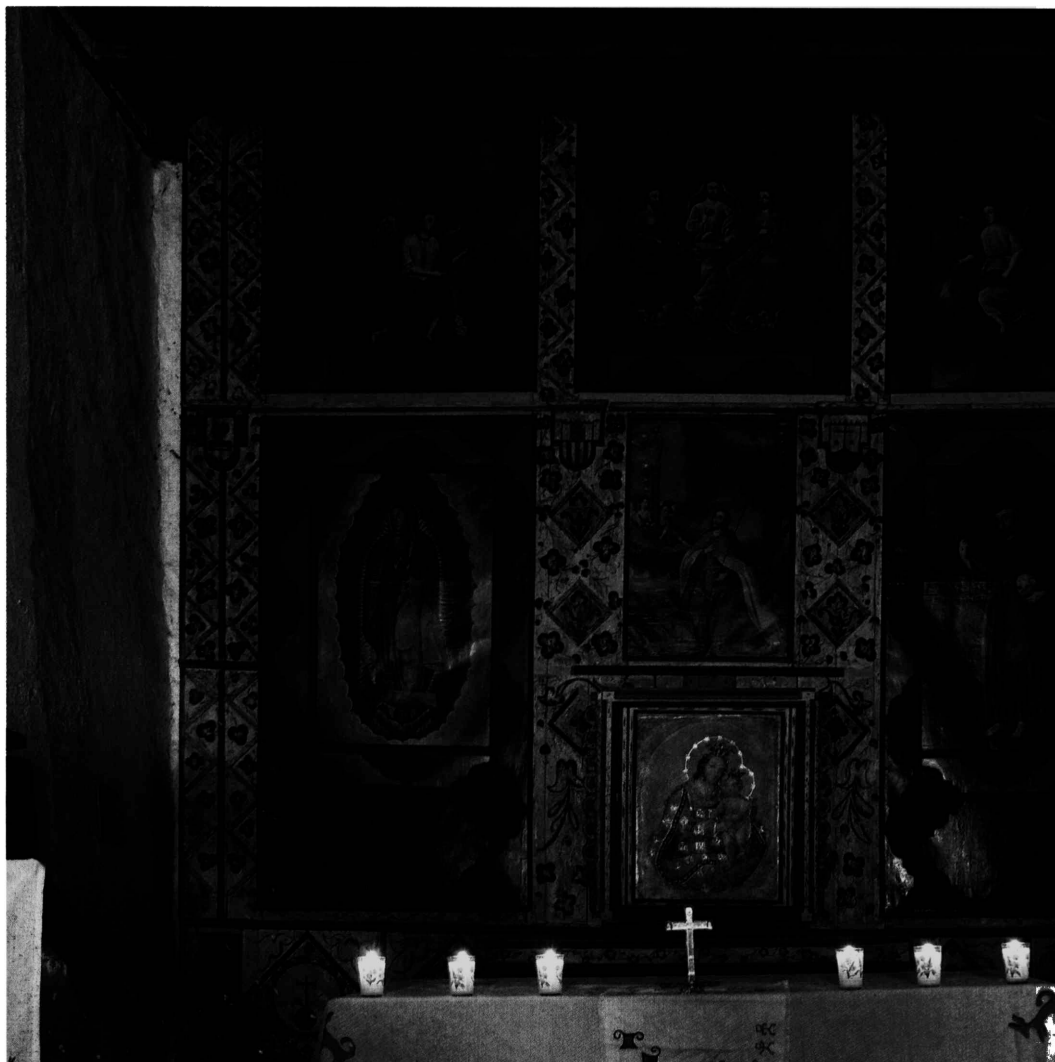
35. Misión de Santa Cruz de Tarahumaras, Valle del Rosario

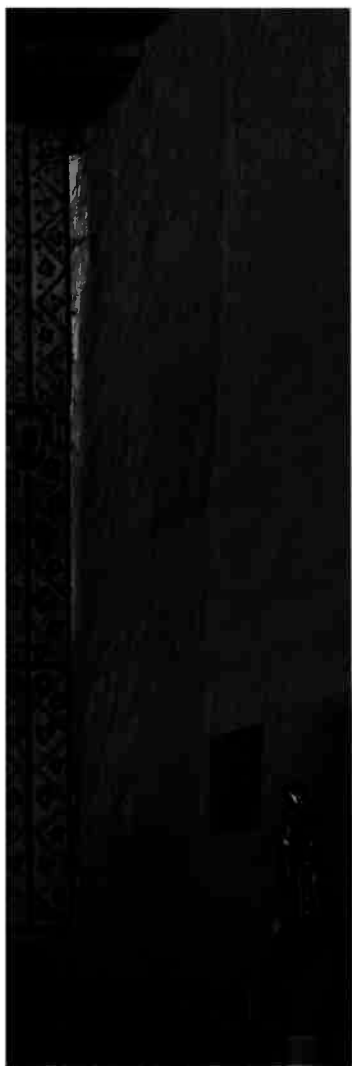


36. Iglesia de los Cinco Señores de Cusárare
37. Retablo en Nabogame



Algunos de estos templos han resistido el paso del tiempo y hoy se sostienen en medio de los pueblos como centros de referencia, reunión y culto y en algunos casos por el turismo. Otros quedaron abandonados en medio de la nada, y se convirtieron luego en ruinas o en polvo.





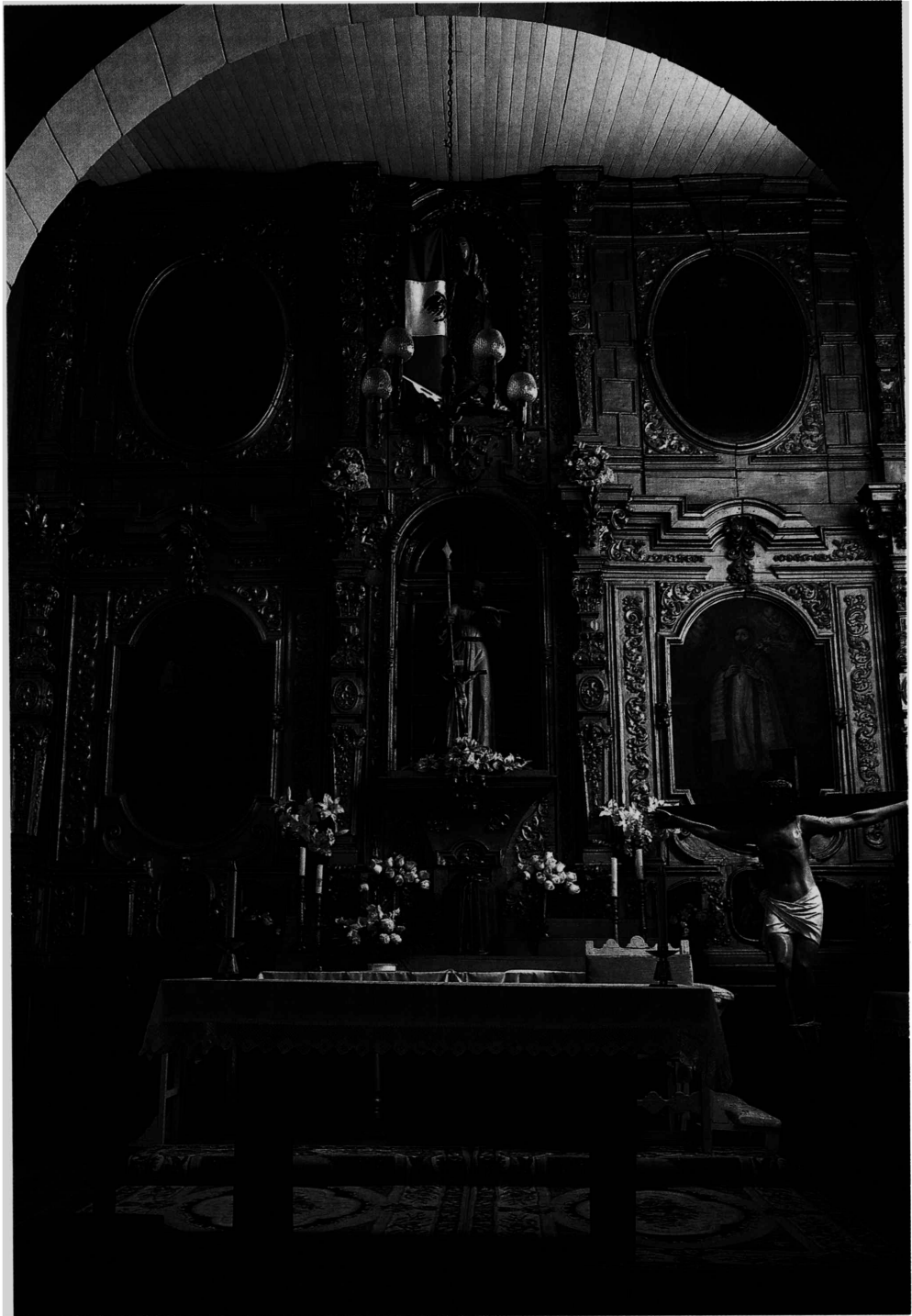
38. Retablo en Yepachi
39. Templo y campanas en Janos



La mayoría de las misiones se localizan en la Sierra Tarahumara, y algunas en localidades situadas a una hora y media de distancia de la capital chihuahuense. Destacan entre ellas Santiago Chinarras, Santa María de Cuevas, Santa Ana, Ángel Custodio de Batopilas, San Fernando de las Amarillas, Santa Isabel de Tarahumaras y Valle del Rosario.

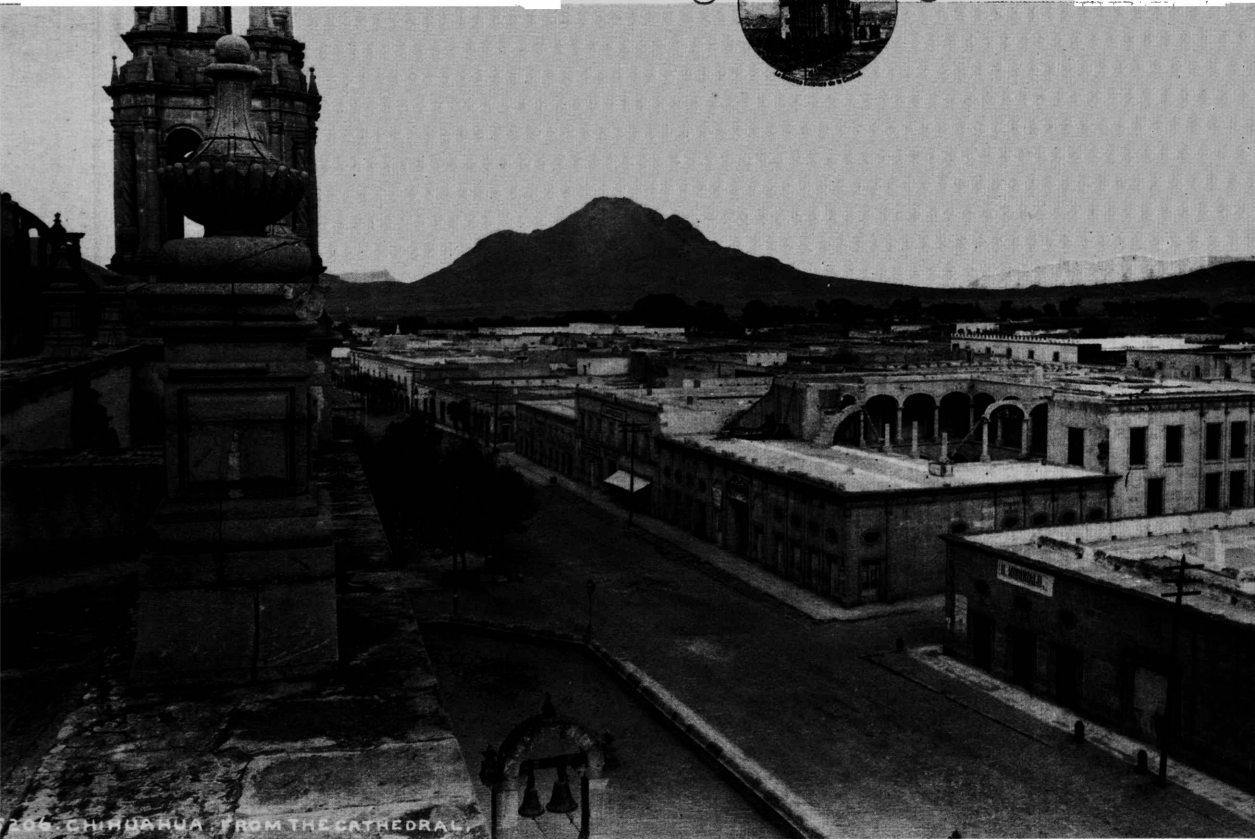
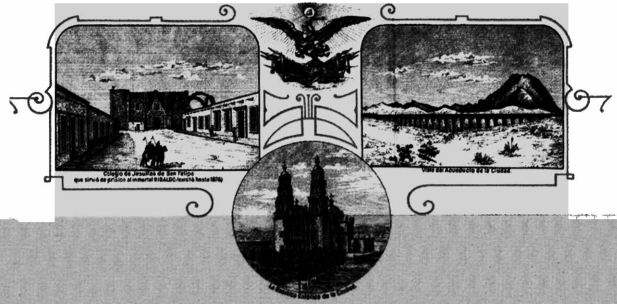


40. Retablo en Batopilas
41. San José del Parral

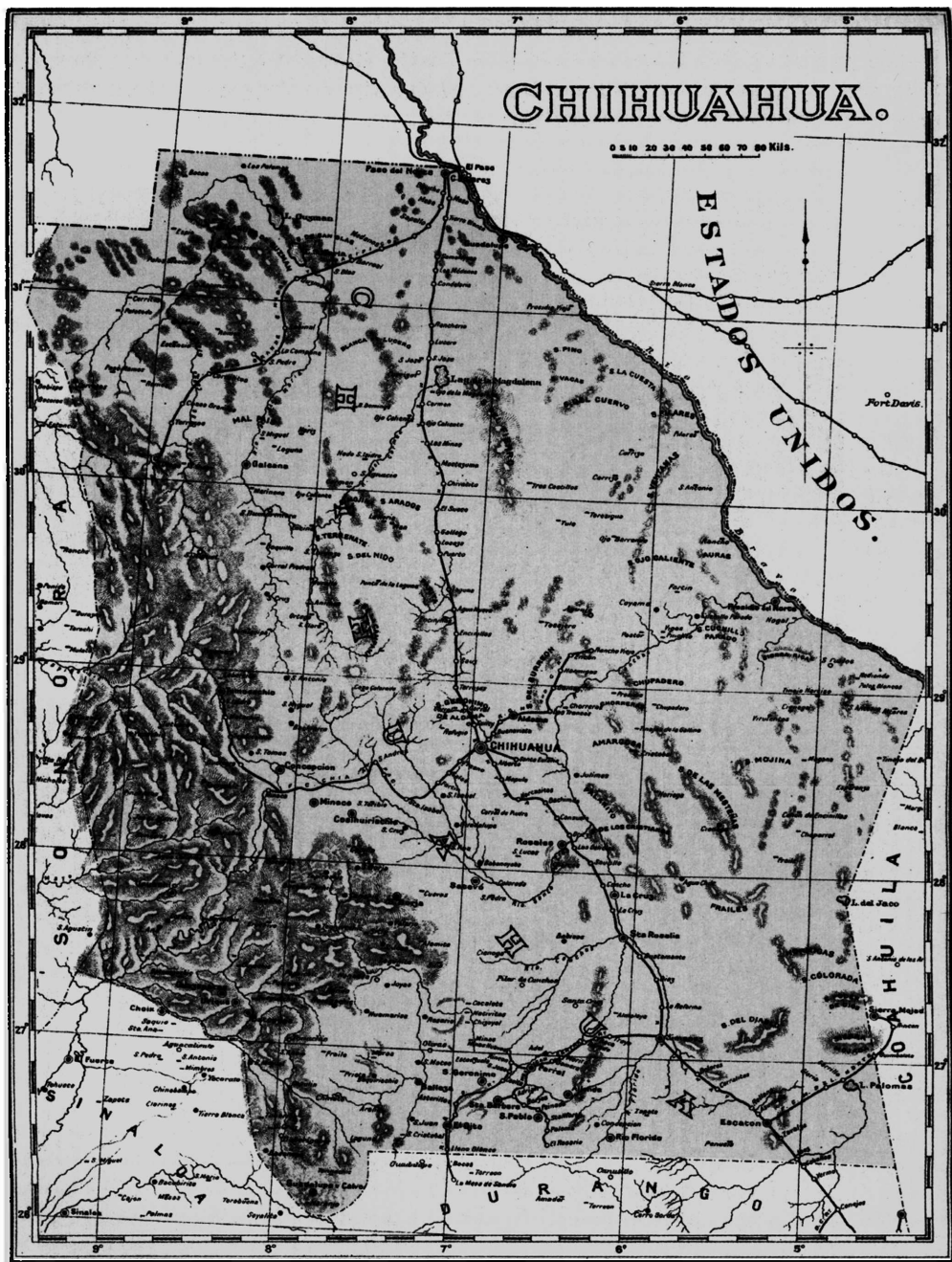


Mundo urbano

El censo de población del 2000 registró que 76.5% de la población de Chihuahua vive en núcleos urbanos, lo cual lo convierte en uno de los estados más urbanizados.



- 42. Retablo principal en Santo Tomás Guerrero
- 43. Vista de Chihuahua desde la Catedral, 1880



44. Detalle del plano topográfico de la ciudad de Chihuahua, 1885

En el siglo XIX, la expansión del sistema ferroviario favoreció la articulación de los centros urbanos, sedes de los poderes políticos, económicos y sociales, con los centros agrícolas. El tranvía, el automóvil y el avión completarían el proceso.



45. Tranvía de El Paso a Ciudad Juárez, 1882

46. Autobús turístico, Ciudad Juárez, 1920



46. Ciudad Juárez, 1907

47. Palacio de gobierno en construcción, Chihuahua, 1907

48. Edificio del juzgado civil, jefatura política, comandancia de policía,
oficina de partes y cárcel, Ciudad Juárez, 1908



Procesos inconclusos: justicia y migración

El acceso a la propiedad ejidal es un tema recurrente en las comunidades que en no todos los casos resolvió la Revolución. Pero también la tierra se ha convertido en un botín para la siembra de cultivos que, no obstante ofrecer mayor rentabilidad al campesino, son ilegales.



49. Celebración del aniversario de la Independencia,
Palacio Municipal, Ciudad Juárez,
16 de septiembre de 1943

50. Campesinos solicitantes de tierras.
Las Playas, municipio de Jiménez, 1975

51. Mariguaneros en el rancho Las Changas.
El Búfalo, 1984

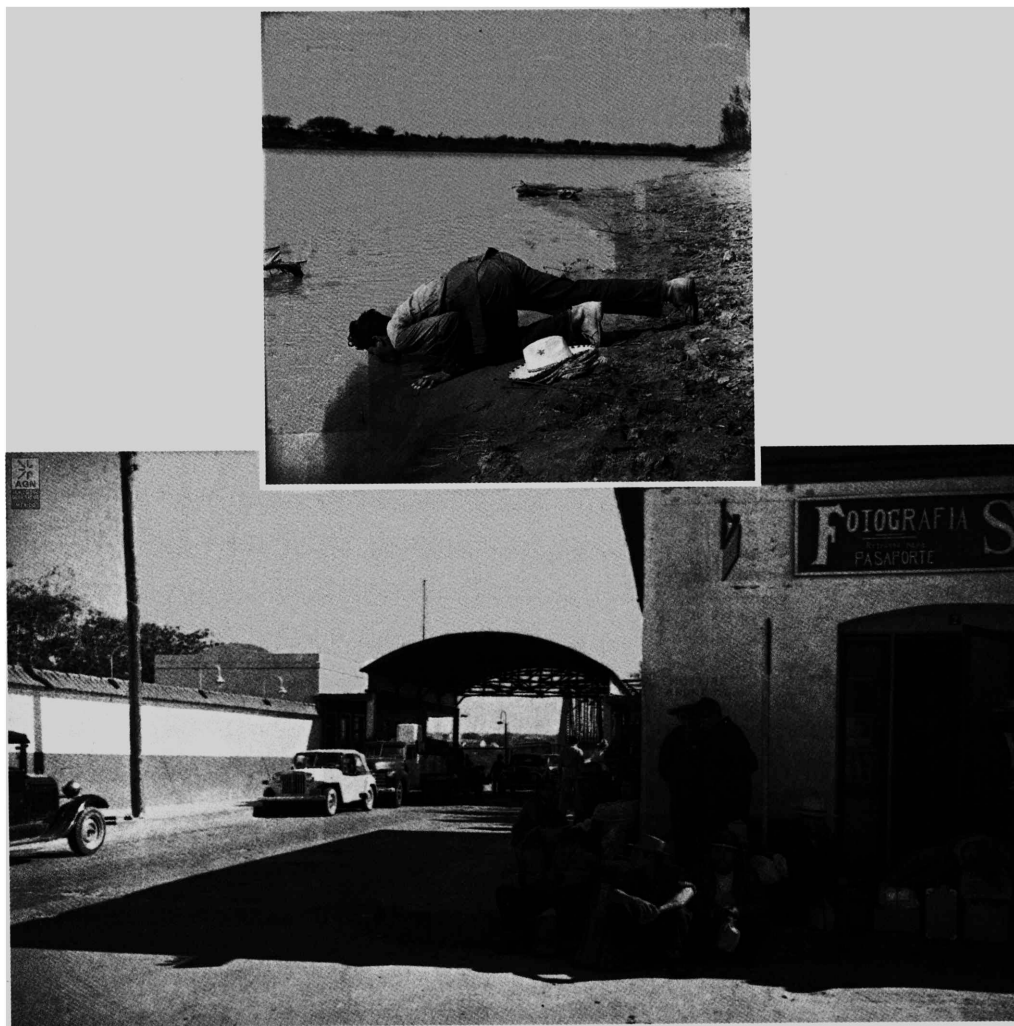
El derecho a la justicia es un reclamo siempre presente que involucra a sociedad y gobierno y que requiere prioridad y atención.



- 52. Misa en memoria de las muertas de Juárez
- 53. Altar en memoria de los feminicidios de Juárez
- 54. Marcha contra los feminicidios en Chihuahua



La movilidad de México a Estados Unidos ha configurado redes sociales, culturales, políticas y económicas. Que este proceso sea regulado por la Comisión de Derechos Humanos y que se mantenga ajeno al crimen organizado constituyen una asignatura pendiente.



55. Bracero bebiendo agua del Río Bravo, *ca.* 1954
56. Braceros esperando

CRONOLOGÍA

- 1450 Termina el auge de Paquimé.
- 1567 Fundación de Santa Bárbara y poblamiento del Valle de San Bartolomé, centro agrícola por excelencia.
- 1598 Expedición de Juan de Oñate a Nuevo México.
- 1616 Gran rebelión tepehuana.
- 1631 Descubrimiento de vetas y nacimiento de Parral.
- 1644 Primer levantamiento de los conchos.
- 1648 Primer levantamiento de los tarahumaras.
- 1653 Ejecución del jefe tarahumara Teporame.
- 1659 Fundación de la misión franciscana de Nuestra Señora de Guadalupe (después Paso del Norte y más tarde Ciudad Juárez).
- 1680 Levantamiento general de indios de la Nueva Vizcaya y Nuevo México.
- 1684 Último levantamiento de los conchos.
- 1687 Se funda el real de minas de Santa Rosa de Cusihiuriachic.
- 1697 Último levantamiento de los tarahumaras.
- 1709 Fundación de San Felipe el Real, luego del descubrimiento de las vetas de Santa Eulalia.
- 1748 Primeras hostilidades con los apaches, que se prolongarán hasta 1790.
- 1767 Expulsión de los jesuitas, lo que trastorna la organización económica de las misiones de la Tarahumara.
- 1777 Fundación de la Comandancia General de las Provincias Internas.
- 1790 Pacificación general de los apaches.
- 1795 Bonanza en diversos minerales, salvo Santa Eulalia.
- 1797 Se refundan Santa Rosalía y La Cruz con familias provenientes de San Francisco de Conchos.
- 1811 Ejecución del cura Miguel Hidalgo y colaboradores en la villa de Chihuahua.
- 1821 Independencia mexicana e inicio del comercio entre San Luis Missouri, Santa Fe y Chihuahua.

- 1824 Nacimiento del estado de Chihuahua, luego de fallar el intento de formar un estado con Durango y Nuevo México.
- 1831 Reanudación de la guerra con los apaches.
- 1836 Independencia de Texas.
- 1845 Derrocamiento del gobernador Luis Zuloaga; Ángel Trías asume la gubernatura por primera vez.
- 1847 Invasión del ejército de Estados Unidos.
- 1849 Epidemia de cólera y varios años de intensas sequías, en medio de fuertes ataques de apaches y comanches.
- 1853 Ángel Trías apoya el retorno como presidente de Antonio López de Santa Anna; depone al gobernador José Cordero.
- 1860 Luis Terrazas asume la gubernatura por primera vez.
- 1864 El presidente Benito Juárez se refugia en Chihuahua, perseguido por las tropas invasoras francesas.
- 1876 Se inaugura la primera línea telegráfica; Luis Terrazas derrota a los partidarios de Porfirio Díaz en Chihuahua, pero el triunfo nacional de Díaz impone a sus simpatizantes en el estado.
- 1880 Derrota de una partida apache en Tres Castillos, que marca el principio del fin de la guerra contra los nómadas.
- 1884 Se inaugura el Ferrocarril Central, que conecta a la Ciudad de México con Paso del Norte; llegan los primeros colonos mormones.
- 1892 Rebelión de vecinos del pueblo de Tomóchic contra el ejército federal.
- 1903 Reconciliación entre Porfirio Díaz y Luis Terrazas; éste asume por última vez la gubernatura del estado.
- 1911 La toma de Ciudad Juárez, en mayo, obliga a Porfirio Díaz a renunciar a la presidencia y abandonar el país.
- 1913 Francisco Villa asume la gubernatura del estado luego de derrotar a huertistas y orozquistas, que huyen acompañados de la oligarquía terraceña.
- 1916 Ataque villista a Columbus, Nuevo México, que da pie a la invasión de la fuerza estadounidense conocida como "Expedición Punitiva".
- 1922 Comienza el arribo de colonos menonitas provenientes de Canadá; el gobernador Ignacio Enríquez fracasa en su proyecto de

- favorecer la venta del latifundio Terrazas a Arthur J. McQuatters y otros capitalistas estadounidenses.
- 1923 Mueren Luis Terrazas y Francisco Villa, acérrimos enemigos.
- 1927 Derrocamiento del gobernador Jesús Almeida por tropas del general Marcelo Caraveo. Se funda Ciudad Cuauhtémoc.
- 1929 Rebelión escobarista a la que se suma el gobierno local encabezado por el general Marcelo Caraveo; empieza la pavimentación de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.
- 1932 Rodrigo M. Quevedo asume la gubernatura del estado; poco antes, en julio, 12 líderes campesinos son asesinados en el Valle de Bustillos.
- 1933 Se funda Ciudad Delicias como parte del proyecto de irrigación del Río Conchos.
- 1939 Asesinato en Bavícora del líder campesino Socorro Rivera, .
- 1940 Gran pugna electoral por la gubernatura entre el candidato oficialista Fernando Foglio Miramontes y el candidato independiente Alfredo Chávez. Se reconoce el triunfo del segundo.
- 1941 Un incendio destruye el Archivo General del Estado.
- 1952 Nace la empresa Bosques de Chihuahua.
- 1954 Ataque de henriquistas al cuartel militar de Ciudad Delicias.
- 1965 Ataque guerrillero al cuartel de Madera; se instalan las primeras empresas maquiladoras en Ciudad Juárez.
- 1971 Se funda el Comité de Defensa Popular (CDP).
- 1984 Toma de bodegas por campesinos del oeste y noroeste del estado, en protesta por los bajos precios de garantía.
- 1992 Triunfo del panista Francisco Barrio en las elecciones para gobernador; se inicia una larga e intensa sequía, así como la lamentable cadena de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
- 2001 Atentado fallido contra el gobernador Patricio Martínez; se inicia la crisis de la industria maquiladora.
- 2004 En julio el priista José Reyes Baeza triunfa en las elecciones para gobernador.
- 2008 Cunde la violencia en el estado a causa del crimen organizado y el narcotráfico; sólo en Ciudad Juárez la cifra de ejecuciones rebasa las 1 600; Chihuahua es con mucho el estado más violento del país. Continúan los asesinatos de mujeres; estalla la crisis eco-

nómica en Estados Unidos. Intensas lluvias provocan graves inundaciones en Parral y Ojinaga, así como el desborde de las principales presas de la entidad, incluyendo la gigantesca La Boquilla, lo que no ocurría desde 1968 y 1944.

- 2009 A finales de febrero la caravana del gobernador del estado es atacada a tiros; el funcionario sale ileso pero muere uno de sus escoltas.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Este libro debe verse como una invitación a profundizar en alguna o algunas de sus partes. Por esa razón, concluye con este breve recuento de las principales obras consultadas para su elaboración. El primer tomo de la *Historia general de Chihuahua* (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1992), nutrió casi por completo la hechura de los dos nuevos apartados, referentes a la geografía y a la época prehispánica. Sobre la geografía tuve como texto de cabecera el de Robert H. Schmidt, y los más antiguos de Francisco R. Almada, *Geografía del estado de Chihuahua* (Imprenta Ruiz Sandoval, Chihuahua, 1945) y la síntesis de Moisés T. de la Peña, *Chihuahua económico* (Gobierno del Estado, México, 1948, 3 vols.). Para la ubicación de Chihuahua en el conjunto nacional, revisé el libro de Bernardo García Martínez, *Las regiones de México. Brevariario geográfico e histórico* (El Colegio de México, México, 2008). Lo más complicado fue atreverse a escribir sobre la época prehispánica. Todo por la amable y provechosa presión de la coordinadora general de la colección, mi maestra Alicia Hernández Chávez. Ojalá los lectores sean clementes con este intento de síntesis de un periodo que aún permanece a la espera de investigaciones detalladas, no obstante el trabajo de gran número de arqueólogos mexicanos y extranjeros, empezando por el clásico de Charles di Peso sobre Paquimé. Textos de Arturo Márquez, J. Charles Kelley, Richard S. MacNeish, Leticia González, Michael S. Foster, contenidos en el primer tomo de la *Historia general de Chihuahua*, y los libros de Beatriz Braniff, *Paquimé* (Fideicomiso Historia de las Américas/El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, México, 2008), y de Francisco Mendiola, *El arte rupestre en Chihuahua* (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2002), fueron de gran utilidad. También consulté varios capítulos del libro de homenaje a la referida Braniff, titulado *Nómadas y sedentarios en el norte de México* (Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000), editado entre otros por Mari-Areti Hers; en especial, revisé los de Phil Weigand y Acelia

García, Salvador Álvarez, William L. Merrill y el del lingüista Leopoldo Valinas. También se consultaron varios de los textos recogidos en el libro coordinado por Beatriz Braniff, *La Gran Chichimeca. El lugar de las rocas secas* (Conaculta/Jaca Book, México, 2001), en especial el de Marie-Areti Hers sobre las rutas de intercambio. También de gran ayuda fue el libro de Alfredo López Austin y de su hijo Leonardo López Luján, *El pasado indígena* (Fideicomiso Historia de las Américas/El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, México, 1996).

Para los primeros años de la época colonial se recurrió a diversos trabajos de Chantal Cramaussel, en especial el reciente, *Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los siglos XVI y XVII* (El Colegio de Michoacán, Zamora, 2006), y el de *La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya, 1563-1631* (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, 1990). *Poblar la frontera* es una contribución vasta y erudita al estudio de la Nueva Vizcaya. Los chihuahuenses y en general los norteros debemos estar más que agradecidos con la autora de esta obra, que será imprescindible de ahora en adelante. Además, se utilizó el trabajo de William Griffen, *Indian Assimilation in the Franciscan Area of Nueva Vizcaya* (University of Arizona Press, Tucson, 1979; Anthropological Papers 33), sobre los conchos; éste es quizá el trabajo más sólido sobre este grupo indígena tan poco conocido. Un clásico es el gran libro del estadounidense Robert C. West sobre Parral: *The Mining Community in Northern New Spain: The Parral Mining District* (University of California Press, Berkeley/Los Ángeles, 1949; Ibero-Americana 30), publicado en español en 2002 gracias al gobierno del estado. Sobre la rebelión tepehuana de 1616 fue de gran ayuda el libro de Guillermo Porras Muñoz, *La frontera con los indios de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII* (Fondo Cultural Banamex, México, 1980), así como el artículo de Susan Deeds, "Las rebeliones de los tepehuanes y tarahumaras durante el siglo XVII en la Nueva Vizcaya", en Ysla Campbell (coord.), *El contacto entre los españoles e indígenas en el norte de la Nueva España* (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1992; Colección Conmemorativa IV). El libro de Deeds *Obedience and Deference under Spanish Rule* (University of Arizona Press, Tucson, 2003) es la culminación de un largo esfuerzo de investigación.

La historia parralense está bastante bien estudiada por West, la misma Cramaussel y el historiador local Rubén Rocha Chávez en *Tres siglos de historia. Biografía de una ciudad: Parral 1631-1978* (Talleres Gráficos del Estado, Chihuahua, 1979). Estas obras ayudan a que el siglo xvii no sea tan desconocido como en otras zonas del país. Además, el quehacer jesuita entre los tarahumaras dejó un considerable número de documentos y estudios que ahora son de gran utilidad. El libro de Peter Masten Dunne, *Early Jesuit Missions in Tarahumara* (University of California Press, Berkeley/Los Ángeles, 1948), disponible también en español, es apenas una muestra de la producción historiográfica de los jesuitas. Muy importante es el libro del también jesuita José Newmann, *Historia de las rebeliones en la Sierra Tarahumara 1626-1724* (Camino, Chihuahua, 1991), que recoge los testimonios de un misionero de la época. El historiador y etnógrafo mexicano Luis González Rodríguez tradujo y anotó con sumo cuidado esta fuente de gran valor. El historiador Ricardo León publicó un libro sobre *Misiones jesuitas en la Tarahumara. Siglo xviii* (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1992). Este libro, junto al artículo de Bradley H. Benedict, "El saqueo de las misiones jesuitas" (*Historia Mexicana*, núm. 1, 1972), aportó pistas para tratar la cuestión india en este tramo de la historia chihuahuense.

El siglo xviii es la época en que quizá ha habido más avances e innovaciones. Hace 30 años la obra más sólida y conocida era la de Philip Hadley, *Minería y sociedad en el centro minero de Santa Eulalia 1709-1750* (Fondo de Cultura Económica, México, 1979). En los últimos años el panorama ha cambiado. En un sugerente artículo, Salvador Álvarez puso en duda la idea común de que los auge mineros son los que explican el poblamiento del norte novohispano. Él propone, en cambio, que la base es la agricultura. El artículo se llama "Colonización agrícola y colonización minera: la región de Chihuahua durante la primera mitad del siglo xviii" (*Relaciones*, XX:79, verano de 1999). Por otro lado, Cheryl English Martin publicó su valioso *Governance and Society in Colonial Mexico. Chihuahua in the Eighteenth Century* (Stanford University Press, Stanford, 1996), en el que trata las complejas relaciones entre los distintos grupos sociales que convivían en Chihuahua-Santa Eulalia, entre ellos los mulatos. Dos trabajos más obligan a repensar la manera en que hemos entendido el problema de los así llamados

“bárbaros”. El primero es el artículo del antropólogo William Merrill, “La economía política de las correrías: Nueva Vizcaya al final de la época colonial”, que aparece en el ya citado libro de homenaje a Beatriz Branniff. El segundo es el libro de la historiadora argentina Sara Ortelli, titulado *Trama de una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la sombra de los apaches 1748-1790* (El Colegio de México, México, 2007). Estos dos trabajos confrontan las visiones tradicionales y llevan a reflexionar no sólo sobre los datos duros sino sobre el lugar que ocupa la guerra nómadas-sedentarios en nuestra visión del pasado. Sobre demografía histórica y el mestizaje entre españoles, indios y mulatos, una temática que ataca a fondo las versiones sobre un imaginario norte criollo, se revisó a Robert McCaa, “Marriage, Migration, and Settling Down: Parral (Nueva Vizcaya), 1770-1788”, en David J. Robinson (ed.), *Migration in Colonial Spanish America* (Cambridge University Press, Cambridge, 1990). También se revisó el capítulo respectivo del libro *Poblar la frontera*, de Cramaussel.

Los capítulos sobre la época colonial se elaboraron considerando varias obras generales tan importantes como la de Peter Gerhard, *La frontera norte de Nueva España* (Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996). Con este libro, Gerhard anima, sintetiza y sobre todo propone. De esta obra se obtuvieron las estimaciones sobre montos de población a lo largo de la época colonial, lo mismo que de un pequeño trabajo suyo titulado *México en 1742* (Porrúa, México, 1964). También se consideraron los libros de Oakah L. Jones, *Nueva Vizcaya. Spanish Settlers on the Northern Frontier of New Spain* (University of Oklahoma Press, Norman, 1979); el de Max Moorhead *The Presidio, Bastion of the Spanish Borderlands* (University of Oklahoma Press, Norman, 1975); el del español Luis Navarro García, *Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias Internas del Norte de Nueva España* (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1964), y el más reciente del entrañable don David Weber, *Barbaros. Spaniards and Their Savages in the Age of Enlightenment* (Yale University Press, New Haven/Londres, 2005). Estos cinco libros ayudan a ubicar los acontecimientos locales en el contexto del septentrión novohispano en su conjunto, un aspecto que no debe perderse de vista cuando se escribe una síntesis de la historia de un estado como la que contiene este libro.

Asimismo, se incluyeron referencias de distintos cronistas para ilustrar las posibilidades que ofrecen. Además de la de Newmann, ya citada, se revisaron las siguientes: la de Baltasar de Obregón, *Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España. 1584* (Secretaría de Educación Pública, México, 1924); de José Arlegui, *Crónica de la provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas* (Cumplido, México, 1851); de Pedro de Rivera, *Diario y derrotero de lo caminado, visto y observado en el discurso de la visita general de Precidios situados en las Provincias Ynternas de Nueva España* (Porrúa, México, 1945); de José Antonio Villaseñor, *Theatro Americano* (Familia Cortina del Valle, México, 1986-1987), 2 vols., edición facsimilar; de Pedro Tamarón y Romeral, *Demostración del vastísimo obispado de la Nueva Vizcaya. 1765* (Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, México, 1937; Biblioteca Histórica Mexicana de Obras Inéditas, 7), y la de José Agustín Morfi, *Diario y derrotero 1777-1781* (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, 1967).

La época de Independencia es uno de los huecos más notables de la historiografía local. Se tienen que consultar obras antiguas como las de Ponce de León en su *Revista Chihuahuense* (1909-1910) y de don Francisco R. Almada, *Resumen de historia del estado de Chihuahua* (Gobierno del Estado, Chihuahua, 1986), libro publicado originalmente en 1950. La compilación de Graziella Altamirano y Guadalupe Villa, *Chihuahua. Textos de su historia 1824-1921* (Gobierno del Estado de Chihuahua/Instituto de Investigaciones José María Luis Mora-Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 1988, 4 vols.), ayuda a comprender el conflicto con Durango en torno al nacimiento del estado de Chihuahua, y el de Enrique González Flores, *Chihuahua de la Independencia a la Revolución* (Botas, México, 1949), ofrece una visión general sobre la esfera política de los primeros años de vida del estado. Pero ya deberíamos contar con una obra específica sobre este periodo. En ese trabajo, que hasta donde sé nadie está escribiendo, debería incluirse la cuestión relativa al comercio con Nuevo México. Sobre este tema apenas se consultaron dos obras: la crónica de Josiah Gregg, *Commerce of the Prairies* (University of Oklahoma Press, Norman, 1974), y la tesis de Ángela Moyano "El significado del comercio de Santa Fe en las relaciones entre México y los Estados Unidos 1821-1847" (Universidad Nacional

Autónoma de México, México, 1975). El gran libro de David J. Weber, *La frontera norte de México, 1821-1846. El Sudoeste norteamericano en su época mexicana* (Fondo de Cultura Económica, México, 1988), ofrece una visión de conjunto del norte mexicano, que es muy recomendable para situar la historia local a partir de la Independencia mexicana. El libro del ya citado Griffen sobre Janos, *Apaches at War and Peace. The Janos Presidio, 1750-1858* (University of New Mexico Press, Albuquerque, 1988), es muy útil para observar la continuidad de la compleja relación con los apaches en el tránsito de la época colonial a la vida independiente.

No hay más remedio que insistir en la historia de la apachería y en la vida política para cubrir el siglo xix. Una compilación útil es la de Víctor Orozco *Las guerras indias en la historia de Chihuahua* (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1992). Esto debe verse a la vez como disculpa y como expresión del avance desigual de la historiografía chihuahuense en diversos periodos. Sabemos más de la Colonia que del siglo xix. En eso se repite la situación nacional. Los trabajos de José Agustín de Escudero, *Noticias estadísticas del estado de Chihuahua* (Imprenta de Juan Ojeda, México, 1834), y de Pedro García Conde, *Ensayo estadístico sobre el estado de Chihuahua* (Imprenta del Gobierno, Chihuahua, 1842), son los libros más importantes escritos en estos años. Por suerte estos dos libros han sido reeditados recientemente por el gobierno del estado. De mucha ayuda fue el volumen de Jesús Vargas, *Viajantes por Chihuahua, 1846-1853* (Gobierno del Estado, Chihuahua, 2002), que recopila los apuntes de cuatro extranjeros que recorrieron la República y nuestro estado durante los tétricos años que aparecen en el título.

El *Resumen* de Almada ya citado, el estudio de José Fuentes Mares ... *Y México se refugió en el desierto. Luis Terrazas: historia y destino* (La Prensa, Chihuahua, 1979), el libro de Joaquín Terrazas *Memorias. La guerra contra los apaches* (La Prensa, Chihuahua, 1989), junto con los *Informes que los gobernadores del estado de Chihuahua han presentado ante el Congreso del mismo desde el año de 1849 hasta el de 1906* (Imprenta del Gobierno, Chihuahua, 1910), son otras de las obras consultadas para elaborar la parte referente al siglo xix. Se agregan algunas noticias provenientes de periódicos de la Ciudad de México para sugerir una

fuentes poco utilizadas hasta ahora, salvo en la reciente tesis de doctorado de Ana Lilia Nieto, "Defensa y política. El caso de Durango, Chihuahua y Coahuila, 1848-1856" (Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008). Sin duda alguna, los historiadores deberíamos profundizar en el estudio de otras temáticas como la cuestión agraria, las epidemias, el papel de las ciudades y del comercio, los vaivenes mineros y la religiosidad popular. No todo el siglo XIX ni ningún otro se reduce a apaches, guerras y políticos. Dentro de la ignorancia sobre el siglo XIX destaca el desconocimiento multiplicado sobre los tarahumaras y demás grupos indígenas. La expulsión jesuita en 1767 ha dejado una marca terrible en la historiografía. Pocos como los jesuitas para dejar archivos y escribir historias. Las dificultades para tratar este periodo pueden apreciarse en Ricardo León y Carlos González Herrera, *Civilizar o exterminar. Tarahumaras y apaches en Chihuahua, siglo XIX* (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Instituto Nacional Indigenista, México, 2001).

Sobre el Porfiriato la situación cambia. Se dispone de un gran número de fuentes impresas, como anuarios estadísticos, manuales de geografía y directorios comerciales, que debemos a la incansable labor de José María Ponce de León. Este historiador también editó la *Revista Chihuahuense* y las *Reseñas históricas*, que contienen documentos y estudios sobre diversos acontecimientos de la historia local. Además, contamos con varios estudios de primera línea: el de Mark Wassermann, *Capitanes, caciques y Revolución. La familia Terrazas de Chihuahua, 1854-1911* (Grijalbo, México, 1987); el de Jane-Dale Lloyd, *El proceso de modernización capitalista del Noroeste de Chihuahua 1880-1910* (Universidad Iberoamericana, México, 1987), y los diversos trabajos de Friedrich Katz sobre las condiciones agrarias del norte en general y de Chihuahua en particular. Un trabajo novedoso es el libro de María Aparcida de Sousa Lopes, *De costumbres y leyes. Abigeato y derechos de propiedad en Chihuahua durante el porfiriato* (El Colegio de México/El Colegio de Michoacán, México, 2005). La tesis de doctorado de Martín González de la Vara propone una novedosa interpretación de la historia de Paso del Norte y El Paso, Texas, durante el periodo 1848-1910. El título es *Irrupción capitalista y cambio socioeconómico en una región binacional: El Paso, 1848-1911* (El Colegio de México, México, 2008).

Sobre la Revolución la bibliografía es vasta. En esta temática los estadounidenses han logrado hacer grandes contribuciones. A Robert L. Sandels debemos la tesis doctoral "Silvestre Terrazas, the Press and the Origins of the Mexican Revolution in Chihuahua" (University of Oregon, 1967); a Michael C. Meyer, el libro *El rebelde del norte. Pascual Orozco y la Revolución* (Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984), y a William H. Beezley, *Insurgent Governor: Abraham González and the Mexican Revolution in Chihuahua* (University of Nebraska Press, Lincoln, 1973). Finalmente, Friedrich Katz publicó en 1998 su libro tan esperado: *Pancho Villa* (Era, México, 2 vols.). De Katz se utilizó también *La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la Revolución mexicana* (Era, México, 1982, 2 vols.). Asimismo se consultó el libro de Martha Rocha, *Las Defensas Sociales en Chihuahua* (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1984), y el artículo de Jesús Vargas, "Las memorias de Máximo Castillo (avance)" (*Cuadernos del Norte*, núm. 6, 1989). La mejor descripción del movimiento revolucionario en esta entidad sigue siendo la de Almada, *La Revolución en el estado de Chihuahua* (Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1964, 2 vols.). El villismo sigue y seguirá dando tema a nuevos investigadores, como Pedro Salmerón, *La División del Norte*, y Paco Ignacio Taibo II, *Pancho Villa. Una biografía narrativa*; ambos fueron publicados en la Ciudad de México por Planeta en 2006.

No ocurre lo mismo con el periodo posterior a 1920, donde prácticamente está todo por hacer. Mark Wasserman publicó *Persistent Oligarchs. Elites and Politics in Chihuahua, Mexico, 1910-1940* (Duke University Press, Durham/Londres, 1993), un trabajo sugerente sobre todo en términos del esfuerzo por ligar este periodo con el porfiriato, tema de su libro anterior. Para este periodo fueron muy útiles también los trabajos de Noé G. Palomares sobre *Propietarios norteamericanos y reforma agraria en Chihuahua 1917-1942* (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1991); el de Armando B. Chávez, *Sesenta años de gobierno municipal: Jefes políticos del distrito Bravos y presidentes del municipio de Juárez* (s. e., México, 1959), y el de Óscar J. Martínez, *Ciudad Juárez: el auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848* (Fondo de Cultura Económica, México, 1982). También se consultó el

libro de Gerald O'Rourke, *La persecución religiosa en Chihuahua (1913-1938)* (Camino, Chihuahua, 1991). Una obra imprescindible es la ya citada de Moisés T. de la Peña, *Chihuahua económico*. Sobre la situación tarahumara son muy útiles los libros de Wendell C. Bennett y Robert M. Zingg, *Los tarahumaras. Una tribu india del norte de México* (Instituto Nacional Indigenista, México, 1986) y el de Juan Luis Sariego, *El indigenismo en la Tarahumara. Identidad, comunidad, relaciones interétnicas y desarrollo en la sierra de Chihuahua* (Instituto Nacional de Antropología e Historia/Instituto Nacional Indigenista, México, 2002). Este último libro, y el de Alonso Domínguez Rascón, *La política agraria en Chihuahua, 1920-1924. Sus efectos hasta 1940* (Plaza y Valdés/Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2003), sobre la suerte de las colonias agrícolas fundadas siguiendo el agrarismo más bien chihuahuense (nor-teño), son resultado de las actividades de la entrañable Escuela Nacional de Antropología e Historia-Unidad Chihuahua. Esta escuela nació en 1995, fue fundada por Margarita Urías y Augusto Urteaga, ambos ya fallecidos, y el mencionado Sariego, entre otros.

En relación con los acontecimientos de Madera de 1965 se revisaron los libros de José Santos Valdés, *Madera. Razón de un martirologio* (s. e., México, 1968), y de Prudencio Godines Jr., *Qué poca mad...era de José Santos Valdés* (s. e., México, 1968). El primero es mucho más útil que el segundo. Más recientemente apareció un estudio del italiano Marco Bellingeri titulado *Del agrarismo armado a la guerra de los pobres 1940-1974* (Juan Pablos-Gobierno del Distrito Federal, México, 2003), que aporta una visión panorámica sobre los grupos guerrilleros en México. Sobre maquiladoras, movimientos sociales y la lucha electoral entramos de lleno en los terrenos de sociólogos, antropólogos y politólogos. En este tramo se consultaron trabajos de Luis Reygadas Robles-Gil, "La organización del trabajo en la industria maquiladora de Chihuahua", en Juan Luis Sariego (coord.), *Historia general de Chihuahua. V. Periodo contemporáneo, primera parte* (Gobierno del Estado/Centro de Información del Estado de Chihuahua/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/ Escuela Nacional de Antropología e Historia-Chihuahua, Chihuahua, 1998); el de Rubén Lau y Víctor M. Quintana, *Los movimientos populares en Chihuahua* (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1991), y el de Alberto Aziz, *Chihuahua: historia de una alternancia* (La

Jornada/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 1994), y *Los ciclos de la democracia. Gobierno y elecciones en Chihuahua* (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/Porrúa, México, 2000). Un trabajo que por desgracia no tuvo continuidad (al menos que yo sepa) es el de Alejandra Salas Porras Solué, *Grupos empresariales en Chihuahua de 1920 al presente* (Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 1992). Ayuda a contrastar tres generaciones de empresarios, a saber, los Terrazas-Creel, Vallina y Bermúdez. También se consultó el libro de Yolanda Montiel, *Un mundo de coches. Nuevas formas de organización del trabajo* (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2001).

Hay que mencionar una revista que es fuente obligada para conocer distintos aspectos de la historia local. Se trata del *Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos*, fundada en 1939. Hay por lo menos cuatro historias generales de Chihuahua: la de José María Ponce de León, *Resumen de la historia política de Chihuahua, desde la época colonial hasta 1921* (Imprenta Gutenberg, Chihuahua, 1922); la de Francisco Almada, de 1950, ya citada; el único *bestseller* sobre historia estatal, el de Fernando Jordán, *Crónica de un país bárbaro* (La Prensa, Chihuahua, 1978), publicado por primera vez en 1953, y la de Florence C. y Robert H. Lister, *Chihuahua. Almacén de tempestades* (Gobierno del Estado, Chihuahua, 1979). A éstas se sumó la parte de la *Historia general de Chihuahua* referida al siglo xx (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1998), coordinada por Juan Luis Sariego.

Las omisiones a obras y a autores son mayores que las inclusiones. Eso parece inevitable en cualquier recuento de este tipo. Pero lo cierto es que con los libros y artículos mencionados puede obtenerse un cuadro general que también es útil para localizar otras obras y otros autores. Lo importante es insistir en que la historia de Chihuahua es todavía un vasto campo desconocido con grandes huecos. El paso del siglo xviii al xix y el largo siglo xix son quizá los más graves, pero ninguno como el referido a la época prehispánica. En el del periodo contemporáneo (1920-2008) podemos tener acaso mayores disculpas por aquello de que aún no se le reconoce del todo como campo legítimo de la historiografía. Pero son disculpas sumamente frágiles. En esos huecos hay que la-

mentar todavía más la ignorancia sobre la población indígena, que también en la historiografía demuestra su situación lamentable.

En los últimos años, quizá 10 o 15, destaca la aparición de una nutrida bibliografía producida por autores locales tanto profesionales como cronistas y aficionados, que lo mismo hacen historias generales de la entidad que de diversas localidades, instituciones, disciplinas, grupos y personajes. Buen ejemplo de lo anterior es el libro de Carlos Gallegos Pérez, *Luto en Delicias. Vida y muerte de Emiliano J. Laing* (Gobierno del Estado, Chihuahua, 2003), el alzado henriquista de 1954. Además, se han organizado archivos fotográficos en diversas localidades y publicado libros de fotografías antiguas. La cuenta sigue con los trabajos de rescate, catalogación y digitalización de archivos diversos, como los de Parral y Janos, labor en la que destaca el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eso se ha visto acompañado de un programa gubernamental de reedición de libros ya clásicos y la traducción de algunos de ellos, como los que se han citado aquí. La historiografía local es por ello mucho más abundante y diversa. De eso debemos felicitarnos todos, entre otras cosas porque contrasta mucho y para bien con la situación de la década de 1950, cuando dos de las más importantes obras utilizadas para escribir esta síntesis, la de Fuentes Mares sobre Terrazas y el *bestseller* de Jordán, se escribieron la primera por contrato con la familia Terrazas y la segunda por el patrocinio del acaudalado Tomás Valles.

AGRADECIMIENTOS Y SIGLAS

Agradecemos la generosa colaboración de instituciones, colegas, fotógrafos e innumerables personas que nos hicieron llegar imágenes provenientes de su trabajo etnográfico o de su colección particular.

En especial, queremos agradecer a los fotógrafos Libertad Villarreal, Marco A. Cruz y Raymundo Ruiz.

AGA: Archivo General Agrario.

AGN: Archivo General de la Nación.

AGN-CMPI: Archivo General de la Nación-Catálogo de mapas, planos e ilustraciones.

Banxico-Fiduciario/INBAL: Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo/ Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

CDI-FNL: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Fototeca Nacho López.

Cenidiap-Cenart: Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, Centro Nacional de las Artes.

Colmex-BDCV: El Colegio de Méxco, Biblioteca Daniel Cosío Villegas.

Colmich-BLG: Colegio de Michoacán, Biblioteca Luis González.

Conabio: Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad.

Conaculta-CNPPCE: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarriero.

Conaculta-INAH-Fototeca CINAHCH: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Fototeca del Centro INAH Chihuahua.

Conaculta-INAH-MNH: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo Nacional de Historia.

Conaculta-INAH-MRG: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Institu-

to Nacional de Antropología e Historia, Museo Regional de Guadalajara.

DSIG: El Colegio de México, Departamento de Información Geográfica.

FCMY: Fundación Mariana Yampolsky, A. C.

FICA: Fundación ICA, A. C.

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

INAH-Sinafo-FN: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sistema Nacional de Fototecas, Fototeca Nacional.

MMOYB: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

MMOYB-COYB: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Colección Orozco y Berra.

MFCP-CID: Museo Nacional de Culturas Populares, Acervo fotográfico del Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán.

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Mapa de la República Mexicana: Antonio García Cubas, *Atlas pintoresco e histórico de los Estados Unidos Mexicanos*, carta IV, “Vías de comunicaciones y movimiento marítimo”, México, Debray Secesores, 1885. Sagarpa-MMOYB.

1. Fotografía aérea, 1933, FICA. No. 584.
2. Fotografía de Ignacio Guevara, 2008, col. de autor.
3. Ilustración de autor no identificado, s. f., MMOYB. No. 1423-OYB-7214-A-007.
4. Dibujo a lápiz de José Cortés Cervantes, 2008, col. de autor.
5. Fotografía de Carlos Blanco, en *Arqueología Mexicana*, vol. II, núm. 9, p. 60, agosto-septiembre de 1994, INAH, 2010.
6. Fotografía de Carl Lumholtz, enero de 1892, CDI-FNL. No. 10998/ 441.
7. Fotografía de Carl Lumholtz, marzo de 1891, CDI-FNL. No. 11351/ 798.
8. Fotografía de autor no identificado, s. f., CDI-FNL. No. 10972/415.
9. Primera plana de *Jueves de Excelsior*, México, D. F., 31 de enero de 1924, núm. 86, col. particular.
10. Fotografía de Carl Lumholtz, febrero de 1891, CDI-FNL. No. 11132/578.
11. Fotografía de Carl Lumholtz, febrero de 1892, CDI-FNL. No. 11112/558.
12. Fotografía de Itzel Aguilera, s. f., Conaculta-INAH-Fototeca CINAHCH, 2009. No. 0003.
13. Fotografía aérea de autor no identificado, 21 de julio de 1949, FICA. No. 6137.
14. Ilustración de Philippe Rondé, en Jesús Vargas Valdés, *Viajantes por Chihuahua 1846-1853*, Chihuahua, Gobierno del Estado de Chihuahua/Secretaría de Educación y Cultura-Dirección de Publicaciones, 2002. Colmex-BDCV.
15. Ilustración de Philippe Rondé, en Jesús Vargas Valdés, *Viajantes por Chihuahua 1846-1853*, Chihuahua, Gobierno del Estado de Chihuahua-Secretaría de Educación y Cultura-Dirección de Publicaciones, 2002. Colmex-BDCV.

16. Jesús Vargas Valdés, *Viajantes por Chihuahua 1846-1853*, Chihuahua, Gobierno del Estado de Chihuahua/Secretaría de Educación y Cultura-Dirección de Publicaciones, 2002. Colmex-BDCV.
17. Fotografía de autor no identificado, ca. 1910, INAH-Sinafo-FN, Fondo Felipe Teixidor. No. 449874.
18. David Piñera Ramírez, *Visión histórica de la frontera norte de México*. México, Universidad Autónoma de Baja California, 1994, v. II, p. 345. Colmex-BDCV.
19. Fotografía de autor no identificado, AGN-Colección Fotográfica de la Presidencia de la República, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, exp. 98, foto 1.
20. Fotografía aérea de autor no identificado, 1933, FICA. No. 549.
21. Fotografía de autor no identificado, 1922, AGN-Colección Fotográfica de la Presidencia de la República, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, exp. 103, foto 3.
22. Fotografía de Itzel Aguilera, s. f., Conaculta-INAH-Fototeca CINAHC, 2009. No. 2237.
23. Fotografía de Josaphat Martínez, 1914, col. de la familia Martínez.
24. Fotografía de Agustín V. Casasola, 16 de octubre de 1909, INAH-Sinafo-FN, Fondo Casasola. No. 33940.
25. Fotografía de H. J. Gutiérrez, s. f., AGN-Fondo Propiedad Artística y Literaria, H. J. Gutiérrez, Revolución, foto 2.
26. Fotografía de I. Herrerías Fot., s. f., AGN-Fondo Propiedad Artística y Literaria, I. Herrerías, Revolución, Cd. Juárez, foto 12.
27. Fotografía de autor no identificado, marzo de 1912, INAH-Sinafo-FN, Fondo Casasola. No. 5169.
28. Fotografía de I. Herrerías Fot., s. f., AGN-Fondo Propiedad Artística y Literaria, I. Herrerías, Revolución, Cd. Juárez, foto 24.
29. Fotografía de Jorge Guerra, 1911, INAH-Sinafo-FN, Fondo Jorge Guerra. No. 37323.
30. Fotografía de autor no identificado, Catálogo electrónico de fotografías del AGA, disco 1, núm. 155, gpo. doc. 23, leg. 6, exp. 465.
31. Fotografía de Fot. Ronquillo, s. f., AGN-Colección Fotográfica de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas, exp. 216, foto 7.
32. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
33. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.

34. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
35. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
36. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
37. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
38. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
39. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
40. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
41. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
42. Fotografía de Libertad Villarreal, s. f., col. de la autora.
43. Pedro Larrea y Cordero, *Nuevo plano topográfico de la ciudad de Chihuahua*, 1885. MMOYB. No. 3133-OYB-7214-A.
44. Fotografía de autor no identificado, *ca.* 1880, INAH-Sinafo-FN, Fondo Felipe Teixidor. No. 430069.
45. *The Mexican Year Book*. México, [McCorquodale], 1908-1914. Colmex-BDCV.
46. Óscar J. Martínez, *Border Boom Town. Ciudad Juárez since 1848*. Austin, University of Texas Press, 1978. 231 pp. Colmex-BDCV.
47. Óscar J. Martínez, *Border Boom Town. Ciudad Juárez since 1848*. Austin, University of Texas Press, 1978. 231 pp. Colmex-BDCV.
48. Postal de Aztec Store, 1907, AGN-Fondo Propiedad Artística y Literaria, Aztec Store, Cd. Juárez, Chih., foto 2.
49. Fotografía de A. S. Addis e hijo, *ca.* 1907, AGN-Fondo Gobernación, folder 7, lugar geográfico: Chihuahua, Chih., autor: Addis, A. S. Hijo, foto 2.
50. Postal de Aztec Store, 1908, AGN-Fondo Propiedad Artística y Literaria, Aztec Store, Cd. Juárez, Chih., foto 14.
51. Fotografía de autor no identificado, 1943, AGN-Colección Fotográfica de la Presidencia de la República, Manuel Ávila Camacho, exp. 85, foto 7.
52. Fotografía de autor no identificado, catálogo electrónico de fotografías del AGA, disco 1, núm. 4533, gpo. doc. 23, leg. 1, exp. 32921.
53. Fotografía de Marco A. Cruz, 1984, col. de autor.
54. Fotografía de Raymundo Ruiz, s. f., col. de autor.
55. Fotografía de Raymundo Ruiz, s. f., col. de autor.
56. Fotografía de Raymundo Ruiz, s. f., col. de autor.
57. Fotografía de Casasola, *ca.* 1954, INAH-Sinafo-FN, Fondo Casasola. No. 69186.
58. Fotografía de Mayo Fot., s. f., AGN-Fondo: Hermanos Mayo, foto 2.

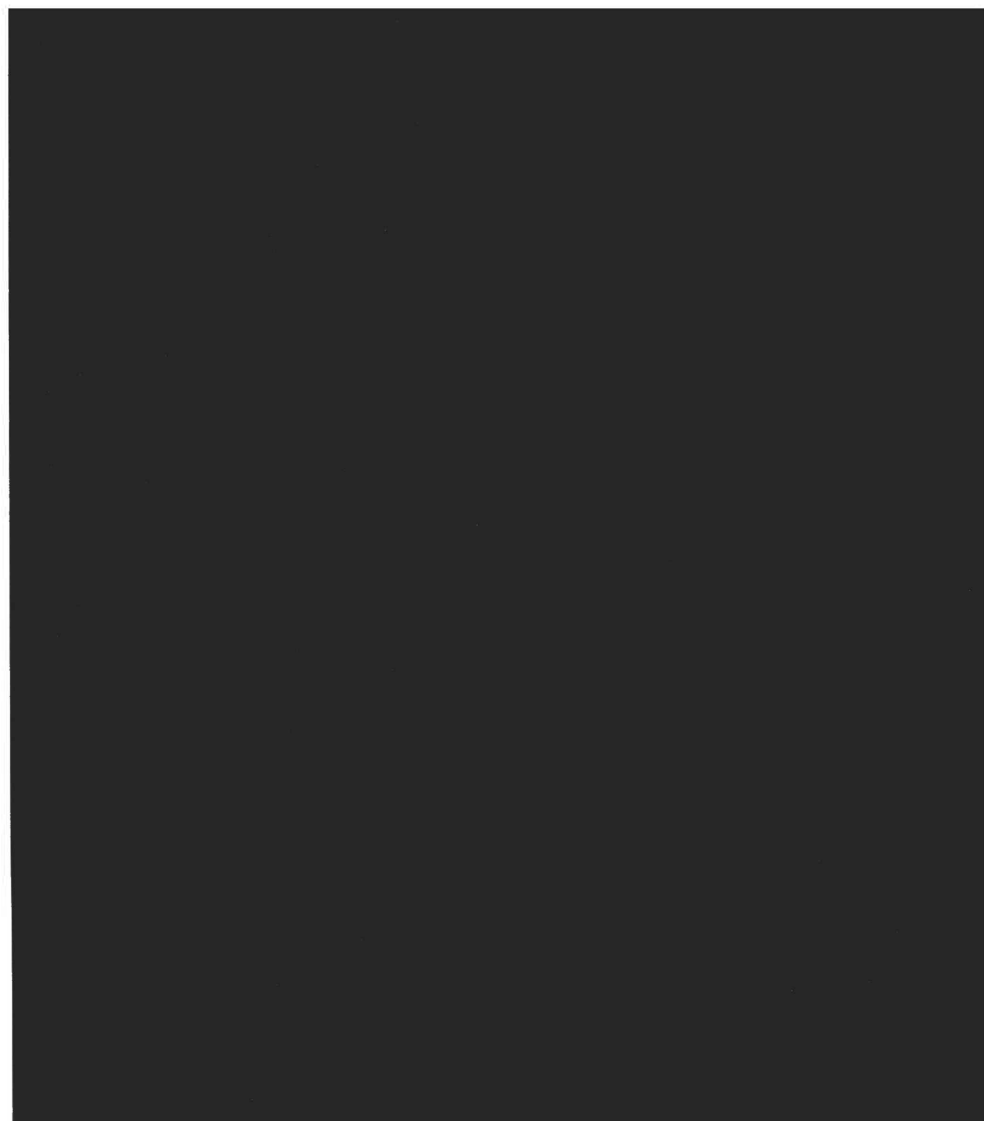
ÍNDICE

<i>Presentación</i>	5
<i>Preámbulo</i>	7
<i>Introducción</i>	11
 I. <i>Geografía</i>	15
Tres zonas	15
El poblamiento a través de los siglos	20
Nota sobre la conexión con el sur y el oeste y la falta de conexión con el este	23
 II. <i>Época prehispánica</i>	26
Los primeros tiempos	26
La agricultura y las rutas de intercambio	28
Paquimé	32
 III. <i>Los primeros setenta años de ocupación española son de Santa Bárbara (1560-1630)</i>	35
Zacatecas, Ibarra y la fundación de Santa Bárbara	35
Entre conchos, tobosos y tarahumaras	37
Economía española y trabajo indígena	40
Las misiones	44
La rebelión de 1616	46
 IV. <i>El siglo xvii es de Parral (1630-1710)</i>	49
Nuevo mineral, nueva población	49
Expansión española desde Parral	53
La respuesta indígena: 1644-1653	56
Reconstrucción hispana y nueva expansión	60
La nueva respuesta indígena: 1680-1700	62
Movimientos de población indígena	66

V. <i>El siglo XVIII, de Chihuahua a Santa Eulalia (1710-1790)</i>	69
De cómo nace Chihuahua	69
Nuevos indios, nuevas dificultades (1750-1790) . . .	79
Amenaza externa y la respuesta de los Borbones . .	86
VI. <i>La primera transición (1790-1830)</i>	93
Hacia la prosperidad demográfica y económica . . .	93
Hacia la paz por los arreglos con los nómadas	97
Hacia la Independencia	100
Hacia el nuevo país y el estado de Chihuahua	104
Hacia el comercio con Estados Unidos	109
VII. <i>La era de las guerras viejas y nuevas (1830-1880)</i> . .	113
Apaches de nueva cuenta	113
La presión de Estados Unidos	117
División de las élites y guerra contra Estados Unidos	121
La hegemonía liberal	125
Los nuevos ricos	133
VIII. <i>La segunda transición (1880-1910)</i>	139
Hacia la liquidación de los nómadas	139
Hacia la prosperidad de fines de siglo	145
La reconciliación y el máximo auge	155
IX. <i>La revolución antiterracista y la reorganización política (1910-1930)</i>	158
Los prolegómenos	158
El ascenso villista	162
El descenso villista	167
Ascenso y descenso obregonista	170
X. <i>Los últimos años (1930-2008)</i>	177
Depresión e inestabilidad política	177
Expansión económica y urbanización	185
Los años de Madera	192
La hora de las maquiladoras	195

Lucha electoral y gobernador panista	199
El último tramo	201
<i>Cronología</i>	209
<i>Bibliografía comentada</i>	213
<i>Agradecimientos y siglas</i>	225
<i>Créditos de imágenes</i>	227

Chihuahua. Historia Breve, de Luis Aboites Aguilar, se terminó de imprimir y encuadernar en octubre de 2010 en Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V. (IEPSA), Calzada San Lorenzo, 244; 09830 México, D. F. En su composición, elaborada en el Departamento de Integración Digital del FCE, se utilizaron tipos ITC Garamond St. La edición consta de 1 000 ejemplares.



Este libro presenta un resumen, lo más actualizado posible, de la historia del estado de Chihuahua. A esta nueva edición se han añadido dos nuevos capítulos, uno referente a la geografía y el otro a la época prehispánica, además de numerosas ilustraciones.

Esta historia breve de Luis Aboites Aguilar tiene como eje explicativo el poblamiento de la entidad; es decir, la ocupación del espacio y la conformación de regiones y ciudades que fungen como cabeceras económicas y políticas. Sobre este eje se estructura la narración de procesos sociales y acontecimientos políticos y militares. Se distinguen dos grandes épocas en la historia local: la primera llega hasta la década de 1880, en la que predomina la pugna por el control del territorio, incluyendo la resistencia de indios sedentarios, los ataques de grupos indígenas nómadas (apaches) y el despojo territorial en 1848 por parte de los Estados Unidos. La segunda época va de 1890 a nuestros días. En ella se privilegian los conflictos derivados de la división de la sociedad en clases y grupos sociales. Desde esta perspectiva se describen la Revolución de 1910 y la reforma agraria posterior a 1920, así como la urbanización, la industrialización, el ataque a Madera, los efectos de la sequía de la década de 1990 y, por último, la violencia extrema que se ha apoderado de varias localidades y regiones del estado, especialmente de Ciudad Juárez. Así, este libro ofrece un panorama general de la historia chihuahuense, que sin duda será de gran utilidad para el lector universitario e incluso para estudiosos e investigadores.